

alerta 2021!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz



Alerta 2021! Informe sobre conflictos,
derechos humanos y construcción de paz

Alerta 2021!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz

Elaborado por:

Iván Navarro Milián
Josep Maria Royo Aspa
Jordi Urgell García
Pamela Urrutia Arestizábal
Ana Villellas Ariño
María Villellas Ariño

ISBN: 978-84-18826-02-3
Depósito legal: B 10421-2003
Informe finalizado en febrero de 2021.

El presente informe ha sido elaborado por:

Iván Navarro Milián, Josep Maria Royo Aspa,
Jordi Urgell García, Pamela Urrutia Arestizábal,
Ana Villellas Ariño y María Villellas Ariño.
Con la colaboración de Mariana Gonçalves Villafranca.

Diseño: Lucas Wainer Mattosso
Imprenta: Ulzama
Edición: Icaria Editorial / Escola de Cultura de Pau, UAB
Este libro ha sido impreso en papel libre de cloro

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja necesariamente la opinión de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ni del Ayuntamiento de Barcelona.

Para citar este informe:

Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.*
Barcelona: Icaria, 2021.

Esta obra forma parte de la serie *Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.* que anualmente publica la Escola de Cultura de Pau y está sujeta a una licencia internacional de Creative Commons



Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con finalidades comerciales y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

Escola de Cultura de Pau

Parc de Recerca, Edifici MRA,
Plaça del Coneixement,
Universitat Autònoma de Barcelona,
08193 Bellaterra (España)
Tel: +34 93 586 88 48
Email: pr.conflict.escolapau@uab.cat
Web: <http://escolapau.uab.cat>

Índice

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas	6	- Asia Oriental	126
Resumen Ejecutivo	7	- Sudeste Asiático y Oceanía	127
Resumen de la conflictividad global en 2020	19	2.3.4. Europa	128
		- Europa occidental	128
		- Rusia y Cáucaso	130
		- Sudeste de Europa	130
		2.3.5. Oriente Medio	132
		- Golfo	132
		- Mashreq	134
Capítulos			
1. Conflictos armados	21	3. Género, paz y seguridad	141
1.1. Conflictos armados: definición	21	3.1. Desigualdades de género	141
1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2020	25	3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género	143
1.2.1. Tendencias globales y regionales	25	3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones	143
1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil	30	3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados	146
1.3. Conflictos armados: evolución anual	34	3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado	147
1.3.1. África	34	3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género	150
- África Austral	34	3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad	150
- África Occidental	35	3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz	153
- Cuerno de África	42	3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil	155
- Grandes Lagos y África Central	46	4. Oportunidades de paz para 2021	157
- Magreb - Norte de África	55	4.1 Nuevos horizontes, retos y esperanzas para la estabilidad en los sudanes	158
1.3.2. América	56	4.2. Las negociaciones entre Papúa Nueva Guinea y Bougainville	160
1.3.3. Asia y Pacífico	57	4.3 ¿Hacia una mayor centralidad de la agenda de género, paz y seguridad en la UE?	162
- Asia Meridional	57	4.4 Lucha contra la impunidad y persecución a crímenes de violencia sexual en Siria	164
- Sudeste Asiático y Oceanía	62	5. Escenarios de riesgo para 2021	167
1.3.4. Europa	67	5.1 La pandemia de la COVID-19 y el agravamiento de la violencia contra las mujeres	168
- Europa Oriental	67	5.2 El repunte de Sendero Luminoso en Perú	170
- Rusia y Cáucaso	68	5.3 ¿Una primavera por venir? Retos y riesgos a una década de las revueltas en el norte de África y Oriente Medio	172
- Sudeste de Europa	70	5.4. La cuenca del Nilo: ¿cooperación o conflicto?	174
1.3.5. Oriente Medio	71	Glosario	177
- Golfo	71	Escola de Cultura de Pau	181
- Mashreq	74		
2. Tensiones	83		
2.1. Tensiones: definición	83		
2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2020	89		
2.2.1. Tendencias globales	89		
2.2.2. Tendencias regionales	91		
2.3. Tensiones: evolución anual	94		
2.3.1. África	94		
- África Occidental	94		
- Cuerno de África	96		
- Grandes Lagos y África Central	100		
- Magreb - Norte de África	107		
2.3.2. América	111		
- América del Norte, Centroamérica y Caribe	111		
- América del Sur	117		
2.3.3. Asia y Pacífico	120		
- Asia Central	120		
- Asia Meridional	122		

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas

Mapa 1.1.	Conflictos armados _____	20	Gráfico 2.2.	Intensidad de las tensiones por regiones _____	91
Tabla 1.1.	Resumen de los conflictos armados en 2020 _____	22	Mapa 3.1.	Género, paz y seguridad _____	140
Gráfico 1.1.	Distribución regional del número de conflictos armados en 2020 ____	25	Tabla 3.1.	Países que son escenario de conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos __	142
Gráfico 1.2.	Intensidad de los conflictos armados _____	28	Tabla 3.2.	Actores armados y violencia sexual en conflictos _____	144
Gráfico 1.3.	Proporción de conflictos armados graves en la última década _____	28	Mapa 3.2.	Países en conflicto armado y con legislación discriminatoria contra la población LGTBI _____	149
Gráfico 1.4.	Intensidad de los conflictos por regiones _____	28	Tabla 3.3.	Conflictos armados en 2020 en países con legislación discriminatoria contra la población LGTBI _____	149
Cuadro 1.1.	Tendencias regionales en materia de conflictividad armada _____	29	Tabla 3.4.	Planes de Acción Nacional sobre la 1325 en países en situación de conflicto armado _____	152
Mapa 1.2.	Nuevos desplazamientos por conflictos y violencia - primer semestre de 2020 _____	33	Mapa 4.1.	Oportunidades de paz para 2021 __	157
Mapa. 2.1.	Tensiones _____	82	Mapa 5.1.	Escenarios de riesgo para 2021 ____	169
Tabla 2.1.	Resumen de las tensiones en 2020 _	84			
Gráfico 2.1.	Distribución regional del número de tensiones en 2020 _____	90			

Resumen ejecutivo

Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones, y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2020 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.

En cuanto a la metodología, los contenidos de este informe se nutren principalmente del análisis cualitativo de estudios e informaciones facilitados por numerosas fuentes –Naciones Unidas, organismos internacionales, centros de investigación, medios de comunicación u ONG, entre otras–, así como de la experiencia adquirida en investigaciones sobre el terreno.

Algunas de las conclusiones e informaciones más relevantes del informe *Alerta 2021!* son las siguientes:

- Durante 2020 se registraron 34 conflictos armados, la misma cifra que el año anterior. La mayoría de los conflictos armados se concentró en África (15) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno).
- En 2020 se registraron dos nuevos casos: Etiopía (Tigray) y Armenia–Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj).
- El panorama de conflictos armados en 2020 se vio influido por la pandemia de la COVID-19. El llamamiento a un alto el fuego global por parte del secretario general de la ONU recibió una respuesta limitada y desigual. Los ceses el fuego fueron breves y/o no se consolidaron y la mayor parte de los actores implicados en conflictos armados continuaron privilegiando su apuesta por la vía militar.
- En 2020 los impactos de los enfrentamientos entre actores armados y del uso indiscriminado y deliberado de la violencia contra la población civil se vieron amplificadas a causa de la pandemia de la COVID-19, que agravó aún más la precariedad y desprotección de numerosas poblaciones afectadas por conflictos armados. Casos como Siria y Yemen evidenciaron la carga añadida de la pandemia en

sistemas de salud extremadamente deteriorados por años de violencia.

- La inmensa mayoría de los conflictos armados eran internos internacionalizados –28 contextos, equivalentes al 82%–, un 9% de carácter interno y un 9% de carácter internacional.
- En 2020 se observó un incremento significativo de los conflictos armados de alta intensidad, que representaban casi la mitad de los casos, un 47% del total.
- Los 16 casos de conflictos armados graves en 2020 fueron: Camerún (Ambazonia/North West y South West), Etiopía (Tigray), Libia, Malí, Mozambique, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).
- Según las previsiones de OCHA, un total de 235 millones de personas necesitarían asistencia humanitaria en 2021, un incremento del 40% respecto a las estimaciones para el año anterior y atribuible mayoritariamente a la COVID-19.
- El fuego cruzado, el uso de armas ligeras, la utilización de armas explosivas en zonas pobladas y el uso excesivo de la fuerza de agentes estatales habría causado más de 10.000 víctimas entre niños y niñas, incluyendo 4.019 muertes y 6.154 menores afectados por mutilaciones, según datos de la ONU.
- El informe anual de ACNUR publicado en junio de 2020 confirmó la tendencia de crecimiento exponencial del desplazamiento forzado en la última década: al finalizar 2019 había 79,5 millones de personas desplazadas forzosamente, frente a las 70,8 millones contabilizadas a finales del año anterior.
- Del total de personas desplazadas, 26 millones eran refugiadas –20,4 millones bajo el mandato de ACNUR y 5,6 millones de palestinos y palestinas bajo el mandato de la UNRWA– y 45,7 millones se encontraban en una situación de desplazamiento forzado interno.
- Naciones Unidas denunció el uso de la violencia sexual y de género en 19 contextos en 2019 y señaló la responsabilidad de 54 actores armados, en su mayoría de carácter no estatal, aunque también denunció la implicación de cuerpos de seguridad estatales de varios países, incluyendo RDC, Myanmar, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Siria.
- Durante 2020 se identificaron 95 escenarios de tensión en todo el mundo, un caso más que en el año anterior. Este incremento es significativamente menor que el que se registró en 2019 en comparación con 2018, pues entonces la cifra de tensiones aumentó en 11 casos.
- El mayor número de crisis sociopolíticas se concentró en África, con 38 casos, seguida de Asia (25), Oriente Medio (12 casos) y Europa y América Latina (10 en cada región)

- A pesar de que el incremento en el número de tensiones sociopolíticas en 2020 fue casi imperceptible, se identificaron seis nuevos casos de tensión.
- De los 16 contextos de tensión de máxima intensidad, la mitad se concentraron en África –Chad, Malí, Nigeria, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenia, Ruanda-Burundi y Marruecos-Sáhara Occidental–, cuatro en Oriente Medio –Irán-EEUU, Israel; Egipto; Iraq; e Israel-Siria-Líbano–, dos en Asia –China-India e India-Pakistán– y dos en América Latina –México y Venezuela.
- Un 73% de los casos analizados de tensiones estaban vinculados a la oposición a las políticas internas o internacionales de determinados gobiernos o bien al sistema político, social o ideológico del Estado en su conjunto; un 39% a demandas de autogobierno y/o identitarias; y un 31% a disputas por el control de territorios y/o recursos.
- 14 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2020 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos de discriminación, seis en países con niveles medios de discriminación y nueve conflictos armados tenían lugar en países sobre los que no hay datos disponibles al respecto.
- El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que la pandemia por la COVID-19 estaba exacerbando el impacto de la violencia sexual en los conflictos.
- En la década comprendida entre 2010 y 2019, al menos 100 millones de personas en el mundo han tenido que desplazarse de manera forzada de sus hogares, sin que la mayor parte de estas personas lograra una solución a su situación.
- El 48% de las personas refugiadas eran mujeres.
- En 2020 se cumplieron 20 años de la aprobación de la resolución 1325 por el Consejo de Seguridad de la ONU y 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Se trataba de dos aniversarios de enorme trascendencia en el ámbito de la agenda mujeres, paz y seguridad y que debían haber servido para efectuar una evaluación de los avances y los retos pendientes en la aplicación de los compromisos adquiridos en estas dos décadas.
- El 13% de las personas que negociaron, el 6% de quienes desempeñaron tareas de mediación y el 6% de quienes firmaron acuerdos de paz eran mujeres. Siete de cada diez procesos de paz seguían sin incluir mujeres mediadoras o signatarias. Siete misiones de mantenimiento de la paz desplegadas

Durante el año 2020 se registraron 34 conflictos armados

por Naciones Unidas seguían sin contar con una figura de asesoramiento de género entre su personal.

- A finales de 2020, 18 países en situación de conflicto armado contaban con un Plan de Acción Nacional sobre la resolución 1325, 11 de ellos en África.
- El informe *Alerta 2021!* identifica cuatro oportunidades de paz en la región que integra a Sudán y Sudán del Sur, Papúa Nueva Guinea (Bougainville), respecto de la agenda de género, paz y seguridad de la UE, y en relación a Siria.
- El informe destaca cuatro escenarios de alerta respecto del agravamiento de la violencia contra las mujeres provocado por la pandemia de la COVID-19, así como en relación a Perú, Oriente Medio y Norte de África y en la disputa entre Egipto, Etiopía y Sudán.

Estructura

El informe consta de cinco capítulos. En los dos primeros se analiza la conflictividad a escala global – causas, tipología, dinámicas, evolución y actores de las situaciones de conflicto armado o de tensión. El tercer capítulo analiza los impactos de género de conflictos y tensiones así como iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. El cuarto capítulo identifica oportunidades de paz, escenarios en los que existe una coyuntura favorable para la resolución de conflictos o para el avance o consolidación de iniciativas de paz. El último capítulo analiza escenarios de riesgo de cara al futuro. Además de los cinco capítulos, el informe también incluye un mapa desplegable en el que se identifican los escenarios de conflicto armado y tensión sociopolítica.

Conflictos armados

En el primer capítulo (Conflictos armados)¹ se describe la evolución, la tipología, las causas y las dinámicas de los conflictos armados activos durante el año, se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados en 2020, así como los impactos de los conflictos en la población civil.

El año 2020 no ofreció novedades respecto al número total de conflictos armados a nivel global. Siguiendo la tendencia de los períodos previos, en 2020 se

1. En este informe, se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:
 - demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
 - la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
 - o al control de los recursos o del territorio.

Conflictos armados en 2020*

ÁFRICA (15)	ASIA (9)	ORIENTE MEDIO (6)
Burundi -2015- Camerún (Ambazonia/North West y South West) -2018- Etiopía (Tigray) -2020- Libia -2011- Malí -2012- Mozambique (norte) -2019- RCA -2006- RDC (este) -1998- RDC (este-ADF) -2014- Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011- Región Sahel Occidental -2018- Somalia -1988- Sudán (Darfur) -2003- Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011- Sudán del Sur -2009-	Afganistán -2001- Filipinas (NPA) -1969- Filipinas (Mindanao) -1991- India (Jammu y Cachemira) -1989- India (CPI-M) -1967- Myanmar -1948- Pakistán -2001- Pakistán (Baluchistán) -2005- Tailandia (sur) -2004-	Egipto (Sinaí) -2014- Iraq -2003- Israel-Palestina -2000- Siria -2011- Yemen (al-houthistas) -2004- Yemen (AQPA) -2011-
		EUROPA (3)
		Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) -2020- Turquía (sudeste) -1984- Ucrania -2014-
		AMÉRICA (1)
		Colombia -1964-

*Se incluye entre guiones la fecha de inicio del conflicto armado.

identificaron 34 casos, el mismo número que el año anterior. En el lustro precedente las cifras han sido similares: 34 en 2019 y 2018, 33 en 2017 y 2016 y 35 en 2015. Al finalizar 2020 todos los casos permanecían activos, a diferencia de otros años en los que la reducción de los niveles de violencia en algunos contextos motivó que estos escenarios dejaran de ser considerados como conflictos armados – por ejemplo Argelia (AQMI) o RDC (Kasai) en 2019. A la lista de conflictos armados sí se añadieron dos nuevos casos. En África, las tensiones entre el Gobierno federal etíope y el gobierno de la región de Tigray desembocaron en una confrontación bélica con graves consecuencias. En Europa, la histórica disputa en torno al enclave de Nagorno-Karabaj –de mayoría armenia y formalmente parte de Azerbaiyán, aunque independiente de facto– escaló hasta una situación de conflicto armado abierto entre Armenia y Azerbaiyán, con severos impactos en términos de letalidad y desplazamientos forzados de población.

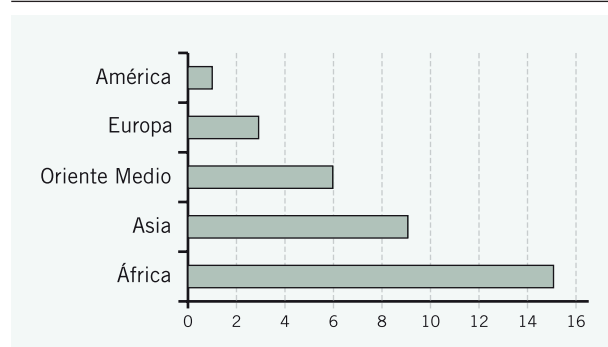
Respecto a la distribución geográfica de los conflictos armados, como en años previos la mayoría de los casos se concentraron en África (15) y Asia (9), seguidos de Oriente Medio (6), Europa (3) y América (1). En términos porcentuales, por tanto, el continente africano concentraba el 44% del total de conflictos a nivel global.

En lo referente a la relación entre los actores involucrados en el conflicto y el escenario de la disputa, se identificaron conflictos internos, internacionales y, mayoritariamente, internos internacionalizados. En líneas similares a años anteriores, en 2020 un 9% de los contextos fueron de carácter interno, es decir, conflictos en que los actores armados involucrados en la contienda operaban exclusivamente dentro de las fronteras de un

mismo Estado. Los tres conflictos armados internos se concentraron en Asia: Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). Otros tres casos, equivalentes también al 9% de los conflictos armados, fueron internacionales y se registraron en tres continentes: el conflicto en la Región Sahel Occidental, en África; la disputa palestino-israelí, en Oriente Medio, y el de Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj, en Europa. La inmensa mayoría de los conflictos armados eran internos internacionalizados –28 contextos, equivalentes al 82%. Estos casos se caracterizan porque alguna de las partes contendientes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados y grupos armados de acción transfronteriza, entre otros.

Siguiendo la tendencia de años previos, la mayoría de los conflictos armados en 2020 fueron internos internacionalizados

Distribución regional del número de conflictos armados en 2020

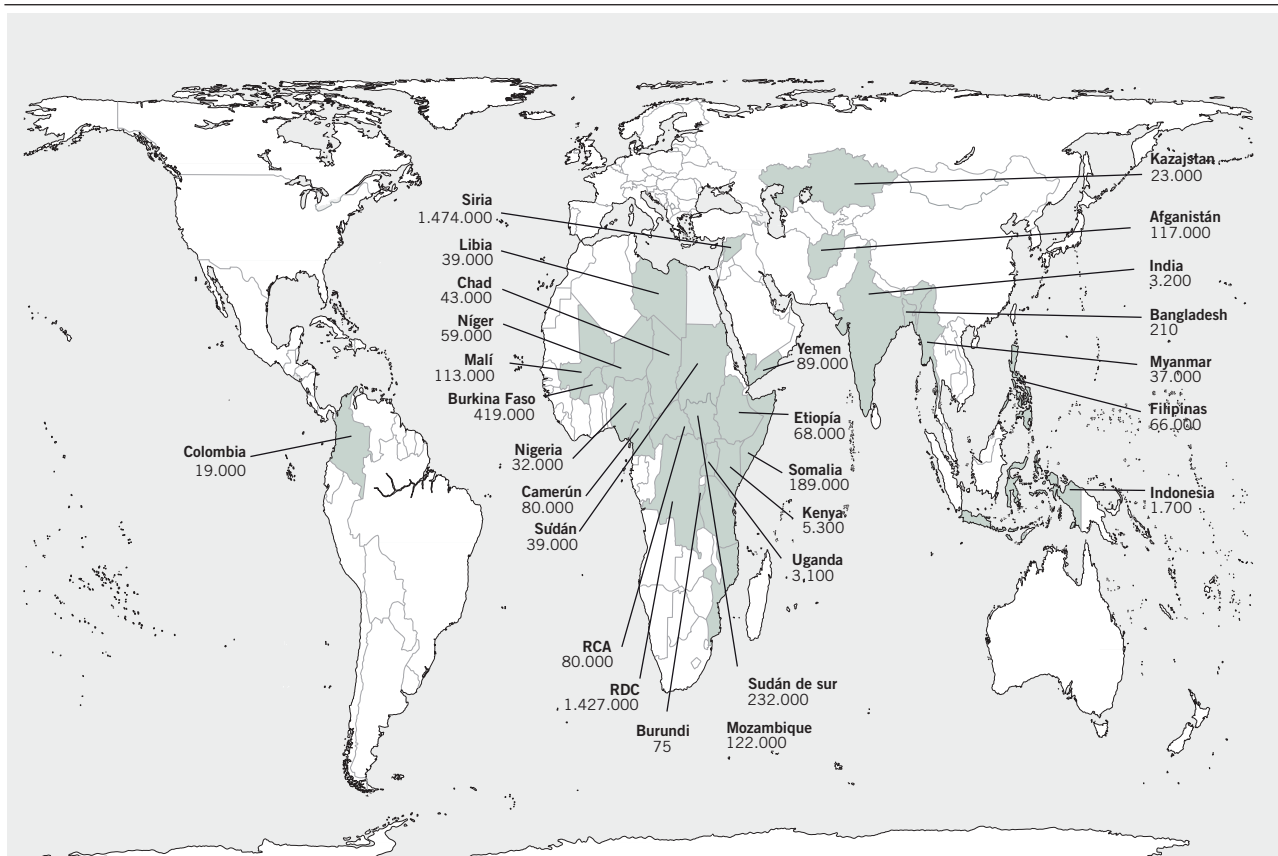


Respecto a las causas de los conflictos armados, la gran mayoría tuvo entre sus motivaciones principales la oposición a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o al sistema político, económico, social o ideológico de un determinado Estado, que derivaron en luchas por acceder al poder o erosionarlo. Uno u otro elemento, o ambos, estuvieron presentes en el 71% de los casos en 2020 (24 de los 34 casos), en línea con los años anteriores (73% en 2019, 71% en 2018, 73% en 2017). Entre estos 24 casos, en 18 contextos había actores armados que aspiraban a un cambio de sistema, mayoritariamente organizaciones que se atribuyen una agenda yihadista y que tratan de imponer su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos grupos cabe mencionar organizaciones como el autodenominado Estado Islámico (ISIS) y sus filiales o entidades afines en distintos continentes –el grupo estuvo presente en países como Argelia, Libia, Región Lago Chad, Región Sahel Occidental, Somalia, Afganistán, Pakistán, Filipinas, Turquía, Egipto, Iraq, Siria, Yemen, entre otros–; las diversas ramas de al-Qaeda –entre ellas AQMI (Argelia, Sahel y Libia) y AQPA (Yemen)–; los talibán que operan en Afganistán y Pakistán o el grupo al-Shabaab en Somalia, entre otros.

Más de un tercio (35%) de los conflictos armados en 2020 registraron un deterioro en los niveles de violencia e inestabilidad respecto al año anterior

Otro factor destacado entre las causas principales de los conflictos armados fueron las **disputas en torno a demandas identitarias y de autogobierno, presentes en el 59% de los conflictos (20 casos)**, mismo porcentaje que en los dos años previos. A este respecto, cabe destacar que los dos conflictos armados que se activaron en 2020 estaban relacionados con este tipo de reivindicaciones. Por un lado, en el trasfondo de la escalada de violencia en la región de Tigray, en Etiopía, estuvieron los agravios y la percepción de la comunidad tigray de una pérdida de poder y privilegios ante las políticas de reforma del sistema federal etíope impulsadas por el primer ministro Abiy Ahmed. La decisión de la región de Tigray de mantener una convocatoria a elecciones en la región a pesar de lo dispuesto por el Gobierno federal –que había resuelto aplazar los comicios federales y regionales por la pandemia y extender el mandato de las autoridades vigentes–, junto a otras cuestiones que se encuentran en la génesis de este conflicto, propició una disputa de legitimidades que acabó en confrontación armada al finalizar el año. Por otro lado está la disputa entre fuerzas de Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno Karabaj, enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán, pero independiente de facto.

Nuevos desplazamientos internos por conflictos y violencia - primer semestre de 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Internal Displacement Monitoring Centre, *Internal displacement 2020: Mid-year update*, IDMC, 2020.

Tras diversas escaladas de violencia desde la guerra de los años noventa, una de las más graves en 2016, las hostilidades se reabrieron en 2020. Los enfrentamientos remitieron al finalizar el año tras un acuerdo mediado por Rusia, que dibujó un cambio significativo en los límites del territorio y ratificó la partición de Nagorno Karabaj, pero dejó sin resolver el estatus del enclave. La disputa en torno al control de territorio –como también ilustra el caso de Armenia – Azerbaiyán (Nagorno Karabaj)– y de recursos fue una de las causas principales en un 35% de los conflictos (12 casos) en 2020, siguiendo la tendencia de años previos. La cuestión de los recursos fue una motivación que estuvo presente mayoritariamente en contextos africanos –en más de la mitad de los conflictos armados de la región (ocho de 15 casos)–, si bien es un factor que de manera indirecta estuvo presente en numerosos contextos de otras regiones, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra.

En 2020 se observó un incremento significativo de los conflictos armados de alta intensidad, que representaban casi la mitad de los casos, un 47% del total

En cuanto a la evolución de los conflictos armados a lo largo de 2020, poco más de un tercio de los casos –12 de los 34, equivalentes a un 35%– registraron un deterioro de la situación, con mayores niveles de violencia e inestabilidad que el año anterior: Etiopía (Tigray), Malí, Mozambique, Región Sahel Occidental, RCA, RDC (este-ADF), Sudán (Darfur), Sudán del Sur, Myanmar, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Yemen (al-houthistas). El resto de los casos se repartieron en partes iguales entre los que exhibieron niveles de violencia y hostilidades similares a las registradas en 2019 y los que presentaron una reducción en los enfrentamientos –11 casos en cada categoría. Asia fue la región en la que se observó una mayor disminución en las hostilidades. Dos tercios de los conflictos armados en esta zona evolucionaron hacia menores niveles de violencia: Afganistán, Filipinas (Mindanao), India (CPI-M), Pakistán, Pakistán (Baluchistán) y Tailandia (sur).

Los dos conflictos armados en los que se contabilizaron más víctimas mortales en 2020 fueron Yemen y Afganistán

Respecto a la intensidad de la violencia en los diferentes conflictos armados, es posible identificar y destacar un rasgo particular en 2020: una prevalencia significativa de casos de intensidad elevada, es decir, contextos caracterizados por niveles de letalidad por encima del millar de víctimas anuales, además de graves impactos en la población, masivos desplazamientos forzados y severas consecuencias en el territorio. A diferencia de años previos en los que los casos de alta intensidad representaban en torno a un tercio de los casos –32% en 2019 (11 casos), 27% en 2018 (nueve casos)–, en 2020 los conflictos armados graves se incrementaron y representaban casi la mitad de los casos, un 47% del total. Hasta ahora, la cifra más elevada de la década se había registrado en los años 2016 y 2017, pero con un porcentaje menor: 40%. La mayor prevalencia de

casos graves en 2020 se observó en África, donde 11 de los 15 (73%) conflictos armados en el continente fueron de alta intensidad. Este dato es muy superior a lo observado el año anterior en África, cuando menos de la mitad de los casos –siete de 16 casos, equivalentes a 44%– fueron de intensidad elevada. Respecto a otras regiones, en Oriente Medio la mitad de los conflictos –tres de seis– fueron considerados como contextos graves en 2020, mientras que Asia y Europa registraron un caso de este tipo, respectivamente. América, en cambio, no presentó conflictos armados de alta intensidad. Los 16 casos de conflictos armados graves en 2020 fueron: Camerún (Ambazonia/North West y South West), Etiopía (Tigray), Libia, Malí, Mozambique, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).

En algunos de estos contextos, los enfrentamientos y otras dinámicas de violencia provocaron unos niveles de letalidad que estuvieron muy por encima del umbral de mil víctimas mortales anuales. Así, por ejemplo, en la Región Sahel Occidental se contabilizaron más de 4.250 muertes y 2020 fue señalado como el año más mortífero desde el inicio de la violencia en 2012, a causa de las acciones de diversos grupos yihadistas que operan en la zona. En Somalia, los hechos de violencia, en su mayoría atentados perpetrados por al-Shabaab, provocaron la muerte de más de 3.000 personas. El conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno Karabaj provocó más de 5.000 personas fallecidas. En el caso de Siria, las estimaciones apuntan a que las hostilidades habrían causado al menos 8.000 víctimas mortales en 2020, un descenso relativo respecto a los niveles de letalidad registrados en años previos (15.000 personas fallecidas en 2019, 30.000 en 2018). Los dos conflictos armados más cruentos de 2020 fueron, con diferencia, Yemen y Afganistán. En el caso yemení se estimaba que unas 20.000 personas habían perdido la vida como resultado directo de enfrentamientos y ataques explosivos. En el caso de Afganistán el conflicto armado habría causado la muerte a más de 21.000 personas. Pese a lo elevado de la cifra, esta es significativamente menor a la del año anterior, en el que se contabilizaron 40.000 víctimas mortales.

Como en años previos, y tal y como viene denunciando periódicamente Naciones Unidas, organizaciones internacionales y entidades locales, la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados. En 2020 los impactos de los enfrentamientos entre actores armados y del uso indiscriminado y deliberado de la violencia contra la población civil se vieron amplificadas a causa

de la pandemia de la COVID-19, que agravó aún más la precariedad y desprotección de numerosas poblaciones afectadas por conflictos armados. El informe del secretario general de la ONU sobre la protección de civiles en conflictos armados publicado en mayo, a pocos meses del inicio de la pandemia, ya advertía sobre las implicaciones del coronavirus y la exacerbación de las vulnerabilidades en los colectivos más frágiles. Cabe recordar que los civiles han sido identificados por la ONU como las principales víctimas mortales de los conflictos armados.

En esta línea, cabe destacar que los conflictos armados continuaron provocando y/o agravando situaciones de crisis humanitaria. Según las previsiones de OCHA, un total de 235 millones de personas necesitarían asistencia humanitaria en 2021, un incremento del 40% respecto a las estimaciones para el año anterior y atribuible mayoritariamente a la COVID-19. La anterior previsión –168 millones– ya había destacado por ser la cifra más elevada en décadas. Las repercusiones socioeconómicas de la pandemia agravaron la vulnerabilidad de poblaciones ya seriamente afectadas por conflictos y violencia, como bien ilustran los casos de RCA, Ucrania (este), Siria o Yemen. Adicionalmente, los conflictos armados continuaron teniendo impactos específicos en grupos de población determinados, como los niños y las niñas. El informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados publicado en junio de 2020, y que analiza la situación entre enero y diciembre de 2019, volvió a ofrecer un panorama de tendencias altamente preocupante. Naciones Unidas verificó más de 25.000 violaciones graves de derechos humanos contra menores en 19 contextos, más de la mitad de ellas perpetradas por agentes no estatales y un tercio por parte de fuerzas gubernamentales o internacionales.

El fuego cruzado, el uso de armas ligeras, la utilización de armas explosivas en zonas pobladas y el uso excesivo de la fuerza de agentes estatales habría causado más de 10.000 víctimas entre niños y niñas, incluyendo 4.019 muertes y 6.154 menores afectados por mutilaciones.

Actores armados estatales y no estatales continuaron perpetrando violencia sexual y de género contra población civil, en especial contra mujeres y niñas, en contextos de conflicto armado. El informe anual del secretario general de la ONU sobre la materia publicado en 2020, que analiza los hechos ocurridos en 2019, confirmó que la violencia sexual continuaba siendo utilizada como una táctica de guerra, de tortura y represión política, así como un instrumento de deshumanización y para forzar desplazamientos de población. El informe aporta información verificada sobre el uso de la

En 2020, los impactos de la violencia de los conflictos armados en la población civil se vieron amplificadas a causa de la pandemia de la COVID-19

Casos como Siria y Yemen evidenciaron la carga añadida de la pandemia en sistemas de salud extremadamente deteriorados por años de violencia y ataques deliberados contra hospitales y centros de salud

violencia sexual y de género en 19 contextos y señaló la responsabilidad de 54 actores armados, en su mayoría de carácter no estatal, aunque también denunció la implicación de cuerpos de seguridad estatales de varios países, incluyendo RDC, Myanmar, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Siria. La valoración del secretario general de la ONU constata que la violencia sexual continúa siendo un fenómeno infra-denunciado y que las mujeres y niñas –que constituyen el mayor número de víctimas de este flagelo– siguen enfrentando numerosos obstáculos

de género para acceder a la justicia y reparación. Adicionalmente, el informe subraya las vulnerabilidades específicas que en este ámbito afectan a las poblaciones desplazadas, tanto en el momento del tránsito como en destino, y su vinculación con el incremento de los matrimonios forzados de menores y el repliegue de mujeres y niñas de actividades laborales y educativas en países como Iraq, Siria, Yemen o Myanmar.

Los desplazamientos forzados de población continuaron siendo uno de los efectos más visibles y dramáticos de los conflictos armados. El informe anual de ACNUR publicado en junio de 2020 confirmó la tendencia de crecimiento exponencial de este fenómeno en la última década: al finalizar 2019 había 79,5 millones de personas desplazadas forzosamente, frente a las 70,8 millones contabilizadas a finales del año anterior. Del total de personas desplazadas, 26 millones eran refugiadas –20,4 millones bajo el mandato de ACNUR y 5,6 millones de palestinos y palestinas bajo el mandato de la UNRWA– y 45,7 millones se encontraban en una situación de desplazamiento forzado interno. Otras 4,2 millones eran solicitantes de asilo, mientras que 3,6 millones eran personas venezolanas a las que ACNUR reconoció un estatus de desplazamiento especial. Las casi 80 millones de personas desplazadas equivalen a un 1% de la población mundial

y el 40% de ellas eran menores de edad. Con la excepción de Venezuela, los principales emisores de población refugiada eran todos países afectados por conflictos armados de intensidad elevada –Siria (6,6 millones de personas), Afganistán (2,7), Sudán de Sur (2,2)– o media –Myanmar (1,1). Respecto a los casos con mayor número de población desplazada internamente, dentro de las fronteras de los respectivos países, la mayor parte de los casos eran conflictos armados de alta intensidad. Según los datos de International Displacement Monitoring Centre (IDMC) referentes al año 2019 –últimos datos anuales disponibles– sobre los desplazamientos a causa de conflictos y violencia, los países con mayor número de personas en esta situación eran Siria (6,5 millones de personas), Colombia (5,6), RDC (5,5), Yemen (3,6), Afganistán (3), Somalia (2,6), Nigeria (2,6), Sudán (2,1), Iraq (1,6) y Etiopía (1,4).

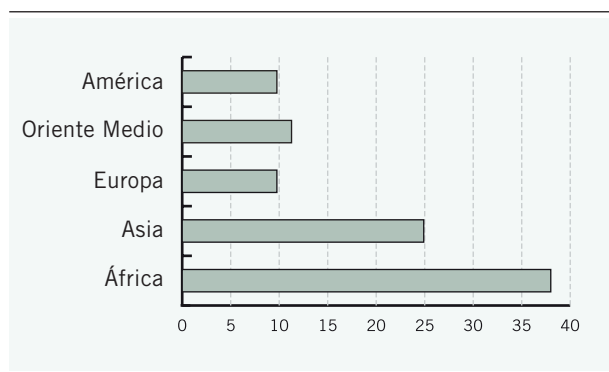
Tensiones

En el segundo capítulo (Tensiones)² se analizan los acontecimientos más relevantes referidos a las tensiones sociopolíticas registradas durante el año y se realiza una mirada comparativa de las tendencias globales y regionales. Durante 2020 se identificaron 95 escenarios de tensión en todo el mundo, un caso más que en el año anterior. Este incremento es significativamente menor que el que se registró en 2019 en comparación con 2018, pues entonces la cifra de tensiones aumentó en 11 casos. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas se concentró en África, con 38 casos, seguida de Asia (25), Oriente Medio (12 casos) y Europa y América Latina (10 en cada región). A pesar de que el incremento en el número de tensiones sociopolíticas en 2020 fue casi imperceptible, se identificaron seis nuevos casos de tensión. En cuanto a los nuevos casos, cuatro tuvieron lugar en África –Malí, Tanzania, Argelia (AQMI) y Etiopía-Egipto-Sudán– y dos en Asia China-India e Indonesia (Sulawesi).

En cuanto a la intensidad de las tensiones, la gran mayoría (57%) de los casos fueron de intensidad baja, un 26% media y un 17% alta. De los 16 contextos de máxima intensidad, la mitad se concentraron en África –Chad; Malí; Nigeria; Etiopía; Etiopía (Oromiya); Kenia; Ruanda-Burundi; y Marruecos-Sáhara Occidental–, cuatro en Oriente Medio –Irán-EEUU, Israel; Egipto; Iraq; e Israel-Siria-Líbano–, dos en Asia –China-India y India-Pakistán– y dos en América Latina –México y Venezuela.

En cuanto a la evolución de las tensiones, el 38% de las mismas se agudizaron durante 2020, el 36% se mantuvo sin cambios sustantivos respecto del año anterior y en el 26% de los casos se observó una mejora de la situación. Globalmente, por tanto, el número de tensiones que escalaron durante el año (36) fue claramente superior al del número de contextos en que la tensión remitió. En cuanto a las principales causas o motivaciones de las tensiones, el panorama en 2020 fue muy parecido al del año anterior. Un 73% de los casos analizados estaban vinculados a la oposición a las políticas internas o internacionales de determinados gobiernos o bien al sistema político, social o ideológico del Estado en su conjunto; un 39% a demandas de autogobierno

Distribución regional del número de tensiones en 2020



y/o identitarias; y un 31% a disputas por el control de territorios y/o recursos. En línea con años anteriores, más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (53%), aunque dicho porcentaje fue claramente superior en África (61%) o en América Latina, donde el 100% de las tensiones fueron de carácter interno. Más de una cuarta parte de las tensiones fueron internas internacionalizadas (26%), aunque en Oriente Medio y en Europa la mitad de las tensiones fueron de este tipo. Finalmente, algo más de una quinta parte (21%) de las tensiones fueron de carácter internacional. Cabe señalar que, a pesar de que las tensiones internacionales suponen un número de casos comparativamente inferior al de las otras dos tipologías, estas representan un porcentaje significativo de las tensiones de máxima intensidad, como los casos de Marruecos-Sáhara, Ruanda-Burundi, India-China, India-Pakistán, Irán-EEUU, Israel, o Israel-Siria-Líbano.

Dimensión de género en la construcción de paz

En el tercer capítulo (Género, paz y seguridad) se analizan los impactos de género de conflictos y tensiones, así como las diversas iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género.³ Esta perspectiva permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre

2. Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.
3. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.

Países que son escenario de conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos

	Niveles medios de discriminación	Niveles altos de discriminación	Niveles muy altos de discriminación	Sin datos
Conflictos armados	Burkina Faso India (2) RDC (3) Tailandia	Chad Malí Myanmar Nigeria RCA	Afganistán Camerún (2) Filipinas (2) Iraq Pakistán (2) Yemen (2)	Burundi Egipto Israel Libia Níger Palestina Siria Somalia Sudán (2) Sudán del Sur
Tensiones	Chile Haití India (6) Kenya RDC (4) Senegal Tailandia Tayikistán Zimbabwe	Chad Côte d'Ivoire Indonesia (2) Malawi Malí Madagascar Nigeria (2) RCA Sri Lanka Tanzania Togo Túnez Uganda (4)	Bangladesh Guinea Irán (4) Iraq (2) Líbano (2) Marruecos Pakistán (2)	Arabia Saudita Argelia (2) Bahrein Brunei Darussalam Burundi China (7) Corea, RPD Egipto Eritrea Gambia Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Israel (2) Kosovo Malasia Palestina Sáhara Occidental Siria Somalia Sudán (4) Sudán del Sur (2) Taiwán Uzbekistán Venezuela

* Entre paréntesis el número de conflictos armados o tensiones en dicho país.

Tabla elaborada a partir de los niveles de la discriminación de género del SIGI (OCDE) señaladas en el último informe disponible (2020) y de las clasificaciones de conflicto armado y tensión de la Escuela de Cultura de Pau. El SIGI establece cinco niveles de clasificación en función del grado de discriminación: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo.

los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a esta construcción. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI, por sus siglas en inglés); en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Instituciones Sociales y Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

20 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar en 2020 se dieron en países donde existían niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos

De acuerdo con el SIGI, los niveles de discriminación contra las mujeres fueron altos o muy altos en 29 países, concentrados principalmente en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este índice con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que 14 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2020 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género con niveles altos o muy altos de discriminación, seis en países con niveles medios de discriminación y nueve conflictos armados tenían lugar en países sobre los que no hay datos disponibles al respecto –Burundi, Egipto, Israel, Libia, Níger, Palestina, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur–. Asimismo, en otros cuatro países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles bajos (Etiopía, Mozambique, Ucrania y Turquía) o muy bajos (Colombia) de acuerdo con el SIGI. En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, al menos 45 de las 96 tensiones activas durante el año 2020 transcurrieron en países en los

que existían graves desigualdades de género (niveles medios, altos o muy altos según el SIGI). 32 tensiones transcurrían en países sobre los que no hay datos disponibles (Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Burundi, China, Corea RPD, Egipto, Eritrea, Gambia, Palestina, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Israel, Kosovo, Sáhara Occidental, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Taiwán, Uzbekistán y Venezuela).

Al igual que en años anteriores, durante 2020 la violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos. Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes, así como por medios de comunicación locales e internacionales. El informe del secretario general de la ONU analizó la situación de 19 países en 2019, 15 de ellos en situación de conflicto: RCA, RDC, Burundi, Libia, Malí, Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Nigeria, Colombia, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria, Yemen. De los 19 contextos que fueron objeto de análisis en el informe del secretario general de la ONU, doce registraron niveles elevados de intensidad de la violencia general del conflicto armado durante 2020 –Libia, Malí, RDC (este), RDC (este – ADF), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)– superando en general el millar de víctimas mortales anuales y generando graves impactos en las personas y el territorio, entre los que se incluía la violencia sexual relacionada con el conflicto armado. En siete de ellos también se había producido una escalada de la violencia durante el 2019 con respecto al año anterior –Malí, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), RDC (este-ADF), Colombia, Myanmar, Yemen (al-houthistas)–. La mayoría de los actores armados identificados por el secretario general como responsables de violencia sexual en conflictos armados eran actores no estatales, algunos de los cuales habían sido incluidos en las listas de organizaciones terroristas de Naciones Unidas. Por otra parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que la pandemia por la COVID-19 estaba exacerbando el impacto de la violencia sexual en los conflictos. Como consecuencia de los confinamientos implantados para combatir el coronavirus se dificultó el acceso de las víctimas a los sistemas de justicia, incrementándose las graves barreras estructurales a la denuncia de la violencia sexual en los contextos de conflicto. Además, el secretario general advirtió del riesgo de que dejasen de priorizarse los servicios de atención a las víctimas de violencia sexual como el acceso a refugios, servicios psicosociales y de salud y se incrementase la impunidad. La pandemia no solo impactó sobre la violencia sexual en los conflictos armados, sino que incrementó el riesgo para muchas mujeres de sufrir violencia en el ámbito familiar y doméstico.

***A finales de 2020,
18 países en
situación de conflicto
armado contaban con
un Plan de Acción
Nacional sobre la
resolución 1325***

Además de la violencia sexual, los conflictos armados y las tensiones tuvieron otros graves impactos de género. La impunidad en torno a las violaciones de derechos humanos continuó siendo un elemento recurrente. El informe anual sobre desplazamiento forzado presentado por ACNUR, recogió los datos demográficos sobre la población desplazada en el mundo durante 2019. ACNUR ofreció algunos datos desagregados por sexo, señalando que el 48% de las personas refugiadas eran mujeres. En este año se registró una cifra global de 79,5 millones de personas desplazadas en el mundo, incluyendo 26 millones de personas refugiadas. Según los datos de la agencia de Naciones Unidas, en la década comprendida entre 2010 y 2019, al menos 100 millones de personas en el mundo han tenido que desplazarse de manera forzada de sus hogares, sin que la mayor parte de estas personas lograra una solución a su situación. Solo 3,9 millones de personas lograron retornar a sus lugares de origen y 1,1 millones fueron reasentados en otros estados. Desde el año 2011 la cifra anual de personas refugiadas no ha dejado de crecer. En lo que respecta a los datos de la población desplazada internamente, las mujeres representaban el 52% de esta población en las 16 de las 20 operaciones para las que ACNUR disponía de datos demográficos.

El experto independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género presentó su informe sobre la situación de las personas LGTBI en el contexto de la pandemia por coronavirus. El experto destacó el impacto desproporcionado que esta situación estaba teniendo, con consecuencias como el aumento de la violencia en los entornos cercanos debido a la situación de confinamiento y señalando que la respuesta a la pandemia reproducía y exacerbaba los patrones de exclusión social y violencia previamente identificados contra las personas LGTBI. Además, las situaciones de violencia y discriminación a las que habitualmente se enfrentan las personas LGTBI podía llevarles a no recurrir a la asistencia sanitaria, agravándose su situación en un contexto de emergencia sanitaria como el de la pandemia. El experto advirtió también de posibles regresiones en la política de refugio y asilo, así como la intensificación de la violencia contra las personas LGTBI y de género diverso en los países de origen de las personas forzadas a desplazarse y la expansión de la COVID-19 en los campamentos para personas refugiadas, debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad en estos emplazamientos.

Respecto al impacto de los conflictos armados en niños y niñas, el secretario general de la ONU presentó su informe anual en el que recogía algunos impactos específicos de género sobre la población infantil. El informe señaló que se registraron 735 denuncias de violencia sexual en países como RDC, Somalia,

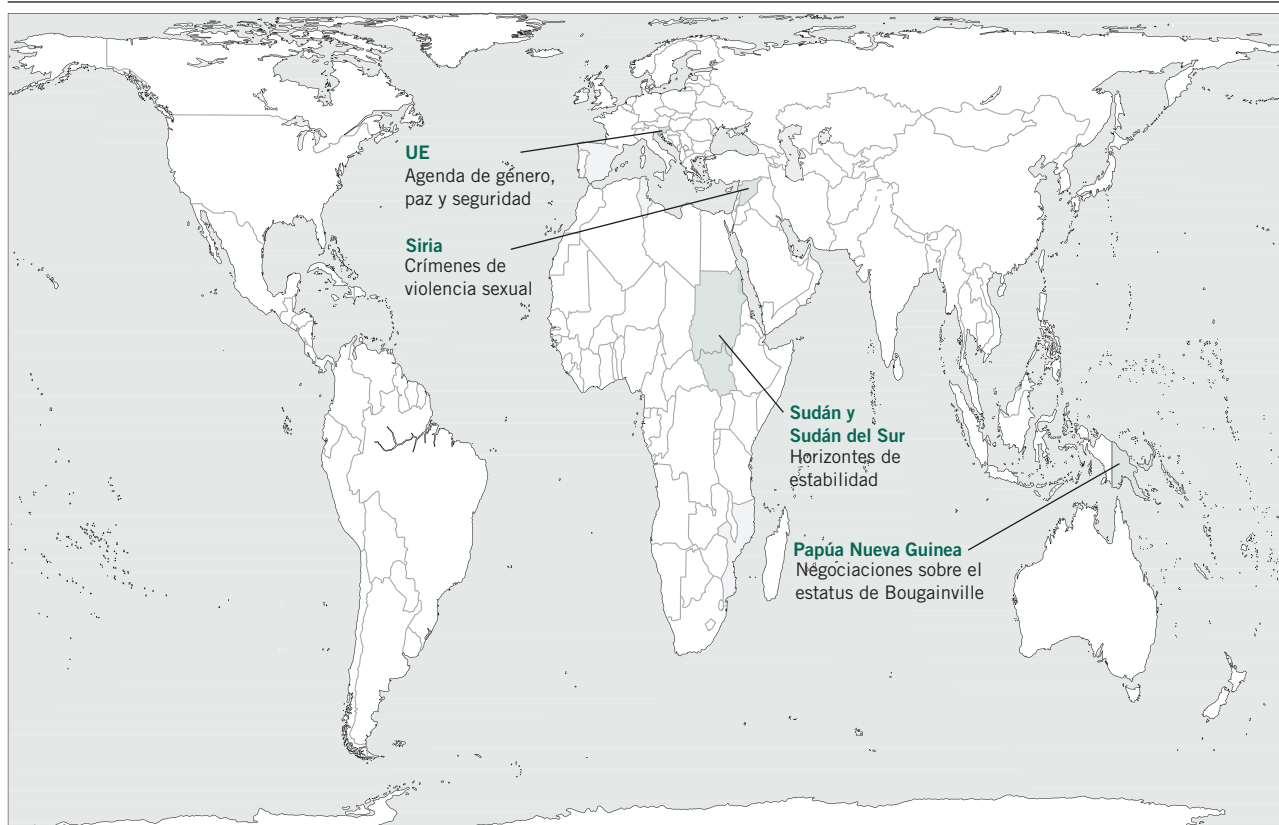
RCA, Sudán y Sudán del Sur y se constató que se había duplicado el número de casos atribuidos a agentes estatales. La violencia sexual afectó de forma especialmente grave a las niñas. Otras violaciones a los derechos humanos de niñas y niños en contextos de conflicto armado fueron ataques a centros escolares y secuestros. Además, se advirtió de la situación de riesgo en la que se hallan niños y niñas detenidas y privadas en libertad en situaciones de conflicto, que con frecuencia son víctimas de violencia sexual y torturas.

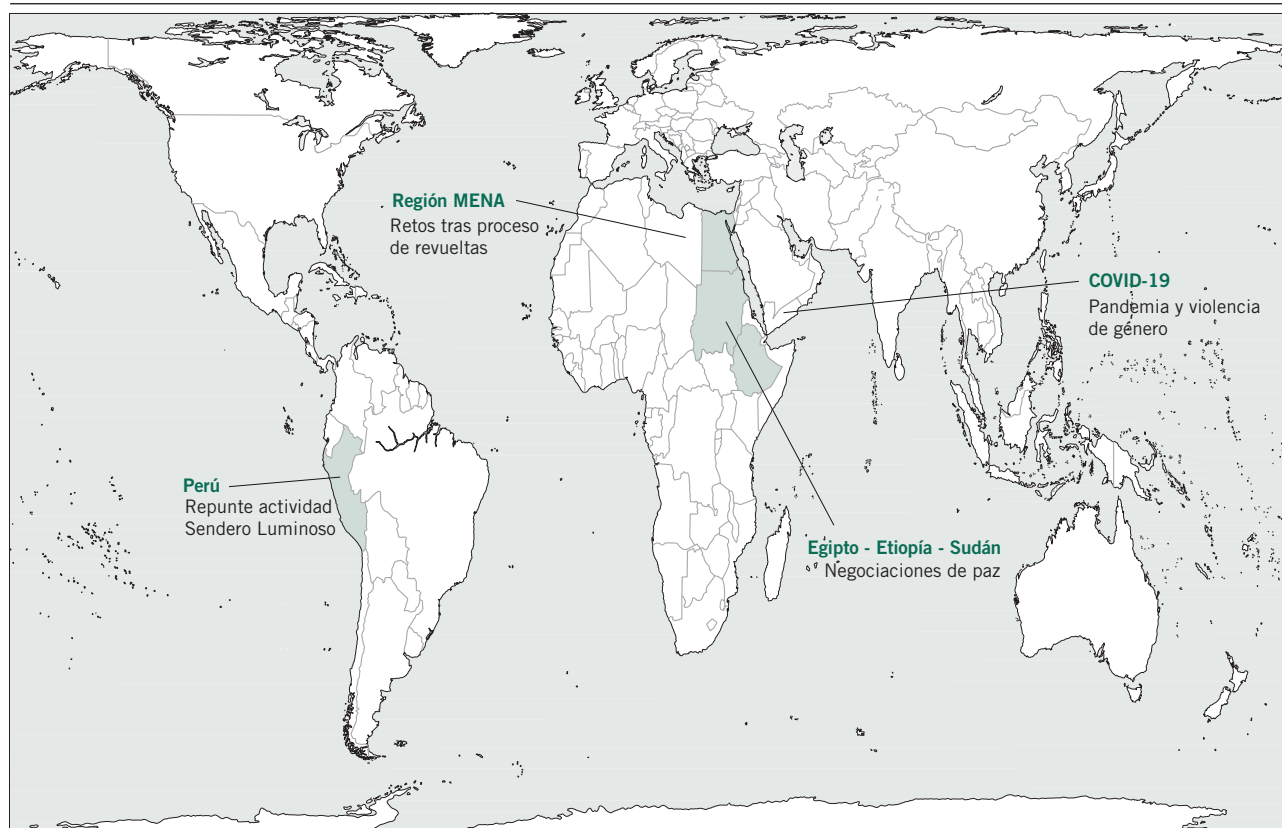
En 2020 se cumplieron 20 años de la aprobación de la resolución 1325 por el Consejo de Seguridad de la ONU y 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Se trataba de dos aniversarios de enorme trascendencia en el ámbito de la agenda mujeres, paz y seguridad y que debían haber servido para efectuar una evaluación de los avances y los retos pendientes en la aplicación de los compromisos adquiridos en estas dos décadas. El secretario general de la ONU presentó su informe anual, que incluyó una extensa evaluación de la situación en la que se encuentra la implementación de la agenda, identificando los principales retos. En lo que respecta a la participación en los procesos de paz, el informe destacó que entre 1992 y 2019, el 13% de las personas que negociaron, el 6% de quienes desempeñaron tareas de mediación y el 6% de quienes firmaron acuerdos de paz eran mujeres. Siete de cada diez procesos de paz seguían sin incluir mujeres mediadoras o signatarias. Siete misiones de mantenimiento de la paz desplegadas por Naciones Unidas seguían sin contar con una figura de asesoramiento de género entre su personal. En clave

de avance limitado, entre 1995 y 2019 se pasó del 14 al 22% en el porcentaje de acuerdos de paz que incluyeron disposiciones relativas a la igualdad de género. En el año 2019, en los procesos de paz facilitados o cofacilitados dirigidos o codirigidos por Naciones Unidas, el 30% de las personas integrantes de los equipos de apoyo eran mujeres. El informe también abordó otros temas de la agenda, como la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos, recogiendo que entre 2015 y 2019, al menos 102 defensoras fueron asesinadas en 26 países en los que tenían lugar conflictos armados. A finales de 2020, 18 países en situación de conflicto armado contaban con un Plan de Acción Nacional sobre la resolución 1325, 11 de ellos en África (Burundi, Camerún, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, Burkina Faso, RCA, RDC, Sudán y Sudán del Sur). Asia era la región con menos países en conflicto con Planes Nacionales de Acción aprobados, ya que únicamente Afganistán y Filipinas contaban con uno.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en 2020 la resolución 2538 sobre mantenimiento de la paz, centrada en la participación de las mujeres en estas misiones. Se trata de la primera resolución centrada de forma exclusiva en las mujeres y el mantenimiento de la paz y fue promovida por el Gobierno de Indonesia. La resolución, que no se aprobó bajo el paraguas de la agenda mujeres, paz y seguridad, hace un llamamiento a los estados, Naciones Unidas y organizaciones regionales para que promuevan la participación plena, efectiva y significativa de las mujeres de las fuerzas de seguridad y civiles en las operaciones de mantenimiento

Oportunidades de paz para 2021





de la paz. Además, de manera específica demanda a los Estados miembros que formulen estrategias y medidas para aumentar el despliegue de mujeres integrantes de las fuerzas de seguridad. Las últimas estadísticas disponibles en materia de participación de mujeres en las fuerzas de mantenimiento de la paz señalaban que las mujeres representaban el 7%, aunque si se diferencia entre fuerzas policiales y militares se aprecian notables diferencias, ya que las mujeres constituyen el 17,5% de las fuerzas policiales desplegadas en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU y el 5,7% de las militares.

Oportunidades de paz y escenarios de riesgo para 2021

En el quinto capítulo (Oportunidades de Paz para 2021), el informe identifica y analiza cuatro escenarios propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz de cara al futuro. Las oportunidades identificadas durante 2020 hacen referencia a diferentes regiones y temas.

- **Sudán y Sudán del Sur.** En la última década la región que integra a Sudán y Sudán del Sur ha pasado de una significativa crisis política y de seguridad, a la apertura de sendos procesos transicionales que, aunados a la firma de

importantes acuerdos de paz en cada país, abren un nuevo camino de esperanza para la construcción y consolidación de la paz y la estabilidad en la zona.

- **Papúa Nueva Guinea (Bougainville).** Durante el año 2020 el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y el Gobierno Autónomo de Bougainville sentaron las bases de un proceso de negociación que podría conducir a la resolución sobre el estatus político de la isla de Bougainville, implementar el acuerdo de paz de 2001 y culminar así un proceso de paz iniciado en los años noventa.

- **Unión Europea y mujeres, paz y seguridad.** El nuevo marco normativo de la agenda de mujeres, paz y seguridad de la UE ofrece oportunidades a las organizaciones de mujeres en contextos de conflicto y procesos de paz en demanda de mecanismos de participación y diálogo efectivo, si bien persisten los déficits de implementación y en coherencia de políticas.

- **Siria:** El país ha convertido en un caso emblemático a nivel mundial por las sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en un contexto de impunidad, que sienta un peligroso precedente. Ante el bloqueo de otras opciones para exigir responsabilidades, iniciativas recientes –algunas de las cuales apelan al principio

El informe Alerta! identifica y analiza cuatro contextos propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz

de jurisdicción universal– alientan una incipiente esperanza de justicia y reparación para víctimas del conflicto, incluyendo supervivientes de violencia sexual.

En el sexto capítulo (Escenarios de riesgo para 2021), el informe identifica y analiza cuatro escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante el año 2021.

- **Pandemia y violencia de género:** Las dinámicas entrecruzadas de la violencia armada en contextos de conflictos y crisis socioeconómicas y de la pandemia de la COVID-19 aumentan el riesgo de exposición a violencia y desigualdades de género de mujeres y niñas, agravando las dificultades de acceso a recursos y los impactos específicos de la violencia sobre sus derechos.
- **Perú:** A pesar del gran despliegue militar y policial en las últimas dos décadas en la región

El informe analiza cuatro escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden agravarse

en la que opera el el Militarizado Partido Comunista del Perú, este grupo incrementó su actividad en 2020 y el Gobierno reconoció que sigue suponiendo una importante amenaza a la seguridad nacional.

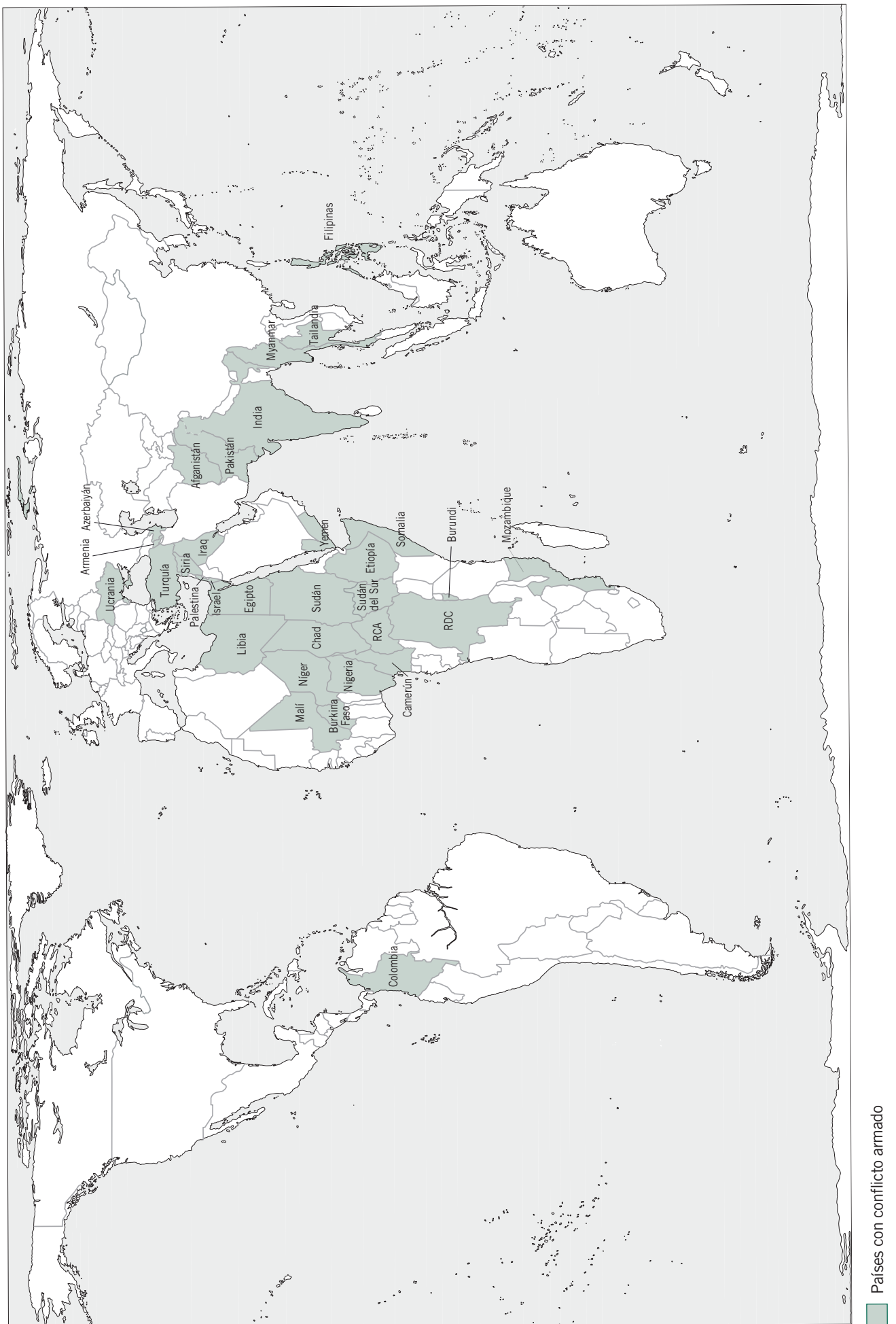
- **Norte de África y Oriente Medio:** Una década después de las masivas revueltas populares que sacudieron el panorama político en toda la zona, la región afronta una serie de retos y riesgos vinculados a la persistencia de los agravios que motivaron la contestación en el pasado, al refuerzo y reconfiguración del autoritarismo y de las estructuras represivas, y a las complejidades derivadas de la evolución de los graves conflictos armados en esta área.
- **Egipto – Etiopía – Sudán:** Los avances durante los últimos años y en especial en el año 2020 en la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope, iniciada por Etiopía en 2011 en el cauce del Nilo Azul, afluente del Nilo en territorio etíope, han provocado un incremento de tensión entre Etiopía y Egipto y, en menor medida, Sudán.

Resumen de la conflictividad global en 2020

Continente	Conflicto armado			Tensión			TOTAL
	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	
África	<i>Camerún (Ambazonia/ North West y South West)</i> <i>Etiopía (Tigray)</i> <i>Libia</i> <i>Malí</i> <i>Mozambique (norte)</i> <i>RDC (este)</i> <i>RDC (este-ADF)</i> <i>Región Lago Chad (Boko Haram)</i> <i>Región Sahel Occidental</i> <i>Somalia</i> <i>Sudán del Sur</i>	<i>RCA</i> <i>Sudán (Darfur)</i>	<i>Burundi</i> <i>Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)</i>	Chad Etiopía Etiopía (Oromiya) Kenia Malí <i>Marruecos-Sáhara Occ.</i> Nigeria Ruanda-Uganda	Argelia (AQMI) Costa de Marfil Eritrea Etiopía-Egipto-Sudán Guinea Guinea-Bissau <i>RDC</i> Ruanda Ruanda-Uganda Somalia (Somalilandia-Puntlandia) <i>Sudán</i> Tanzania Uganda	<i>África Central (LRA)</i> Argelia Benin <i>Eritrea-Etiopía</i> Gambia Guinea Ecuatorial Madagascar Malawi <i>Mozambique</i> Nigeria (Delta Níger) RDC-Ruanda RDC-Uganda Senegal (Casamance) <i>Sudán-Sudán del Sur</i> Togo Túnez Zimbabwe	
SUBTOTAL	11	2	2	8	13	17	53
América			<i>Colombia</i>	México <i>Venezuela</i>	<i>Haití</i> Perú	Bolivia Chile El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua	
SUBTOTAL			1	2	2	6	11
Asia y Pacífico	<i>Afganistán</i>	India (Jammu y Cachemira) <i>Myanmar</i> Pakistán	<i>Filipinas (Mindanao)</i> <i>Filipinas (NPA)</i> India (CPI-M) Pakistán (Baluchistán) <i>Tailandia (sur)</i>	India-China India-Pakistán	<i>Corea, RPD-EEUU, Japón, Rep. de Corea</i> <i>Corea, RPD-Rep. de Corea</i> India Indonesia (Papúa Occ.) Pakistán	Bangladesh China (Hong Kong) China (Tíbet) China (Xinjiang) China-Japón China-Taiwán <i>India (Assam)</i> India (Manipur) <i>India (Nagalandia)</i> Indonesia (Sulawesi) Kazajistán Kirguistán Lao, RPD Mar de la China Meridional Sri Lanka Tailandia Tayikistán Uzbekistán	
SUBTOTAL	1	3	5	2	5	18	34
Europa	<i>Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)</i>	Turquía (sudeste)	<i>Ucrania (este)</i>		Belarús Rusia (norte del Cáucaso) Turquía Turquía-Grecia, Chipre	Bosnia y Herzegovina España (Cataluña) <i>Georgia (Abjasia)</i> <i>Georgia (Osetia del Sur)</i> <i>Moldova, Rep. de (Transnistria)</i> <i>Serbia-Kosovo</i>	
SUBTOTAL	1	1	1		4	6	13
Oriente Medio	Iraq <i>Siria</i> <i>Yemen (al-houthistas)</i>	Egipto (Sinaí)	<i>Israel-Palestina</i> Yemen (AQPA)	Egipto <i>Irán-EEUU, Israel</i> Iraq Israel-Siria-Líbano	Líbano	Arabia Saudita Bahrein Irán Irán (noroeste) Irán (Sistán Baluchistán) Iraq (Kurdistán) <i>Palestina</i>	
SUBTOTAL	3	1	2	4	1	7	18
TOTAL	16	7	11	16	25	54	129

Se señalan en cursiva los conflictos armados y tensiones con negociaciones de paz, ya sean exploratorias o estén formalizadas. Con asterisco, los conflictos armados finalizados durante 2020.

Mapa 1.1 Conflictos armados



1. Conflictos armados

- Durante 2020 se registraron 34 conflictos armados, la misma cifra que el año anterior. La mayoría de los conflictos armados se concentró en África (15) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno).
- En 2020 se observó un incremento significativo de los conflictos armados de alta intensidad, que representaron casi la mitad de los casos, un 47% del total.
- En noviembre se inició un conflicto armado entre el Gobierno de Etiopía y las autoridades de la región septentrional de Tigray, en el que se habrían producido centenares de víctimas mortales y graves violaciones de los derechos humanos.
- La escalada de la violencia por parte de las ADF en el este de RDC como consecuencia de una operación militar de las Fuerzas Armadas congoleñas iniciada en octubre de 2019 continuó durante 2020, causando centenares de víctimas civiles.
- En el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, la violencia escaló gravemente debido a las acciones de grupos con agendas yihadistas y a la respuesta de las fuerzas de seguridad.
- Burkina Faso se convirtió en la crisis de desplazamiento forzado de más rápido crecimiento del mundo durante 2020 debido a la violencia en la región de Liptako-Gourma.
- La situación de seguridad en el Sahel Occidental se deterioró debido al incremento de las acciones armadas de grupos yihadistas, de milicias comunitarias y por las respuestas militares de las fuerzas de seguridad de los países de la región y los aliados externos.
- Se redujo la violencia en Afganistán tras el acuerdo firmado entre EEUU y los talibanes debido a la retirada de tropas extranjeras y la menor acción ofensiva de las Fuerzas Armadas e ISIS, aunque no disminuyó la actividad armada de los talibanes.
- En consonancia con la tendencia de los últimos años, la violencia en el sur de Tailandia volvió a reducirse y se situó en sus niveles más bajos desde el inicio del conflicto en 2004.
- Se reinició la guerra entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno-Karabaj, con varios miles de fallecidos y decenas de miles de personas desplazadas forzadas, la partición del territorio de Nagorno-Karabaj y la transferencia a Bakú de los distritos adyacentes.
- El conflicto armado en Yemen siguió siendo uno de los más graves del mundo y provocó la muerte de unas 20.000 personas en 2020.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2020. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2020, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2020.

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o interrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2020

Conflicto ¹ -inicio-	Tipología ²	Actores principales ³	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
ÁFRICA			
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB (anteriormente FOREBU), FNL	1
	Gobierno		=
Camerún (Ambazonia/ North West y South West) -2018-	Interno internacionalizado	Gobierno de Camerún, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF)	3
	Autogobierno, Identidad		=
Etiopía (Tigray) -2020-	Interno internacionalizado	Gobierno de Etiopía, Gobierno de Eritrea, Gobierno regional del estado de Tigray, cuerpos de seguridad y milicias del Tigray People's Liberation Front (TPLF)	3
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↑
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) -también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia (ALAF)-, milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI, mercenarios, EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Qatar, Rusia, entre otros países	3
	Gobierno, Recursos, Sistema		=
Mali -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) -también conocido como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)-, Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido)	3
	Sistema, Autogobierno, Identidad		=

- En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
- Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
- En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
- La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
- En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2020 con la del 2019, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2020 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Mozambique (norte) -2019-	Interno internacionalizado	Gobierno, Islamic State Central Africa Province (ISCAP) -anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)-, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana DAG (Dyck Advisory Group)	3
	Sistema, Identidad		↑
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, RPRC, MPC, UPC, MLCJ), milicias anti balaka, milicia 3R, grupo armado ugandés LRA, otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA	2
	Gobierno, Recursos		↑
RDC (este) -1998-	Interno internacionalizado	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO	3
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	3
	Sistema, Recursos		↑
Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		=
Región Sahel Occidental -2018-	Internacional	Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)–, Macina Liberation Front (FML), Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias	3
	Sistema, Identidad, Recursos		↑
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab, ISIS	3
	Gobierno, Sistema		=
Sudán (Darfur) -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, UNAMID	2
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↑
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur	1
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↓
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		↑
AMÉRICA			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares	1
	Sistema		↑
ASIA			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS (EI-KP)	3
	Sistema		↓
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		=
Filipinas (Mindanao) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, Grupo Toraiife, facciones del MILF y el MNLF	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ASIA			
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, JKLF	2
	Autogobierno, Identidad		=
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	1
	Sistema		↓
Myanmar -1948-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP)	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes extranjeros, EEUU	2
	Sistema		↓
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Ajoji Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↓
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↓
EUROPA			
Armenia - Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) -2020-	Internacional	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	2
	Autogobierno, Identidad		↓
Ucrania (este) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia	1
	Gobierno, Identidad, Autogobierno		↓
ORIENTE MEDIO			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasm)	2
	Sistema		↓
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía, Israel	3
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos		=
Israel-Palestina -2000-	Internacional	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		=
Yemen (al-houthistas) -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council (STC), coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Yemen (AQPA) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA/Ansar Sharia), ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), milicias tribales, milicias al-houthistas/Ansar Allah	1
	Sistema		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

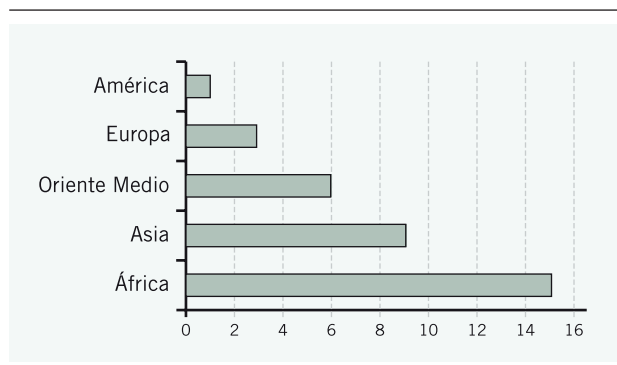
1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2020

En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados a lo largo de 2020, incluyendo el balance respecto a años anteriores, la distribución geográfica de los conflictos y las principales tendencias por regiones, la relación entre los actores implicados y el escenario de la disputa, las principales causas de los conflictos armados actuales, la evolución general de los contextos y la intensidad de los conflictos en función de sus niveles de violencia y su impacto. Asimismo, en este apartado se analizan algunas de las principales consecuencias de los conflictos armados en la población civil, entre ellas el desplazamiento forzado causado por situaciones de conflicto y violencia.

1.2.1 Tendencias globales y regionales

El año 2020 no ofreció novedades respecto al número total de conflictos armados a nivel global. Siguiendo la tendencia de los períodos previos, en 2020 se identificaron 34 casos, el mismo número que el año anterior. En el lustro precedente las cifras han sido similares: 34 en 2019 y 2018, 33 en 2017 y 2016 y 35 en 2015. Al finalizar 2020 todos los casos permanecían activos, a diferencia de otros años en los que la reducción de los niveles de violencia en algunos contextos motivó que estos escenarios dejaran de ser considerados como conflictos armados – por ejemplo Argelia (AQMI) o RDC (Kasai) en 2019. A la lista de conflictos armados sí se añadieron dos nuevos casos. En África, las tensiones entre el Gobierno federal etíope y el gobierno de la región de Tigray desembocaron en una confrontación bélica con graves consecuencias. En Europa, la histórica disputa en torno al enclave de Nagorno-Karabaj –de mayoría armenia y formalmente parte de Azerbaiyán, aunque independiente de facto– escaló hasta una situación de conflicto armado abierto entre Armenia y Azerbaiyán, con severos impactos en términos de letalidad y desplazamientos forzados de población.

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2020



Respecto a la distribución geográfica de los conflictos armados, como en años previos la mayoría de los casos se concentraron en África (15) y Asia (9), seguidos de Oriente Medio (6), Europa (3) y América (1). En términos porcentuales, por tanto, el continente africano concentraba el 44% del total de conflictos a nivel global.

El panorama general de conflictos armados en 2020 también se vio influido por la pandemia de la COVID-19.

En un clima de alarma en todo el mundo por la expansión de la enfermedad, el 23 de marzo el secretario general de la ONU hizo un llamamiento a un alto el fuego global con el fin de crear las condiciones para dar respuesta al coronavirus y garantizar el acceso a la asistencia humanitaria y de salud a las poblaciones más vulnerables y expuestas a la violencia. Después de tres meses de debate, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en julio una resolución (2532) en la que formalizó su respaldo al llamamiento del secretario general, exigiendo un cese general e inmediato de las hostilidades en todos

los contextos bélicos e instando a todas las partes implicadas en conflictos armados a poner en marcha pausas humanitarias de al menos 90 días consecutivos. En su alocución ante la Asamblea General de la ONU por el 75º aniversario de la organización, en septiembre, Guterres subrayó que el contexto de pandemia ofrecía una oportunidad para dar un nuevo empuje a los esfuerzos por la paz y la reconciliación y reiteró su llamado a un cese de hostilidades global, respaldado desde marzo por 180

Estados, organizaciones regionales, grupos de la sociedad civil y activistas por la paz.

En la práctica, sin embargo, la apelación a una tregua global por parte de António Guterres recibió una respuesta limitada y desigual por parte de los actores armados involucrados en conflictos. Algunos se acogieron al llamamiento y decretaron ceses de hostilidades de manera unilateral –entre ellos, los grupos armados ELN en Colombia y BRN en Tailandia (sur) o el NDF y el Gobierno en Filipinas–, pero en otros contextos las partes contendientes desoyeron el llamamiento e intensificaron o persistieron en sus acciones armadas pese al contexto de pandemia –en Libia, por ejemplo, actores armados incrementaron sus ofensivas tras el llamamiento de Guterres, con acciones que incluyeron ataques a hospitales y cortes de suministro de agua potable a millones de personas pese a las urgentes necesidades sanitarias en el contexto de pandemia. En términos generales, los ceses el fuego fueron breves y/o no se consolidaron y la mayor parte de los actores implicados en conflictos armados continuaron privilegiando su apuesta por la vía militar.⁶ Adicionalmente, la COVID-19 generó dificultades en los

6. Véase Escola de Cultura de Pau, “Altos el fuego en conflictos armados durante la pandemia del coronavirus” y “Cesces de hostilidades en tiempos de COVID-19”, *Apuntes ECP de Conflictos y Paz*, no.4 (abril de 2020) y no.7 (julio de 2020).

procesos de paz, por su impacto en las dinámicas de las negociaciones –obstáculos para el desplazamiento de negociadores, mediadores y facilitadores; retraso de rondas, dificultades tecnológicas para la comunicación en algunos contextos– y en la implementación de acuerdos.⁷ Así, por ejemplo, la misión de la UE en RCA para apoyar la reforma del sector de seguridad, en el marco del acuerdo de paz de 2019, retrasó su despliegue en el país a causa de la pandemia.

Muchos gobiernos también aprovecharon el contexto de la COVID-19 para endurecer la restricción de libertades, coartar las acciones de la oposición y/o limitar ciertas garantías democráticas. Así quedó de manifiesto en casos como Burundi –donde se limitó el trabajo de observadores electorales apelando a la COVID-19– o en Camerún (Ambazonia North West/South West) –organizaciones de derechos humanos denunciaron abusos en la aplicación de la ley antiterrorista y en las limitaciones vinculadas a la pandemia para coartar el derecho a reunión. En algunos contextos también se denunció que la pandemia había contribuido a agravar vulneraciones de derechos humanos, como en el caso de Colombia, donde aumentaron los ataques y asesinatos de defensoras de los derechos humanos. Por lo que respecta a la población civil, en tanto, a los habituales impactos de la violencia y las hostilidades se superpusieron los efectos de la pandemia.⁸

En lo referente a la relación entre los actores involucrados en el conflicto y el escenario de la disputa, se identificaron conflictos internos, internacionales y, mayoritariamente, internos internacionalizados. En líneas similares a años anteriores, en 2020 un 9% de los contextos fueron de carácter interno, es decir, conflictos en que los actores armados involucrados en la contienda operaban exclusivamente dentro de las fronteras de un mismo Estado. Los tres conflictos armados internos se concentraron en Asia: Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). Otros tres casos, equivalentes también al 9% de los conflictos armados, fueron internacionales y se registraron en tres continentes: el conflicto en la Región Sahel Occidental, en África; la disputa palestino-israelí, en Oriente Medio, y el de Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj, en Europa. La inmensa mayoría de los conflictos armados eran internos internacionalizados –28 contextos, equivalentes al 82%. Estos casos se caracterizan porque alguna de las partes contendientes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados y grupos armados de acción transfronteriza, entre otros.

Siguiendo la tendencia de años previos, la mayoría de los conflictos armados en 2020 fueron internos internacionalizados

En cuanto al papel de las misiones internacionales, en 2020 continuó la presencia destacada de iniciativas de la ONU, en particular en contextos africanos. Así, durante el año se mantuvo el despliegue de fuerzas de paz de Naciones Unidas en escenarios como RCA (MINUSCA), RDC (MONUSCO), Malí (MINUSMA), Sudán –Darfur– (UNAMID, misión híbrida de la ONU y la UA) o Sudán del Sur (UNMISS). La OTAN mantuvo su misión Resolute Support en Afganistán. Organizaciones regionales también continuaron involucradas en numerosos conflictos armados en forma de misiones u operaciones militares como en el caso de la Unión Africana (UA) –con la misión AMISOM en Somalia– o la Unión Europea (UE) –EUFOR en RCA, EUNAVFOR en Somalia. También continuaron operativas misiones híbridas, que involucran a organizaciones regionales y Estados, como la operación militar marítima en el Cuerno de África y el Océano Índico, Ocean Shield, liderada por EEUU, pero en la que también participan la UE, la OTAN y países como Japón, India y Rusia. En esta misma línea se inscribe la coalición internacional contra el grupo armado ISIS, formada en septiembre de 2014 bajo el liderazgo de EEUU, que desde entonces ha desplegado sus acciones en Iraq y Siria.

Esta coalición cuenta con 83 integrantes, entre Estados y organizaciones, entre ellas la Liga Árabe y la UE. Durante 2020 siguió constatándose la participación de Estados en conflictos armados a través de coaliciones internacionales en las que uno o dos países mantuvieron un papel protagónico de liderazgo. Fue el caso, por ejemplo, de la coalición liderada por EEUU en Afganistán o la coalición de países de mayoría árabe liderada por Arabia Saudita –también con un rol destacado de Emiratos Árabes Unidos (EAU)– para intervenir en Yemen.

La dimensión de internacionalización y en particular el papel protagónico de actores foráneos en las dinámicas del conflicto y en la evolución de las hostilidades fue especialmente evidente en otros contextos, como Siria o Libia. En el contexto sirio, los acontecimientos continuaron estando muy determinados por las posiciones, intereses y acciones de países como Rusia y Turquía –valedores del régimen y la oposición, respectivamente– y condicionaron de manera especial la marcha del conflicto en los frentes de batalla del norte de Siria. En el caso libio, durante 2020 se acentuó la implicación de actores externos en apoyo a los bandos en conflicto, una tendencia que se materializó en reiteradas vulneraciones al embargo de armas; flujos continuos de combatientes, mercenarios y asesores militares y en amenazas explícitas sobre una intervención más directa de terceros países si se sobrepasaban determinadas “líneas rojas”. Así, para el gobierno internacionalmente reconocido con base en Trípoli fue crucial el apoyo de Turquía y para las fuerzas del general Khalifa Haftar, los

7. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2021.

8. Véase el apartado 1.2.2 sobre impactos de los conflictos armados en la población civil en este capítulo.

apoyos de países como Egipto o Rusia. Los intereses de estos actores se proyectaron en la contienda y en ellos pesaron también consideraciones económicas y geopolíticas, vinculadas por ejemplo a disputas por el control de áreas ricas en recursos energéticos en el Mediterráneo Oriental.⁹ Contextos como Yemen o Iraq también fueron escenarios en los que se proyectaron disputas regionales e internacionales. Así, el caso yemení se vio directamente influido por el pulso entre Arabia Saudita e Irán y también por la creciente tensión entre Washington y Teherán. Iraq fue otro territorio en el que se escenificó la creciente confrontación entre EEUU e Irán, y en el que también intervino Turquía, en el marco de su disputa con el PKK.

La Región Sahel Occidental fue un caso emblemático de conflicto armado internacional, ya que en este escenario confluyeron varias coaliciones militares de países de la región y aliados externos para enfrentar la creciente actividad de grupos armados yihadistas de acción transfronteriza –organizaciones que, a su vez, han formado conglomerados de entidades vinculadas a al-Qaeda o a Estado Islámico. Así, en la zona operaban la Fuerza Conjunta Sahel G5 –compuesta por Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso–, la Fuerza Conjunta para la Región Liptako-Gourma –integrada por Malí, Níger y Burkina Faso– y la Takouba Task Force –misión militar europea creada en 2020, liderada por Francia e integrada por fuerzas especiales de Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Alemania, Holanda, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido, además de Malí y Níger. Además, en la región continuaron desplegadas tropas francesas en el marco de la Operación Barkhane y las fuerzas de la ONU de la ya citada MINUSMA, y se esperaba que la Misión de Formación y Asistencia Militar de la UE en Malí (EUTM) también ampliará sus actividades a otros países de región involucrados en este conflicto.

Respecto a las causas de los conflictos armados, la gran mayoría tuvo entre sus motivaciones principales la oposición a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o al sistema político, económico, social o ideológico de un determinado Estado, que derivaron en luchas por acceder al poder o erosionarlo. Uno u otro elemento, o ambos, estuvieron presentes en el 71% de los casos en 2020 (24 de los 34 casos), en línea con los años anteriores (73% en 2019, 71% en 2018, 73% en 2017). Entre estos 24 casos, en 18 contextos había actores armados que aspiraban a un cambio de sistema, mayoritariamente organizaciones que se atribuyen una agenda yihadista y que tratan de imponer su

La Región de Sahel Occidental fue un caso emblemático del conflicto armado internacional, ya que en este escenario confluyeron varias coaliciones militares de países de la región y aliados externos y numerosos grupos armados yihadistas de acción transfronteriza

Más de un tercio (35%) de los conflictos armados en 2020 registraron un deterioro en los niveles de violencia e inestabilidad respecto al año anterior

particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos grupos cabe mencionar organizaciones como el autodenominado Estado Islámico (ISIS) y sus filiales o entidades afines en distintos continentes –el grupo estuvo presente en países como Argelia, Libia, Región Lago Chad, Región Sahel Occidental, Somalia, Afganistán, Pakistán, Filipinas, Turquía, Egipto, Iraq, Siria, Yemen, entre otros–; las diversas ramas de al-Qaeda –entre ellas AQMI (Argelia, Sahel y Libia) y AQPA (Yemen)–; los talibán que operan en Afganistán y Pakistán o el grupo al-Shabaab en Somalia, entre otros.

Otro factor destacado entre las causas principales de los conflictos armados fueron las disputas en torno a demandas identitarias y de autogobierno, presentes en el 59% de los conflictos (20 casos), mismo porcentaje que en los dos años previos. A este respecto, cabe destacar que los dos conflictos armados que se activaron en 2020 estaban relacionados con este tipo de reivindicaciones. Por un lado, en el trasfondo de la escalada de violencia en la región de Tigray, en Etiopía, estuvieron los agravios y la percepción de la comunidad tigray de una pérdida de poder

y privilegios ante las políticas de reforma del sistema federal etíope impulsadas por el primer ministro Abiy Ahmed. La decisión de la región de Tigray de mantener una convocatoria a elecciones en la región a pesar de lo dispuesto por el Gobierno federal –que había resuelto aplazar los comicios federales y regionales por la pandemia y extender el mandato de las autoridades vigentes–, junto a otras cuestiones que se encuentran en la génesis de este conflicto, propició una disputa de legitimidades que acabó en confrontación armada al finalizar el año. Por otro lado está la disputa entre fuerzas de Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno Karabaj, enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán, pero independiente de facto. Tras

diversas escaladas de violencia desde la guerra de los años noventa, una de las más graves en 2016, las hostilidades se reabrieron en 2020. Los enfrentamientos remitieron al finalizar el año tras un acuerdo mediado por Rusia, que dibujó un cambio significativo en los límites del territorio y ratificó la partición de Nagorno Karabaj, pero dejó sin resolver el estatus del enclave. La disputa en torno al control de territorio –como también ilustra el caso de Armenia – Azerbaiyán (Nagorno Karabaj)– y de recursos fue una de las causas principales en un 35% de los conflictos (12 casos) en 2020, siguiendo la tendencia de años previos. La cuestión de los recursos fue una motivación que estuvo presente mayoritariamente en contextos africanos – en más de la mitad de los conflictos armados de la

9. Véase el resumen sobre Turquía – Grecia, Chipre en el capítulo 2 (Tensiones).

región (ocho de 15 casos)–, si bien es un factor que de manera indirecta estuvo presente en numerosos contextos de otras regiones, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra.

Adicionalmente, cabe destacar que **20 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2020 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género**, con niveles medios, altos o muy altos de discriminación.¹⁰ Las desigualdades de género se manifestaron en aspectos como los impactos específicos de género de la violencia, la utilización de la violencia sexual por las partes contendientes en diferentes conflictos armados, en un contexto internacional de pandemia por la COVID-19 que puso en evidencia las graves desigualdades de género a nivel internacional.

En cuanto a la **evolución de los conflictos armados** a lo largo de 2020, poco más de un tercio de los casos –12 de los 34, equivalentes a un 35%– registraron un deterioro de la situación, con mayores niveles de violencia e inestabilidad que el año anterior: Etiopía (Tigray), Malí, Mozambique, Región Sahel Occidental, RCA, RDC (este-ADF), Sudán (Darfur), Sudán del Sur, Myanmar, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Yemen (al-houthistas). El resto de los casos se repartieron en partes iguales entre los que exhibieron niveles de violencia y hostilidades similares a las registradas en 2019 y los que presentaron una reducción en los enfrentamientos –11 casos en cada categoría. Asia fue la región en la que se observó una mayor disminución en las hostilidades. Dos tercios de los conflictos armados en esta zona evolucionaron hacia menores niveles de violencia: Afganistán, Filipinas (Mindanao), India (CPI-M), Pakistán, Pakistán (Baluchistán) y Tailandia (sur).

Respecto a la intensidad de la violencia en los diferentes conflictos armados, es posible identificar y destacar un rasgo particular en 2020: una prevalencia significativa de casos de intensidad elevada, es decir, contextos caracterizados por niveles de letalidad por encima del millar de víctimas anuales, además de graves impactos en la población, masivos desplazamientos forzados y severas consecuencias en el territorio. A diferencia de años previos en los que los casos de alta intensidad representaban en torno a un tercio de los casos –32% en 2019 (11 casos), 27% en 2018 (nueve casos)–, **en 2020 los conflictos armados graves se incrementaron y representaban casi la mitad de los casos, un 47% del total** (ver gráfico 1.2). Hasta ahora, la cifra más elevada de la década se había registrado en los años 2016 y 2017, pero con un porcentaje menor: 40% (ver gráfico 1.3). La mayor prevalencia de casos graves en 2020 se observó en África, donde 11 de los 15 (73%) conflictos armados en el continente fueron de alta intensidad. Este dato es muy superior a lo observado el año anterior,

cuando menos de la mitad de los casos –siete de 16 casos, equivalentes a 44%– fueron de intensidad elevada. Respecto a otras regiones, en Oriente Medio la mitad de los conflictos –tres de seis– fueron considerados como contextos graves en 2020, mientras que Asia y Europa registraron un caso de este tipo, respectivamente. América, en cambio, no presentó conflictos armados de alta intensidad (ver gráfico 1.4). Los 16 casos de conflictos armados graves en 2020 fueron: Camerún (Ambazonia/North West y South West), Etiopía (Tigray), Libia, Malí,

En 2020 se observó un incremento significativo de los conflictos armados de alta intensidad, que representaban casi la mitad de los casos, un 47% del total

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados en 2020

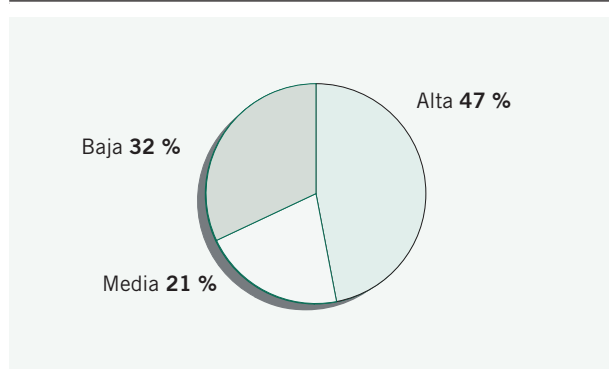
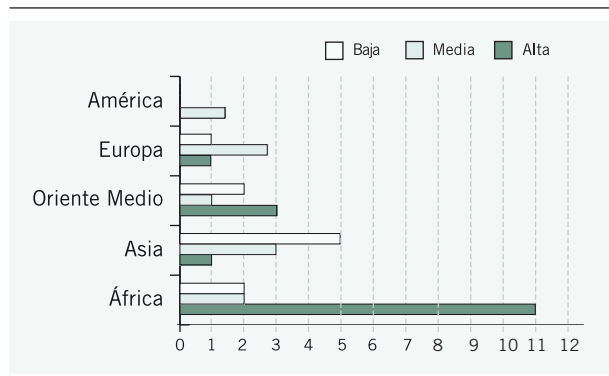


Gráfico 1.3. Proporción de conflictos armados graves en la última década



Gráfico 1.4. Intensidad de los conflictos por regiones



10. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad armada

<p>ÁFRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Como en años previos, el continente registró el mayor número de conflictos armados con 15 casos, que representan un 44% del total mundial. Este porcentaje es ligeramente inferior al del año anterior, en el que los casos africanos representaban un 47%. Si en 2019 dos casos de la región dejaron de ser considerados conflictos armados activos –Argelia (AQMI) y RDC (Kasai)–, en 2020 se añadió un nuevo caso, tras la escalada de violencia en la región de Tigray, en Etiopía. • La tendencia más relevante en el continente en 2020 fue el significativo incremento de los conflictos armados de alta intensidad en el último lustro. Si en 2019 estos casos representaban un 44% (siete de los 16 casos), en 2020 el porcentaje se elevó hasta el 73% (11 de los 15 casos). • La mitad de los casos –ocho de 15, equivalentes a 53%– presentaron un deterioro durante 2020, con mayores niveles de violencia respecto al año anterior. Solo en un caso se identificó una disminución en las hostilidades –Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)–, mientras que en otros seis contextos la evolución fue similar a la del período previo. • Los conflictos armados en África se caracterizaron por la internacionalización. En la práctica totalidad de casos –14 de los 15 (93%)– se observó la implicación de actores externos contendientes o la expansión de las dinámicas de violencia a países vecinos. El caso restante fue de carácter internacional –Región Sahel Occidental– y no se contabilizaron conflictos armados eminentemente internos. • Los conflictos armados en África respondieron a causas múltiples, entre las que destacan las aspiraciones a un cambio de gobierno o sistema (80%) –una de estas categorías o ambas estaban presentes en 12 de los 15 de los casos– y las demandas de autogobierno o identitarias, identificadas en 60% de los casos. En la mitad de los casos –ocho, equivalentes a 53%– se identificaron motivaciones relativas al control de recursos.
<p>AMÉRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente albergó un único conflicto armado, el de Colombia, uno de los más longevos del mundo. • Siguiendo la tendencia observada el año anterior, el conflicto armado colombiano evolucionó negativamente en 2020 y registró mayores niveles de violencia, principalmente enfrentamientos protagonizados por las fuerzas de seguridad, el ELN y grupos disidentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC. • Aunque solo registró un conflicto armado, la región fue escenario de otras dinámicas de violencia y tensión y fue la más afectada por homicidios.
<p>ASIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Como en períodos anteriores, el continente se situó en segundo lugar en número de conflictos armados después de África, albergando nueve casos (26%). • La mayoría de los conflictos armados en Asia fueron de intensidad baja (cinco casos) o media (tres contextos). Solo uno de los conflictos de la región, el de Afganistán, fue de alta intensidad y un año más se erigió como el más cruento del mundo, con niveles de letalidad por encima de las 20.000 víctimas mortales. • La mayor parte de los casos en Asia registraron una disminución en las hostilidades –seis de nueve casos o 67%–, y un porcentaje menor presentó una evolución similar a la del año anterior –dos contextos, equivalentes a 22%. Solo un conflicto armado, el de Myanmar, evolucionó hacia un deterioro de la situación en 2020. • Asia fue la única región del mundo en la que se identificaron conflictos armados de carácter interno. Los tres conflictos armados de este tipo –Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur)– representaron un tercio de los casos de la región. • En lo que respecta a las causas de los conflictos armados en Asia, prevalecieron los casos en los que se pretendía un cambio de sistema –motivación presente en cinco de los nueve conflictos (56%)– o en los que estaban en juego demandas de autogobierno o identidad –también en un 56% de contextos.
<p>EUROPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente fue escenario de un conflicto armado más que el año anterior. A los casos de Turquía (sudeste) y Ucrania (este) se sumó el de Armenia-Azerbaiyán por la cuestión de Nagorno Karabaj. Los tres contextos europeos representaron un 9% del total de conflictos a nivel global. • Los tres conflictos de la región presentaron diferentes escalas de intensidad: Ucrania (este), baja; Turquía (sudeste), media; y Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj), elevada. Mientras en los dos primeros casos se observó una reducción en la intensidad de la violencia respecto al año anterior, el tercero se caracterizó por una significativa escalada que llevó a su consideración como conflicto armado en 2020. • Europa siguió siendo una región caracterizada por albergar conflictos con causas vinculadas a cuestiones de autogobierno e identidad –motivaciones presentes en la totalidad de casos de la región–, y en menor medida causas vinculadas a disputas por el poder político o a control de territorios. • Dos tercios de los casos en Europa fueron de carácter interno internacionalizado y uno, un conflicto internacional.
<p>ORIENTE MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La región concentró seis conflictos armados, que representaron un 18% del total de casos a nivel mundial. Después de África, Oriente Medio fue la zona en la que se produjeron más conflictos armados de alta intensidad. La mitad de los casos de la región –tres de seis– fueron de intensidad elevada y dos de ellos, Siria y Yemen, estuvieron entre los casos más graves de 2020, con los mayores niveles de letalidad tras Afganistán. • La mitad de los casos de la región evolucionaron de manera similar al año anterior, en dos casos se observó una reducción relativa en los niveles de violencia –Egipto (Sinaí) e Israel-Palestina–, mientras que en uno se produjo una escalada de la violencia: Yemen. En este caso, aunque los niveles de letalidad fueron similares a los del año anterior, se incrementaron los frentes de batalla y se agravó la severa crisis humanitaria provocada por el conflicto. • Los conflictos de la región fueron multicausales, con una presencia destacada de casos donde las motivaciones estaban vinculadas a la búsqueda de un cambio de gobierno o sistema –una de estas categorías o ambas estuvieron presentes en cinco de los seis casos (83%)– o con demandas identitarias o de autogobierno –en cuatro de los seis contextos (67%). En otros dos casos (33%) había motivaciones vinculadas al control de recursos y territorios.

Mozambique (norte), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).

En algunos de estos contextos, **los enfrentamientos y otras dinámicas de violencia provocaron unos niveles de letalidad que estuvieron muy por encima del umbral de**

mil víctimas mortales anuales. Así, por ejemplo, en la Región Sahel Occidental se contabilizaron más de 4.250 muertes y 2020 fue señalado como el año más mortífero desde el inicio de la violencia en 2012, a causa de las acciones de diversos grupos yihadistas que operan en la zona. En Somalia, los hechos de violencia, en su mayoría atentados perpetrados por al-Shabaab, provocaron la muerte de más de 3.000 personas. El conflicto armado

entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno Karabaj provocó más de 5.000 personas fallecidas. En el caso de Siria, las estimaciones apuntan a que las hostilidades habrían causado al menos 8.000 víctimas mortales en 2020, un descenso relativo respecto a los niveles de letalidad registrados en años previos (15.000 personas fallecidas en 2019, 30.000 en 2018). Los dos conflictos armados más cruentos de 2020 fueron, con diferencia, Yemen y Afganistán. En el caso yemení se estimaba que unas 20.000 personas habían perdido la vida como resultado directo de enfrentamientos y ataques explosivos. En el caso de Afganistán el conflicto armado habría causado la muerte a más de 21.000 personas. Pese a lo elevado de la cifra, esta es significativamente menor a la del año anterior, en el que se contabilizaron 40.000 víctimas mortales.

Los dos conflictos armados en los que se contabilizaron más víctimas mortales en 2020 fueron Yemen y Afganistán

1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil

Como en años previos, y tal y como viene denunciando periódicamente Naciones Unidas, organizaciones internacionales y entidades locales, la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados. En 2020 los impactos de los enfrentamientos entre actores armados y del uso indiscriminado y deliberado de la violencia contra la población civil se vieron amplificados a causa de la pandemia de la COVID-19, que agravó aún más la precariedad y desprotección de numerosas poblaciones afectadas por conflictos armados. El informe del secretario general de la ONU sobre la protección de civiles en conflictos armados publicado en mayo, a pocos meses del inicio de la pandemia, ya advertía sobre las implicaciones del coronavirus y la exacerbación de las vulnerabilidades en los colectivos más frágiles. Cabe recordar que los civiles han sido identificados por la ONU como las principales víctimas mortales de los conflictos armados.

En 2020, los impactos de la violencia de los conflictos armados en la población civil se vieron amplificados a causa de la pandemia de la COVID-19

Los diferentes conflictos armados analizados en 2020 permiten constatar la persistencia del patrón de abusos contra civiles, materializado en ataques letales contra poblaciones, ofensivas contra objetivos o infraestructuras de carácter civil, ejecuciones, secuestros, desapariciones y torturas, entre otras prácticas. En el último año, diversos contextos ilustraron esta realidad. En RDC, por ejemplo, el grupo armado ADF intensificó sus operaciones contra la población civil, expandiendo sus ataques más allá de sus áreas de acción tradicionales y aplicando tácticas especialmente lesivas –ataques con artillería pesada, fusiles y machetes, incendios de localidades enteras, secuestros masivos, entre otras– que causaron cientos de víctimas. En la región de Lago Chad, Boko Haram continuó perpetrando masacres,

mutilaciones y secuestros de civiles. En Somalia, al-Shabaab persistió en sus ataques contra objetivos civiles, incluyendo restaurantes, cafés y hoteles, causando un elevado número de bajas. En Malí, solo en el primer semestre de 2020 la intensificación de la violencia había causado la muerte a más de 600 civiles. En Afganistán, aunque se identificó una disminución relativa en el número de víctimas civiles del conflicto, durante el año se produjeron ofensivas que causaron especial consternación internacional, como

el ataque contra un hospital materno-infantil en el que murieron más de una veintena de personas. El conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj, en tanto, causó en torno a 500 víctimas civiles, incluyendo un centenar de personas fallecidas y 400 heridas. En Iraq, si bien el número de víctimas mortales civiles también se redujo en comparación a años previos, la cifra siguió siendo elevada, en torno al millar de bajas. En Siria se contabilizó un número similar y la ONU continuó denunciando que las partes involucradas en el conflicto seguían incumpliendo los principios básicos del derecho internacional humanitario, entre ellos, la necesaria distinción entre civiles y combatientes.

Los actores armados estatales también se vieron involucrados de manera destacada en muertes y abusos contra la población civil. Así, por ejemplo, en Camerún, el Ejército estuvo implicado en la matanza de una veintena de civiles, aunque organizaciones de derechos humanos advirtieron que la cifra de víctimas podía ser muy superior. En el marco del conflicto en la región de Sahel Occidental, organizaciones de derechos humanos denunciaron que en sus operaciones contra grupos insurgentes las Fuerzas Armadas de Malí, Níger y Burkina Faso habían cometido crímenes de guerra con un especial impacto en civiles, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Según entidades locales,

solo el Ejército de Burkina Faso sería responsable de la muerte de casi 600 civiles. En Mozambique también se registraron denuncias similares de vulneración de derechos humanos y posibles crímenes de guerra contra las fuerzas de seguridad mozambiqueñas en sus acciones contrainsurgentes en la provincia de Cabo Delgado. La presencia de armas explosivas en territorios en conflicto también siguió afectando a la población civil, como ilustraron los casos de Ucrania, donde se detectó un incremento en el número de civiles fallecidos a causa de minas, o el de Egipto (Sinaí), donde se produjeron varias muertes por explosivos tras el retorno de población desplazada a una zona previamente controlada por ISIS. El despliegue de bombas trampa por parte de esta filial de ISIS en Egipto siguió un patrón observado también en acciones del grupo en Siria e Iraq. Además de las muertes de civiles como resultado directo de hostilidades, operaciones armadas y armas

explosivas, cabe tener en cuenta también el impacto en términos de muertes indirectas, como resultado de la falta de acceso a alimentos o a servicios de salud. Así, por ejemplo, en casos como Yemen, agencias de Naciones Unidas estimaron que del total de personas fallecidas que ha provocado el conflicto armado en los últimos cinco años (unas 233.000 personas, según estimaciones), más de la mitad (131.000) habrían fallecido a causa de la falta de acceso a atención médica o alimentos, entre otros factores.

En esta línea, cabe destacar que **los conflictos armados continuaron provocando y/o agravando situaciones de crisis humanitaria**. Según las previsiones de OCHA, un total de 235 millones de personas necesitarían asistencia humanitaria en 2021, un incremento del 40% respecto a las estimaciones para el año anterior y atribuible mayoritariamente a la COVID-19.¹¹ La anterior previsión –168 millones– ya había destacado por ser la cifra más elevada en décadas. Las repercusiones socioeconómicas de la pandemia agravaron la vulnerabilidad de poblaciones ya seriamente afectadas por conflictos y violencia, como bien ilustran los casos de RCA, Ucrania (este), Siria o Yemen. En Ucrania (este), por ejemplo, organizaciones humanitarias alertaron que ocho de cada diez familias en las regiones de Donetsk y Lugansk estaban padeciendo graves impactos en términos de seguridad alimentaria y medios de vida y Naciones Unidas alertó que nueve millones de personas corrían el riesgo de pasar a una situación de pobreza. Tanto en Siria como en Yemen, los indicadores socioeconómicos continuaron precipitándose durante 2020. En el caso sirio, la canasta básica de alimentos multiplicó su precio en más de un 200%. Además, se estimaba que 9,3 millones de personas padecían inseguridad alimentaria y las dinámicas del conflicto obstaculizaron el acceso de ayuda humanitaria por el cierre de varios pasos fronterizos. Yemen continuó siendo la mayor crisis humanitaria a nivel mundial: 24,3 millones de yemeníes requerían algún tipo de asistencia humanitaria o protección, 14 millones se encontraban en una situación de extrema necesidad y se multiplicaron las alarmas por la hambruna en el país, la peor en décadas en el mundo, según la ONU. Siria y Yemen también evidenciaron la carga añadida de la pandemia en sistemas de salud extremadamente deteriorados por años de violencia, por la saturación en la atención de las víctimas del conflicto, pero también porque hospitales y centros médicos han sido atacados por actores armados como parte de las estrategias de guerra, en abierta vulneración al derecho internacional humanitario. Pese a las dificultades para recopilar datos fiables sobre el impacto real de la COVID-19 en contextos de conflicto armado, informaciones apuntaban a que, por ejemplo, en Yemen la tasa de letalidad por coronavirus

Casos como Siria y Yemen evidenciaron la carga añadida de la pandemia en sistemas de salud extremadamente deteriorados por años de violencia y ataques deliberados contra hospitales y centros de salud

estaba cinco veces por encima de la media mundial.

Adicionalmente, **los conflictos armados continuaron teniendo impactos específicos en grupos de población determinados, como los niños y las niñas**. El informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados publicado en junio de 2020, y que analiza la situación entre enero y diciembre de 2019, volvió a ofrecer un panorama de tendencias altamente preocupante. Naciones Unidas verificó más de 25.000 violaciones graves de derechos humanos contra menores en 19 contextos, más de la mitad de ellas perpetradas por agentes no estatales y un tercio por parte de fuerzas gubernamentales o internacionales. El fuego cruzado, el uso de armas ligeras, la utilización de armas explosivas en zonas pobladas y el uso excesivo de la fuerza de agentes estatales habría causado más de 10.000 víctimas entre niños y niñas, incluyendo 4.019 muertes y 6.154 menores afectados por mutilaciones. El conflicto armado más letal para los y las menores continuó siendo Afganistán, donde se observó un incremento de 67% en los ataques suicidas y similares que afectaron a menores. También destacó el caso de Malí que en 2019 registró un número de víctimas infantiles sin precedentes –185 menores muertos y otros 111 mutilados–, en su inmensa mayoría (91%) concentradas en la región de Mopti. Otro contexto que despertó especial preocupación fue Myanmar, ya que la intensificación de la violencia en el estado de Rakhine provocó que las víctimas entre menores de edad se triplicaran en el período analizado. Asimismo, el informe constató el reclutamiento forzado de casi 8.000 menores, algunos de tan solo seis años, en su inmensa mayoría (90%) por actores armados no estatales. La ONU también alertó sobre el secuestro de 1.683 menores en contextos de conflicto –en un 95% por agentes no estatales y en especial en contextos africanos (Somalia, RDC y Nigeria)–, reiteró su denuncia sobre los continuos ataques contra escuelas y llamó la atención sobre los problemas derivados de la denegación de acceso humanitario a niños y niñas –mayoritariamente por restricciones impuestas por actores no estatales, sobre todo en casos como Malí, RCA, Siria o Yemen.

Más allá de las conclusiones del informe del secretario general de la ONU, el análisis de los conflictos armados activos en 2020 confirma el patrón de vulneraciones contra menores, agravados por el contexto de la COVID-19. **La pandemia limitó aún más el acceso a determinados derechos como el de la educación**. Así, por ejemplo, en el caso de Jammu y Cachemira, en Pakistán, el cierre de las escuelas con motivo de la pandemia se sumó a meses de clausura previa de los centros educativos a causa del conflicto. En el marco de la escalada bélica entre Armenia y Azerbaiyán por

11. OCHA, *Global Humanitarian Overview 2021*, 1 de diciembre de 2020.

Nagorno Karabaj, en tan solo un mes de hostilidades resultaron dañadas 76 escuelas y guarderías, según UNICEF. En Siria, continuaron produciéndose ataques armados a escuelas y según datos divulgados a finales de año solo el 50% de los centros educativos del país estaban operativos. Se estimaba que había 2.1 millones de niñas y niños sirios sin escolarizar. Al finalizar el año, UNICEF advertía sobre las repercusiones de la pandemia en el incremento de los riesgos de que menores en contextos de conflicto padezcan malnutrición y de cara a 2021 manifestaba su especial preocupación por la situación de millones de niños y niñas en RDC, Nigeria y la zona central del Sahel, Sudán del Sur y Yemen.¹²

Actores armados estatales y no estatales continuaron perpetrando violencia sexual y de género contra población civil, en especial contra mujeres y niñas, en contextos de conflicto armado. El informe anual del secretario general de la ONU sobre la materia publicado en 2020, que analiza los hechos ocurridos en 2019, confirmó que la violencia sexual continuaba siendo utilizada como una táctica de guerra, de tortura y represión política, así como un instrumento de deshumanización y para forzar desplazamientos de población.¹³

El informe aporta información verificada sobre el uso de la violencia sexual y de género en 19 contextos y señaló la responsabilidad de 54 actores armados, en su mayoría de carácter no estatal, aunque también denunció la implicación de cuerpos de seguridad estatales de varios países, incluyendo RDC, Myanmar, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Siria. La valoración del secretario general de la ONU constata que la violencia sexual continúa siendo un fenómeno infra-denunciado y que las mujeres y niñas –que constituyen el mayor número de víctimas de este flagelo– siguen enfrentando numerosos obstáculos de género para acceder a la justicia y reparación. Adicionalmente, el informe subraya las vulnerabilidades específicas que en este ámbito afectan a las poblaciones desplazadas, tanto en el momento del tránsito como en destino, y su vinculación con el incremento de los matrimonios forzados de menores y el repliegue de mujeres y niñas de actividades laborales y educativas en países como Iraq, Siria, Yemen o Myanmar.

El análisis de los conflictos armados en 2020 corrobora las tendencias identificadas en el informe del secretario general. A lo largo del año informaciones relativas al uso de la violencia sexual y de género se identificaron en numerosos contextos, entre ellos Burundi, Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán (Darfur), Myanmar, Pakistán, Siria y Yemen. Personas

LGTBI también fueron víctimas de violencia sexual y de otras violencias en contextos de conflicto armado, como ilustraron los casos de Pakistán o Siria.¹⁴ Durante 2020, los impactos de la COVID-19 también se identificaron en este ámbito, ya que la pandemia incrementó los niveles de violencia de género a nivel global y también en contextos de conflicto armado. Así, por ejemplo, en campos de desplazamiento forzado en Sudán del Sur se detectó un aumento de la violencia sexual tras la aplicación de medidas de restricción de la movilidad para frenar la expansión del coronavirus.¹⁵

Los desplazamientos forzados de población continuaron siendo uno de los efectos más visibles y dramáticos de los conflictos armados.

El informe anual de ACNUR publicado en junio de 2020 confirmó la tendencia de crecimiento exponencial de este fenómeno en la última década: al finalizar 2019 había 79,5 millones de personas desplazadas forzosamente, frente a las 70,8 millones contabilizadas a finales del año anterior. Del total de personas desplazadas, 26 millones eran refugiadas –20,4 millones bajo el mandato de ACNUR y 5,6 millones de palestinos y palestinas bajo el

mandato de la UNRWA– y 45,7 millones se encontraban en una situación de desplazamiento forzado interno. Otras 4,2 millones eran solicitantes de asilo, mientras que 3,6 millones eran personas venezolanas a las que ACNUR reconoció un estatus de desplazamiento especial. Las casi 80 millones de personas desplazadas equivalen a un 1% de la población mundial y el 40% de ellas eran menores de edad. Con la excepción de Venezuela, los principales emisores de población refugiada eran todos países afectados por conflictos armados de intensidad elevada –Siria (6,6 millones de personas), Afganistán (2,7), Sudán del Sur (2,2)– o media –Myanmar (1,1). Respecto a los casos con mayor número de población desplazada internamente, dentro de las

fronteras de los respectivos países, la mayor parte de los casos eran conflictos armados de alta intensidad. Según los datos de International Displacement Monitoring Centre (IDMC) referentes al año 2019 –últimos datos anuales disponibles– sobre los desplazamientos a causa de conflictos y violencia, los países con mayor número de personas en esta situación eran Siria (6,5 millones de personas), Colombia (5,6), RDC (5,5), Yemen (3,6), Afganistán (3), Somalia (2,6), Nigeria (2,6), Sudán (2,1), Iraq (1,6) y Etiopía (1,4).

En 2020 las dinámicas de movilidad humana se vieron severamente afectadas por la COVID-19.

Al finalizar el año tanto ACNUR como IDMC publicaron informes parciales sobre la situación en el primer semestre en los

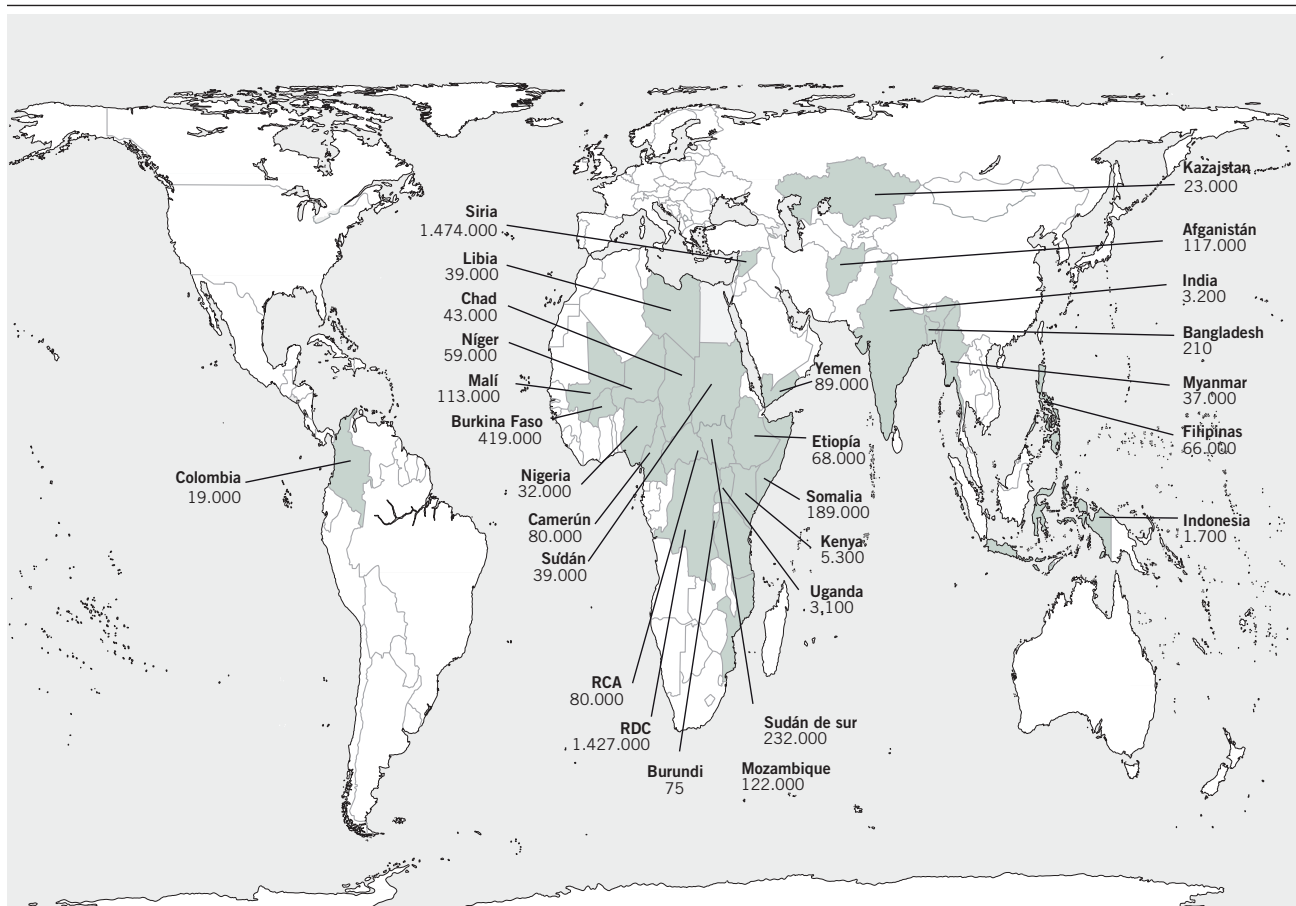
12. UNICEF, *COVID-19 and conflict: A deadly combination*, 30 de diciembre de 2020.

13. UN Secretary General, *Report of the Secretary General on Conflict-related Sexual Violence*, 3 de junio de 2020.

14. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

15. Véase “La pandemia de la COVID-19 y el agravamiento de la violencia contra las mujeres” en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo para 2021).

Mapa 1.2. Nuevos desplazamientos internos por conflictos y violencia - primer semestre de 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Internal Displacement Monitoring Centre, *Internal displacement 2020: Mid-year update*, IDMC, 2020.

que alertaron sobre las consecuencias de la pandemia en las poblaciones desplazadas, agravando sus situaciones de vulnerabilidad y restringiendo el acceso a mecanismos de protección internacional y a servicios básicos.¹⁶ Según los datos de ACNUR, **168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras durante la primera oleada de la pandemia, 90 de los cuales denegaron el acceso a sus territorios sin excepciones para las personas solicitantes de asilo.** Así, durante el primer semestre de 2020 se redujeron en un 33% las solicitudes de asilo en comparación con el mismo período de 2019. Las restricciones de movilidad aumentaron el riesgo de que las personas forzadas a abandonar sus hogares recurrieran a mafias o a rutas más peligrosas en busca de garantías para su seguridad y la de sus familias. Paralelamente, la COVID-19 llevó a un deterioro de las condiciones socioeconómicas de las poblaciones desplazadas, muchas de ellas dependientes de la economía informal. Asimismo, se identificó un incremento del

trabajo infantil y de los matrimonios forzados de menores, así como un mayor riesgo en la incidencia de violencia de género contra mujeres y niñas desplazadas. Las condiciones de vida habitualmente precarias de las poblaciones desplazadas también dificultaron la puesta en práctica de las medidas más básicas para contener la expansión del virus, como la distancia física o el lavado frecuente de manos. A los problemas de viviendas o campos con condiciones de hacinamiento y dificultades por falta de información se sumaron los obstáculos de acceso a atención de salud. Según ACNUR, el 85% de las personas refugiadas vivía en países con sistemas de salud colapsados y con capacidades limitadas para responder a las complicaciones derivadas del coronavirus. IDMC destacó que las medidas para contener la expansión de la COVID-19 también limitaron las posibilidades de obtener información sobre la situación de las poblaciones desplazadas, en especial las personas forzadas a huir dentro de las fronteras de sus países.

Pese a las restricciones de movilidad de la pandemia, los desplazamientos forzados a causa de conflictos y violencia continuaron en 2020 y ACNUR anticipaba que a mediados de año ya se había sobrepasado la cifra de 80 millones

16. UNHCR, *Mid-year trends 2020*, 30 de noviembre de 2020; IDMC, UNHCR, *Report on UNHCR's Response to COVID-19*, septiembre de 2020; IDMC, *Internal Displacement 2020: Mid-year Update*, septiembre de 2020.

Pese a las restricciones de movilidad añadidas a causa de la pandemia, los desplazamientos forzados a causa de conflictos y violencia continuaron en 2020 y ACNUR anticipaba que a mediados de año ya se había sobrepasado la cifra de 80 millones. Nuevos y masivos desplazamientos de población se produjeron en el marco de conflictos armados como los de Burkina Faso, Camerún, RDC, Mozambique, Somalia, Siria y Yemen. IDMC contabilizó 4,8 millones de nuevos desplazamientos a causa de conflictos y violencia en los primeros seis meses de 2020. Solo en Siria y RDC los desplazamientos forzados internos en el primer semestre de 2020 afectaron a tres millones de personas –1.474.000 y 1.427.000, respectivamente. Durante el segundo semestre del año, la escalada de violencia en otros contextos como la región de Tigray en Etiopía o el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj motivaron nuevos desplazamientos forzados de población. Así, en noviembre se estimaba que en menos de un mes de hostilidades más de 40.000 personas procedentes de Tigray habían buscado refugio en Sudán. El conflicto en torno a Nagorno Karabaj, en tanto, habría provocado el desplazamiento de entre 100.000 y 130.000 personas, según diversas estimaciones.

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Austral

Mozambique (norte)	
Inicio:	2019
Tipología:	Sistema, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Islamic State Central Africa Province (ISCAP) -anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)-, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana DAG (Dyck Advisory Group)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, padece desde finales de 2017 un conflicto armado protagonizado por el autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ). La organización armada de carácter yihadista hizo su primera aparición en octubre de 2017 atacando tres puestos policiales en el distrito de Mocimboa de Praia, provincia de Cabo Delgado. Desde ese momento, Cabo Delgado ha sido el epicentro de un aumento en la actividad violenta en el país. Si bien algunos informes aseguran que combatientes de ASWJ han recibido capacitación en Tanzania y Somalia, lo cual ha dado lugar a que se les apode localmente como al-Shabaab, en alusión al grupo yihadista somalí, no se han acreditado vínculos significativos con las redes yihadistas

internacionales. Las causas de la eclosión de la violencia remiten más bien a factores vinculados con los agravios y la marginación de la minoría musulmana de Mozambique (22 % de la población), así como a la extrema pobreza de la que es la provincia más subdesarrollada del país. Los índices de pobreza en Cabo Delgado contrastan con su enorme potencial económico debido a sus importantes reservas de gas natural, lo cual ha generado importantes inversiones en la zona que no han contribuido a reducir la desigualdad y la pobreza de su población. Desde finales de 2017, las fuerzas de seguridad mozambiqueñas han desarrollado una política de seguridad que ha incrementado la represión y represalias en la zona, incidiendo en nuevos factores detonantes de la violencia. En 2018, el grupo intensificó su uso de la violencia contra civiles y amplió el alcance de sus operaciones.

Durante el año la violencia armada en la provincia norteña de Cabo Delgado padeció una importante escalada debido a las acciones de grupos con agendas yihadistas y a la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Los datos facilitados por ACLED dan muestra del deterioro de la situación de seguridad, registrando la tasa de homicidios más alta de los últimos 10 años en el país, lo cual, según analistas, tiene una relación directa con el conflicto armado en Cabo Delgado. Durante el 2020 ACLED registró **1.639 muertes violentas en Cabo Delgado**, afectando a 10 de sus 17 distritos, lo que significa más del doble de muertes en relación al año anterior, cuando se registraron 689, y muy superior a las 126 que se contabilizaron en 2018 o las 119 en 2017, año de inicio de las acciones insurgentes. Estimaciones de Naciones Unidas a finales de año, apuntaron que la violencia en la región había desplazado, al menos, a 424.000 personas desde 2017. Solo en los seis primeros meses de 2020 ACNUR registró 125.300 personas desplazadas internamente en el país.¹⁷

Si bien en junio del 2019 se produjo la primera **reivindicación de los ataques en Cabo Delgado por parte del grupo armado Estado Islámico (ISIS)**, su presencia en el país fue negada por las autoridades mozambiqueñas hasta abril de 2020. Después de una masacre de 52 personas que se habían negado a ser reclutadas por la insurgencia, el Gobierno presidido por Filipe Nyusi reconoció por primera vez la presencia de militantes de ISIS. La propia insurgencia norteña, conocida localmente como “al-Shabaad”, pasó a denominarse Islamic State Central Africa Province (ISCAP), proclamando su objetivo de establecer un califato en la región. A su vez, el 22 de mayo, al-Qaeda también realizó por primera vez reivindicaciones de ataques en el país con una acción armada en el distrito de Mocimboa da Praia. La violencia no sólo se concentró en el norte de Mozambique, sino que también se registraron a lo largo del año diversos incidentes armados en el sur de Tanzania, frontera con Cabo Delgado. Durante octubre, ISIS reivindicó su primer ataque en suelo tanzano¹⁸.

17. UNHCR, *Mid-year trends 2020*, 30 de noviembre de 2020.

18. Véase el resumen sobre Tanzania en el capítulo 2 (Tensiones).

Entre los acontecimientos violentos registrados durante el año destacó el inicio de acciones armadas dirigidas contra centros urbanos a partir del mes de marzo. Un ejemplo de ello lo representó **la toma de la ciudad de Mocímboa da Praia en tres ocasiones en marzo, junio y agosto**. Por otro lado, se registraron múltiples ataques con una alta tasa de mortalidad, entre los que destacaron dos masacres perpetradas por la insurgencia en el distrito de Miudumbe. En la primera, el 7 de abril, al menos 52 personas fueron decapitadas en un ataque en la comunidad de Xitaxi; en la segunda, en octubre, otras 50 personas fueron decapitadas en el campo de fútbol de la comunidad de Muatide, siendo otras muchas secuestradas. Según diversos analistas, una de las razones que ayuda a explicar la violencia contra la población de Miudumbe se relaciona con la formación de milicias comunitarias para combatir del lado del Gobierno. El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó las masacres e instó a las autoridades del país a realizar una investigación sobre los incidentes. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que la población se encuentra en una situación desesperada, realizando un llamamiento al Gobierno mozambiqueño para que garantice el acceso sin trabas a las agencias humanitarias.

Aumentó la inestabilidad y la crisis humanitaria en la región de Cabo Delgado, norte de Mozambique

En medio del empeoramiento de la situación humanitaria, medios de prensa se hicieron eco del surgimiento de milicias comunitarias compuestas por veteranos del Ejército que se están enfrentando a la insurgencia yihadista. A su vez, miembros de las fuerzas de seguridad mozambiqueñas fueron acusados en varias ocasiones por su supuesta implicación en **violaciones de los derechos humanos, torturas, asesinatos indiscriminados y extrajudiciales**, lo cual contribuyó a exacerbar el discurso antigubernamental de la rebelión. Varios organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitaron al Gobierno una investigación independiente e imparcial sobre las torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en Cabo Delgado.¹⁹ Incluso el Parlamento Europeo condenó el 18 de septiembre el uso desproporcionado de la fuerza, después de que se viralizase un vídeo que muestra el asesinato de una mujer por parte de supuestos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Intervención Rápida de Mozambique, hechos que el Gobierno negó, denunciando una campaña de “desinformación” de los insurgentes.

El incremento de la violencia e inestabilidad en la región generó la reacción del **organismo regional** Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC). A mediados de mayo, los Gobiernos de Botswana, Zambia y Zimbabwe instaron a los países miembros de la SADC a dar su apoyo al Gobierno de Mozambique frente

a la insurgencia. Posteriormente, el 17 de agosto, la SADC declaró en su cumbre anual su “compromiso de apoyar a Mozambique en la lucha contra el terrorismo y los atentados violentos”. El partido gobernante de Zimbabwe, el ZANU-PF, manifestó su intención de ofrecer asistencia a Mozambique en Cabo Delgado a cambio de que el Gobierno de EEUU alivie las sanciones sobre el país. A finales de noviembre, la SADC celebró una cumbre extraordinaria en Botswana, centrada en temas de seguridad, en donde acordó una “respuesta regional integral” para hacer frente a la inseguridad en el norte de Mozambique, sin dar detalles sobre el tipo de respuesta. De forma paralela, una semana antes de la cumbre, Tanzania y Mozambique firmaron un acuerdo para unir fuerzas para luchar contra la insurgencia. Paralelamente, en septiembre, el Ejecutivo mozambiqueño solicitó asistencia a la UE para hacer frente a la insurgencia. La UE anunció en octubre, un programa de capacitación, apoyo logístico y servicios médicos para las fuerzas de Mozambique. A su vez, cabe señalar que durante el año la empresa de seguridad privada sudafricana DAG (Dyck Advisory Group) sustituyó a la compañía de seguridad rusa Wagner y comenzó a operar en la guerra contra la insurgencia en Cabo Delgado, principalmente mediante la formación de tropas, el despliegue de operaciones aéreas y el suministro de mercenarios en terreno.

África Occidental

Camerún (Ambazonia/North West y South West)	
Inicio:	2018
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Camerún, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF)
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios que componían el Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico

19. Amnistía Internacional, “Mozambique: Torture by security forces in gruesome videos must be investigated”, 9 de septiembre de 2020.

(territorio que actualmente corresponde a las provincias de North West y South West) decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una re-unificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Sus frustraciones se incrementaron a finales de 2016 cuando una serie de agravios sectoriales se transformaron en demandas políticas, lo que provocó huelgas, disturbios y una escalada creciente de la tensión y de la represión gubernamental. Este clima ha contribuido a que una mayoría de la población de la región exija un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región. Esta movilización ha comportado el resurgir de los movimientos identitarios que datan de los años setenta. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. El Gobierno arrestó a las principales figuras del movimiento federalista en 2017, lo que dio alas a sectores favorables a la lucha armada para alcanzar la independencia. Desde entonces, las dos regiones anglófonas han vivido huelgas generales, boicots escolares y violencia esporádica. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre de 2017 y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se produjo una escalada de las actividades insurgentes.

Las dos regiones anglófonas del oeste de Camerún continuaron afectadas por el grave clima de violencia como consecuencia de las acciones de los actores armados secesionistas, así como del excesivo uso de la fuerza y las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y las milicias locales, e incluso los grupos armados cometieron algunos ataques fuera de ambas provincias. El conflicto ha causado más de 3.000 víctimas mortales y el desplazamiento de más de 900.000 personas en menos de tres años, y ha provocado que alrededor de 800.000 menores no puedan asistir a la escuela. Centenares de insurgentes, miembros de los cuerpos de seguridad y milicias de autodefensa murieron en enfrentamientos y emboscadas, decenas de localidades y casas fueron incendiadas por los cuerpos de seguridad y diversos líderes insurgentes fueron ejecutados en diferentes momentos del año, como el general Aladji (mayo), el general Okoro (julio), el general Mad Dog (septiembre) y el general Mendo Ze (octubre). En lo concerniente al clima de violencia, los cuerpos de seguridad y, en menor medida, los actores armados separatistas, han sido acusados de graves abusos a los derechos humanos. En abril, por primera vez el Gobierno reconoció que el Ejército se había visto involucrado en una matanza de civiles (tres mujeres y 10 menores según el Gobierno, 23 civiles, incluyendo 15 menores, de acuerdo con los datos de la ONU) cometida a mediados de febrero en un ataque contra la localidad de

A pesar de la persistencia del grave clima de violencia en las dos regiones anglófonas de Camerún, se celebraron contactos entre representantes del Gobierno y del movimiento secesionista

Ngarbuh. El Gobierno acabó llevando ante un tribunal militar a los responsables. En un primer momento el Gobierno desmintió los hechos pero las evidencias y las presiones de la comunidad internacional (ONU, EEUU y UE) cambiaron la posición gubernamental. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y Human Rights Watch (HRW) señalaron que el reconocimiento era un paso positivo pero insuficiente, mientras que una coalición de 26 ONG locales afirmaron que la verdad sobre los hechos y las cifras todavía no habían salido a la luz, al haber descubierto 31 cuerpos, incluyendo 14 menores, y que al menos habían participado entre 10 y 15 soldados y otros 30 milicianos durante el ataque, cifra muy superior a la ofrecida por el Gobierno. El líder Ayaba Cho Lucas, del grupo secesionista AGovC, exigió una comisión independiente para depurar responsabilidades. A pesar de esto, durante el año persistieron los ataques y abusos contra la población civil y muertes bajo custodia (como el periodista Samuel Wazizi) por parte de los cuerpos de seguridad, así como los secuestros de estudiantes y profesores, y ejecuciones de supuestos espías por parte de los grupos secesionistas. HRW denunció el 27 de julio que al menos 285 civiles habían muerto en ambas provincias desde enero de 2020. El 24 de octubre un grupo armado no identificado atacó y ejecutó a seis estudiantes en un colegio de la localidad de Kumba, hecho condenado por el Gobierno y por la ACNUDH, aunque los grupos secesionistas se desvincularon de los hechos.

Por otro lado, el 9 de febrero se celebraron las elecciones municipales y legislativas después de siete años y tras haber sido postpuestas dos veces. A pesar de los retrasos, la campaña electoral se vio afectada por múltiples actos de violencia y enfrentamientos, según organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Los grupos armados separatistas habían realizado un llamamiento a boicotear las elecciones, e incluso amenazaron a la ciudadanía para que no ejerciera el voto en las dos regiones. Los principales partidos opositores no tuvieron una posición común de cara a la participación en las elecciones, y mientras que tanto el MRC como el SDF criticaron la ley electoral y el control que ejerce el Gobierno de los instrumentos electorales, el MRC anunció el boicot electoral y el SDF lo rechazó. No obstante, la jornada electoral transcurrió prácticamente sin incidentes y con una baja participación, lo que favoreció al partido en el poder, según diversos analistas. Según diversos análisis, el presidente Paul Biya siguió utilizando la maquinaria del Estado para garantizar su gobierno de partido único.²⁰ Las elecciones legislativas parciales en las regiones anglófonas volvieron a celebrarse a finales de marzo por decisión del tribunal constitucional, y el partido en el poder, el RDPC de Biya, obtuvo los 13 escaños en juego en las 11 circunscripciones en liza en las elecciones. La

20. Paul-Simon Handy y Fonteh Akum; "Cameroon holds elections in a time of crisis", ISS, 5 de febrero de 2020.

victoria fortaleció todavía más la mayoría parlamentaria que ostenta el RDPC con 152 de los 180 escaños. El partido opositor SDF, dominado por la comunidad anglófona, cuestionó los resultados de las elecciones parciales, pero el tribunal constitucional rechazó su demanda para una repetición de los comicios.

Cabe destacar que el 2 de julio se celebró una ronda de contactos entre representantes del Gobierno y del movimiento secesionista encabezados por el líder encarcelado Sisiku Julius Ayuk Tabe.²¹ Este anuncio fue celebrado por numerosos actores sociales y políticos del país, así como por parte de la comunidad internacional, aunque el silencio del Gobierno y los desmentidos posteriores pusieron de manifiesto una lucha interna entre sectores favorables a la búsqueda de una solución negociada al conflicto y sectores que pretenden una solución militar. Esta lucha está vinculada a la sucesión de Paul Biya al frente del país después de 37 años en el poder, según diferentes fuentes.²² En un intento de unificar a los grupos armados secesionistas, Ayuk Tabe hizo un llamamiento el 15 de octubre a los diferentes líderes insurgentes a colaborar con el AGovC.

Decisiones adoptadas en septiembre por el Gobierno pusieron de manifiesto la prevalencia de la línea militarista. Se prohibieron todas las manifestaciones, justificando la decisión como consecuencia de la pandemia del coronavirus y en aplicación de la ley de 2014 contra actos de terrorismo, a lo que HRW anunció que el Gobierno utilizaba la pandemia y la ley antiterrorista como pretexto para prohibir el derecho de reunión. En respuesta al asesinato de un oficial de policía en Bamenda, la capital de la región de North West, el Ejército prohibió el uso de motocicletas y lanzó el 8 de septiembre una operación militar sin precedentes en la ciudad de cara a capturar a posibles miembros de los grupos armados. El operativo incluyó arrestos indiscriminados, tiroteos y muerte de civiles, acción justificada por el Ejército como respuesta a diversos ataques, saqueos y robos de bancos y tiendas, cometidos por los grupos armados. Además, el 17 de septiembre, un tribunal de apelaciones de Yaoundé confirmó la cadena perpetua de Sisiku por cargos de terrorismo y secesión. Al día siguiente de esta decisión, Maurice Kamto, líder del MRC, hizo un llamamiento a la movilización social para exigir un alto el fuego con la insurgencia secesionista y reformas electorales como consecuencia de la decisión gubernamental de celebrar las elecciones regionales en diciembre. El MRC anunció que centenares de personas habían sido arrestadas en Douala y Yaoundé en las movilizaciones y en los días previos a las mismas, entre las cuales se encuentran miembros del partido, o activistas del grupo Stand Up for Cameroon. Tras las protestas, el domicilio de Kamto fue custodiado por las fuerzas de seguridad, sometiéndole a un arresto domiciliario de facto, según denunció Kamto

el 29 de septiembre al medio RFI, arresto que seguía activo a finales de año.

A esta situación se añade el creciente clima de tensión política entre los partidarios del actual presidente, ratificado en las elecciones de 2018 y los partidarios del opositor Maurice Kamto, tal y como señaló el centro International Crisis Group (ICG) en diciembre. Kamto continuó cuestionando los resultados de las elecciones presidenciales de 2018 y los partidarios de ambos bandos alimentaron el clima de odio y violencia a través de las redes sociales, clima que adquiere un componente étnico, lo que supone una nueva amenaza para la frágil estabilidad del país, ya afectado por la grave violencia que sacude las provincias anglófonas, así como por la persistencia de los ataques por parte de Boko Haram en la provincia de Far North. El ICG planteó que el Gobierno debería corregir las deficiencias en el sistema electoral que socavaron la credibilidad de las elecciones de 2018 y combatir la persecución por motivos étnicos en las redes sociales. En este sentido, los partidos MRC y SDF anunciaron el boicot de las elecciones regionales celebradas el 6 de diciembre, en las que el RDPC de Paul Biya arrasó venciendo en nueve de los 10 consejos regionales.

Malí	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)–, Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido)
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz

21. Véase el resumen sobre Camerún en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) de Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

22. R. Maxwell Bone, "Political Infighting Could Obstruct a Nascent Peace Process in Cameroon", *WPR*, 22 de septiembre de 2020.

que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuareg designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNL) se vio crecientemente desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país. Si bien en 2015 se logró la firma de un acuerdo de paz en el norte del país entre los grupos árabe-tuareg (CMA y Plataforma), la exclusión de las negociaciones de paz de los grupos con agendas yihadistas ha mantenido la guerra y extendida las dinámicas de la misma a la región central del país (Mopti).

Un año más se produjo un incremento de la violencia en gran parte del territorio maliense debido a las acciones armadas perpetradas por grupos de corte yihadista en el norte y centro del país, a enfrentamientos entre milicias de las comunidades fulani, dogon y bambara en la región central de Mopti y algunas partes de la región sur del país, a enfrentamientos armados entre las dos coaliciones de grupos yihadistas en la región, así como a las respuestas de las fuerzas de seguridad.

Según datos del centro de investigación ACLED, el 2020 fue el año con más muertes en el país desde que estalló la última ola de violencia, con alrededor de un millar de eventos violentos concentrados en las regiones norte, centro y sur, que han dejado un balance de al menos 2.731 víctimas mortales. Estos datos comportan un incremento significativo en relación a las 1.702 muertes registradas en 2019. Las razones se deben al incremento de la violencia en la región central del país, así como a la lucha por la expansión de las coaliciones yihadistas vinculadas con al-Qaeda –Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM o GSIM)– y con el grupo armado Estado Islámico –Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) o Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP). Asimismo, en materia de desplazamiento forzoso, según datos de ACNUR, al finalizar el año 138.659 personas se encontraban refugiadas en países vecinos, mientras que otras 201.429 se hallaban en situación de desplazamiento interno.

En el centro del país, principal foco de la violencia, durante todo el año se registraron múltiples enfrenta-

mientos y ataques entre milicias comunitarias formadas por miembros de las comunidades fulani, dogon (dozos) y bambara en la región de Mopti. La violencia también se intensificó debido a la nueva estrategia ofensiva adoptada por el Gobierno maliense de ampliar las operaciones militares contra las organizaciones yihadistas en Mopti. Dicha estrategia también fue acompañada por el aumento de las acciones de contrainsurgencia por parte de la operación francesa Barkhane, que pasó a ampliar su presencia militar en el territorio saheliano y a aumentar el número de tropas desplegadas de los 4.500 soldados a 5.100. Si bien a principios de año en Bamako se registraron protestas contra la presencia militar francesa en el país, el presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita, en una reunión mantenida en Francia entre los jefes de Estado que componen la operación antiterrorista Sahel G-5 y el presidente francés, Emmanuel Macron, acordaron intensificar la cooperación militar con Francia para contrarrestar la amenaza yihadista en el Sahel. A su vez, el 29 de enero, el primer ministro maliense, Boubou Cissé, se comprometió a aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas del país en un 50% en el año 2020.²³ El aumento de la militarización y de la estrategia antiterrorista en la zona también generó diversas denuncias de violación de los derechos humanos dirigidas contra las fuerzas de seguridad. En una de ellas, el 30 de abril, la misión de la ONU en el país (MINUSMA) hizo público un informe en el que sostiene que las fuerzas de seguridad de Malí y Níger llevaron a cabo 135 ejecuciones extrajudiciales entre el 1 de enero y el 31 de marzo en Mopti. La MINUSMA sostuvo que los datos están documentados y que las autoridades malienses han abierto una investigación.

La intensificación de la violencia generó entre enero y junio, según datos de Naciones Unidas, alrededor de 600 civiles asesinados. En junio, el Consejo de Seguridad de la ONU amplió el mandato de la MINUSMA por otros 12 meses, manteniendo el número de tropas desplegadas, que ascienden a 13.289 soldados y 1.920 policías.

De forma paralela, a principios de año el Gobierno maliense anunció la intención de abrir vías de diálogo con los líderes yihadistas Amadou Kouffa (Frente de Liberación de Macina) e Iyad ag Ghaly (JNIM). Iyad ag Ghaly anunció que se abría a explorar negociaciones siempre que las fuerzas francesas de la operación Barkhane y la MINUSMA se retiraran del país. La postura del JNIM generó divisiones internas en la organización y deserciones de algunos miembros que se unieron a las filas del ISWAP. Este escenario también dio paso a una **guerra abierta entre las coaliciones armadas que conforman el JNIM y el ISWAP** que se mantuvo durante todo el año en el norte y centro de Malí, así como en el triángulo fronterizo conformado por Malí, Burkina Faso y Níger. Según datos de ACLED, estos

El inicio de la guerra abierta entre las coaliciones armadas yihadistas que conforman el JNIM y el ISWAP provocó un aumento de la violencia en Malí

23. Véase el resumen sobre Región Sahel Occidental en este capítulo.

enfrentamientos dejaron durante el año un estimado de 415 muertes. A su vez, las fuerzas francesas de la operación Barkhane anunciaron a lo largo del año múltiples acciones antiterrorista dirigidas contra las organizaciones yihadistas, que entre otros resultados, costaron la vida al veterano líder de AQMI, Abdelmalek Droukdel, en una operación realizada el 3 de junio en Talhandak, Kidal;²⁴ así como al alto comandante del JNIM, Bah ag Moussa, en otra operación realizada el 13 de noviembre en Ménaka.

Finalmente, el deterioro de la situación de seguridad en el país se vio acrecentado debido a la **crisis política en la que estuvo inmerso durante el 2020**. Tras meses de manifestaciones y protestas, en agosto se produjo un golpe de Estado que condujo a la caída del Gobierno, dando inicio a un nuevo Ejecutivo liderado por la Junta Militar denominada National Committee for the Salvation of the People (CNSP). Desde un primer momento el CNSP afirmó que se respetarán todos los acuerdos de seguridad del pasado, que incluían el apoyo a la MINUSMA, a la Operación Barkhane, a la fuerza del Sahel G-5, así como a las fuerzas especiales europeas de la iniciativa Takuba.²⁵ Si bien el golpe militar generó que múltiples países inmersos en las acciones militares en Malí paralizasen sus apoyos hasta la vuelta al orden constitucional, en octubre, tras la conformación del Gobierno de transición con participación de civiles, la UE anunció la reanudación de sus actividades de formación y desarrollo de capacidades militares en Malí a través de la EUTUM. El nuevo Gobierno interino anunció el 8 de octubre la liberación de 200 personas presas, incluidas figuras destacadas del JNIM, a cambio de la liberación por parte del JNIM de cuatro rehenes, incluido el líder de la oposición, Soumaïla Cissé.

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en

1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Una filial del grupo, Ansaru, también ha protagonizado ataques en el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se regionalizó, afectando también a los países fronterizos con el Lago Chad: Chad, Níger y Camerún. Desde mediados de 2016 Nigeria, Níger, Chad y Camerún han desarrollado una estrategia regional de presión militar sobre BH a través de la implementación de una fuerza militar conjunta regional (MNJTF), lo que ha puesto de manifiesto la resiliencia del grupo y también la falta de voluntad de las autoridades políticas y militares nigerianas para hacer frente a la situación, además de las deficiencias de las Fuerzas Armadas nigerianas, con graves problemas de corrupción internos. BH se ha dividido en cuatro facciones: Jama’atu Ahlus-Sunna Lidda’Awati Wal Jihad (JAS) facción liderada por Abubakar Shekau, líder de BH desde 2009; Ansaru, alineada con al-Qaeda en 2012 y que desde 2013 no había cometido acciones militares hasta principios de 2020; Islamic State West Africa Province (ISWAP) escindida de JAS en 2016; y finalmente Bakura, escisión de ISWAP en 2018 que posteriormente se aproximó a Shekau en oposición a ISWAP.

La situación de seguridad se caracterizó por la persistencia de las actividades de Boko Haram (BH), a pesar de las operaciones contrainsurgentes, provocando nuevos desplazamientos de población y agravando la crisis humanitaria existente. Las operaciones militares permanentes de los cuerpos de seguridad de Nigeria, las milicias progubernamentales y la Fuerza Conjunta Multinacional (MNJTF) principalmente contra las dos facciones de BH –Islamic State West Africa Province (ISWAP) y Jama’atu Ahlus-Sunna Lidda’Awati Wal Jihad (JAS) liderada por Abubakar Shekau– no afectaron en la evolución de las actividades de ambos grupos. Estos siguieron planteando una grave amenaza, que dio lugar a una prolongada crisis humanitaria y violaciones generalizadas de los derechos humanos, entre ellas masacres de civiles, la mutilación y el secuestro de menores y la violencia sexual contra ellos. BH también continuó su campaña de secuestros y ejecución sumaria de trabajadores humanitarios, así como de ataques suicidas contra la población. **Cabe destacar el resurgimiento del grupo armado Ansaru, que reivindicó en enero su primera acción desde 2013.** Fuentes militares señalaron evidencias del reinicio de las actividades del grupo, que incrementó sus acciones principalmente en el estado de Kaduna. Las regiones de los países que limitan con el noreste de Nigeria, a saber, Extrême Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac del Chad, también se vieron afectadas por los persistentes ataques armados de las diferentes facciones del grupo. El balance de las acciones de BH y de los enfrentamientos entre las facciones de BH y

24. Véase el resumen sobre Argelia (AQMI) en el capítulo 2 (Tensiones).

25. Véase el resumen sobre Malí en el capítulo 2 (Tensiones).

las fuerzas de seguridad desde el inicio del conflicto en 2011 es de 39.708 víctimas mortales, según la base de datos de Nigeria Security Tracker (NST). El número de víctimas mortales en los estados nigerianos de Borno, Yobe y Adamawa fue muy similar al del año anterior (2.603 en 2020 frente a 2.607 en 2019), en comparación a los 2.243 en 2018 y 1.907 en 2017, estabilizando la tendencia creciente de años anteriores. Si a esta cifra le sumamos las víctimas mortales del conflicto en las zonas colindantes de la región del Lago Chad, el total se eleva a 3.770. Borno y Lac, con 2.335 y 1.088 víctimas mortales respectivamente, fueron las regiones más afectadas.

Por otra parte, desde su creación en 2016, la facción de BH conocida como ISWAP ha lanzado más ataques y ha causado más víctimas mortales en los cuerpos de seguridad que la facción de JAS de BH, ambas aliadas al grupo armado Estado Islámico (ISIS), según señaló ICG en octubre.²⁶ En este sentido, y tal y como remarcó el think tank a partir de entrevistas con desertores de BH, la relación con ISIS ha sido beneficiosa para ambas partes, ya que por un lado ha ayudado a mantener activa la marca del grupo armado, a pesar de las pérdidas en Siria e Iraq, y las facciones de BH han recibido formación ideológica, tecnológica, militar, logística, así como recursos que han servido para fortalecer la disciplina y la efectividad del grupo. Además, ISIS estaría intentando ejercer un mayor control sobre ISWAP, lo que ha generado tensiones internas e incluso la purga y ejecución de algunas figuras de ISWAP, como Mamman Nur en 2018, e Idris al-Barnawi (Ba Idrissa, quien había sustituido a Abu Musab al-Barnawi en marzo de 2019) y dos de sus comandantes –Abu Maryam y Abu Zainab– en febrero de 2020, lo que supondría ejercer la autoridad de ISIS más directamente sobre el grupo. Según fuentes locales, estas últimas ejecuciones también se deberían a que sus combatientes habrían cuestionado a sus líderes por decisiones relativas a la no ejecución de soldados en retirada o capturados.²⁷ En paralelo, cabe destacar la muerte por parte de la MNJTF del líder de la facción Bakura de BH, Malam Bakura, escindido de ISWAP en 2018, cuyo grupo era activo en el sur de Níger y en algunas islas del Lago Chad. La emergencia provocada por el conflicto está afectando a 17 millones de personas en los cuatro países, y ha provocado el desplazamiento forzado de 2,87 millones de personas, según OCHA. En la región del Lago Chad, una de cada tres familias padece inseguridad alimentaria y una de cada dos personas necesita asistencia humanitaria urgente.

En diciembre la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, presentó las conclusiones tras diez años de la apertura del examen preliminar de la situación de violaciones de derechos humanos en Nigeria y los posibles crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en el Delta del Níger, en los estados del cinturón central (Middle Belt) y en

el contexto del conflicto entre BH y los cuerpos de seguridad nigerianos. En ellas se afirma que existe una base razonable para creer que tanto miembros de la insurgencia de BH y sus grupos escindidos, así como miembros de cuerpos de seguridad cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Si bien la fiscalía sostuvo que la gran mayoría de los crímenes son atribuibles a actores no estatales, la incorporación de investigaciones por la CPI contra el actuar de las fuerzas de seguridad representa una buena noticia en la búsqueda de la justicia y el fin de la impunidad. La fiscalía investigará a ambas partes por crímenes que incluyen el asesinato, violación, tortura y tratos crueles; ultrajes a la dignidad personal; ataques intencionados contra la población civil como tal y contra civiles individuales que no participan directamente en las hostilidades; encarcelamiento ilegal; reclutamiento y alistamiento de niños menores de quince años en las Fuerzas Armadas y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades; persecución por motivos políticos y de género; y otros actos inhumanos. Además, en el caso de la insurgencias también se añade esclavitud sexual, incluidos embarazos y matrimonios forzados; esclavitud; toma de rehenes; ataques intencionados contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos involucrados en tareas de asistencia humanitaria; ofensivas deliberadas contra edificios dedicados a la educación y lugares de culto e instituciones similares. Y en el caso de las investigaciones contra las fuerzas de seguridad, también se incluyen acusaciones de desaparición forzada y traslado forzoso de población.

Región Sahel Occidental	
Inicio:	2018
Tipología:	Sistema, Identidad, Recursos Internacional
Actores:	Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Islamic State West Africa Province (ISWAP) –también conocido como Islamic State in the Greater Sahara (ISGS)–, Macina Liberation Front (FML), Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias
Intensidad:	3
Evolución:	↑

26. Vicent Foucher, "The Islamic State Franchises in Africa: Lessons from Lake Chad", *International Crisis Group, Commentary / Africa*, 29 de octubre de 2020.

27. Timileyin Omilana, "ISWAP kill own leaders as Borno fasts, prays", *Guardian* (Nigeria), 24 de febrero de 2020.

Síntesis:

La región occidental del Sahel (norte de Malí, norte de Burkina Faso y noroeste de Níger) se ve afectada por una situación de inestabilidad creciente que tiene un origen multicausal. Se combina la existencia de redes de criminalidad transfronteriza en el Sahel y la marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuareg en la región, entre otros factores. Esta marginación se manifestó en las rebeliones tuareg que tuvieron lugar en los años sesenta, en los años noventa y, más recientemente, entre 2007 y 2009, cuando se configuraron sendas rebeliones contra los respectivos Gobiernos de Níger y Malí que pretendían alcanzar un mayor grado de autonomía en ambos países y revertir la pobreza y el subdesarrollo de la región. En el caso de Malí se produjo un resurgimiento de estas demandas en 2012, espoleadas por la caída del régimen de Gaddafi en Libia en 2011²⁸. A todo esto se une la expansión de las actividades de los grupos armados de Malí a la región fronteriza con Níger y Burkina Faso conocida como Liptako-Gourma, relacionada con la situación de inestabilidad derivada de la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino AQMI, su fragmentación y configuración en otros grupos armados de corte similar, algunos alineados a al-Qaeda y otros a ISIS, que en la actualidad operan y se han expandido por la región. Esta expansión ha contribuido a una mayor desestabilización de la zona y a la configuración de diferentes iniciativas militares transfronterizas regionales e internacionales para intentar controlar esta situación, que también han contribuido a internacionalizarla. A todo este panorama se suman las vinculaciones del conflicto que afecta a la región del Lago Chad como consecuencia de la expansión de las actividades del grupo Boko Haram a raíz de la intervención militar transfronteriza.

La situación de seguridad en el Sahel Occidental padeció un nuevo deterioro debido al incremento de las acciones armadas de diferentes grupos con agendas yihadistas, a las milicias comunitarias y a las respuestas militares de las fuerzas de seguridad de los países de la región y los aliados externos.

Según el Centro de Estudios Estratégicos de África (ACSS), 2020 ha sido el año más mortífero de los grupos yihadistas en el Sahel, que habrían provocado unas 4.250 muertes, lo que significa un aumento del 60% en relación a 2019. Detrás de este incremento se encuentra principalmente el Islamic State West Africa Province (ISWAP) –también conocido como Islamic State in the Greater Sahara (ISGS)–, y en menor medida, la coalición del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes –Jama'atNusrat al Islam walMuslimin– (JNIM o GSIM).²⁹ **Si bien la violencia continuó afectando a todas las zonas fronterizas de la región de Liptako-Gourma –este de Malí, norte de Burkina Faso y suroeste de Níger–, sus impactos fueron diferentes en cada país.** Según datos facilitados por ACLED, entre enero y mediados de diciembre, en Burkina Faso se registraron 620 episodios de violencia que

dejaron un balance total de 2.263 víctimas mortales; en Malí se produjeron alrededor de 900 eventos violentos concentrados en la región de acción de los grupos yihadistas (Gao, Mopti, Segou, Sakasoo y sureste de Tombuctú) que han costado la vida a 2.669 personas; mientras que en Níger, en la zona suroeste del país, en las regiones de Tillaberi –principal zona afectada por la violencia– Dosso y Tahoua, se habrían registrado 176 eventos violentos, ocasionando al menos 685 muertes.

A su vez, la violencia siguió agravando la crisis humanitaria y el **desplazamiento forzoso de personas**. ACNUR, en su informe sobre desplazamiento forzado que recoge los datos hasta mediados de año, resaltó la región del Sahel Occidental como la zona más afectada a nivel global.³⁰ A mediados de 2020 alrededor de dos millones de personas se encontraban desplazadas de manera forzada en toda la región, lo que significa un aumento del 43% desde finales de 2019. De estas, 574.600 eran personas desplazadas internamente solo en el primer semestre del año. Casi dos tercios de los nuevos desplazados internos se registraron en **Burkina Faso** (361.400), convirtiendo al país en la **crisis de desplazamiento de más rápido crecimiento del mundo, con más de un millón de personas desplazadas dentro del país**. De acuerdo con la agencia de Naciones Unidas, el número de personas que se enfrentaba a niveles de hambre aguda, solo en Burkina Faso, se triplicó en el último año, alcanzando los 7,4 millones. La dimensión de la crisis durante el año provocó que los países afectados buscaran fórmulas para fortalecer las capacidades regionales de respuesta. Entre ellas, los Gobiernos de Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger en octubre de 2020 pusieron en marcha el denominado Proceso de Bamako, una plataforma intergubernamental para impulsar acciones rápidas, fortalecer la coordinación entre los actores humanitarios y de seguridad y garantizar el acceso, la protección y la asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas. A su vez, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, solicitó a la comunidad internacional una acción urgente y sostenida para satisfacer las crecientes necesidades humanitarias en la región, señalando la necesidad de más fondos y cooperación internacional, y reclamando un enfoque más estratégico y la necesidad de un “Plan Marshall”, instando a la UE a liderarlo.

En lo que respecta a los episodios de violencia más significativos registrados durante el año, cabe destacar el inicio de enfrentamientos armados en la región del Sahel, entre las coaliciones yihadistas representadas por el JNIM y el ISGS. Estos enfrentamientos se habrían registrado principalmente en Malí y en Burkina Faso. En **Níger**, a principios de enero, supuestos militantes del ISGS atacaron una base militar en Chinégodar, región

28. Véase el resumen sobre Malí en este capítulo.

29. Africa Center for Strategic Studies, *Islamic State in the Greater Sahara Expanding Its Threat and Reach in the Sahel*, 18 de diciembre de 2020.

30. UNHCR, *Mid-year trends 2020*, 30 de noviembre de 2020.

de Tillabéri, matando al menos a 89 soldados, siendo el ataque más mortífero contra las fuerzas de seguridad en la historia del país, y produciéndose tan solo cuatro semanas después del ataque que costó la vida a otros 71 soldados nigerinos en la misma región. Por otro lado, durante el año también destacó la realización del primer ataque yihadista en suelo **marfileño** desde marzo de 2016. El ataque, atribuido a JNIM, se produjo el 10 de junio contra un puesto fronterizo en Kafolo, Costa de Marfil, en la frontera con Burkina Faso, matando a 14 personas. Como respuesta, el Gobierno de Costa de Marfil anunció el 13 de julio la creación de una zona militar especial en el norte del país.

Por otro lado, en lo referente a las **medidas de seguridad** generadas en la región, el año inició con la reunión el 13 de enero entre los Gobiernos de la Fuerza Conjunta Sahel G5 (Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger) y el presidente francés, Emmanuel Macron, en Francia. En ella se decidió concentrar todas las fuerzas en la región de las tres fronteras bajo una estructura de mando único para las tropas regionales y francesas, priorizando el combate frente al ISGS. El Gobierno de Francia se comprometió a aumentar su presencia militar en el Sahel de 4.500 soldados a 5.100 dentro de la operación Barkhane. A su vez, en febrero, la Unión Africana (UA) anunció el despliegue temporal de 3.000 efectivos adicionales para mejorar la seguridad en el Sahel, mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU amplió en junio el mandato de la MINUSMA por otros 12 meses, manteniendo el número de tropas desplegadas, que ascienden a 13.289 soldados y 1.920 policías. Asimismo, la UE también amplió su protagonismo en la zona y se incorporó a las acciones antiterroristas en la región de Liptako-Gourma una nueva misión militar denominada Takouba Task Force –“sable” en lengua tuareg– compuesta por fuerzas especiales de Malí y Níger y 11 países europeos (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Holanda, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido). Por otro lado, la Misión de Formación y Asistencia Militar de la UE en Malí (EUTM Malí) informó que extenderá su trabajo a los países vecinos; mientras que la denominada Alianza para el Sahel, liderada por España, seguirá trabajando en la mejora de aspectos sociales y económicos en la zona.

De forma paralela, se publicaron **diferentes informes que señalan a las fuerzas de seguridad de los tres países por cometer violaciones a los derechos humanos en el marco de la guerra antiterrorista**. En enero el Parlamento de Burkina Faso aprobó una controvertida legislación, la “Ley de Voluntarios para la Defensa de la Patria”, que permite al Ejército utilizar voluntarios civiles en la lucha contra los grupos armados. La

Durante el año las fuerzas de seguridad de Burkina Faso, Malí y Níger fueron acusadas en varias ocasiones por diversos organismos de cometer violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra

medida fue cuestionada por un gran número de organizaciones de la sociedad civil burkinesa, así como por organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW), debido a las diferentes denuncias que pesan sobre el Ejército burkinés en materia de abusos y violación a los derechos humanos en el marco de la guerra frente a los grupos yihadistas. Tras la aprobación de la ley se registraron diferentes episodios de violencia perpetrados por los “vigilantes” –conocidos localmente como “koglweegos”, “guardianes de la selva” en el idioma moore– que fueron denunciados por organizaciones de defensa de derechos humanos por supuestos asesinatos y ajusticiamientos. También las fuerzas de seguridad burkinesas fueron denunciadas por HRW por una supuesta ejecución de 31 detenidos en la ciudad norteña de Djibo el 20 de abril. También fueron acusados en junio de ejecutar extrajudicialmente a 180 personas aparecidas en una fosa común en el norte de Burkina Faso.³¹ **El Observatorio para la Democracia y los Derechos Humanos (ODDH) de Burkina Faso señaló en junio que las Fuerzas Armadas eran**

responsables de la muerte de 588 civiles. Por otro lado, la MINUSMA afirmó que tenía pruebas de que las fuerzas de seguridad de Malí y Níger habrían llevado a cabo 135 ejecuciones extrajudiciales en Mopti, centro de Malí, entre el 1 de enero y el 31 de marzo. A su vez, el organismo independiente nigerino, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acusó el 4 de septiembre a elementos del Ejército de Níger “no controlados” de la desaparición forzada de más de 100 personas en las áreas de Inates y Ayorou de la región de Tillabéri entre marzo y abril. En junio Amnistía Internacional publicó un informe acusando a los ejércitos de Malí, Níger y Burkina Faso de cometer crímenes de guerra en sus operaciones, en particular contra civiles. En el informe consta que las violaciones incluyeron por lo menos 57 casos de ejecuciones extrajudiciales y 142 casos de desapariciones forzadas.³²

Cuernos de África

Etiopía (Tigray)	
Inicio:	2020
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Etiopía, Gobierno de Eritrea, Gobierno regional del estado de Tigray, cuerpos de seguridad y milicias del Tigray People's Liberation Front (TPLF)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

31. Human Rights Watch, *Burkina Faso: Security Forces Allegedly Execute 31 Detainees*, 20 de abril de 2020; Human Rights Watch, *Burkina Faso: Residents' Accounts Point to Mass Executions*, 8 de junio de 2020.

32. Amnesty International, *They Executed Some and Brought the Rest with Them: Civilian Lives at risk in the Sahel*, 10 de junio de 2020.

Síntesis:

El nombramiento de Abiy Ahmed como nuevo primer ministro de Etiopía a principios de 2018 propició importantes y positivos cambios a nivel interno y a nivel regional en Etiopía. Sin embargo, las acciones de Abiy para reformar el Estado etíope desembocaron en su debilitamiento. Dieron un nuevo impulso a los movimientos nacionalistas de base étnica resurgidos durante las movilizaciones masivas iniciadas en 2015 por parte de la comunidad oromo que finalmente llevaron al poder a Abiy Ahmed, así como fuertes resistencias de actores clave como el partido Tigray People's Liberation Front (TPLF), otrora principal partido de la coalición que ha gobernado en Etiopía desde 1991, la Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF) que estableció el sistema de federalismo étnico tras su llegada al poder. El liderazgo de la comunidad tigray percibió una pérdida de poder y privilegios en los cambios promulgados por Abiy Ahmed. El TPLF se resiste a la pérdida de poder derivada de su no participación en el nuevo partido forjado de las cenizas de la coalición EPRDF, el Partido de la Prosperidad (PP), lo que implicaría diluirse en un nuevo partido. Estas tensiones se intensificaron bajo las reformas liberalizadoras de Abiy Ahmed. A medida que el EPRDF redujo su estricto control, surgieron nuevas oportunidades, agravios y discursos de la mano de líderes regionales y actores de la sociedad civil. Esta situación desencadenó una escalada de la violencia política por todo el país y un incremento de la tensión entre el Gobierno federal y el TPLF que culminó con el estallido de un conflicto armado entre los cuerpos de seguridad etíopes y los cuerpos de seguridad de la región de Tigray.

La región etíope de Tigray se vio afectada por una escalada de la tensión con el Gobierno federal que derivó en una confrontación bélica de graves consecuencias. El 4 de noviembre el primer ministro etíope ordenó el inicio de una operación militar contra las autoridades de la región septentrional de Tigray, fronteriza con Eritrea, gobernadas por el Tigray People's Liberation Front (TPLF) en respuesta a un ataque cometido por las fuerzas de la región de Tigray contra dos bases militares de las Fuerzas Armadas federales etíopes (Fuerzas de Defensa Etíope, EDF por sus siglas en inglés) y a raíz de esta situación el Gobierno federal decretó el estado de emergencia por seis meses en la región. Tras la ofensiva se desencadenaron duros enfrentamientos y una escalada del conflicto, provocando el desplazamiento de miles de civiles que huían de los enfrentamientos y la violencia desatada. La ONU alertó que se estaba desarrollando una crisis humanitaria a gran escala. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, señaló el 24 de noviembre que la población refugiada en Sudán procedente de Tigray ascendía a 40.000 personas desde el 7 de noviembre.³³ Investigaciones revelaron la comisión de ejecuciones en

Un informe de la ONU señaló que el Ejército etíope estaba encontrando una fuerte resistencia en Tigray y enfrentaba a una prolongada “guerra de desgaste” en la región que podría tener consecuencias regionales

masa de población civil en Mai-Kadra (suroeste de la región de Tigray) que podrían ser responsabilidad del TPLF, según testimonios recogidos por Amnistía Internacional.³⁴ La Alta Comisionada alertó que los hechos podrían ser considerados crímenes de guerra si eran confirmados y también de informaciones relativas a arrestos y detenciones arbitrarias, ejecuciones y discriminación y estigmatización de miembros de la comunidad tigray. El primer ministro Abiy Ahmed responsabilizó de las masacres a las fuerzas leales a las autoridades de Tigray. Numerosas voces regionales e internacionales realizaron un llamamiento para frenar la espiral de violencia y promover un diálogo que a finales de año había sido rechazado por el primer ministro etíope. A su vez, Abiy Ahmed el 22 de noviembre lanzó un ultimátum a las autoridades de Tigray y el TPLF para deponer las armas incondicionalmente antes de llevar a cabo la ofensiva sobre la capital, Mekelle, lo que podía suponer una escalada de la violencia con graves consecuencias para la población civil. Sin embargo, el presidente de Tigray, Debretsion Gebremichael, rechazó la rendición. Tras el ultimátum, las EDF llevaron a cabo la ofensiva sobre Mekelle, que provocó numerosas víctimas mortales y cientos de heridos, aunque las consecuencias en términos humanitarios fueron menores debido a la retirada de las tropas del TPLF de la ciudad para evitar la confrontación en el núcleo urbano. La organización ACLED estimó en más de 1.400 las víctimas mortales como consecuencia del conflicto. En medio de la ofensiva etíope, el TPLF bombardeó el aeropuerto de Asmara, la capital de la vecina Eritrea, el 15 de noviembre. El TPLF acusó a Eritrea de colaborar con las EDF, cediendo su aeropuerto para llevar a cabo ofensivas aéreas sobre Tigray. A su vez, el TPLF llevó a cabo bombardeos simultáneos el 13 de noviembre en Bahir Dar y Gondar, en la vecina región de Amhara (región con la que Tigray mantiene disputas abiertas). Posteriormente, organizaciones humanitarias, la ONU y la UE evidenciaron la presencia de tropas eritreas en Mekelle y participando activamente en las hostilidades en apoyo del Gobierno federal. Aunque el Gobierno federal declaró la victoria en noviembre, los enfrentamientos continuaron entre las fuerzas federales y las de Tigray.

Numerosas voces remarcaron el poderío y la experiencia militar de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Tigray, contrastada en la guerra contra Eritrea y en la guerra para derrocar al régimen del Derg en 1991, y fuertemente pertrechadas durante los años en los que el TPLF ha ostentado el poder en la coalición de gobierno en Etiopía. Además, un informe confidencial de la ONU señaló que las EDF estaban encontrando con una fuerte resistencia en Tigray y enfrentaban a una prolongada “guerra de desgaste” en la región que podría tener consecuencias regionales.³⁵

33. OHCHR, *Ethiopia: Threat of major hostilities in Mekelle seriously imperils civilian lives – Bachelet*, OHCHR, 24 de noviembre de 2020.

34. Amnesty International, *Ethiopia: Investigation reveals evidence that scores of civilians were killed in massacre in Tigray state*, 12 de noviembre de 2020.

35. Burke, Jason, “Secret UN report reveals fears of long and bitter war in Ethiopia”, *The Guardian*, 21 de noviembre de 2020.

El punto de inflexión decisivo en el deterioro de las relaciones entre ambas entidades que dio origen al estallido de la violencia se produjo en junio tras el anuncio del Gobierno federal de aplazar las elecciones regionales y federales que debían celebrarse en agosto debido a la pandemia. A partir de ese momento, se registró una cascada de hechos y la construcción de un relato para justificar la evolución de los acontecimientos y el choque de legitimidades. En junio el Parlamento federal extendió el mandato del Gobierno federal y el mandato de los gobiernos regionales que expiraban en octubre, mientras que el Parlamento regional de Tigray anunció la celebración de elecciones en septiembre, consideradas inconstitucionales por las autoridades federales. Tigray celebró las elecciones el 9 de septiembre, en claro desafío al Gobierno federal, acompañadas de las amenazas del TPLF, afirmando que cualquier intento del Gobierno federal de boicotear las elecciones sería considerado una “declaración de guerra”. El gobierno de Tigray también señaló que la perpetuación del Gobierno federal en el poder más allá del 5 de octubre (fecha en la que debía expirar el mandato gubernamental pero que fue pospuesta en junio) era inconstitucional y a partir de esa fecha Tigray podría no aceptar ninguna de las leyes federales. A partir de ese momento se inició el relato que defendía la supuesta legalidad de la actuación propia y la ilegalidad del adversario. El 5 de octubre el TPLF retiró a sus parlamentarios del Gobierno federal, considerando su mandato expirado. El 6 y 7 de octubre el Parlamento federal planteó al Gobierno la ruptura de relaciones con las autoridades de Tigray y aprobó la interrupción de los fondos federales destinados al Ejecutivo de Tigray. A pesar del llamamiento el 9 de octubre a ambas partes de la ministra etíope de Paz, Muferiat Kamil,³⁶ a comprometerse a iniciar un diálogo y desescalar las tensiones realizado, el TPLF el 24 de octubre afirmó que el Gobierno federal estaba expulsando a Tigray de la federación y que el desvío de fondos federales que debía entrar en vigor el 4 de noviembre sería considerado como un equivalente a una declaración de guerra.

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna al Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y keniatas presentes en el país), las tropas gubernamentales y EEUU (principalmente a través de operaciones aéreas) se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

Durante el año persistieron las acciones del grupo armado al-Shabaab así como las operaciones de AMISOM y de EEUU contra el grupo armado, causando centenares de víctimas mortales. Por otra parte, a pesar del acuerdo electoral alcanzado en septiembre, las tensiones entre el Gobierno Federal y los estados federados de cara a la celebración de las elecciones parlamentarias y presidenciales entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 fueron en aumento, en paralelo al retraso en los preparativos para su celebración y su posible aplazamiento. Al-Shabaab siguió siendo la principal amenaza para la seguridad y la estabilidad en un país al que se le sumó una triple crisis: la pandemia de la COVID-19, las langostas del desierto y las inundaciones. A partir de 2017 se ha observado un aumento de la actividad de al-Shabaab que se mantuvo durante 2020, según destacó la ONU. El grupo siguió ejerciendo un control efectivo sobre grandes partes de las zonas rurales del centro y sur de Somalia, pero en ninguno de los principales centros urbanos. Al-Shabaab siguió cometiendo ataques suicidas, con artefactos explosivos improvisados y con mortero, principalmente contra la AMISOM y el Ejército Nacional Somalí, instalaciones militares o edificios gubernamentales fuertemente protegidos, pero también instalaciones civiles como hoteles, restaurantes y cafés, lo que provocó muchas bajas civiles. Durante el año, se produjeron un promedio de 270 incidentes por mes, según la ONU, la mayoría

36. News: Minister of Peace Muferiat Kamil cautions federal, Tigray region governments to deescalate tension, engage in peaceful dialogue, EthioExplorer, 10 de octubre de 2020.

atentados perpetrados por al-Shabaab. ACLED señaló que se produjeron 3.117 víctimas mortales en el año 2020. Según la Oficina de la ONU en el país (UNSOM), entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020 se produjeron más de 600 víctimas mortales civiles y otras 700 personas resultaron heridas, de las cuales aproximadamente entre un tercio y la mitad fueron responsabilidad de al-Shabaab, y el resto fueron responsabilidad de las milicias de los clanes y de las fuerzas de seguridad del Estado. También continuaron las operaciones a gran escala de la AMISOM y el Ejército Nacional Somalí contra al-Shabaab. A partir de finales de 2017 se registró un aumento de los ataques aéreos de las fuerzas internacionales, principalmente de EEUU, en respuesta al incremento de la actividad de al-Shabaab. En paralelo, a pesar de las operaciones militares internacionales contra ISIS, la rivalidad entre al-Shabaab e ISIS y las pérdidas sufridas, el grupo afiliado de Estado Islámico en Somalia incrementó el número de atentados con bomba y asesinatos de personalidades prominentes. Estos se produjeron principalmente en Mogadiscio, Puntlandia y el sur de Somalia, donde ISIS mantiene una red de efectivos, simpatizantes y bases de entrenamiento. A pesar de los avances militares en la Operación Badbaabo (Supervivencia), al-Shabaab no ha dejado de atacar a las fuerzas del Ejército Nacional Somalí y de la AMISOM en las zonas recuperadas por estos. El número total de ataques aéreos en 2020 hasta noviembre ascendía a 55. Por otra parte, durante el año no se produjeron incidentes de piratería frente a las costas de Somalia, reducción vinculada a las operaciones marítimas de la comunidad internacional, pero sobre todo a la reducción de la demanda mundial de mercancías como consecuencia de la pandemia, lo que redujo el volumen de cargamentos transportados a través del océano Índico Occidental.

En lo referente a la AMISOM, en 2018 se elaboró un plan para orientar el proceso de transición de la misión, que entrañaba un traspaso gradual de sus funciones a los cuerpos de seguridad somalíes, con el objetivo de que estos asumieran la plena responsabilidad de la seguridad de Somalia para 2021 en paralelo al anuncio de la retirada de la misión africana a finales de 2021. Sin embargo, expertos y analistas han afirmado que el Gobierno de Somalia tendría graves dificultades para desempeñar su cometido sin el apoyo de AMISOM, y el Gobierno hizo un llamamiento a EEUU a que se replantea la decisión anunciada por el presidente Donald Trump de iniciar la retirada de sus entre 650

Diversos analistas destacaron que la estrategia antiterrorista estadounidense y de la comunidad internacional, con el beneplácito del Gobierno somalí, centrada en la securitización de las respuestas ante las amenazas a la paz y la seguridad, se ha revelado como un fracaso y no ha reducido el impacto de las actividades de al-Shabaab

y 800 efectivos del país.³⁷ No obstante, el relevo de Trump al frente de la Casa Blanca en 2021 podría hacer cambiar esta decisión. Numerosas voces señalaron que esta decisión, junto a la retirada de tropas por parte de Kenia y de Etiopía, podría provocar un vacío de seguridad aprovechado por al-Shabaab. Ante la grave situación interna, Etiopía llevó a cabo la retirada de 3.000 de sus soldados estacionados en Somalia, aunque estos no formaban parte de los 5.000 que se encuentran bajo mandato de la AMISOM.³⁸ Kenia anunció que haría depender la futura retirada de sus tropas a la mejora de la estabilidad de Somalia. En este sentido, cargos de las Fuerzas Armadas de Kenia que han participado en AMISOM señalaron que era necesario un cambio de estrategia en la guerra en Somalia, ya que las acciones militares se estaban demostrando como inefectivas ante un grupo que basa su fuerza en la fe en el Islam. Un informe del Grupo de Expertos de la ONU en Somalia señaló que al-Shabaab, a pesar de las sanciones que pesan sobre el grupo, había generado alrededor de 13 millones de dólares entre diciembre de 2019 y agosto de

2020 vía extorsión y tributación en zonas bajo su control e inversiones realizadas por el grupo.³⁹ Diversos analistas han destacado que la estrategia antiterrorista estadounidense y de la comunidad internacional en su conjunto, con el beneplácito del Gobierno somalí, centrada en la securitización de las respuestas ante las amenazas a la paz y la seguridad internacional, se ha revelado como un fracaso porque no ha reducido el impacto de las actividades de al-Shabaab y ha causado numerosas víctimas civiles. En este sentido, han surgido diversas voces reclamando una aproximación a al-Shabaab para promover un proceso de negociación similar al que se ha celebrado en Afganistán con los talibanes.

Finalmente, en lo referente al impacto de la crisis en las poblaciones civiles, el número de personas desplazadas internas aumentó de 1,1 millones de personas en agosto de 2016 a 2,6 millones de personas para diciembre de 2019, de las cuales casi dos tercios eran menores, amenazados por el reclutamiento forzoso por parte de al-Shabaab y por la violencia sexual de todos los actores implicados en el conflicto. Los principales factores de desplazamiento interno fueron el conflicto y la inseguridad, así como las sequías y las inundaciones. Muchos desplazados internos se trasladaron de las zonas rurales a las urbanas. Mogadiscio y Baidoa, la capital del Estado Sudoccidental, donde grandes extensiones de territorio

37. La mayoría de estos cuerpos especiales, dedicados a la formación del Ejército de Somalia así como a operaciones clandestinas contrainsurgentes, se establecieron en Somalia durante el mandato de Trump. Este anuncio podría estar condicionado por la celebración de elecciones en el país en noviembre, según analistas. Véase Wadhams, Nick, y Jacobs, Jennifer, "Trump Demands a Plan to Withdraw U.S. Troops From Somalia", *Bloomberg*, 13 de octubre de 2020.

38. Simon Marks, "Ethiopia Withdraws Thousands of Troops From Neighboring Somalia", *Bloomberg*, 13 de noviembre de 2020.

39. Carta dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) relativa a Somalia, S/2020/949, 28 de octubre de 2020.

están en poder de al-Shabaab, acogieron el mayor número de personas desplazadas internas en el país. Por otra parte, activistas y periodistas siguieron viendo amenazada su labor. En este sentido, a finales de 2019, la activista por los derechos de la mujer y trabajadora humanitaria, Almaas Elman, fue asesinada a tiros en Mogadiscio, unas horas después de haber publicado en los medios sociales el discurso pronunciado por su hermana en Naciones Unidas acerca de la importancia de la reconciliación.

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB (anteriormente FOREBU), FNL
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país.

Durante el año persistieron la violencia y la inseguridad, los ataques esporádicos por parte de actores armados y las acciones de contrainsurgencia gubernamentales, así como actos de represión contra la oposición política por parte de los cuerpos de seguridad y los Imbonerakure, el ala juvenil del partido en el poder, el Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD). También se celebraron elecciones bajo acusaciones de fraude y represión contra la oposición, y el 8 de junio murió el presidente Pierre Nkurunziza, generando un breve vacío de poder.

En lo concerniente al conflicto armado que padece el país, durante el año persistió el clima de violencia e inseguridad como consecuencia de las acciones de los cuerpos de seguridad y, en especial, de los Imbonerakure, que actuaron con total impunidad, cometiendo ejecuciones extrajudiciales, ataques contra la población civil, arrestos arbitrarios, abusos y acciones de violencia indiscriminada contra la oposición política que causaron 317 víctimas mortales durante el año, según ACLED. El principal objetivo fueron los partidarios del partido Congrès National pour la Liberté (CNL, antiguo grupo armado y posteriormente partido FNL y actualmente principal partido de la oposición), acciones que fueron en aumento conforme se aproximó la cita electoral. En este sentido, el 17 de septiembre se hizo público un informe de la Comisión de Investigación de la ONU en el que condenó la existencia de ejecuciones sumarias, arrestos y detenciones arbitrarias, violencia sexual, torturas y malos tratos y numerosos casos de violaciones de las libertades civiles durante los últimos meses, tanto antes como después de las elecciones, lo que fue rechazado por Ndayishimiye, reiterando su exigencia de finalización de las investigaciones de la situación de derechos humanos del país. El informe destacó la reducción del espacio político en el país, la persistencia de la impunidad y que la tendencia no era halagüeña. Además, remarcó que Ndayishimiye había promovido a altos cargos militares involucrados en graves abusos de derechos humanos en puestos de responsabilidad civiles en la administración local. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU extendió el mandato de la Comisión de Investigación sobre Burundi por un año en octubre.

Tras la renovación de las sanciones por parte de la UE sobre Burundi en septiembre, el ministro de Exteriores Albert Shingiro, el 9 de octubre, convocó a todos los diplomáticos extranjeros y exigió a sus respectivos países suspender las sanciones. El 17 de noviembre el Gobierno ordenó el cierre de la oficina del enviado especial de la ONU en el país, a pesar de que el secretario general de la ONU había recomendado el 3 de noviembre la extensión de su mandato hasta finales de 2021. El Gobierno argumentó que la presencia de la oficina mantenía un clima de psicosis y crisis artificial orquestado por actores extranjeros. Por otro lado, las Fuerzas Armadas burundesas llevaron a cabo operaciones militares en el país en persecución de grupos insurgentes, la oposición política del CNL y civiles tutsis, y realizaron incursiones en Uvira, en la provincia congoleesa de Kivu Sur, en persecución de miembros del grupo armado RED-Tabara, en diferentes momentos del año, causando decenas de víctimas mortales supuestamente miembros de la insurgencia. RED-Tabara en septiembre reivindicó los diferentes ataques cometidos en diversas provincias del país entre agosto y septiembre. El balance de víctimas mortales según el grupo se elevaría al menos a 15 partidarios del CNDD-FDD y a 28 miembros de los cuerpos de seguridad, acciones en las que al menos 40 otros

miembros de las Imbonerakure y cuerpos de seguridad habrían resultado heridos, y tres miembros de la insurgencia habrían resultado muertos y otro capturado en el transcurso de las operaciones.⁴⁰ Además, se produjeron diversos ataques no reivindicados que acrecentaron los rumores de la posible emergencia de nuevos grupos armados en el país, según señaló a principios de septiembre uno de los pocos medios de comunicación independientes del país, IWACU. Otros analistas afirmaron que estas acciones responden a la voluntad de la insurgencia de hacerse visible ante el nuevo presidente para forzar algún tipo de respuesta. Si bien se destacó que no tendría capacidad para representar una amenaza real para el nuevo Gobierno, sí que pondría de manifiesto una mayor capacidad de cometer acciones bélicas que en los últimos años. Fuentes del Ejército ratificaron la existencia de estos pequeños grupos armados en diversas provincias y la continuación de las operaciones militares para neutralizarlos. Radio Publique Africaine el 3 de septiembre señaló que los cuerpos de seguridad habrían incorporado a miembros de las Imbonerakure para combatir a la insurgencia y perseguir la oposición política. En diciembre, en un informe conjunto sobre violaciones de derechos humanos, 15 organizaciones de la sociedad civil registraron 821 detenciones arbitrarias, 368 ejecuciones extrajudiciales, 182 casos de tortura y 59 desapariciones forzadas en 2020. El informe identificó a miembros de la CNL y miembros de la comunidad tutsi como las principales víctimas, y a las fuerzas de seguridad y al ala juvenil Imbonerakure del partido gobernante CNDD-FDD como los principales perpetradores. A pesar de esto, el Gobierno consiguió el éxito diplomático de salir de la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre.

El vicepresidente Gaston Simdimwo el 7 de abril confirmó la celebración de las elecciones el 20 de mayo a pesar de la pandemia de la COVID-19, y el 15 de abril canceló la participación de la diáspora en las elecciones, argumentando que la comisión electoral no disponía de suficiente capacidad para organizar las votaciones en el extranjero como consecuencia de la crisis. El 20 de mayo se celebraron elecciones presidenciales y legislativas en Burundi, después de un período de campaña marcado por las denuncias de violencia y acoso hechas por la oposición y actores de la sociedad civil así como por la detención de candidatos y centenares de partidarios del CNL. La oposición también denunció que sus representantes quedaron excluidos de varias mesas de votación. El 25 de mayo, la Comisión Electoral Nacional Independiente anunció que el general retirado, Evariste Ndayishimiye, candidato del partido gobernante, el CNDD-FDD, había ganado las elecciones presidenciales con el 68 % de los votos. En las elecciones legislativas, el CNDD-FDD ganó

Se celebraron elecciones en Burundi bajo acusaciones de fraude y represión contra la oposición y el 8 de junio murió el presidente Pierre Nkurunziza, generando un breve vacío de poder

72 de los 100 escaños de la Asamblea Nacional. El candidato presidencial y líder del CNL, Agathon Rwasa, rechazó los resultados provisionales alegando fraude e irregularidades generalizadas, e interpuso un recurso ante el tribunal constitucional el 28 de mayo. El recurso fue desestimado el 4 de junio. El CNL anunció el 28 de mayo que las autoridades habían arrestado a 600 de sus partidarios durante la campaña y en la jornada electoral, limitando su presencia como apoderados y observadores durante la jornada. Las autoridades aplicaron una cuarentena de 14 días vinculada a la pandemia de la COVID-19 a los observadores electorales de la organización regional EAC, obstaculizando así sus funciones.

Por otro lado, el 8 de junio murió Pierre Nkurunziza, supuestamente por un ataque al corazón, aunque diversos analistas señalan la posibilidad de que hubiera muerto como consecuencia de haber contraído la COVID-19. La muerte del histórico dirigente del CNDD-FDD y presidente de Burundi desde 2005, generó un vacío de poder que el Tribunal Constitucional resolvió acelerando la toma de posesión del presidente electo Ndayishimiye, que juró su cargo el 18 de junio. En su discurso inaugural, destacó aspectos tales como la necesidad de entablar un diálogo con la oposición en el país, de poner fin a los abusos cometidos por el Gobierno precedente, y garantizar el regreso de la población refugiada y de otros burundeses en el exilio. Sin embargo, sus acciones en este sentido fueron continuistas con las del anterior Gobierno. El 30 de junio prestó juramento un nuevo gabinete encabezado por Alain Guillaume Bunyoni como primer ministro, compuesto por 15 ministros y dominado por representantes del ala dura del régimen. Cabe destacar que pesan sanciones internacionales contra Bunyoni y el ministro de Interior, Gervais Ndirakobuca, por su implicación en actos de represión y violencia contra civiles desde 2015. Una coalición opositora en el exilio condenó la falta de representación de la minoría tutsi en el nuevo Gobierno y entre los gobernadores regionales -un ministro y tres gobernadores.

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, RPRC, MPC, UPC, MLCJ), milicias anti balaka, milicia 3R, grupo armado ugandés LRA, otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA
Intensidad:	2
Evolución:	↑

40. AFP, Burundi rebel group claims attacks in new offensive, AFP, 18 de septiembre de 2020.

Síntesis:

Desde su independencia en 1960, la situación en la RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, en la que participan combatientes extranjeros, tomó el poder en marzo de 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los últimos 10 años había combatido a estas insurgencias del norte. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Dlotodia, para controlar a esta coalición rebelde, que cometió graves violaciones de los derechos humanos, saqueos, ejecuciones extrajudiciales, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana ("anti balaka"). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del anterior presidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizado. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo que condujera a una transición negociada, forzando un gobierno de transición que condujo a las elecciones de 2015-2016. Tras un breve periodo de reducción de la inestabilidad y de diferentes acuerdos de paz, los grupos armados siguieron controlando la mayor parte del país. Ni los reducidos cuerpos de seguridad centroafricanos (que apenas controlaban Bangui) ni la MINUSCA, fueron capaces de revertir la situación, por lo que se promovieron nuevos contactos de la mano de la UA y de la CEEAC, que contribuyeron a alcanzar el acuerdo de paz de febrero de 2019.

Durante el año se incrementaron las actividades de algunos grupos armados en el conjunto del país, que abandonaron la implementación del acuerdo de paz de 2019, causando centenares de víctimas mortales, muchas de las cuales población civil. Por otra parte, se produjo un aumento de la violencia arraíz de la celebración de las elecciones generales del 27 de diciembre. Según ACLED, el balance de víctimas mortales a finales de 2020 fue de 420, cifra inferior a 2019, que fue de 594, siguiendo la tendencia descendente de años anteriores (1.187 registradas en 2018 y 2.011 de 2017).

El clima político estuvo dominado por la preparación de las elecciones generales, cuya primera ronda estaba prevista para el 27 de diciembre, con elecciones legislativas y locales y una posible segunda ronda de elecciones presidenciales a principios de 2021, y se caracterizó por la tensión y la desconfianza en un contexto de retrasos con respecto al calendario electoral, según señaló el informe del secretario general de la ONU en octubre. En junio, el Tribunal Constitucional rechazó la enmienda de la Constitución propuesta por el Gobierno para prorrogar

los mandatos del presidente y el legislativo en ejercicio, en caso de un suceso de fuerza mayor que retrasara la celebración de las elecciones, señalando que cualquier demora con respecto a los plazos constitucionales debería derivarse de amplios consensos y consultas de carácter nacional. Desde entonces, algunos partidos políticos y la sociedad civil pidieron al Gobierno que convocara un diálogo nacional sobre el calendario electoral. En septiembre, el presidente, Faustin-Archange Touadéra, organizó una serie de reuniones sobre el proceso electoral con partidos de la oposición, ex jefes de Estado y otros partidos políticos, la sociedad civil y líderes religiosos, entre otros. La Coalition de l'Opposition Démocratique 2020 (creada en febrero y compuesta por 16 partidos políticos de la oposición) se negó a asistir a la reunión celebrada el 17 de septiembre y acusó al presidente Touadéra de imponer unas elecciones precipitadas y mal preparadas, por lo que exigieron su aplazamiento. El 23 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó una ley que modificó el código electoral y extendió un mes el plazo de registro de votantes, debido a los retrasos existentes como consecuencia de la inseguridad y la obstrucción por parte de varios grupos armados, entre ellos el grupo 3R (Retour, Réclamation et Réhabilitation) y diversos grupos anti balaka. Si bien esta extensión del plazo no afectaba la fecha de las elecciones del 27 de diciembre, varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU expresaron su preocupación de que el proceso podría estar en peligro si había más demoras. Las enmiendas al código electoral de la Asamblea Nacional del 23 de septiembre no incluyeron una disposición que hubiera permitido que aproximadamente 250.000 personas refugiadas centroafricanas fuera del país votaran en las elecciones, a pesar de las recomendaciones de la comunidad internacional. El presidente Touadéra afirmó que permitir su participación presentaba obstáculos insuperables, sin dar detalles.

La comisión electoral registró a principios de noviembre 22 candidaturas a la presidencia, entre ellas tres mujeres, entre las que destacaban el presidente Touadéra, del Mouvement des Coeurs Unis; el ex-presidente François Bozizé, de Kwa Na Kwa; la ex presidenta Catherine Samba-Panza, como independiente; y el ex primer Ministro Anicet Georges Dologuélé. En relación a la candidatura de Bozizé, hubo controversia debido a su elegibilidad debido a que había dudas sobre si su retorno del exilio se había producido cumpliendo la ley electoral que establece un mínimo de un año de residencia en RCA. Finalmente, después de meses de incertidumbre sobre la candidatura del ex presidente Bozizé, el 3 de diciembre el Tribunal Constitucional rechazó su solicitud, citando una orden de arresto internacional y sanciones de la ONU en su contra. Una coalición de seis grupos armados, todos signatarios del acuerdo de paz de febrero de 2019 y algunos aliados de Bozizé, anunció una movilización contra el Gobierno y el proceso electoral y a mediados de diciembre se apoderó de partes de las prefecturas de Lobaye, Ouham, Ouham-Pendé, Nana Gribizi y Ombella M'Poko en el

oeste, centro y sur, bloqueando las principales rutas de suministro a Bangui y llevando a cabo intensos combates con el Ejército y la MINUSCA. El Gobierno acusó a esta coalición de intentar perpetrar un golpe de Estado a favor de Bozizé.

Por otro lado, la implementación del Acuerdo Político por la Paz y la Reconciliación de RCA de 2019 sufrió dificultades y retrasos, ya que varios grupos armados continuaron violando el acuerdo y obstruyendo la restauración de la autoridad gubernamental en el conjunto del país.⁴¹ Además, se produjo un resurgimiento de la violencia en el norte y noroeste de RCA y persistió en otras partes del país, aunque la situación en el noreste se estabilizó después de un repunte de la violencia a principios del año. Los ataques entre grupos armados, las acciones de represalia y ejecuciones de civiles, las operaciones por parte de la MINUSCA y las Fuerzas Armadas centroafricanas fueron constantes y en aumento. Las razones que explican el reinicio de los combates son diversas. Según la organización ICG remiten a la decepción por parte de algunos grupos armados con las consecuencias del acuerdo de paz, así como a la incapacidad de los garantes del acuerdo y la MINUSCA de hacer respetar el pacto.⁴² A su vez, también remiten, según la organización, a enfrentamientos por el control de las vías de tráfico y comercio transfronterizo y la trashumancia, territorios y explotaciones mineras, que adquirieron una dimensión étnica por la movilización de las respectivas comunidades.

El 25 de abril siete grupos armados firmantes del acuerdo de paz de febrero de 2019 anunciaron la suspensión de su participación en el Gobierno y en los mecanismos de implementación del acuerdo de paz, acusando al presidente Touadéra de incumplir sus compromisos. Días antes, el presidente Touadéra y el primer ministro, Firmin Ngrébada, se habían reunido, respectivamente, con los líderes de los grupos armados UPC y FPRC, sin éxito. El 3R acusó al Gobierno de incumplir sus compromisos con relación a los preparativos electorales y amenazó con interferir en las elecciones, y el 5 de junio suspendió su participación en los mecanismos de seguimiento del Acuerdo Político incrementando las acciones contra los cuerpos de seguridad, la MINUSCA y la población civil. El 15 de julio se produjo la explosión de una mina antitanque al paso de un vehículo de la MINUSCA, hiriendo a dos cascos azules. La MINUSCA señaló al grupo armado 3R como responsable, grupo que habría recibido el suministro y la formación para instalarlas de la compañía rusa Wagner, según fuentes militares centroafricanas. Fuentes militares confirmaron que era la primera vez que se constataba la presencia de

minas antipersona en el país. El UPC, en un comunicado el 1 de agosto, también anunció que abandonaba sus compromisos con el acuerdo, tras una reunión con el primer ministro en Bangui. El 20 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones (prohibición de viajar y congelación de bienes) al líder del FDPC, Abdoulaye Miskine, acusado de reclutar combatientes, y el 5 de agosto impuso sanciones al líder del 3R, Sidiki Abbas, acusándolo de estar involucrado en tráfico de armas y ejecuciones de civiles. El Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de la MINUSCA hasta el 15 de noviembre de 2021 y también de las sanciones, incluyendo el embargo de armas, hasta julio de 2021. La UE estableció, en diciembre de 2019, la EU Advisory Mission in CAR (EUAM RCA), misión civil para apoyar la reforma del sector de la seguridad, misión que retrasó su inicio como consecuencia de la COVID-19 y entró en vigor en agosto de 2020, y que se suma a la otra misión de la UE existente en el país, la EUTM RCA, de carácter militar.⁴³

Durante el año se incrementaron las actividades de algunos grupos armados en el conjunto de la RCA y se produjo un aumento de la tensión política a raíz de la celebración de las elecciones generales del 27 de diciembre

Paralelamente, se incrementó la preocupación por el papel de Rusia en el país. Según la agencia The Africa Report,⁴⁴ en 2018 la RCA alcanzó acuerdos de extracción de minerales con la empresa rusa Lobaye Invest Sarlu, que a mediados de 2020 ya estaba presente en al menos cuatro ciudades. Rusia empezó a operar un aeropuerto y a entrenar a los cuerpos de seguridad centroafricanos. En marzo, 170 miembros de la compañía privada de seguridad Wagner Group llegaron al país para contribuir a la formación de los cuerpos de seguridad, y otros 500 aparecieron en la frontera sudanesa en julio.⁴⁵ Se sospecha que el grupo Wagner estaría financiado por el hombre de negocios ruso Yevgeny Prigozhin, aliado del presidente Vladimir Putin. Esta organización estaría actuando con total opacidad en el continente. En julio de 2018, el grupo fue acusado de ejecutar a tres periodistas rusos que investigaban las actividades de la organización en el país. Según diversas fuentes, Rusia planea establecer bases militares en seis países africanos, entre ellos la RCA y Sudán. Entre 2015 y 2020, Rusia ha completado acuerdos de cooperación militar con 21 países africanos.

En lo alusivo a la situación humanitaria, según OCHA, esta siguió siendo preocupante. Aproximadamente 2,6 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria y 2,36 millones de personas se encontraban en una situación de inseguridad alimentaria. Las tensiones entre comunidades, los ataques contra civiles y una serie de ataques contra los trabajadores humanitarios dificultaron el acceso. Además, la pandemia de la COVID-19 agravó la situación socioeconómica del país.

41. Véase el resumen sobre RCA en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

42. International Crisis Group, *Réduire les tensions électorales en République Centrafricaine*, International Crisis Group, núm.296, 10 de diciembre de 2020.

43. ZIF kompakt, New EU advisory mission operational in the Central African Republic (CAR), 27 de agosto de 2020.

44. Olivier, Mathieu, "Russia's murky business dealings in the Central African Republic", *The Africa Report*, 23 de agosto de 2019.

45. ADF, Mine Attack Stokes Fear Of Russia Destabilizing CAR, 23 de septiembre de 2020.

Si bien el número total de personas infectadas con el coronavirus es bajo (a 10 de octubre, había oficialmente 4.850 casos), RCA tiene una capacidad limitada para detectar positivos, lo que enmascara potencialmente las cifras reales. Según la OMS, la RCA es uno de los países menos preparados a nivel mundial para enfrentar el brote de la COVID-19.

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de éste en 1997. Posteriormente, en 1998, Burundi, Rwanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio rwandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares del antiguo grupo armado CNDP integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, llamada M23, apoyada por Rwanda. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada. A pesar de ello persiste el clima de inestabilidad y violencia.

La RDC siguió afectada por un clima de violencia e inestabilidad política derivada de las tensiones en el seno de la coalición gobernante, que se rompió en diciembre.⁴⁶ A esto se le sumó la persistencia de la violencia debido a la presencia de numerosos grupos armados en el este del país. Estos grupos continuaron llevando a cabo acciones armadas entre ellos por el control del territorio, las vías de comunicación y el acceso a los recursos naturales, viéndose implicados en enfrentamientos con las

OCHA afirmó que RDC albergaba a la mayor cifra de población desplazada interna de África, 5,5 millones de personas, de las cuales 3,2 millones eran menores

FARDC, y cometiendo graves abusos contra la población civil. La situación en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur (este) siguió marcada por la presencia y actividades de las diferentes milicias Mai Mai, CODECO, las FDLR y sus escisiones, así como por la extensión del conflicto armado de Burundi al interior de la RDC debido a la presencia de actores armados burundeses. Cabe destacar la escalada del conflicto armado derivado de las actividades del grupo de origen ugandés ADF que opera especialmente en la zona norte de la provincia de Kivu Norte, aunque éste expandió sus ataques a la provincia de Ituri.⁴⁷ Además, esta provincia sufrió una escalada de la violencia como consecuencia de los ataques del grupo CODECO, cuyos combatientes provienen en su mayoría de la etnia lendu y están en conflicto con miembros de la tribu hema por los recursos naturales y la propiedad de la tierra. Esto ocurrió a pesar de la acción concertada de los excombatientes congoleños para promover el desarme, la desmovilización y la reintegración. Algunos combatientes de CODECO han firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, pero varias facciones siguen combatiendo.

En octubre, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó el informe sobre la situación de los derechos humanos en la RDC, señalando varios episodios que podrían constituir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, así como observó que persistieron las amenazas contra defensores de derechos humanos, miembros de la sociedad civil y periodistas, detención arbitraria y acoso. El informe documentó 857 violaciones y abusos de derechos humanos durante el período de 12 meses que comenzó en mayo de 2019. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país anunció el 5 de agosto que se había incrementado el número de víctimas mortales por parte de los grupos armados del este del país durante los seis primeros meses de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019. En marzo de 2020, según la OCHA, RDC albergaba a la mayor cifra de población desplazada interna de África, 5,5 millones de personas, de los cuales 3,2 millones eran menores. En las zonas en las que había grupos armados activos y operaciones militares en curso, el acceso humanitario se vio seriamente obstaculizado. Los problemas de acceso, como los incidentes relacionados con la seguridad sufridos por el personal humanitario y el cobro ilegal de impuestos, siguieron afectando a la prestación de asistencia humanitaria. Así mismo siguió activo el debate en torno a la retirada progresiva de la MONUSCO y las funciones encomendadas en su mandato. En la resolución 2502 de 2019 se solicitó esta estrategia como preparación para el eventual retiro gradual de la MONUSCO, que plantea una concentración de las actividades de la misión en las provincias donde persiste el conflicto: Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri.

46. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 2 (Tensiones).

47. Véase el resumen sobre RDC (este-ADF) en este capítulo.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congolese que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenia y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda, gozaba también del apoyo de Kenia y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congolese, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil.

Durante el año se produjeron intensas operaciones militares de las Fuerzas Armadas (FARDC) en el este del país en un esfuerzo por desalojar a los grupos armados de la zona, en particular las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF). Desde el 30 de octubre de 2019, las FARDC han liderado una nueva ofensiva creciente contra las ADF, intensificando los combates que generaron un fuerte impacto en la población civil, especialmente debido a las contraofensivas de las ADF. El movimiento armado se dividió en pequeños grupos, algunos de los cuales se expandieron a otras áreas, en particular a los territorios de Irumu y de Mambasa, en la vecina provincia de Ituri, donde se produjo una escalada de la violencia. En diciembre de 2019 las ADF ejecutaron a 97 civiles como represalia por las operaciones iniciadas en octubre. El año se inició con avances por parte de las FARDC, que consiguieron capturar el feudo del ADF, Madina, el 9 de enero, a costa de la muerte de 40 militantes del grupo y 30 soldados, y el incremento de las represalias del grupo contra la población civil días después con la ejecución de decenas de civiles en el territorio de Beni. Las acciones ofensivas y de represalia de las ADF, así como de las operaciones militares del Ejército, siguieron durante todo el año.

En julio la ONU señaló que las ADF habían intensificado sus ataques contra la población civil en los últimos 18 meses desde enero de 2019, expandiendo sus ataques más allá de sus áreas de acción tradicionales. Estas acciones habrían provocado más de 1.000 víctimas mortales entre enero de 2019 y junio de 2020, y podrían ser calificadas de crímenes de guerra y contra la humanidad, según destacó el informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en RDC.⁴⁸ Los impactos de los abusos cometidos por las ADF fueron sistemáticos y brutales. Los asaltantes utilizaron artillería pesada en sus ataques contra las localidades, como morteros, además de AK47 y machetes; a menudo incendiaron localidades enteras, centros de salud y escuelas, y secuestraron a hombres, mujeres y menores. El modus operandi habitual de sus ataques indicaba que había una clara intención de no dejar supervivientes. Según el informe, además de las víctimas mortales, las ADF habrían dejado otros 176 heridos, habrían secuestrado 717 personas, reclutado a 59 menores, y una escuela, siete centros de salud y decenas de casas habrían sido atacadas y saqueadas, provocando el desplazamiento forzado de miles de personas. Además, las FARDC también serían responsables de haber cometido graves violaciones de los derechos humanos, particularmente desde el inicio de las operaciones en octubre de 2019. En concreto, los cuerpos de seguridad serían responsables de haber ejecutado 14 civiles, de causar heridas a otros 49, así como de arrestos arbitrarios y la detención de 297 civiles. Estas violaciones habrían reforzado la desconfianza de la población hacia los cuerpos de seguridad. Finalmente, cabe destacar que cientos de prisioneros escaparon durante un ataque que la policía atribuyó a las ADF el 21 de octubre en Beni. El grupo armado Estado Islámico (ISIS) se atribuyó la responsabilidad de varios de los ataques cometidos por las ADF, pero la MONUSCO aún no ha encontrado ninguna prueba de una conexión directa entre ISIS y las ADF.

Sudán (Darfur)	
Inicio:	2003
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, UNAMID
Intensidad:	2
Evolución:	↑

48. MONUSCO y OHCHR, *Report on violations of human rights and international humanitarian law by the Allied Democratic Forces armed group and by members of the defense and security forces in Beni territory, North Kivu province and Irumu and Mambasa territories, Ituri province, between 1 January 2019 and 31 January 2020*, ONU, julio de 2020.

Síntesis:

El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes janjaweed. La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una facción del SLA en mayo del 2006, la violencia se recrudeció, además de generar la fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en el conflicto sudanés. A esta dimensión se suma la tensión intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas), en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, fue integrada en el año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de múltiples ataques e incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al personal humanitario.

La región de Darfur continuó siendo el epicentro de la violencia armada en Sudán, si bien durante el año también se registraron incidentes armados en la región de Kordofán Sur y en el este del país. El conflicto armado en la región de Darfur vivió un deterioro de su situación de seguridad en relación con el año anterior. Según los datos facilitados por ACLED, durante el año se produjeron en la región 555 muertes producidas por enfrentamientos, ataques contra civiles y violencia remota. Ello significa un incremento de casi el doble de muertes en relación a las registradas en 2019 (268), aunque los datos siguen mostrando una desescalada si se compara con las 859 muertes violentas registradas durante el 2018, las 996 en 2017 o las 2.286 en 2016. La violencia en Darfur sigue siendo muy superior al otro escenario de conflictividad armada presente en el país, situado en Nilo Azul y Kordofán Sur, en donde se registraron a lo largo del año un total de 122 víctimas mortales, según datos facilitados por ACLED. A su vez, según los datos de ACNUR de mediados de 2020, en Sudán 772.000 personas huyeron de sus hogares y se refugiaron fuera de las fronteras nacionales, principalmente debido al conflicto armado en Darfur. El número de personas desplazadas internas a mediados de 2020 se situó en los 1,9 millones. Estas cifras colocan al país en el octavo puesto a nivel global, y el cuarto en África en relación al número de personas desplazadas por la violencia. De forma paralela, Sudán acoge a 1.058.800 personas refugiadas provenientes de las crisis abiertas en los países vecinos –a los que hay que añadir los nuevos refugiados no contabilizados, procedentes de la crisis abierta en Etiopía a finales de año– ubicando al país en el sexto puesto a nivel global de países de acogida, el segundo en África por detrás de Uganda.⁴⁹

Si bien el proceso de negociación de paz que mantuvo durante el año el Gobierno con diferentes grupos armados de la región de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul en Juba, capital de Sudán del Sur, concluyó con un histórico acuerdo de paz firmado en agosto,⁵⁰ este no logró detener los episodios de violencia en Darfur. Ello se debió, en parte, a la **negativa a sumarse a las negociaciones de paz la facción del Movimiento de Liberación de Sudán comandada por Abdel Wahid al Nur (SLM/A-AW)**, así como al mantenimiento de disputas y enfrentamientos intercomunitarios en la zona. En relación a la primera, si bien el SLM/A-AW, tras el llamamiento internacional realizado por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para lograr un alto el fuego que permita la aplicación de las medidas sanitarias y evitar la propagación del COVID-19, comunicó el 30 de marzo el cese de la violencia en Darfur, reiteró su rechazo a unirse al proceso de paz. Los enfrentamientos armados entre la facción liderada por al Nur y las fuerzas de seguridad remitieron durante un periodo, pero se reanudaron entre los meses de octubre y noviembre, principalmente en el área de Jebel Marra.

Por otro lado, en relación a **enfrentamientos y disputas intercomunitarias**, durante el año se siguieron registrando diferentes episodios violentos en varios puntos de Darfur. El año comenzó con la visita de una delegación del Gobierno, que incluía al primer ministro, Abdalla Hamdok, y al vicepresidente del Consejo Soberano de Sudán y líder de la Rapid Support Force, Mohamed Dagalo –conocido como Hemedti– a El-Geneina, capital de Darfur Occidental. La visita se realizaba en el contexto de resolver el conflicto entre miembros de grupos árabes y la tribu masalit que dejó un balance de más de 60 muertos a finales de 2019. La mediación, sin embargo, no detuvo los choques violentos entre diferentes grupos, que se siguieron produciendo a lo largo del año en Darfur Norte, Darfur Occidental y Darfur Sur. Algunos de estos ataques se produjeron con el objeto de detener el regreso de desplazados internos y refugiados a tierras tomadas por la fuerza bajo la presidencia de Omar al-Bashir.

En relación con la **misión híbrida de la ONU y la UA en Darfur (UNAMID)**, el Consejo de Seguridad de la ONU prosiguió con la hoja de ruta de reducción y finalización de la misión en el país, según lo acordado por el organismo en sus resoluciones 2363 (2017) y 2429 (2018). Durante el año, en la resolución 2525 (2020), el Consejo prorrogó el mandato de la UNAMID por dos meses, hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha de cierre de la misión. En la misma resolución, el Consejo aprobó una nueva misión de asistencia de la ONU en Sudán, la **Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS)**, que estará operativa a principios de 2021, y cuyas funciones serán las de apoyar la transición

49. UNHCR, *Mid-year trends 2020*, 30 de noviembre de 2020.

50. Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

en el país, la consolidación de la paz y la protección de los civiles, especialmente en Darfur. El Gobierno de transición de Sudán dejó clara su posición sobre la finalización de la UNAMID el 31 de diciembre, afirmando que asumirá la plena responsabilidad de la protección de los civiles. El anuncio del fin de la UNAMID, desplegada desde el año 2007, generó múltiples protestas contra su conclusión por parte de personas desplazadas por el conflicto de Darfur, quienes solicitaron su permanencia para garantizar su protección hasta que se complete el proceso de paz.

De forma paralela, el Consejo de Seguridad de la ONU continuó durante el año respaldando los esfuerzos para aumentar la participación de las mujeres en las actividades de mediación y prevención de conflictos, en particular mediante la Red de Mujeres Africanas en la Prevención de Conflictos y la Mediación. La agencia ONU-Mujeres siguió prestando apoyo a la Red, que incluyó el despliegue de integrantes de la misma en Etiopía, Sudán y Sudán del Sur. Por otro lado, la organización de mujeres con sede en Kampala, Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA), denunció que los casos de violencia sexual en Darfur, principalmente en los campos de desplazados internos del norte, habían aumentado un 50% entre marzo y junio a partir de la aplicación de las medidas decretadas anti COVID-19. La organización realizó un llamamiento al gobierno de transición para establecer mecanismos de prevención, justicia y protección de civiles, especialmente las mujeres.

Finalmente, en otro evento significativo ocurrido durante el año, en el mes de junio la Corte Penal Internacional informó que el ex líder de las Fuerzas de Defensa Popular y milicias Janjaweed, Ali Kushayb, buscado por presuntos crímenes de guerra en Darfur entre 2003-2004, había sido detenido y entregado por la República Centroafricana el 7 de junio, siendo trasladado a La Haya.

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS.
Intensidad:	3
Evolución:	↑

51. UNHCR, *Mid-year trends 2020*, 30 de noviembre de 2020.

Síntesis:

El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente Riek Machar (SPLA-IO), desatando una nueva fase de violencia que se mantiene hasta el presente. En 2015 se logró la firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el SPLA-IO (ratificándose en 2018), sin embargo, las resistencias de las partes signatarias a implementarlo, así como el surgimiento de otros grupos armados y milicias comunitarias, han mantenido la guerra en el país.

Durante el año el país padeció una dinámica de violencia creciente en relación al año anterior, debido a la dificultad en la implementación de algunas cláusulas del acuerdo de paz de 2018, registrándose múltiples incidentes armados relacionados con disputas intercomunitarias en la región central del país, así como a enfrentamientos entre tropas gubernamentales y grupos no signatarios del Acuerdo de Paz, principalmente en la región sureña de Ecuatoria Central. Según datos de ACLED, durante el 2020 se registraron un total de 748 episodios de violencia armada en el país que costaron la vida a 2.252 personas, lo cual indica un importante incremento del número de víctimas mortales en relación a las 1.499 registradas en el 2019. De forma paralela, la emergencia humanitaria se mantuvo en el país. Según datos facilitados por ACNUR en su informe que cubre hasta mediados de 2020, el país registró 2.278.000 personas que huyeron de la violencia y se refugiaron en países vecinos (principalmente en Uganda y Sudán). Estos datos sitúan a Sudán del Sur como la mayor crisis de personas refugiadas en África y la cuarta más grande del mundo, por detrás de Siria, Venezuela y Afganistán. A su vez, el número de personas desplazadas internas a mediados de 2020 se situaba en los 1,6 millones, de las cuales 125.300 se habían producido entre enero y junio de 2020, periodo en el cual también 107.000 personas desplazadas internas volvieron a sus hogares.⁵¹

Si bien la firma del acuerdo de paz denominado *Revitalised Agreement on the Resolution of the*

Conflict in South Sudan (R-ARCSS) en septiembre de 2018 puso fin a los enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas y el principal grupo rebelde, el SPLA-IO encabezado por Riek Machar, nuevos frentes y organizaciones armadas siguieron desestabilizando el país, principalmente en las regiones del sur y centro. Durante el 2020 se iniciaron conversaciones de paz entre el Gobierno y los grupos no signatarios del Acuerdo de Paz organizados a través de la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC. Estas negociaciones que se están desarrollando en Roma (Italia) bajo la mediación de la Comunidad de Sant'Egidio y la IGAD, lograron, el 12 de enero, la firma de la **Declaración de Roma sobre el Proceso de Paz en Sudán del Sur** en donde las partes se comprometieron a un alto el fuego, garantizar el acceso humanitario y a mantener un diálogo.⁵² Sin embargo, el estancamiento de las negociaciones en el mes de abril conllevó la ruptura de la tregua militar, activándose las hostilidades militares entre fuerzas gubernamentales y el NAS comandado por Thomas Cirillo, quien acusó a las fuerzas armadas del SPLA-IO de atacar en la región de Ecuatoria Central. Las hostilidades militares se mantuvieron a lo largo del año, ampliándose a la región de Ecuatoria Occidental, en el sur del país. Como respuesta, el 29 de mayo el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el embargo de armas a Sudán del Sur y las sanciones selectivas contra personas hasta mayo de 2021. A principios de junio la misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) y la UE solicitaron sin éxito al Gobierno de Salva Kiir y al NAS el fin de las hostilidades y el respeto a la tregua negociada en enero. Los enfrentamientos armados entre el NAS y las FFAA (rebautizadas como Fuerza de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur – SSPDF) y el SPLA-IO se mantuvieron durante el tercer trimestre del año en el estado de Ecuatoria Central. A principios de septiembre la UNMISS desplegó tropas para establecer una base temporal en el condado de Lobonok tras el aumento de ataques contra civiles y trabajadores humanitarios, denunciando el bloqueo por parte del Gobierno. Posteriormente, el grupo rebelde Frente/ Ejército Unido de Sudán del Sur (SSUF/A) encabezado por Paul Malong, amplió las hostilidades militares al norte del país, en el estado de Unity.

Por otro lado, se mantuvieron los enfrentamientos armados en el centro y este del país motivados

La violencia intercomunitaria en la región central de Sudán del Sur se convirtió en el principal foco de inestabilidad del país y en un serio riesgo para la implementación del Acuerdo de Paz

por diferentes **disputas intercomunitarias en el marco de las dificultades de gobernanza en el país debido a la debilidad y luchas internas en el nuevo Gobierno de Unidad** creado en el mes de febrero. Estos enfrentamientos se registraron principalmente en los estados de Lakes, Warrap, Jonglei y el área administrativa del Gran Pibor. El aumento de la violencia en el estado de Jonglei se interpretó por diversas organizaciones sursudanesas como resultante de la situación de ingobernabilidad en el estado por la falta de acuerdo entre las partes signatarias del acuerdo de paz para establecer el gobernador en dicho estado. A mediados de junio, el Gobierno formó un comité para aliviar las tensiones entre las comunidades dinka, lou nuer y murle, y posteriormente puso en marcha un programa de desarme a nivel nacional, así como iniciativas de diálogo entre comunidades para abordar la creciente violencia intercomunitaria. Sin embargo, el inicio de la campaña de desarme en la región central del país durante el mes de agosto provocó duros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros de milicias comunitarias que se negaron a desarmarse, dejando al menos 148 muertos en el condado de Tonj East, estado de Jonglei. La UNMISS, como respuesta al incremento de la violencia, envió el 11 de agosto una patrulla de mantenimiento de la paz a la zona y estableció una base temporal en la ciudad de Tonj. La imposibilidad de contener la violencia obligó al Gobierno a decretar el 13 de agosto el estado de emergencia en el estado de Jonglei y el área administrativa del Gran Pibor. Según datos proporcionados por la UNMISS, la violencia intercomunitaria habría dejado un balance de al menos 800 personas muertas solo entre los meses de abril y junio, representando el principal foco de violencia en el país y un serio riesgo para la implementación del acuerdo de paz.

El incremento de la violencia en varios puntos del país no evitó que a principios de septiembre la UNMISS comenzara a retirar sus fuerzas de varias bases de mantenimiento de la paz en el país, manteniendo el servicio de ayuda humanitaria. El inicio del plan de retirada provocó que miles de personas desplazadas internamente se manifestaran en Juba, Jonglei y Unity, solicitando al organismo reconsiderar la retirada debido a la violencia. La UNMISS informó posteriormente del desarrollo de nuevos planes para establecer bases temporales de mantenimiento de la paz y el desarrollo de patrullas para poner fin a los enfrentamientos intercomunitarios en la región de Jonglei.

52. Véase el resumen sobre Sudán del Sur en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

Magreb - Norte de África

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) -también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia (ALAF)- , milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI, mercenarios, EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Qatar, Rusia, entre otros países
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la “liberación” de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y una persistente fragmentación política. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto obstaculizados por este panorama y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de nuevos grupos, como ISIS, en el país norteafricano. Las dinámicas de violencia se han acentuado por la implicación de actores foráneos en apoyo de los diversos bandos en pugna, motivados por intereses geopolíticos y económicos, dada la ubicación estratégica de Libia en la cuenca del Mediterráneo y su gran riqueza en hidrocarburos.

El conflicto armado en Libia presentó una intensidad similar a la del año anterior, aunque al finalizar el año la firma de un alto el fuego general entre las principales partes contendientes alentaba tímidas expectativas sobre una posible disminución de la violencia. Según el think tank ACLED, durante 2020 las hostilidades provocaron la muerte de al menos 1.492 personas, un balance ligeramente menor a las 2.064 personas fallecidas en 2019, pero superior a las 1.188 contabilizadas en 2018. Respecto a las víctimas civiles, durante el

primer semestre del año la misión de la ONU en el país, UNSMIL, había contabilizado un total de 489, de las cuales 170 fallecidas y 319 heridas, principalmente a causa de los combates, la detonación de remanentes explosivos y ataques aéreos. En todo el año anterior, 2019, se registraron 287 civiles muertos y 371 heridos. Según los datos recopilados por la UNSMIL, fuerzas afiliadas al LNA de Khalifa Haftar –grupo que ha pasado a denominarse Fuerzas Armadas Árabes de Libia (ALAF, por sus siglas en inglés) pero que suele ser identificado indistintamente como ALAF o LNA– serían responsables de la mayor parte de los ataques contra civiles (en torno a un 80%), mientras que algunas acciones también fueron atribuidas a las fuerzas del GNA, siglas con las que se denomina al gobierno internacionalmente reconocido basado en Trípoli. Ante estas y otras continuas evidencias sobre vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió en junio de 2020 poner en marcha una misión de investigación independiente que durante un año indagará en los abusos perpetrados por todas las partes del conflicto armado en Libia desde principios de 2016, con la intención de evitar un empeoramiento de la situación y garantizar la rendición de cuentas.

Respecto a la evolución y dinámicas del conflicto, **durante 2020 se mantuvo e incluso acentuó la tendencia observada el año anterior, respecto a una creciente implicación de actores foráneos en apoyo a los principales bandos en conflicto.** Esta deriva se tradujo en reiteradas vulneraciones al embargo de armas, en la continua llegada al país de combatientes, mercenarios y asesores militares, y en advertencias explícitas sobre una intervención más directa en función de la marcha de los acontecimientos y los intereses comprometidos. Su influencia también permeó la evolución de los frentes de batalla, que en 2020 se concentraron principalmente en Trípoli, Sirte y otras localidades de la zona occidental de Libia. Durante el primer semestre las hostilidades se focalizaron en la capital libia y persistieron pese a algunas iniciativas que pretendieron promover una tregua. A principios de año Turquía –que en enero aprobó el envío de tropas a Libia para apoyar al GNA y facilitó la llegada de milicianos sirios al país norteafricano– y Rusia –que respalda a las fuerzas de Haftar, hombre fuerte del este del país– fracasaron en su intento de promover un cese el fuego, mientras que la Conferencia de Berlín sobre Libia –postergada varias veces en 2019 y celebrada finalmente en enero– tampoco condujo a una reducción de la violencia.⁵³ ALAF mantuvo el asedio a Trípoli y tribus aliadas a Hifter iniciaron también, en enero, un bloqueo a las exportaciones petroleras. La violencia se intensificó a partir de marzo, a pesar de la interpelación a las partes a que pusieran en marcha una tregua humanitaria para concentrar esfuerzos en dar respuesta a la COVID-19, en línea con el llamamiento a un cese el fuego global por parte del secretario

53. Véase el resumen sobre Libia en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

general de la ONU. En plena pandemia, se informó de ataques a civiles, a hospitales y el corte de suministro de agua potable que afectó a dos millones de personas en Trípoli, atribuidos a ALAF. A partir de abril y con la ayuda de Turquía, fuerzas afiliadas al GNA comenzaron a avanzar posiciones en el oeste de Libia. Tras lo que fue descrito como un “repliegue táctico” de ALAF de Trípoli en mayo, el GNA consolidó su control sobre la capital en junio y denunció el hallazgo de una veintena de fosas comunes en Tarhuna, hasta entonces bastión de milicias leales a Hifter. Al finalizar el año (noviembre) se habían exhumado 112 cuerpos en la localidad, ubicada a unos 100 kilómetros al noreste de Trípoli.

A partir de mediados de año el epicentro de los combates se desplazó hacia el este, a las proximidades de Sirte. Turquía y Rusia volvieron a intentar sin éxito un acuerdo para frenar la escalada en torno a esta ciudad, mientras que Egipto –otro de los países valedores de Hifter– anunció que Sirte constituía una “línea roja” que podría determinar su intervención directa en el conflicto. De hecho, El Cairo lanzó advertencias ante acciones que consideraría como una amenaza a su seguridad nacional y autorizó el envío de tropas. En este contexto, y ante señales de alarma de UNSMIL sobre el potencial desestabilizador de los hechos en Sirte, se pusieron en marcha diversas iniciativas para intentar crear una zona desmilitarizada en torno a la ciudad, retomar negociaciones políticas y reactivar las exportaciones de petróleo para aliviar las condiciones socioeconómicas de la población, severamente afectada por el conflicto, la pandemia y el bloqueo de los ingresos petroleros –situación que motivó protestas contra las autoridades rivales en Trípoli y Sirte a mediados de año. En agosto, el GNA declaró un alto el fuego unilateral e hizo un llamado a reactivar la producción petrolera y a la celebración de elecciones en 2021. Simultáneamente, el portavoz de la Cámara de Representantes con sede en Tobruk, Aghela Saleh –aliado de Haftar, pero no siempre alineado con su agenda– también anunció una tregua. Semanas más tarde Haftar accedió a la reactivación de las exportaciones de petróleo, aunque mantuvo los ataques a posiciones del GNA cerca de Sirte. **No fue hasta finales de octubre que representantes del GNA y de ALAF suscribieron oficialmente en Ginebra un acuerdo de cese el fuego “permanente” de alcance nacional,** favoreciendo que se pusieran en marcha nuevos contactos políticos bajo los auspicios de la ONU.⁵⁴

Hasta finalizar el año el proceso político avanzaba con lentitud, aunque se informó del diseño de una hoja de ruta que incluiría elecciones presidenciales y parlamentarias el 24 de diciembre de 2021, coincidiendo con el 70º aniversario de la independencia de Libia. Paralelamente, persistían las dudas y obstáculos sobre la implementación del acuerdo de cese el fuego, que entre otras medidas incluye el

repliegue de ambos bandos a las líneas de frente, la expulsión de los combatientes extranjeros del país y la suspensión de los programas de entrenamiento militar extranjeros hasta la conformación del nuevo gobierno. Contrariamente a lo dispuesto, en los últimos meses del año se informó de la persistencia en los flujos de armas, el no repliegue de las fuerzas de ambos bandos, de la dispar interpretación de algunas disposiciones debido a ambigüedades en el texto del acuerdo y de incidentes armados que desafiarían el cese el fuego. En diciembre persistían las acusaciones mutuas por vulneraciones a la tregua y la intercepción por parte de ALAF de un barco turco que llevó a Ankara a advertir sobre graves consecuencias a quienes atacaran intereses turcos en Libia. El Parlamento turco también aprobó extender por 18 meses más el apoyo militar al GNA. En este contexto, la líder de la UNSMIL y enviada especial en funciones, Stephanie Williams –en el cargo tras la renuncia de Ghassam Salamé en marzo–, advirtió del riesgo que supone para el país la presencia de 20.000 combatientes extranjeros.

El acuerdo de cese el fuego no supuso un freno a los ataques contra activistas y defensores de derechos humanos. Entre ellos Hannan Elbarassi, abogada, defensora de los derechos de las mujeres y crítica de los grupos armados que operan en el este del país, fue asesinada en noviembre en Bengazi. Paralelamente, cabe resaltar que **el contexto de conflicto armado continuó favoreciendo gravísimos abusos contra población migrante y refugiada** atrapada en Libia y/o retornada al país norteafricano tras intentos fallidos por alcanzar las costas europeas. En línea con otros informes de diversas organizaciones en años precedentes, Amnistía Internacional denunció el abanico de abusos que padece la población migrante y refugiada en Libia en un clima de total impunidad –ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, detenciones arbitrarias y trabajos forzados y explotación por parte de actores estatales y no estatales.⁵⁵ En este contexto, diversas voces llamaron a la UE a replantearse sus políticas de cooperación con las autoridades libias en materia migratoria, que ignoran los abusos reiteradamente denunciados por la ONU y desde la sociedad civil.

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares
Intensidad:	1
Evolución:	↑

54. Ibid.

55. Amnesty International, *Between life and death: Refugees and migrants trapped in Libya's cycle of abuse*, 24 de septiembre de 2020.

Síntesis:

En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacieron dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del statu quo mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia. En 2016, la firma de un acuerdo de paz con las FARC llevó a su desmovilización y transformación en partido político.

El conflicto en Colombia continuó activo durante el año, registrándose enfrentamientos armados protagonizados por la guerrilla del ELN, las fuerzas de seguridad del Estado y diferentes grupos paramilitares, así como por los grupos disidentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC. La situación de pandemia llevó al ELN a decretar un alto el fuego de un mes en abril, que no se prorrogó ante la negativa del Gobierno a responder positivamente.⁵⁶ Numerosas voces expresaron su preocupación por la intensificación de la violencia en el país. Un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) constató esta escalada de violencia con algunas características como la descentralización y fragmentación de los grupos armados; la multiplicación de conflictos a escala local al tiempo que se redujo la capacidad de las comunidades para desescalar la violencia.⁵⁷ La FIP destacó que en el cuarto año tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, se triplicaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados mientras que entre los propios grupos armados se multiplicaron por seis. La mayoría de estos enfrentamientos tuvieron lugar entre el ELN y el Clan del Golfo. De acuerdo con las cifras recopiladas por el centro de investigación CERAC, 46 personas murieron en el país como consecuencia de enfrentamientos armados con participación del ELN, contra las fuerzas de seguridad o contra otros grupos armados.⁵⁸ Además, 173 personas murieron en el país como consecuencia de la violencia política, especialmente dirigida contra dirigentes sociales y personas defensoras de derechos humanos.⁵⁹ El centro de investigación Indepaz, recogió en su informe que 340 personas fueron asesinadas en 79 masacres durante el 2020.⁶⁰ Naciones Unidas también se hizo eco de la violencia registrada en el país y en diciembre la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló que

se había documentado que 255 personas fueron asesinadas en el país en 66 masacres, destacando la gravedad de la situación del pueblo indígena nasa, con 66 personas asesinadas durante 2020. Además, la misión de verificación de la ONU en el país destacó que desde la firma del acuerdo de paz, 244 antiguos combatientes de la FARC murieron asesinados. Esto motivó protestas en noviembre en Bogotá por parte de antiguos combatientes.

Los enfrentamientos armados entre los diferentes grupos armados y con las fuerzas de seguridad provocaron el desplazamiento forzado de miles de personas. Según un informe presentado por congresistas de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Cambio Radical, Liberal, Colombia Humana y 'la U', durante los seis primeros meses de 2020 más de 16.000 personas tuvieron que desplazarse como consecuencia de la violencia, lo que representó un incremento de cerca del 97%, a pesar de las restricciones a la movilidad impuestas por la situación de pandemia. En el departamento del Cauca, las disputas por el control del territorio entre el ELN y disidencias de las FARC como el Frente Carlos Patiño o "Segunda Marquetalia", provocaron numerosas muertes y forzaron el desplazamiento de miles de personas. Con respecto a los impactos de género del conflicto, la organización Sisma Mujer destacó que la pandemia agravó la situación de las defensoras de derechos humanos, aumentando la violencia contra ellas con más atentados y homicidios.⁶¹

1.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS (EI-KP)
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:

El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en

56. Véase el resumen sobre el proceso de paz con el ELN en Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021

57. Fundación Ideas para la Paz, Un nuevo ciclo de violencia organizada a cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, 24 noviembre 2020.

58. CERAC, *Reporte del conflicto con el ELN*, Reporte mensual número 8, 29 de enero de 2021.

59. CERAC, *Monitor de Violencia Política en Colombia*, Reporte mensual número 18, 11 de diciembre de 2020.

60. Indepaz, *Informe de Masacres en Colombia durante el 2020*, 6 de diciembre de 2020.

61. Sisma Mujer, *Líderesas y defensoras durante la pandemia: entre la violencia sociopolítica de género y el COVID-19*, Boletín N° 24, 29 de noviembre de 2020.

1989 y el ascenso de los muyahidín al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral tras la segunda ronda en la que los dos líderes más votados, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, mantuvieron los resultados en el aire durante meses. En septiembre, se llegó a un acuerdo para crear un Gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014, aunque en el terreno quedó desplegada la misión “Resolute Support”, con mandato de la OTAN para formar y entrenar a las fuerzas afganas y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo, integrada por soldados norteamericanos, misión “Freedom Sentinel”.

El conflicto armado en Afganistán experimentó un descenso en los niveles de violencia como consecuencia de los avances en el proceso de paz en el país, aunque la violencia siguió siendo de elevada intensidad durante todo el año. Según las cifras recopiladas por la UNAMA, durante 2020 se registró un número de víctimas civiles de 3.035, la cifra más baja desde 2013 y una reducción del 15% respecto a 2019. La base de datos del centro de investigación ACLED recogió una cifra de fallecimientos como consecuencia de la violencia de 21.067, la mitad que el año anterior. A pesar del acuerdo de paz entre el Gobierno de EEUU y la insurgencia talibán, y del inicio del proceso de diálogo intraafgano protagonizado por el Gobierno del país y la insurgencia talibán, durante todo el año se produjeron enfrentamientos armados y atentados de gravedad que provocaron numerosas víctimas mortales y heridos. Estos enfrentamientos y atentados fueron utilizados como forma de presión para condicionar los diferentes procesos de diálogo y definir las posturas en la mesa de negociación. En paralelo, los momentos decisivos en el proceso de paz también vinieron acompañados de reducciones significativas de la violencia, en algunos casos como consecuencia del acuerdo y en otros como muestra de voluntad política y como medidas para generar confianza. Así sucedió durante la semana previa a la firma del acuerdo entre los talibanes y EEUU el 29 de febrero en Doha. El 22 de febrero se inició un periodo de siete días de reducción de la violencia, requisito para la firma del acuerdo. En mayo, durante la festividad de

La reducción de la violencia en el país se debió, según Afghanistan Analysts Network, a una menor implicación de ISIS, al inicio de la retirada de EEUU y la menor actividad ofensiva de las fuerzas afganas, y no tanto una reducción en las acciones armadas talibanes

Eid al-Fitr, se produjo un breve alto el fuego de tres días, anunciado por los talibanes y seguido por el Gobierno. En agosto, coincidiendo con la festividad de Eid al-Adha, se produjo un nuevo anuncio de alto el fuego de tres días, que también recibió una respuesta gubernamental positiva. Además, durante el año se produjo una reducción de la violencia de forma más significativa en las ciudades, mientras que las zonas rurales fueron escenario de enfrentamientos armados de forma más constante. Previamente a la firma del acuerdo de paz entre EEUU y los talibanes, cabe destacar que se produjeron diferentes ataques aéreos estadounidenses que causaron víctimas mortales, algunas de ellas civiles. De acuerdo con la Afghanistan Analysts Network, la principal causa de la reducción en la mortalidad de civiles fue una menor implicación en el conflicto por parte de ISIS, así como el inicio de la retirada de las fuerzas estadounidenses y el menor número en las acciones ofensivas por parte de las fuerzas de seguridad afganas, y no tanto una reducción en las acciones armadas talibanes.⁶² **En mayo se produjo uno de los atentados más graves del año, con el ataque a un hospital maternal atendido por la ONG Médicos sin Fronteras, en el que murieron 24 personas, entre ellas varias madres, algunas a punto de dar a luz.** En noviembre se produjo otro grave atentado en la Universidad de Kabul reivindicado por ISIS, en el que murieron 22 personas, gran parte estudiantes. El atentado se produjo coincidiendo con la visita a la universidad del embajador de Irán en el país y un día antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. Días después, al menos 30 miembros de las fuerzas de seguridad murieron como consecuencia de la explosión de un coche bomba en la provincia de Ghazni. Poco después, las fuerzas de seguridad anunciaron que habían llevado a cabo una operación aérea contra los responsables del atentado en la que habían muerto siete personas, incluyendo el líder talibán y supuesto autor intelectual, Hamza Waziristani. El 22 de diciembre un atentado en Kabul causó la muerte de cinco personas, cuatro de las cuales eran doctores.

Deborah Lyons, la representante especial del secretario general de la ONU para Afganistán y jefa de la UNAMA, señaló en diciembre que a pesar de los importantes progresos en el proceso de paz, durante los meses de octubre y noviembre se había producido un importante aumento de la violencia, con un 60% más de víctimas civiles como consecuencia de artefactos explosivos improvisados, así como un incremento de víctimas infantiles de un 25% durante el tercer trimestre de 2020, con un grave aumento de ataques a centros escolares.

En paralelo al conflicto armado, se vivieron meses de crisis política tras las elecciones presidenciales celebradas en septiembre de 2019. La Comisión

62. Kate Clark, “Behind the Statistics: Drop in civilian casualties masks increased Taliban violence”, *Afghanistan Analysts Network*, 27 de octubre de 2020.

Electoral Independiente proclamó vencedor en febrero al presidente Ashraf Ghani con el 50,64% del voto, atribuyendo a Abdullah Abdullah, su principal rival, el 39,52%. El resultado fue rechazado por Abdullah y en marzo se produjeron dos ceremonias paralelas de toma de posesión, aunque Ghani recibió un respaldo internacional mayoritario. La crisis se resolvió finalmente en mayo, cuando Abdullah aceptó liderar las negociaciones de paz con los talibanes y designar la mitad de los ministros, asumiendo la presidencia Ghani.

India (Jammu y Cachemira)	
Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, JKLF
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se trasladó al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

El conflicto armado en Jammu y Cachemira se mantuvo activo todo el año. De acuerdo con las cifras de fallecimientos vinculados a la violencia armada recopiladas por el South Asia Terrorism Portal, durante 2020 murieron 320 personas, lo que representó un ligero repunte con respecto a 2019, pero no se alcanzaron las cifras de mortalidad de años anteriores. Por otra parte, el centro de investigación ACLED señaló cifras de mortalidad superiores, con 455 muertes durante 2020. Por su parte, la Jammu and Kashmir Coalition of Civil Society señaló que durante los primeros seis meses de 2020 murieron 229 personas como consecuencia del conflicto, y denunciaron la ejecución extrajudicial de 32 civiles. Durante todo el año se registraron enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad indias y los grupos armados insurgentes, en paralelo a los impactos de la tensión con Pakistán en la zona fronteriza entre ambos países. Además, las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil denunciaron graves violaciones a los

derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, mediante la simulación de enfrentamientos armados con supuestos insurgentes, que en realidad eran civiles; detenciones arbitrarias de activistas sociales y políticos; e importantes restricciones al uso de internet en el estado. Con el cierre de centros educativos debido a la pandemia del coronavirus, las restricciones en el acceso a internet tuvieron un grave impacto, impidiendo el derecho a la educación de los menores del estado. Previamente a la pandemia los colegios habían permanecido cerrados durante siete meses tras la retirada de la autonomía. En relación a las detenciones denunciadas, entre ellas cabe destacar la de los antiguos ministros jefes del estado Omar Abdullah y Mehbooba Mufti, bajo la ley de seguridad pública, que permite la detención durante dos años sin cargos ni juicios.

Por otra parte, durante el año se registraron diversos episodios relacionados con el clima de violencia en la zona. En febrero, el grupo armado de oposición JKLF hizo un llamamiento a la huelga, que llevó al cierre total del valle de Cachemira y partes de Jammu. **En abril se aprobó una legislación flexibilizando las exigencias para el establecimiento de la residencia permanente en Jammu y Cachemira, lo que fue calificado por sectores cachemires y por el Gobierno de Pakistán de un intento de alterar la composición demográfica del estado.** En junio las fuerzas de seguridad indias escalaron las operaciones militares contra la insurgencia. Ocho integrantes de los grupos armados murieron en diferentes enfrentamientos armados en el marco de operaciones conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas en un mismo día en las zonas de Shopian y Pampore. Al tiempo que se intensificó la violencia en el estado y los enfrentamientos armados, se denunció que las fuerzas de seguridad utilizaban a la población civil como escudo humano durante operaciones contra la insurgencia y en enfrentamientos con los grupos armados. Varios integrantes del partido gubernamental BJP murieron tiroteados en ataques perpetrados por grupos armados cachemires. En agosto, coincidiendo con el aniversario de la retirada de la autonomía y la condición de estado a Jammu y Cachemira, el Gobierno indio impuso el toque de queda y nombró como gobernador comandante al líder del BJP Manoj Sinha. Además, ordenó la retirada de 10.000 miembros de las fuerzas de seguridad por la mejora en la situación de seguridad del territorio. Los principales partidos cachemires emitieron una declaración conjunta en la que pedían la restauración del estatus de Jammu y Cachemira garantizado por la Constitución. En diciembre tuvieron lugar las primeras elecciones desde el fin de la autonomía en 2019 y su pérdida de estatus como estado, convirtiéndose en un Territorio de la Unión. Los comicios locales se celebraron en medio de acusaciones de falta de democracia y en ellos habría obtenido la mayoría de votos la coalición People's Alliance for Gupkar Declaration, que agrupaba a varios partidos cachemires bajo la demanda conjunta de restauración de la autonomía y condición de estado a Jammu y Cachemira.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

El conflicto armado con la insurgencia naxalita continuó activo durante el año, aunque el número de víctimas mortales como consecuencia de la violencia armada y los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia experimentó un ligero descenso. De acuerdo con las cifras recopiladas por el South Asia Terrorism Portal un total de 239 personas murieron en el marco del conflicto, de las que 61 eran civiles, 44 miembros de las fuerzas de seguridad y 134 integrantes del grupo armado de oposición CPI-M, la cifra más baja de víctimas mortales en el conflicto desde 2015. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior, el Gobierno considera que 90 distritos de 11 estados están afectados por la presencia de la insurgencia naxalita, aunque durante la primera mitad de 2020 solo se registraron hechos de violencia en 46 de estos distritos, menos que los 61 constatados en 2019. El ministro de Interior señaló que entre 2015 y agosto de 2020, 350 integrantes de las fuerzas de seguridad, 963 civiles y 871 insurgentes habían muerto como consecuencia del conflicto armado. Además, desde este Ministerio también se destacaron las operaciones conjuntas que se habían llevado a cabo en la zona fronteriza entre los estados de Andhra Pradesh y Odisha, por parte de las fuerzas de seguridad de ambos estados de manera coordinada, que habían dado lugar a numerosas detenciones de insurgentes. **En marzo tuvo lugar el enfrentamiento más grave del año, en el que se señaló inicialmente que al menos 17 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron muertos en enfrentamientos con la insurgencia naxalita en Chhattisgarh y otros 14 resultaron heridos durante una operación en la que participaron 600 efectivos policiales, que fueron atacados por unos 200 insurgentes. Sin embargo, en septiembre la Policía actualizó la cifra de víctimas, señalando que habían muerto 23 insurgentes**

y 17 miembros de las fuerzas de seguridad. En agosto, cuatro integrantes del CPI-M murieron en el distrito de Sukma, estado de Chhattisgarh, en enfrentamientos con la Policía, durante una operación de las fuerzas de seguridad indias. Por otra parte, el CPI-M denunció que las fuerzas de seguridad seguían llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, señalando que las muertes de varios insurgentes no se habían producido como consecuencia de enfrentamientos armados, sino que habían sido ejecutados. Según el grupo armado, dos de sus integrantes murieron de esta forma en diciembre en Odisha. El CPI-M denunció también que las fuerzas de seguridad están estableciendo campamentos en zonas tribales, con consecuencias muy negativas para la población adivasi. En cuanto a los impactos de género del conflicto armado, cabe destacar la detención del activista VS Krishna, activo en la búsqueda de justicia para 11 mujeres adivasi víctimas de violencia sexual por parte de la policía en Andhra Pradesh en 2007, que debía participar en el juicio por estos hechos. El activista fue acusado de haber forzado a las supervivientes a prestar falso testimonio contra la Policía y su arresto impediría su participación en el juicio.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes extranjeros, EEUU
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación Zarb-e Azb para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur.

El conflicto armado en Pakistán siguió activo durante todo el año, pero se consolidó la tendencia de reducción de la violencia que nuevamente presentó unos niveles de intensidad menores que los registrados el año anterior.

Según las cifras de mortalidad asociadas a la violencia recopiladas por el Center for Research and Security Studies de Pakistán, durante el año se registraron 600 muertes en el conjunto del país, frente a las 679 de 2019 y 754 de 2018. No obstante, de acuerdo con las cifras registradas por el South Asia Terrorism Portal, se observó un ligero repunte con respecto a las cifras recopiladas por este mismo centro el año anterior, con 506 víctimas mortales. **La provincia de Khyber Pakhtunkwa resultó la más afectada por la violencia como consecuencia de las operaciones de seguridad contra la insurgencia talibán pakistaní, los enfrentamientos armados y los atentados que causaron múltiples víctimas mortales.** También se produjeron ataques contra trabajadores sanitarios que administran la vacuna de la polio, a lo que se oponen los talibanes. Varias operaciones de las fuerzas de seguridad en enero y en febrero en contra de la insurgencia talibán en los distritos de Dera Ismail Khan y Bajaur, así como en las inmediaciones de Peshawar, en Khyber Pakhtunkwa, causaron la muerte de varios combatientes talibanes. En marzo, siete insurgentes y cuatro soldados murieron en enfrentamientos armados en el distrito de Waziristán Norte, según fuentes oficiales. A finales de abril se produjo otro episodio similar en el que nueve insurgentes y dos soldados murieron en enfrentamientos armados en el mismo distrito, el más afectado por la violencia de la provincia. En julio, un atentado con explosivos en una zona comercial en Parachinar, en el distrito de Kurram, dejó 20 personas heridas, incluyendo un menor de edad. Otro atentado de enorme gravedad tuvo lugar en octubre en la ciudad de Peshawar en el que una explosión en un seminario religioso causó la muerte de al menos ocho personas e hirió a otras 136. Gran parte de las personas congregadas eran estudiantes procedentes de Khyber Pakhtunkwa y Baluchistán que atendían una conferencia del clérigo afgano Rahimullah Haqqani, supuesto objetivo del atentado. Días antes, seis miembros de las Fuerzas Armadas habían muerto en el distrito de Waziristán Norte como consecuencia de una explosión al paso del convoy militar en el que se desplazaban. En noviembre y diciembre se llevaron a cabo varios ataques contra ancianos líderes tribales en los distritos de Bajaur y Waziristán Norte, causando la muerte de al menos cinco. Este tipo de ataques se repiten como consecuencia de los diferentes acuerdos alcanzados con las autoridades pakistaníes para impedir la acción talibán. En cuanto a los impactos de género del conflicto, cabe señalar que la organización TransAction Alliance Khyber Pakhtunkwa denunció el asesinato a tiros de la activista trans Gul Panra en Peshawar, señalando que en los últimos cinco años 1.500 personas trans han sido víctimas de violencia sexual y 68 han sido asesinadas. Human Rights Watch denunció que en 2018 se produjeron 479 ataques contra mujeres trans. Además, continuaron las amenazas contra las mujeres y niñas por acceder a la educación formal por parte de la insurgencia talibán.

Pakistán (Baluchistán)

Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Aojoi Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, sino miles, de baluchíes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El conflicto armado en Baluchistán continuó activo todo el año, pero se registró un notable descenso de la violencia armada y de las víctimas mortales asociadas a esta. De acuerdo con las cifras recopiladas por el Center for Research and Security Studies de Pakistán durante el año se registraron 138 muertes en la provincia y según el South Asia Terrorism Portal, los fallecimientos fueron 215. **No obstante, los grupos armados nacionalistas baluchis y otras organizaciones armadas como los talibanes e ISIS, continuaron activas y llevaron a cabo diferentes acciones violentas y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad pakistaníes. También se produjeron atentados contra infraestructuras.** En enero un atentado suicida reivindicado por ISIS contra una mezquita en Quetta, durante los rezos del viernes, causó la muerte de al menos 15 personas e hirió a otras 20. Las fuerzas de seguridad señalaron que la mezquita estaba dirigida por los talibanes afganos. En los días previos a este atentado, dos personas habían muerto y otras cuatro resultaron heridas como consecuencia de un ataque en un mercado perpetrado por una facción disidente del TTP denominada Hizbul Ahrar. En febrero se produjo otro atentado de gravedad, cuando una explosión en las inmediaciones del club de prensa de Quetta causó la muerte a diez personas e hirió a otras 35. El atentado tenía como objetivo a integrantes de la organización ilegalizada y anti shií Ahlesunnat Wal Jamat, y podría haber sido perpetrado por ISIS. Días después, el grupo armado baluchi BLT reivindicó un ataque contra las fuerzas de seguridad en Singasila, distrito de Dera

Bugti, en el que habrían muerto 16 miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes. En julio, un ataque de BRAS (alianza de cuatro grupos armados baluchis, BLF, BLA, BRA y BRG) en el distrito de Kech, causó la muerte de cinco soldados. Días después otros cuatro soldados murieron como consecuencia de un ataque del grupo BLF en el distrito de Awaran. Este mismo grupo reivindicó haber causado la muerte de 190 miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes en una serie de atentados y ataques armados durante los nueve primeros meses del año, aunque las cifras no pudieron ser corroboradas de forma independiente. En septiembre, la destacada periodista y defensora de los derechos de las mujeres Shaheena Shaheen Baloch, murió tiroteada en el distrito de Kech. Aunque inicialmente se acusó al grupo armado BLA de estar detrás del asesinato, investigaciones posteriores apuntaron a que se trataba de un caso de violencia de género, dando visibilidad al importante impacto contra las mujeres en esta provincia de los conocidos como “crímenes de honor”. Otro ataque de BRAS en octubre causó la muerte de siete miembros de las fuerzas de seguridad y siete guardias de seguridad privados en un atentado contra un convoy de la Oil and Gas Development Company en el distrito de Gwadar. Por otra parte, organizaciones de derechos humanos continuaron denunciando las continuas desapariciones a manos de las fuerzas de seguridad pakistaníes, especialmente de jóvenes activistas sociales y estudiantes.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	=
Síntesis:	
El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.	

Aunque las Fuerzas Armadas no ofrecieron datos de mortalidad asociados al conflicto armado entre el Gobierno y el NPA, **los niveles de violencia fueron parecidos a los del año anterior**. Sin embargo, la dinámica del conflicto discurrió en paralelo a un claro deterioro de la confianza entre el Gobierno de Duterte y el NDF y a la completa parálisis del proceso de paz, especialmente a partir del mes de mayo. Así las cosas, a finales de año el propio Duterte dijo que bajo su mandato no se reanudarían las negociaciones con el NDF y no se produciría ningún otro alto el fuego con el NPA, incluyendo el que tradicionalmente decretan ambas partes con motivos de las fiestas de Navidad. Por su parte, el NDF también dio por cerrada cualquier opción de diálogo con el Gobierno actual y planteó su intención de entablar conversaciones con la oposición para discutir acerca de la posible reanudación de las negociaciones en un escenario post-Duterte. En tales circunstancias, tanto el Gobierno como las Fuerzas Armadas declararon que la estrategia contrainsurgente del Estado pasaba por una intensificación de las operaciones militares contra el NPA y por un incremento de las llamadas negociaciones de paz locales directas con combatientes del NPA y con comunidades afectadas por la violencia. Al amparo de la Orden Ejecutiva nº70 y de la implementación de la llamada Whole-of-Nation Approach, el Grupo de Trabajo Nacional para Finalizar los Conflictos Armados Comunistas Locales (un organismo conformado por varias agencias del Estado) ha llevado a cabo cientos de diálogos directos con combatientes del NPA en las provincias en las que opera el grupo (más de 30, según el propio NPA). Según el Gobierno, este tipo de negociaciones directas con los combatientes parten de la idea de que existe una desconexión creciente entre los combatientes del NPA y la cúpula del movimiento comunista (principalmente con el panel negociador del NDF, residente en Holanda desde hace décadas). Según manifestó el propio Duterte, estas conversaciones locales, que incluyen también a los gobiernos locales y contemplan las demandas de las comunidades en zonas de conflicto, está comportando que un alto número de combatientes se entreguen y decidan entrar en un proceso de desarme y reintegración en la sociedad civil. **Las Fuerzas Armadas consideran que al actual ritmo de rendiciones y deserciones en el seno del NPA, este será un grupo irrelevante en un futuro cercano**. Por su parte, el NDF criticó estas negociaciones directas a escala local por considerar que son una estrategia contrainsurgente que buscan más desmovilizar a la insurgencia que no resolver el conflicto armado y abordar sus causas estructurales. Según el NDF, esta estrategia de ofrecer vivienda y trabajo a los combatientes se ha practicado desde la época del dictador Ferdinand Marcos, sin lograr desarticular ni erosionar al movimiento comunista.

En cuanto a las dinámicas del conflicto armado, cabe destacar que la tregua unilateral que tanto el Gobierno como el NPA habían decretado a finales de 2019 con motivo de las fiestas navideñas, y que finalizó el

7 de enero, abrió la puerta a la reanudación de las negociaciones de paz a finales de ese mismo mes con la facilitación del Gobierno de Noruega, pero finalmente no se celebró ninguna nueva ronda de negociación. **Poco después de la expansión de la pandemia provocada por la COVID-19 en el mes de marzo, tanto el Gobierno como el NDF decretaron unilateralmente la suspensión de las acciones ofensivas** (el Gobierno entre el 19 de marzo y el 15 de abril, argumentando la necesidad de concentrar los esfuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la contención del coronavirus; y el NDF entre el 26 de marzo y el 15 de abril, en respuesta al llamamiento a un alto el fuego global por parte del secretario general de la ONU, António Guterres). El 15 de abril el NDF prolongó el alto el fuego hasta el 30 de abril, pero el Gobierno decidió no hacerlo alegando numerosas violaciones del alto el fuego por parte del NPA (según Manila, 26 soldados murieron entre el 15 de marzo y el 23 de abril en los 36 ataques que llevó a cabo el NPA en 23 provincias). Del mismo modo, el Partido Comunista de Filipinas declaró que en los 36 días que duró su alto el fuego fallecieron 18 combatientes del NPA y 31 soldados. Tras la finalización del cese de hostilidades, el Gobierno anunció su intención de incrementar sus operaciones de contrainsurgencia contra el NPA, amenazó con imponer la ley marcial si el NPA seguía obstaculizando el envío de ayuda de emergencia y persistiendo en sus ataques a militares en tareas de humanitarias y declaró públicamente que no volvería a reunirse con el NDF. A raíz de la intensificación de la violencia, en los diez primeros días de mayo, 17 combatientes del NPA fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras que como mínimo otros 26 combatientes murieron entre el 13 y el 19 de mayo por enfrentamientos en las provincias de Agusan del Norte y Surigao del Sur. Los niveles de violencia durante los siguientes meses hasta finalizar el año fueron relativamente estables. Cabe destacar que en el mes de octubre el PCF ordenó al NPA incrementar sus ataques contra empresas chinas involucradas en proyectos de infraestructuras, a las que acusa de contaminar el medio ambiente y dañar los territorios ancestrales de varias minorías nacionales del país; de provocar la militarización de las regiones en las que operan, incluyendo las habitadas históricamente por los pueblos indígenas (Lumad); o incluso de erosionar los recursos marinos del Mar de Filipinas Oriental (o de la China Meridional), en violación de la soberanía de Filipinas. En el mes de diciembre, después de que las Fuerzas Armadas recomendaran a Duterte no decretar el tradicional alto el fuego por fechas navideñas, el presidente declaró que bajo su mandato no volvería a haber ningún otro cese de las hostilidades.

Aún si Duterte manifestó su intención de debilitar al NPA a través de la incentivación de rendiciones y deserciones, durante el año también reconoció que el terrorismo sigue siendo la principal amenaza del país,

identificando al NPA como el actor con mayor capacidad de desestabilizar el país (por encima del grupo armado de oposición Abu Sayyaf). Según datos hechos públicos por el Gobierno en julio, **el número de militares fallecidos en enfrentamientos con el (o ataques del) NPA desde 1975 hasta mediados de 2020 era de más de 13.300, una cifra más de cuatro veces superior a la de las bajas militares infringidas por el MNLF y el MILF**. Algunos medios de comunicación estimaron que el número de personas que podrían haber fallecido en el marco del conflicto armado era de alrededor de 53.000 personas.

Filipinas (Mindanao)	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansar Khilafa, Grupo Toraife, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato. Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por primera vez un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

En paralelo a los avances en la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y el MILF y el despliegue institucional de la Región Autónoma Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (RABMM), los niveles de violencia en determinadas regiones de Mindanao experimentaron una cierta reducción respecto de años anteriores. **En 2020, como en años precedentes, se registraron enfrentamientos entre las Fuerzas**

Armadas y varios grupos que operan en Mindanao y que han jurado lealtad a ISIS (como Abu Sayyaf, el Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, el Grupo Maute o Ansar Khilafa), pero también se produjeron episodios de violencia comunitarios y clánicos (conocidos localmente como rido), principalmente por cuestiones de tierras; así como escaramuzas entre facciones del MILF (que se halla en pleno proceso de desmovilización y reintegración), entre facciones del MNLF, o entre estos grupos y milicias locales. Aunque los enfrentamientos comunitarios o los protagonizados por facciones del MILF o el MNLF provocaron decenas de víctimas mortales, la mayor parte de los episodios de violencia que se registraron en el sur del país se produjeron en el marco de operaciones de contrainsurgencia contra grupos armados cercanos a ISIS, en las que las Fuerzas Armadas utilizaron ataques aéreos de manera recurrente. En octubre, las Fuerzas Armadas declararon que entre enero y septiembre más de 100 combatientes de los grupos vinculados a ISIS habían muerto, 227 se habían rendido y una treintena habían sido arrestados. La mayor parte de las víctimas mortales pertenecían a Abu Sayyaf (55), mientras que el resto eran del BIFF (28) o el Grupo Maute (24).

En febrero, un portavoz de las Fuerzas Armadas declaró que estaban en disposición de derrotar militarmente para finales de marzo a Abu Sayyaf, en los últimos años el principal grupo armado en Mindanao. Sin embargo, las dinámicas del conflicto en los meses posteriores parecieron desmentir esta afirmación. De hecho, **el Departamento de Defensa de EEUU publicó un informe en agosto en el que señalaba que a pesar del apoyo ininterrumpido de Washington a las Fuerzas Armadas y la Policía de Filipinas, del incremento de las operaciones contrainsurgentes de Manila y de la declaración de la ley marcial en Mindanao entre mayo de 2017 y 31 de diciembre de 2019, tanto la capacidad operativa y bélica de los grupos armados en el sur del país como su capacidad de reclutamiento se habían mantenido relativamente inalteradas desde el fin del asedio a la ciudad de Marawi a finales de 2017.** Cabe recordar que en tal asedio, en el que la ciudad quedó prácticamente destruida tras cinco meses de enfrentamientos de alta intensidad y un 98% de su población tuvo que desplazarse forzosamente, buena parte de la estructura de los grupos armados que participaron en ella quedó seriamente diezmada y la mayor parte de sus líderes murieron. El Gobierno declaró que esperaba que la reconstrucción de dicha ciudad hubiera finalizado en 2021 o durante el primer trimestre de 2022, pero a finales de año todavía había unas 127.000 personas que no habían podido regresar a sus hogares. Según algunos analistas, esta circunstancia confiere a varios grupos armados (en especial el Grupo Maute) una gran capacidad de reclutamiento.

En cuanto a Abu Sayyaf, el grupo protagonizó algunos de los principales episodios de violencia durante el

año. Cabe destacar, por ejemplo, un ataque en Patikul (provincia de Sulu) a mediados de abril en el que 11 soldados murieron y otros 14 resultaron heridos, o el atentado en la ciudad de Jolo a finales de agosto en el que dos personas se inmolaron con artefactos explosivos que estallaron de manera consecutiva, provocando que 15 personas murieran y que otras 74 resultaran heridas. Según el Gobierno, este atentado se produjo en represalia por la muerte en una batalla en julio de Hatib Hajan Sawadjaan, líder de una de las facciones más activas de Abu Sayyaf. Según algunas fuentes, Sawadjaan tomó el control del grupo tras la muerte en 2017 de Isnilon Hapilon, reconocido como el emir de ISIS en el sur de Filipinas. Según algunas fuentes, Sawadjaan era considerado como el líder de facto de ISIS en Mindanao, y habría impulsado nuevas formas de acción como los llamados atentados suicidas, una práctica que no se había utilizado en Mindanao desde el inicio del conflicto en los años setenta. Poco después del atentado en Jolo, el Gobierno declaró que desde la consolidación de ISIS en la región, y muy especialmente desde el mencionado asedio a la ciudad de Marawi, se han registrado cinco atentados de este tipo, el de mayor envergadura en enero de 2019 (23 personas murieron y 109 resultaron heridas tras el estallido de dos artefactos en la catedral de Jolo), orquestado precisamente por Sawadjaan. Tras la muerte de Sawadjaan, se estima que la facción que comandaba en Sulu (también conocida como Ajang-Ajang, y que opera en Sulu, Tawi-Tawi e incluso en el estado malasio de Sabah) pasó a ser liderada por su sobrino, Mudzimar “Mundi” Sawadjaan (varios de sus familiares perdieron la vida en combate durante el año). Siendo Abu Sayyaf un grupo poco jerárquico en los últimos años y con una organización interna muy determinada por el carácter insular de la zona en la que opera, las otras dos facciones de grupo están lideradas por Furuji Indama en Basilan y por Radullan Sahiron en Sulu. Las facciones de Sawadjaan y Indama declararon su lealtad a ISIS, mientras que las de Sahiron (que combatió con el fundador del grupo Abdurajak Janjalani y recibió el liderazgo de Abu Sayyaf de Khadaffi Janjalani tras su muerte en 2006) prefirió mantenerse distanciado de la creciente articulación de grupos armados en Mindanao impulsada por ISIS.

Durante el año el Gobierno declaró que el grupo estaba siendo seriamente diezmado por las operaciones de contrainsurgencia, la neutralización de algunos de sus líderes (como el propio Sawadjaan o Abduljihad Susukan en Davao a mediados de agosto) y las rendiciones de sus combatientes (solamente en el mes de octubre el Gobierno declaró que un centenar de miembros de Abu Sayyaf entraron en programa de desmovilización y reintegración), pero a la vez reconoció que sigue siendo una de las principales amenazas a la seguridad nacional. Según Manila, 83 personas han muerto (20 soldados y 63 civiles) y más de 500 (70 policías o militares y 435 civiles) han resultado heridas desde el año 2009 en los 47 atentados con

artefactos explosivos perpetrados por Abu Sayyaf en las provincias de Sulu, Basilan y Zamboanga. Del mismo modo, el Gobierno destacó el incremento de las actividades de piratería del grupo en el mar de Sulu y en las aguas cercanas al estado malasio de Sabah. Si bien el grupo ha centrado sus actividades en el secuestro (solamente entre 2016 y 2019 ha secuestrado a 39 personas de nacionalidad indonesia) y en el ataque a pequeñas embarcaciones, en ocasiones también ha llevado a cabo ataques contra mercantes de mayores dimensiones que navegaban entre China y Australia. En este sentido, ante el incremento de este tipo de actividades durante el año, los Gobiernos de Malasia, Indonesia y Filipinas reiteraron su intención de reforzar la cooperación antiterrorista en la región. Además, el Gobierno también destacó la capacidad del grupo para reclutar a combatientes extranjeros. Así, varios analistas señalaron que buena parte de los atentados suicidas de los últimos años fueron llevados a cabo por personas de nacionalidad extranjera (Egipto, Indonesia o Marruecos). En el asedio a la ciudad de Marawi murieron 39 combatientes de nacionalidad no filipina, y en 2018 el Gobierno identificó a alrededor de 100 combatientes extranjeros en la región, la mayoría de Indonesia y Malasia, pero también de países árabes, de Europa y de la región china de Xinjiang.

Además de los combates entre las Fuerzas Armadas y Abu Sayyaf en el archipiélago de Sulu y en la península de Zamboanga, otros grupos también estuvieron muy activos en otras regiones de Mindanao. En la región de Maguindanao y Cotobato Norte, la facción del BIFF conocida como Grupo Toraife (liderada por Esmael Abdulmalik, alias Comandante Toraife) protagonizó algunos episodios de violencia significativos durante el año (en marzo, por ejemplo, 14 combatientes del grupo y cuatro soldados murieron en un choque en Maguindanao), pero las otras dos facciones del grupo (lideradas respectivamente por Imam Minimbang, alias Comandante Karialan y por Esmael Abubakar, alias comandante Bungos) también llevaron a cabo varias acciones armadas en la región. En la provincia de Lanao del Sur, y especialmente en la ciudad de Marawi, el conocido como Grupo Maute también protagonizó varios episodios de violencia y, según el Gobierno, siguió reclutando a combatientes entre las decenas de miles de personas todavía desplazadas por la batalla de Marawi de 2017. Tras la muerte de los hermanos Maute y de su sucesor, Abu Dar, actualmente el grupo está dirigido por Ker Mimbantas (alias Comandante Zacarías). Finalmente, cabe destacar que en las regiones de Cotobato Sur, Sarangani o General Santos, la insurgencia más activa fue Ansar Khilafa, a pesar de que un operativo militar en septiembre provocó la muerte de su líder Jeffrey Nilong (alias comandante Momoy), mientras que las zonas centrales de Mindanao el grupo armado liderado por Salahuddin Hassan (que fue de los primeros en jurar lealtad al nuevo califa de ISIS, Al-Qurashi) también se mostró operativo.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP)
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados

El conflicto armado continuó activo durante todo el año y, como sucedió durante 2019, mantuvo su epicentro en el estado de Rakhine, con enfrentamientos constantes entre las fuerzas de seguridad gubernamentales y el grupo armado de oposición Arakan Army (AA). De acuerdo con las cifras recopiladas por ACLED, durante 2020 murieron 646 personas como consecuencia de los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los diferentes grupos armados de oposición que operan en el país. La mayor parte de los enfrentamientos y actos violentos que derivaron en muertes tuvieron lugar en el estado de Rakhine, que registró la violencia de mayor intensidad. También se produjeron episodios de violencia en los estados Chin, Shan y Kachin. El Gobierno chino negó estar proporcionando armamento a los grupos armados que operan en la zona fronteriza entre ambos países, ante las acusaciones de que estaba armando a grupos insurgentes para incrementar su capacidad de presión en el país. Uno de los episodios más graves tuvo lugar en febrero, cuando un ataque contra una escuela en el estado de Rakhine hirió a 21 estudiantes. En marzo, 21 personas resultaron muertas y más de 20 heridas como consecuencia de los ataques aéreos de las Fuerzas Armadas en el estado Chin, que trataban de evitar la toma por parte del AA de una base militar. Miles de personas se desplazaron

como consecuencia de la violencia que tuvo un impacto especialmente grave en la población civil. Además, el Gobierno declaró al AA organización terrorista. En mayo el Gobierno decretó un alto el fuego unilateral que debía prorrogarse hasta el mes de agosto (en respuesta al llamamiento efectuado por el secretario general de la ONU de decretar altos el fuego en todo el mundo durante el transcurso de la pandemia por COVID-19) pero que excluía las áreas que servían de base a organizaciones terroristas y por tanto dejaba fuera las zonas afectadas por el conflicto armado con el AA. En julio Naciones Unidas, cuatro misiones diplomáticas en el país y 21 organizaciones humanitarias internacionales (entre ellas Oxfam, Norwegian Refugee Council o Save the Children) hicieron un llamamiento a un alto el fuego en el estado de Rakhine, para poner fin a la escalada de la violencia en el norte del estado y proteger a la población civil. Entre agosto y octubre se produjo el desplazamiento forzado de más de 36.000 personas, según denunció la organización Rakhine Ethnic Congress, y en octubre tuvieron lugar operaciones militares conjuntas aéreas, terrestres y marítimas de las Fuerzas Armadas contra el AA. Además de los enfrentamientos con el grupo armado AA también se registraron choques con el ARSA. En junio dos integrantes de este grupo murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la frontera con Bangladesh. En el estado Shan, se repitieron los enfrentamientos entre el Ejército de Myanmar y el grupo armado de oposición RCSS. En julio la población civil denunció que se estaban produciendo muertes de civiles como consecuencia de las operaciones militares contra el RCSS, lo que había llevado a centenares de personas a desplazarse de manera forzada huyendo de la violencia. También se produjeron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el SSA-N, forzando el desplazamiento de más de 200 personas.

En noviembre el partido de Aung San Suu Kyi, NLD, ganó las elecciones generales del país obteniendo una mayoría parlamentaria suficiente para formar gobierno. Observadores internacionales como el Carter Center certificaron que las elecciones se habían celebrado de forma libre y transparente en términos generales, aunque estuvieron precedidas de un clima de violencia que llevó a su cancelación en gran parte del estado Rakhine, así como en zonas de los estados Shan y Kachin que habían sido escenario de violencia en las semanas previas. En octubre los enfrentamientos armados entre el AA y las fuerzas de seguridad se habían intensificado ocasionando decenas de víctimas, según International Crisis Group. Tras las elecciones y la publicación de los resultados, aunque el AA se mostró favorable a que las elecciones pudieran tener lugar en el estado de Rakhine durante el mes de diciembre y se anunció un alto el fuego informal para facilitarlos, finalmente no se celebraron.

En lo que respecta a los impactos de género del conflicto armado, la denuncia de una mujer en el estado Rakhine por violencia sexual contra tres soldados, puso de nuevo sobre la mesa la utilización de la violencia sexual en el conflicto, denunciada y reconocida por

múltiples organizaciones de derechos humanos. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló que la impunidad por la violencia sexual y de género continuaba siendo generalizada.

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Síntesis:	El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Pattani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

Los niveles de violencia en el sur del país se redujeron sustancialmente respecto de los años anteriores y alcanzaron un mínimo histórico en las últimas décadas. Según fuentes del centro de investigación Deep South Watch, en 2020 110 personas murieron y otras 160 resultaron heridas en las provincias sureñas de Yala, Pattani, Narathiwat y Songkhla. Estas cifras de mortalidad suponen un claro descenso respecto de las 180 víctimas mortales registradas en el año 2019 y en los años anteriores (218 en 2018, 235 en 2017, 307 en 2016, 246 en 2015, 341 en 2014, mientras que en los cuatro años anteriores las víctimas mortales siempre fueron superiores a 450). Según algunos analistas, este descenso de la mortalidad asociada al conflicto responde principalmente a los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19 y, muy especialmente, a la decisión del BRN, el grupo armado con mayor implantación territorial y capacidad bélica, de iniciar conversaciones de paz directas con el Gobierno a partir del mes de enero. En varias ocasiones durante el año, el Gobierno insistió en la necesidad de que se redujeran los niveles de violencia para crear una atmósfera propicia para abordar los aspectos sustantivos de la negociación entre ambas partes. En esta línea, cabe destacar que **el 3 de abril el BRN declaró un cese de todas sus acciones armadas ofensivas citando motivos humanitarios y enfatizando la necesidad de priorizar la contención de**

la pandemia COVID-19. El comunicado del BRN se produjo el mismo día que el secretario general de la ONU, António Guterres, hiciera un nuevo llamamiento a todas las partes en conflicto en el mundo a decretar un alto el fuego. Sin embargo, el propio comunicado emitido por el BRN señalaba que el cese de hostilidades era vigente siempre y cuando no se produjeran acciones armadas en su contra por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Poco después de que se hiciera público el comunicado del BRN, las Fuerzas Armadas anunciaron su intención de proseguir con sus actuaciones para preservar la legalidad y la estabilidad en el sur del país. Durante el mes de abril se produjo una reducción sustancial de las hostilidades bélicas entre las partes, aunque a finales de mes se volvió a incrementar la tensión entre el Gobierno y el BRN después de que las Fuerzas Armadas mataran a tres presuntos insurgentes acusados de estar organizando atentados durante el Ramadán. Dos días más tarde, dos soldados fueron asesinados en el distrito de Nong Chik (provincia de Pattani), episodio que fue considerado un acto de venganza por parte de las Fuerzas Armadas y que según algunos medios de comunicación simbolizó el fin de la tregua por parte del BRN. Según algunos medios de comunicación, algunas organizaciones de la sociedad civil como The Patani o la Asociación Médica Islámica, fueron clave en la decisión del BRN de decretar un cese de hostilidades por razones humanitarias. El jefe del panel negociador del Gobierno, Wanlop Rugsanaoh, valoró positivamente el alto el fuego del BRN, aunque también indicó que la reducción de la mortalidad en el período en el que duró el alto el fuego podría deberse también a otros factores. Otro aspecto que podría denotar un mayor compromiso del BRN con el proceso de resolución negociada del conflicto fue su decisión de firmar una Declaración de Compromiso para Proteger a los Menores de los Efectos de los Conflictos Armados con la ONG Suiza Geneva Call. Tras varios años de trabajo conjunto con Geneva Call, la firma de dicho compromiso tuvo lugar a mediados de febrero, poco después del inicio de las negociaciones con el Gobierno. El BRN se comprometió a seguir trabajando para una mejor observación del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de protección de la infancia y la educación. Cabe recordar que históricamente en el sur de Tailandia se han registrado ataques contra las escuelas y el colectivo docente.

A pesar de la reducción de la violencia y del inicio de conversaciones directas entre el Gobierno y el BRN (que llevaron a cabo dos rondas de negociación en enero y marzo, pero mantuvieron comunicación a distancia durante todo el año), **el Gobierno volvió a prorrogar el decreto de emergencia que rige en el sur de Tailandia desde hace 15 años y que ha sido prolongado en más de 60 ocasiones.** Como en años anteriores, dicha decisión fue criticada por congresistas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales por considerar que alienta la impunidad de las Fuerzas Armadas en la contención de la insurgencia. En agosto, sin embargo, el Ejército recomendó al Gobierno que

retirara las medidas de emergencia de cuatro distritos de las provincias sureñas por considerar que la situación de seguridad había mejorado ostensiblemente en los últimos años. Según datos de las Fuerzas Armadas hechos públicos en ese mes, el número de víctimas mortales respecto del año anterior había disminuído en un 70%. En cuanto a la dinámica del conflicto, algunos de los episodios de violencia más remarcables del año se produjeron en febrero, cuando seis combatientes murieron en Narathiwat en enfrentamientos con el Ejército; a mediados de marzo, resultando heridas 30 personas tras el estallido de un artefacto explosivo delante de la sede del Centro para la Administración de las Provincias Sureñas Fronterizas; a finales de abril, cuando un operativo militar provocó la muerte de tres combatientes y desencadenó el fin de la tregua por parte del BRN; a mediados de julio, con el estallido de dos bombas en Pattani, en el que 10 personas resultaron heridas; o a mediados de septiembre, por los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y un grupo de insurgentes que finalizaron con la muerte de seis de estos últimos en la provincia de Pattani.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Ucrania (este)	
Inicio:	2014
Tipología:	Gobierno, Identidad, Autogobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Síntesis:	Ucrania, considerado un país en transición desde su independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y territorio de gran importancia geoestratégica, afronta un conflicto armado en zonas del este del país y es escenario de la crisis más grave entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Precedido por un cúmulo de focos de tensión en el conjunto del país entre finales de 2013 y 2014 (protestas masivas pro-europeas y antigubernamentales; caída del presidente Víktor Yanukóvich y su régimen; anexión de Crimea por Rusia; protestas anti-Maidán y emergencia de actores armados en el este), la situación en el este de Ucrania derivó en conflicto armado en el segundo trimestre de 2014, enfrentando a milicias separatistas pro-rusas en las regiones de Donetsk y Lugansk, apoyadas por Rusia, y a las Fuerzas Armadas estatales bajo las nuevas autoridades pro-europeas. Las áreas de Donetsk y Lugansk bajo control de las fuerzas rebeldes se declararon repúblicas independientes. A cuestiones como el estatus de esas provincias se añade de fondo la dimensión geoestratégica internacional (rivalidad política, económica y militar entre Occidente y Rusia en el este de Europa; demostración de fuerza de Rusia ante su propia opinión pública; entre otros elementos). La guerra ha tenido un grave impacto en la población civil, especialmente en términos de desplazamiento forzado. La guerra transcurre en paralelo a un proceso de paz con negociaciones en diversos niveles y formatos.

Se redujo la violencia en el este de Ucrania, especialmente en la segunda mitad del año, de la mano de la renovación del alto el fuego a finales de julio, si bien el conflicto continuó teniendo impactos en seguridad humana, algunos agravados en el contexto de la pandemia de la COVID-19. En 2020 murieron un centenar de personas, según la base de datos del centro de investigación ACLED, frente a los cerca de 400 registrados en 2019. En la primera mitad del año la Misión de Observación de la OSCE identificó numerosas violaciones del alto el fuego, con periodos de incrementos y reducciones de incidentes en diversas áreas de la zona de conflicto. De las tres áreas designadas en años anteriores como zonas de retirada de fuerzas (Stanytsia Luhanska, Zolote y Petrivske), en Petrivske se registraron violaciones del alto el fuego y, más puntualmente, también en Zolote. Se intensificaron las violaciones del alto el fuego en febrero y principios de mayo, así como en periodos de mayo y junio. Los incidentes de principios de mayo, con bombardeos en varias localidades en medio del contexto de pandemia y confinamiento, resultaron en seis menores heridos –además de víctimas civiles adultos–, lo que motivó demandas de la ONU de cumplimiento del derecho internacional humanitario y de respaldo al llamamiento al alto el fuego global del secretario general de la ONU. UNICEF dio un balance de nueve ataques contra colegios entre principios de año y mayo, cinco de ellos en abril, pese a la adhesión de Ucrania en 2019 a la Declaración de Escuelas Seguras, que compromete a la protección de la educación en contextos de conflicto. La misión de la OSCE también observó a lo largo del año presencia de armamento que incumplía las restricciones de las líneas para su retirada, incluyendo junto a áreas pobladas y puntos de cruce de civiles, así como presencia de minas y artefactos sin explotar, que causaron diversas víctimas. Según la OSCE, murieron más civiles a causa de minas que en el año anterior. **En el marco del Grupo Trilateral de Contacto las partes en conflicto alcanzaron el 23 de julio un acuerdo de medidas para reforzar el alto el fuego, que entró en vigor el 27 de julio.** Tras el acuerdo se redujeron significativamente los niveles de violencia y las violaciones del alto el fuego. En términos generales el alto el fuego fue respetado, pese a registrarse incidentes. Entre ellos, en noviembre la OSCE informó de que el 44% de las violaciones del alto el fuego desde el acuerdo se produjeron en áreas en torno a la estación de filtrado de agua de Donetsk. En diciembre se produjo un repunte de violaciones del alto el fuego.

La pandemia de la COVID-19 tuvo impactos negativos en la seguridad humana de la población afectada por el conflicto. Hubo cierres de los puntos de cruce de la Línea de Contacto (línea de separación de fuerzas establecida por el Acuerdo de Minsk de 2015), lo que impactó especialmente en personas mayores, que no pudieron cruzar para recibir sus pensiones y subsidios. Entre

mediados de marzo y junio todos los pasos estuvieron cerrados, en junio reabrieron parcialmente dos, y en diciembre seguían abiertos solo dos. En 2020 se registraron 3 millones de desplazamientos individuales a través de los puntos de cruce (solo un 22% del total de 2019). Los desacuerdos y el contexto de pandemia bloquearon las discusiones sobre la apertura de nuevos pasos adicionales. Norwegian Refugee Council alertó en septiembre de que **las consecuencias económicas de la pandemia impactaron negativamente en ocho de cada 10 familias en las regiones de Donetsk y Lugansk en términos de seguridad alimentaria y medios de vida** por el incremento de precio de alimentos y productos de higiene, costes adicionales de transporte y pérdidas de ingresos familiares en los meses de cuarentena. También ACNUDH alertó de que la pandemia había exacerbado las dificultades que afrontaba la población afectada por el conflicto en el este de Ucrania, especialmente por el impacto de las restricciones de libertad de movimiento en los derechos económicos y sociales, incluyendo la pérdida de acceso a asistencia sanitaria, educación, pensiones y medios de vida.⁶³ La pandemia situó a Ucrania en la peor recesión en décadas, según otro estudio de varias agencias de Naciones Unidas, que advirtieron del riesgo de que nueve millones de personas pasaran a situación de pobreza.⁶⁴ Pese a que no incluía datos separados de las áreas del este, OCHA alertó de que las consecuencias serían devastadoras para la población de las zonas en conflicto. Algunos analistas alertaron también del riesgo de una grave crisis humanitaria en las regiones del este y que esta podría afectar al rumbo del conflicto. A finales de año, 3,4 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria a causa del conflicto. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales alertaron del incremento de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico en el conjunto del país.

Rusia y Cáucaso

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Inicio:	2020
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj,
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	
El conflicto entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj –enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente de facto– está asociado a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991 y 1994. Este comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad	

63. ACNUDH, *Impact of COVID-19 on Human Rights in Ukraine*, diciembre de 2020.

64. ONU Mujeres, FAO, PNUD, *Analytical report COVID-19 in Ukraine: Impact on Households and Businesses*, octubre de 2020.

de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre esta y su vecina Armenia. El conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego. Desde el alto el fuego de 1994 ha habido diversas escaladas de violencia, como en 2016 con varios centenares de víctimas mortales. En 2020 se reabrió el conflicto armado.

Se reinició la guerra en torno a Nagorno-Karabaj entre fuerzas armenias y de Azerbaiyán en septiembre, con más de 5.000 fallecidos, mayoritariamente militares, y decenas de miles de personas desplazadas, mayoritariamente armenias. La guerra remitió en noviembre con un acuerdo tripartito entre Azerbaiyán, Armenia y Rusia –mediado por esta última– que supuso un cambio total del statu quo previo a la guerra: ratificó la partición de Nagorno-Karabaj, asignando a Azerbaiyán las áreas dentro de Nagorno-Karabaj tomadas por Bakú desde septiembre y decretó la recuperación por Azerbaiyán de todas las áreas adyacentes a Nagorno-Karabaj, mientras dejaba irresuelto el estatus de la región. El acuerdo fue acogido en Azerbaiyán como una victoria propia y una capitulación de Armenia, mientras las autoridades de Armenia y de Nagorno-Karabaj lo presentaron ante sus poblaciones como inevitable y como medio para evitar la pérdida de todo el territorio de Nagorno-Karabaj. **La guerra estuvo precedida por una escalada militar de varios días de julio en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, con uso de armamento pesado y más de una decena de fallecidos.**

El conflicto armado entre las fuerzas de Armenia y Nagorno-Karabaj y de Azerbaiyán se inició el 27 de septiembre, con acusaciones mutuas sobre su inicio. El Gobierno de Azerbaiyán lanzó ese día una ofensiva de gran escala, según Bakú, en respuesta a ataques de Armenia contra sus Fuerzas Armadas y asentamientos civiles. Mientras, Armenia acusó a Azerbaiyán de iniciar la guerra con su ofensiva. De fondo, analistas señalaron, entre otros elementos, al hartazgo de Azerbaiyán con el statu quo –en que los siete distritos adyacentes a Nagorno-Karabaj y de los que se desplazó forzosamente su población azerbaiyana por la guerra de los años noventa, habían permanecido bajo control armenio desde entonces. Con el estallido de la guerra ambos Estados declararon la ley marcial y la movilización militar. Las hostilidades transcurrieron en diversas áreas en torno a la línea de contacto, que fue quebrada por las fuerzas militares de Azerbaiyán, extendiéndose a distritos alrededor de Nagorno-Karabaj, así como a la propia región de Nagorno-Karabaj, incluyendo bombardeos frecuentes contra la capital, Stepanakert. Algunas localidades de Armenia y Azerbaiyán cercanas a la zona de conflicto también se vieron afectadas por

ataques, como las localidades azerbaiyanas de Ganja –12 víctimas mortales y 40 heridos en bombardeos a mediados de octubre según Azerbaiyán– y Mingachevir y Bardá –con una treintena de fallecidos y más de 80 heridos en ataques aéreos entre el 27 y 28 de octubre–; o áreas en torno a la localidad de Vardenis, en Armenia.

El reinicio de la guerra desencadenó llamamientos internacionales a un alto el fuego. Por su parte, Turquía, expresó su apoyo a Azerbaiyán y se comprometió a apoyarlo por todas las vías, abriendo la puerta a medios militares. Armenia acusó a Turquía de implicación en el conflicto, incluyendo a través del envío por parte de Turquía de combatientes de Siria a combatir junto a las fuerzas azerbaiyanas. Medios de comunicación señalaron la presencia de combatientes de la guerra de Siria en Azerbaiyán en apoyo a Bakú. Turquía y Azerbaiyán negaron las acusaciones. Turquía proporcionó apoyo militar a través de entrenamiento y de suministro de armamento, incluyendo drones armados. Hubo varios intentos de tregua que resultaron fallidos. Dos días después del anuncio de la toma militar por Azerbaiyán de la localidad de Shusha/Shushi –segunda localidad de Nagorno-Karabaj y de gran peso simbólico e importancia geoestratégica, y desde la cual la toma de Stepanakert podía ser inmediata–, **las partes anunciaron un acuerdo, que entró en vigor el 10 de noviembre y que contenía nueve puntos, incluyendo un alto el fuego y cese de hostilidades total**, la división de Nagorno-Karabaj, el despliegue de fuerzas rusas de mantenimiento de la paz, el control de Azerbaiyán de todos los distritos adyacentes –excepto el corredor de Lachin, que conecta Nagorno-Karabaj y Armenia, que pasaba a ser controlado por las fuerzas rusas–, el retorno de la población desplazada a Nagorno-Karabaj y a áreas adyacentes y el desbloqueo de las conexiones de transporte, entre otros.⁶⁵ La tregua se mantuvo mayoritariamente en vigor, aunque a mediados de diciembre se denunciaron algunas violaciones del alto el fuego en varios días de diciembre en la región de Hadrut. La entrega del distrito de Kelbajar a Azerbaiyán se retrasó al 25 de noviembre, mientras las de Agdam y Lachin se produjo en las fechas previstas, el 20 de noviembre y 1 de diciembre. A su vez, en diciembre se produjeron varios intercambios de prisioneros.

La guerra causó más de 5.000 víctimas mortales militares y más de un centenar de civiles. Azerbaiyán informó de 2.783 fallecidos militares y 94 civiles, así como de 1.245 militares heridos y más de 400 civiles heridos. Por su parte, Armenia y Nagorno-Karabaj cifraron en 2.718 los fallecidos militares en sus filas, y 54 víctimas mortales civiles. Las víctimas civiles incluyeron menores. Varios centenares de militares estaban desaparecidos –un centenar de Azerbaiyán, y varios cientos de Armenia. **Varias decenas de miles de personas armenias –100.000 según cifras de algunos medios de comunicación, 130.000 según UNICEF– se**

65. Véase el resumen sobre Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021

desplazaron por la guerra. Amnistía Internacional verificó y denunció el uso de municiones de racimo por parte de Armenia y de Azerbaiyán, así como otros tipos de proyectiles contra zonas densamente pobladas. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ataques indiscriminados en zonas pobladas en Nagorno-Karabaj y en torno a la región, y llamó a la investigación sobre posibles crímenes de guerra. HRW constató y denunció malos tratos por parte de las fuerzas de Azerbaiyán de prisioneros militares armenios. La guerra generó destrozos en infraestructura civil, incluyendo daños extensos en edificios residenciales, así como en patrimonio cultural y religioso. Según UNICEF, 76 escuelas y guarderías fueron dañadas entre finales de septiembre y finales de octubre. A mediados de diciembre, las principales necesidades humanitarias según el CICR incluían la localización de personas desaparecidas, el acceso a todos los prisioneros de guerra, suministros de alimentos e ítems de invierno para la población desplazada o retornada, apoyo para el alojamiento, apoyo en salud mental y psicosocial, reparaciones de infraestructura civil, abordaje del aumento de casos de coronavirus, entre otros.

El acuerdo de alto el fuego de noviembre generó una crisis política y social en Armenia, con fuerte rechazo al pacto, movilizaciones de protesta e irrupción de manifestantes en edificios gubernamentales. Las movilizaciones se prolongaron en semanas posteriores. Sectores opositores plantearon un ultimátum al primer ministro armenio, Nikol Pashinian, para su renuncia, y activistas lanzaron una campaña de desobediencia civil y bloqueos de calles tras el rechazo de Pashinian al ultimátum. Varios ministros (Defensa, Exteriores, Economía) dejaron sus cargos en semanas posteriores al acuerdo.

Se reanudó la guerra entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno-Karabaj, con varios miles de víctimas mortales y un cambio total del statu quo en la región

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Síntesis:	El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil

kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años ochenta ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Turquía y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

El conflicto continuó activo en el sudeste de Turquía y, especialmente, en el norte de Iraq, donde Turquía intensificó sus ataques contra el PKK en diversos momentos del año en un escenario regional en el que se incrementó la tensión entre actores kurdos. **Se redujo la cifra de fallecidos.** Según International Crisis Group, 292 personas fallecieron en 2020 (frente a 468 en 2019), de las cuales la mayoría, 217, eran miembros del PKK. ACLED contabilizó 538 víctimas mortales en 2020 (frente a las más de 970 víctimas en 2019).

Continuaron las operaciones del Ejército turco en áreas del este y sudeste de Turquía, incluyendo zonas de las provincias de Agri, Van, Bitlis, Hakkari y Sirnak. No obstante, en 2020 el grueso de las víctimas mortales asociadas al conflicto se produjeron en el norte de Iraq. En marzo Turquía anunció la muerte de una de las integrantes del Comité Ejecutivo del PKK y co-fundadora de la rama de mujeres de la guerrilla, Nazife Bilen (alias Hacer Hilal), en una operación de los servicios de inteligencia en la región de Qandil. Turquía lanzó en junio la operación Garra de Águila contra el grupo en torno a las montañas de Qandil, Sinjar y el distrito de Makhmur, todas ellas en el norte de Iraq y estratégicas para el PKK. Fue seguida de la operación Garra de Tigre –terrestre, con apoyo aéreo– en la provincia de Duhok (norte de Iraq). Turquía alegó su derecho a atacar a quienes le atacaban. Por su parte, el PKK se atribuyó numerosas acciones de guerrilla contra el Ejército turco en la zona de Haftanin (Dohuk), alegando haber causado más de 200 bajas de militares solo entre finales de junio y de julio. Murat Karayilan, miembro del Comité Ejecutivo del PKK, afirmó que la situación en Haftanin mostraba que el PKK podía hacer frente a la tecnología militar moderna de Turquía. Además, afirmó que **el grupo demandaba reconocimiento de la identidad kurda y derechos relativos a cultura y lengua y autogobierno, con una solución dentro de Turquía.**

En el escenario regional se incrementaron las tensiones entre el PKK y el KDP –partido kurdo gobernante en la región kurda del norte de Iraq–, y entre el PKK y el Gobierno iraquí. El KDP desplegó fuerzas en abril al oeste de las montañas de Qandil, así como en octubre al noreste de Dohuk, y estableció puestos de control en torno a localidades que rodeaban la montaña de Gare –área con campos del PKK. El grupo armado advirtió de que los despliegues de fuerzas kurdas vinculadas al KDP en áreas donde están las bases del PKK se asemejaban a preparativos de guerra. Además, en octubre el Gobierno de Iraq y el KRG alcanzaron un acuerdo sobre el estatus de Sinjar (gobernación de Nínive), que distribuía competencias entre ambos en cuestiones administrativas, de seguridad y reconstrucción, entre otros aspectos, y que incluye la expulsión de fuerzas del PKK. Este criticó el pacto. En el marco de ese acuerdo, tropas iraquíes fueron desplegadas en noviembre en el distrito de Sinjar. A mediados de diciembre se produjeron choques entre fuerzas kurdas vinculadas al KDP y del PKK en la zona de Amedi (provincia de Dohuk), con dos fallecidos y varios heridos. Dos días después se produjeron choques entre miembros de las fuerzas del PKK e YPG (guerrilla kurda de siria vinculada al PKK), por un lado, y *peshmergas*, por otro, en torno al paso fronterizo de Fish Khabur (Dohuk, frontera con Siria), incrementándose las alertas de riesgos de conflicto intra-kurdo.

En el ámbito político y social en Turquía **continuaron las detenciones masivas de representantes políticos y activistas civiles kurdos, así como el cese de alcaldes y alcaldesas kurdas electas.** De los 65 municipios en que el partido pro-kurdo HDP obtuvo la alcaldía en las elecciones de 2019, en octubre de 2020 solo gobernaba en cinco de ellas, por la destitución forzada por las autoridades turcas. Varias decenas de co-alcaldes/as permanecían en prisión. El HDP hizo llamamientos al Consejo de Europa y al Comité de las Regiones de la UE a adoptar medidas. El nuevo partido Deva Parti, del ex ministro turco de Economía del AKP Ali Babacan, calificó de arbitrarias las detenciones de alcaldes del HDP en mayo.

Algunas informaciones en prensa señalaron que Babacan sería favorable a una mayor libertad lingüística y autonomía para la población kurda. Por otra parte, Mithat Sancar fue nombrado nuevo co-líder del HDP, mientras su co-líderesa Pervin Buldan, fue renovada en el cargo y llamó a una nueva Constitución con garantías para todas las identidades y creencias. Por otra parte, **el Gobierno autorizó en marzo una visita al líder del PKK encarcelado, Abdullah Ocalan, por su hermano, Mehmet Ocalan,** en el contexto de tensión tras un incendio forestal en la isla donde está la prisión. Era la primera visita de un familiar tras siete meses, mientras siguieron negándose las visitas a sus abogados (la última en 2019, tras ocho años sin visitas).

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen (al-houthistas)	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shíi, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se cobró miles de víctimas mortales y provocó también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis fracasaron y las treguas suscritas se rompieron sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. El conflicto ha ido adquiriendo una creciente dimensión regional e internacional y se ha visto influido por las tensiones entre Irán y Arabia Saudita y entre Washington y Teherán.

El conflicto armado en Yemen continuó siendo uno de los más graves a nivel mundial, con altísimos niveles de letalidad, la participación de numerosos actores armados, disputas superpuestas y severos impactos en la población civil que se agravaron aún más durante el año a causa de la violencia, la crítica situación humanitaria y el impacto de la COVID-19. Según los datos del centro de investigación ACLED, el conflicto armado provocó la muerte de casi 20.000 personas en 2020 (19.740), la mayor parte en ataques explosivos o como resultado de enfrentamientos. Esta cifra es similar a la registrada el año anterior en el que se contabilizaron unas 23.000 víctimas mortales, e

inferior a la de 2018, cuando se registraron en torno a 30.000. No obstante, diversas voces, incluyendo la agencia humanitaria de la ONU, subrayaron la necesidad de tener en cuenta las muertes indirectas provocadas por el conflicto armado. Según OCHA, en los últimos cinco años la guerra en Yemen ha dejado 233.000 muertes, de las cuales 131.000 serían resultado de causas indirectas como la falta de alimentos o de acceso a atención de salud. En este sentido, al finalizar el año 24,3 millones de yemeníes necesitaban algún tipo de asistencia humanitaria y protección y se multiplicaron las voces de alerta sobre la hambruna en el país, la peor en décadas a nivel mundial, según advirtió el secretario general de la ONU. La violencia también continuó motivando masivos desplazamientos de población: más de 100.000 personas habían huido de sus hogares solo entre enero y junio de 2020. Según datos de ACNUR, Yemen se situaba entre los países con mayor población desplazada interna a nivel mundial, con un total de 3,7 millones –en su mayoría mujeres y menores–, en cuarto lugar después de Colombia, Siria y la RDC. La inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza, las dificultades de acceso de la ayuda humanitaria y la destrucción de infraestructuras de salud en el marco del conflicto agravaron los riesgos de expansión y los impactos de la pandemia. Sin posibilidad de recoger datos exhaustivos, las informaciones parciales apuntaban a una tasa de letalidad de la enfermedad hasta cuatro veces superior que el promedio mundial.

En este contexto, cabe destacar que **el Grupo de Expertos de la ONU sobre Yemen presentó un nuevo informe sobre el conflicto armado en el que señala la responsabilidad de todas las partes en el sinnúmero de abusos cometidos contra la población yemení.** Basándose en sus conclusiones, a finales de año el grupo solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que ampliara las sanciones y remitiera el caso de Yemen a la Corte Penal Internacional.⁶⁶ En su informe, el grupo analiza la situación en el país entre julio de 2019 y junio de 2020, insistiendo en que los actores armados implicados en el conflicto han continuado cometiendo violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y que estos abusos constituyen un patrón que se reproduce durante las hostilidades y más allá de los frentes de batalla.⁶⁷ Las vulneraciones incluyen muertes de civiles en ataques indiscriminados, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencia de género –incluyendo violencia sexual–, torturas,

El conflicto armado en Yemen continuó siendo uno de los más graves a nivel mundial, con altísimos niveles de letalidad, implicación de numerosos actores armados, disputas superpuestas y graves impactos en la población civil

reclutamiento de menores, denegación del debido proceso, violaciones a los derechos fundamentales y ataques a activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, incluyendo defensoras de los derechos de las mujeres. El grupo de expertos insistió en la necesidad de que terceros Estados suspendan la transferencia de armas a las partes en pugna y subrayó la urgencia de un cese el fuego total, que no se concretó durante 2020.

Respecto a la evolución del conflicto, durante el año las dinámicas oscilaron entre declaraciones de tregua y recrudescimiento de la violencia, pero a nivel general las hostilidades entre los diversos actores armados persistieron y se intensificaron. De hecho,

si a principios de año se identificaban 33 frentes de batalla, a finales de octubre se contabilizaban 47, según datos de OCHA. Las hostilidades –que transcurrieron en paralelo a iniciativas de mediación y facilitación– se desarrollaron principalmente en torno a dos ejes de confrontación. En primer lugar, la disputa protagonizada principalmente por los al-houthistas y el Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, apoyado por la coalición militar liderada por Arabia Saudita. A pesar de ciertas expectativas por la reducción parcial de la violencia a finales de 2019 –en el marco de contactos informales entre Riad y los al-houthistas–, desde principios de 2020 se hizo patente la intensificación de los enfrentamientos. Desde los primeros meses del año la violencia afectó de manera progresiva a Sanaa, al-Jawf, la costa del Mar Rojo y Marib –esta última rica en petróleo y último centro urbano importante en manos de Hadi. Tras el llamamiento del secretario general de la ONU a un alto el fuego global con motivo de la pandemia de COVID-19, las partes manifestaron su apoyo a la iniciativa, pero solo en términos retóricos, ya que las hostilidades continuaron. En abril Arabia Saudita declaró formalmente una tregua unilateral que despertó algunas expectativas, pero la iniciativa fue rechazada por los al-houthistas que exigieron un compromiso saudí más amplio, que incluyera el fin al bloqueo en las áreas controladas por el grupo armado –considerado por Riad como “proxy” de Irán.⁶⁸ En la práctica, la violencia se incrementó, ampliándose a la región de al-Bayda y con mayores intercambios de fuego en la zona fronteriza con Arabia Saudita. En un contexto de bloqueo de las negociaciones promovidas por la ONU y de críticas y acusaciones de parcialidad al enviado especial a Yemen, Martin Griffiths –tanto por los al-houthistas como por el Gobierno de Hadi–, el

66. UN Human Rights Council, *UN Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen Briefs the UN Security Council Urging an end to impunity, an expansion of sanctions, and the referral by the UN Security Council of the situation in Yemen to the International Criminal Court*, 3 de diciembre de 2020.

67. UN Human Rights Office of the High Commissioner, *UN Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen releases their third report Yemen: A Pandemic of Impunity in a Tortured Land*, 9 de septiembre de 2020.

68. Para más información, véase el resumen sobre Yemen del Sur en el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

incremento de los incidentes violentos en el puerto de Hodeida hizo temer por la continuidad del Acuerdo de Estocolmo, suscrito por las partes a finales de 2018. No obstante, las gestiones diplomáticas permitieron avanzar en la implementación del acuerdo en lo referente al intercambio de prisioneros. En octubre, al-houthistas y el Gobierno de Hadi liberaron a un millar de presos.

El segundo eje de confrontación se dio en el seno del bando anti al-houthista, entre las fuerzas de Hadi y el Southern Transitional Council (STC), conglomerado de fuerzas separatistas del sur apoyadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU). Tras la escalada de violencia registrada en 2019 y la consiguiente firma del acuerdo de Riad, en 2020 quedaron en evidencia las dificultades para implementar el pacto y los enfrentamientos continuaron con oscilaciones a lo largo de todo el año. Los principales escenarios de violencia fueron Abyan y la estratégica isla de Socotra. La crisis se intensificó en abril, cuando el STC decidió decretar una administración autónoma en el sur, en medio de acusaciones al Gobierno de Hadi por supuestos preparativos para lanzar una nueva ofensiva sobre Adén, su área de influencia. En junio las fuerzas del STC tomaron la capital de Socotra –ya se habían registrado incidentes en la isla en febrero–, pero la tensión remitió tras un acuerdo mediado por Arabia Saudita. En julio el STC rescindió la declaración de autonomía y los contactos para intentar reducir la tensión continuaron, aunque en medio de amenazas y de continuos incidentes armados. Otro escenario de enfrentamientos durante el año fue Taiz, donde se produjeron choques entre fuerzas del partido islamista Islah y fuerzas de EAU y milicias próximas.

Finalmente, en diciembre, el Gobierno de Hadi y el STC anunciaron la formación de un nuevo gobierno, uno de los puntos clave del acuerdo de Riad de 2019 y para el desbloqueo del proceso que intenta impulsar la ONU. El nuevo gabinete no incluye ninguna mujer entre sus miembros –por primera vez en dos décadas–, hecho que fue denunciado por organizaciones de mujeres yemeníes. **Al finalizar el año, un ataque explosivo en el aeropuerto de Adén justo en momentos en que el nuevo gabinete desembarcaba de su avión evidenció el volátil contexto de seguridad. La ofensiva no causó muertes entre los ministros, pero sí de otras 26 personas y dejó un centenar de heridos.** A finales de año, las perspectivas de evolución del conflicto también dependían de la posible calificación de los al-houthistas como grupo terrorista por EEUU, tras las amenazas de la administración de Donald Trump en este sentido. Una medida que –según diversos análisis– podía alentar acciones de represalia por parte del grupo armado y dificultar aún más la entrega de ayuda humanitaria.⁶⁹

Yemen (AQPA)

Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Al- Qaeda en la Península Arábiga (AQPA/Ansar Sharia), ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, milicias tribales, milicias al-houthistas/Ansar Allah
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

Afectado por múltiples conflictos y desafíos internos, en los últimos años el Gobierno yemení ha enfrentado una fuerte presión internacional –sobre todo de EEUU y Arabia Saudita– para dedicar esfuerzos a la lucha contra al-Qaeda en el país, especialmente tras la fusión de la rama saudí y yemení de la organización que a comienzos de 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). Si bien la presencia de al-Qaeda en Yemen se registra desde los noventa –con episodios de alta repercusión como el atentado suicida contra el barco de guerra estadounidense USS Cole en 2000–, se ha observado una escalada en sus acciones. En diciembre de 2009 el fallido atentado contra un avión que se dirigía a Detroit centró la atención internacional en AQPA, considerado por EEUU como una de las principales amenazas a su seguridad. Aprovechando el vacío de poder en Yemen en el marco de la revuelta contra el presidente Alí Abdullah Saleh (2011), AQPA amplió sus operaciones en el sur del país y las zonas bajo su control. El grupo comenzó a realizar algunas de sus acciones bajo la denominación Ansar Sharia (Partidarios de la Ley Islámica) y desde mediados de 2014 AQPA se vio crecientemente involucrada en enfrentamientos con milicias al-houthistas que avanzaron posiciones desde el norte de Yemen. AQPA ha aprovechado el clima de inestabilidad y la escalada de violencia en el país a partir de marzo de 2015 –en el marco del conflicto entre los al-houthistas y las fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi– y se ha enfrentado a ambos bandos. Este escenario también ha favorecido el ascenso de ISIS, que en los últimos años ha reivindicado diversas acciones en el país.

En línea con lo ocurrido en los últimos años, en 2020 las dinámicas de violencia que han cobrado protagonismo en Yemen en el último lustro⁷⁰ restaron visibilidad al conflicto protagonizado por al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), la filial de al-Qaeda en el país. Esta tendencia se ha visto reforzada por un declive de las actividades del grupo como consecuencia de diversos factores, entre ellos el impacto de la campaña estadounidense de ataques contra líderes y efectivos del grupo y las consecuencias de su rivalidad con otros grupos armados que operan en Yemen. El total de personas fallecidas o heridas a causa de este conflicto es complejo de precisar. Los incidentes que tuvieron mayor visibilidad mediática arrojan un balance de una decena de personas muertas. Entre ellas, el líder de

69. Human Rights Watch, *Yemen: Houthi Terrorist Designation Threatens Aid*, 10 de diciembre de 2020; Martin Chulov, “Classifying Houthis as terrorists will worsen famine, Trump is warned”, *The Guardian*, 13 de diciembre de 2020.

70. Véase el resumen sobre Yemen en este capítulo.

la organización en Yemen, Qassim al-Rimi, asesinado en un ataque aéreo con dron de EEUU en enero; una persona asesinada y crucificada en agosto por AQPA en al-Bayda tras ser acusada de espiar para el gobierno y de guiar drones de EEUU a posiciones del grupo; tres milicianos de AQPA muertos en una ofensiva de las fuerzas gubernamentales en la provincia occidental de Mahra; cinco miembros de las Security Belt Forces que forman parte del STC muertos por AQPA en un ataque en las afueras de Lawdar, en la provincia de Abyan; y un profesor universitario crítico con el extremismo islamista radical, asesinado en la provincia de Dhale (sur).

A finales de febrero, AQPA anunció que el nuevo máximo dirigente del grupo sería Khalid bin Umar Batarfi, hasta ahora número dos de al-Rimi y portavoz del grupo. La muerte de al-Rimi alentó algunos análisis sobre su impacto en el futuro de la organización. Con formación en Afganistán y uno de los fundadores de AQPA en 2009, al-Rimi fue el primer jefe militar del grupo y se convirtió en su líder en 2015 tras la ejecución de su predecesor, Nasir al-Wuhayshi, en otra ofensiva aérea de EEUU desde un avión no tripulado. Algunas voces expertas apuntaron que si bien su muerte era un golpe para la organización por tratarse de uno de los referentes históricos del grupo, las consecuencias no serían necesariamente drásticas o significativas, teniendo en cuenta que durante su etapa al mando de la organización el grupo ya había registrado un declive importante, en especial en los últimos tres años. Según especialistas, **la prioridad de AQPA sería reagruparse, reducir infiltraciones –que llevaron al grupo a suspender el reclutamiento de nuevos combatientes– y mantener su coherencia interna.**⁷¹ En esta misma línea, un análisis del centro de estudios ACLED publicado a finales de año, destacó que desde principios de 2020 el grupo se encontraría en una fase de “atrincheramiento”, después de una breve etapa de expansión aprovechando la escalada de violencia general en Yemen (2015-2016) y de una fase de reubicación del grupo en la provincia de al-Bayda y lucha con la filial de ISIS (2017-2019). En esta nueva fase de atrincheramiento de la filial de al-Qaeda influirían, además de la muerte de al-Rimi; las derrotas de AQPA e ISIS en sus choques con al-houthistas y el asesinato del responsable de difusión del grupo, también en un ataque con dron de EEUU, que habría mermado su capacidad para reivindicar acciones públicamente. AQPA estaría intentando priorizar una vez más su retórica anti al-houthista –por encima de su disputa con ISIS– para volver a presentarse como adalid de la lucha contra el grupo, una estrategia que ya usó en el pasado y que habría recuperado ante el nuevo avance al-houthista sobre al-Bayda en 2020 y la posibilidad de explotar agravios de las tribus locales. Según ACLED, en 2020 la mitad de las interacciones de AQPA fueron con fuerzas al-houthistas, mientras que la pugna con ISIS habría remitido en el último año. EEUU continuó ofreciendo recompensas económicas para quienes

proporcionaran información que permita conocer el paradero de los nuevos dirigentes de la organización.

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasm), Israel
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona.

El conflicto armado protagonizado por las fuerzas de seguridad egipcias y la filial del grupo armado ISIS que opera principalmente en la zona de Norte Sinaí, continuó motivando periódicos hechos de violencia a lo largo de 2020, aunque de una intensidad menor que la observada en años previos. Aunque los balances de víctimas mortales fueron complejos de precisar debido a las dificultades de acceso de fuentes independientes y los datos dispares ofrecidos por las partes, recuentos informales a partir de informaciones de prensa apuntan a que un mínimo de entre 150 y 200 personas fallecieron a causa de las hostilidades durante el año, cifra inferior a la contabilizada en 2019, cuando se estimó que perdieron la vida al me-

71. AFP, “Questions about the impact in Yemen from killing of AQAP chief”, *The Arab Weekly*, 10 de febrero de 2020; Saeed al-Batati, “Al-Qaeda suffers heavy losses in Yemen conflicts”, *Arab News*, 7 de marzo de 2020.

nos 500 personas. Los datos ofrecidos por el centro de estudios ACLED difieren en los totales, pero confirman la tendencia a la baja en la letalidad del conflicto. Según el centro de investigación, el conflicto provocó 626 víctimas mortales en 2020, frente al millar contabilizado el año anterior. Los hechos de violencia se concretaron, como en años previos, en enfrentamientos directos, emboscadas, acciones de francotiradores, ataques con explosivos, ofensivas contra gasoductos y agresiones contra civiles –incluyendo asesinatos y secuestros.

Respecto a la evolución del conflicto, cabe destacar que **los hechos más significativos se produjeron durante el verano, en los meses de julio y agosto, y que el principal escenario de confrontación fue la localidad de Bir al-Abd, al noreste de la provincia Norte Sinaí, donde ISIS logró ocupar temporalmente varias localidades.** En el primer semestre los incidentes más graves se produjeron a finales de abril en esta misma zona. El grupo armado ISIS –también autodenominado Provincia del Sinaí– reivindicó el ataque contra un vehículo militar que habría causado la muerte a diez militares. Las autoridades egipcias anunciaron a principios de mayo que las operaciones contra el grupo armado causaron la muerte de 18 supuestos milicianos de ISIS, mientras que otros 21 habrían fallecido en choques en Bir al-Abd al finalizar este mes. A partir de la segunda quincena de julio, esta zona –a 80 kilómetros de la capital de Norte Sinaí, al-Arish– volvió a ser escenario de enfrentamientos después de que combatientes de ISIS lanzaran un ataque contra instalaciones militares. En el marco de estas hostilidades, la filial de ISIS consiguió tomar el control de cuatro localidades de la zona –Qatiya, Iqtiya, Ganayen y Merih–, obligando al desplazamiento forzado de sus habitantes. Según el balance ofrecido por las autoridades egipcias, entre el 22 de julio y finales de agosto, la violencia en la zona provocó la muerte de 70 presuntos milicianos de ISIS y de siete militares. En agosto también se informó que ISIS había ejecutado a cuatro civiles en Bir al-Abd por presunta colaboración con el Ejército. Las fuerzas de seguridad egipcias habrían conseguido recuperar el control de la zona en septiembre, pero en los meses siguientes continuaron produciéndose escaramuzas e incidentes. Los hechos de violencia también afectaron a las localidades de al-Arish, mayor ciudad de la provincia Norte Sinaí, y en Rafah, en la frontera Gaza. Al menos 40 presuntos militantes de ISIS y ocho soldados egipcios habían muerto en diversos incidentes entre septiembre y principios de diciembre. Entre los militantes muertos en al-Arish se encontraría Abdel Qader Sweilam, uno de los dirigentes del grupo armado involucrado en el ataque a una mezquita que causó más de 300 muertes en 2017.

El conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad egipcias y a la filial de ISIS que opera principalmente en la zona de Norte Sinaí continuó provocando hechos de violencia en 2020, aunque de una intensidad menor que en años previos

Cabe destacar que en localidades en torno a Bir al-Abd al menos 15 civiles habían muerto a causa de explosivos que quedaron en el área y que detonaron en el marco del retorno de población desplazada a la zona a partir de octubre. Las autoridades informaron que en el último trimestre del año habían destruido 437 depósitos de armas y una treintena de vehículos, desactivado 159 artefactos explosivos y confiscado varias decenas de armas en el marco de su campaña contra el grupo.

Algunas voces expertas destacaron que el despliegue de bombas trampa por parte de ISIS en el Sinaí sigue el precedente de acciones similares del grupo en Iraq y Siria.

La disputa en el Sinaí coexistió con otras situaciones de tensión que tuvieron una mayor presencia mediática y visibilidad en la agenda de seguridad y diplomática egipcia. Entre ellos, la creciente preocupación e implicación de El Cairo por la evolución del conflicto armado en la vecina Libia –a mediados de año Egipto advirtió sobre una posible intervención militar directa si los enfrentamientos alcanzaban la estratégica localidad libia de Sirte, realizó ejercicios militares en la zona fronteriza, el Parlamento aprobó un posible despliegue de tropas y se reforzaron los vínculos con países aliados en un frente informal anti-Turquía (Chipre, Francia, Grecia, EAU), incluyendo a través de ejercicios navales en diciembre– y por el conflicto entre Egipto, Sudán y Etiopía en torno a la construcción de una presa en el río Nilo –que motivó una serie de negociaciones infructuosas durante 2020.⁷² Adicionalmente, persistió la situación de tensión interna asociada a la represión a la disidencia, las vulneraciones de derechos humanos y el refuerzo del autoritarismo por parte del régimen.⁷³ Pese a este panorama y a la crisis económica en el país, el régimen continuó incrementando sus compras de armas, con Rusia, EEUU y Francia como principales proveedores. Análisis indican que París habría satisfecho 35% de las demandas de armas al régimen entre 2015 y 2019.⁷⁴

El conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad egipcias y a la filial de ISIS que opera principalmente en la zona de Norte Sinaí continuó provocando hechos de violencia en 2020, aunque de una intensidad menor que en años previos.

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía
Intensidad:	3
Evolución:	=

72. Véase el resumen sobre Libia en este capítulo.

73. Véase el resumen sobre Egipto en el capítulo 2 (Tensiones).

74. Maged Mandour, *Dollars to Despot: Sisi's International Patrons*, Carnegie Endowment for International Peace, 19 de noviembre de 2020.

Síntesis:

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU. Los niveles de violencia se han reducido desde 2018, tras el anuncio de derrota de ISIS, aunque el grupo continúa operando con acciones de menor intensidad. El país también se ha visto afectado por la creciente disputa entre Washington y Teherán y su competencia por influir en los asuntos iraquíes.

Los niveles de violencia del conflicto armado en Iraq continuaron siendo elevados, aunque relativamente inferiores a los de años previos. Según los datos recopilados por el centro de investigación ACLED, el conflicto se cobró la vida de al menos 2.500 personas, en su mayoría como resultado de explosiones y violencia remota, seguidos por enfrentamientos entre diversos actores armados que operan en el país. En 2019, el total de víctimas mortales ascendió a 3.232, según la misma organización. Las hostilidades en el país siguieron teniendo una grave repercusión en la población civil. De acuerdo a los datos preliminares de la organización Iraq Body Count (IBC), el número de víctimas mortales civiles por el conflicto armado ascendería al menos a 902 en 2020, frente a 2.392 en el año anterior. El panorama en el país continuó estando muy influido por la proyección de la disputa entre EEUU e Irán, así como por la persistencia de las actividades de ISIS, poniendo en entredicho la declaración de “victoria” sobre la organización armada por parte del Gobierno iraquí en 2017. Entre 2014 y 2017 la escalada de violencia en el país motivó el desplazamiento forzado interno de más de seis millones de personas. Según los datos de OCHA, hasta octubre de 2020 un total de 1,3 millones de personas permanecían desplazadas en condiciones de gran precariedad, una vulnerabilidad que se vio acentuada por la pandemia de la COVID-19. Cabe mencionar que a finales de 2020 un total de 2.800 mujeres y menores de la minoría yazidí secuestradas por ISIS tras su ofensiva en

Los niveles de violencia en Iraq continuaron siendo elevados y el conflicto armado se vio afectado por la disputa entre Irán y EEUU y la persistencia de las actividades de ISIS

Sinjar en 2014, continuaban en paradero desconocido.

Respecto a la evolución del conflicto armado, **el año se inició con una gran conmoción por el asesinato en Bagdad del general iraní Qassem Soleimani en una operación estadounidense.** El destacado militar iraní, líder de la brigada al-Quds de la Guardia Revolucionaria y a la cabeza de las actuaciones iraníes en la región, fue asesinado el 3 de enero en un ataque con dron en el que también murió el vicecomandante de la coalición de milicias shiíes Unidades de Movilización Popular (PMU, por sus siglas en inglés), Abu Mahdi al-Muhandis. **La ofensiva, que encendió alertas por el potencial de desestabilización en una región ya altamente convulsionada, motivó acciones de represalia de Teherán contra posiciones de EEUU,** en forma de ataques aéreos a bases estadounidenses ubicadas en las provincias de Anbar y Erbil y de ofensivas perpetradas por milicias pro-iraníes que operan en Iraq. La ofensiva de Washington también alentó manifestaciones y nuevas demandas de repliegue de las tropas estadounidenses por parte de diversos actores iraquíes, que insistieron en esta exigencia durante todo el año. En los meses siguientes se produjeron ataques periódicos contra objetivos de EEUU, entre ellos la embajada estadounidense en Bagdad, la llamada Zona Verde de la capital iraquí, bases de la coalición militar liderada por EEUU, empresas como Halliburton, además de personal diplomático. Aunque algunas acciones no fueron reivindicadas, destacó el papel en las ofensivas de milicias pro-iraníes, en especial del grupo Kataib Hizbollah. A mediados de año se estimaba que desde el asesinato de Soleimani se habían activado una decena de nuevas organizaciones armadas de esta línea para actuar con el propósito de expulsar a las tropas de EEUU del país. Washington ofreció una recompensa millonaria por información conducente a la captura de Muhammad Kawtharani, un alto cargo de Kataib Hizbollah responsable de la coordinación de las milicias respaldadas por Teherán en Iraq.

En junio EEUU y el nuevo Gobierno iraquí liderado por el ex jefe de inteligencia Mustafa al-Khadimi como primer ministro, establecieron lo que se calificó como “diálogo estratégico”. Grupos pro-iraníes y, en especial Kataib Hizbollah, expresaron su rechazo a la nominación de al-Khadimi, al que acusaron de estar involucrado en las muertes de Soleimani y al-Muhandis. El asesinato en julio de un destacado asesor de seguridad del primer ministro y crítico de la actuación de las milicias pro-iraníes en Iraq motivó nuevas tensiones. Los contactos entre las autoridades de Washington y Bagdad tras una segunda edición del “diálogo estratégico”, desembocaron en septiembre en el anuncio de reducción de tropas EEUU en Iraq de 5.200 a 3.000 efectivos a cambio de un compromiso de protección de las fuerzas iraquíes y de acuerdos comerciales tendientes a reducir la influencia

de Teherán en el país. Aunque milicias respaldadas por Irán anunciaron una tregua unilateral condicionada a la retirada efectiva de las fuerzas de EEUU, en los últimos meses del año continuaron produciéndose incidentes y hechos de violencia.

Paralelamente, **durante el año prosiguieron y se intensificaron las acciones de ISIS. El grupo armado se enfrentó a las fuerzas de seguridad, a efectivos de las milicias PMU, a fuerzas kurdas y además perpetró ataques explosivos, atentados suicidas y otras ofensivas contra población civil, además de actos de sabotaje.** Las hostilidades alcanzaron las provincias de Diyala, Nineveh, Kirkuk, Salah ad-Din, Erbil y Anbar. En mayo, las fuerzas de seguridad iraquíes lanzaron la operación León del Desierto para intentar erradicar a los milicianos de ISIS en las zonas colindantes de las regiones de Anbar, Nineveh y Salah ad-Din y fronteras con Siria. Las operaciones contra ISIS y las acciones del grupo armado continuaban al finalizar 2020. Cabe mencionar que a lo largo del año también se produjeron **tensiones entre los Gobiernos de Ankara y Bagdad por las incursiones de Turquía en el norte iraquí contra posiciones del PKK**, en acciones que las autoridades iraquíes denunciaron como una vulneración de su soberanía. También se produjeron tensiones entre grupos kurdos.⁷⁵ Adicionalmente, cabe subrayar que durante 2020 persistió la contestación contra las autoridades por parte de sectores de la población que continuaron con las protestas y movilizaciones iniciadas a finales de 2019.⁷⁶

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ⁷⁷
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Síntesis:	El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinició en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU dividió el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclamó el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la

75. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

76. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 2 (Tensiones).

77. A pesar de que “Palestina” (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como “internacional” y no como “interno” por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

guerra de 1948-49 Israel se anexionó Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasaron a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupó Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

Siguiendo la tendencia de los últimos tres años, la violencia directa vinculada al conflicto armado palestino-israelí se redujo durante 2020, a pesar del incremento de las tensiones por los planes y medidas del Gobierno israelí para consolidar su anexión de facto de territorios ocupados palestinos. Según OCHA, hasta diciembre habían muerto un total de 30 personas en distintos hechos de violencia vinculados al conflicto, de los cuales 28 eran palestinos y dos israelíes. La cifra es la más baja del último trienio, teniendo en cuenta que en 2019 se contabilizaron 144 personas fallecidas y en 2018, 313. Adicionalmente, cabe considerar que durante 2020 un total de 2.579 palestinos y palestinas resultaron heridos, frente a 57 israelíes. Los hechos de violencia con mayor letalidad se concentraron en el primer trimestre del año y, en general, se produjeron en la Franja de Gaza, a lo largo de la barrera entre Gaza e Israel, en Cisjordania –en localidades como Hebrón, Jenín– y en Jerusalén. Los incidentes incluyeron ataques aéreos israelíes, lanzamientos de cohetes y artefactos incendiarios desde Gaza, tiroteos de fuerzas israelíes contra población palestina y represión de manifestaciones y algunas agresiones de palestinos a soldados israelíes. OCHA también subrayó el impacto de las demoliciones y confiscaciones de propiedades palestinas, en su cifra más alta desde 2016. Entre enero y noviembre esta política israelí había afectado a 776 infraestructuras, forzando el desplazamiento de 946 palestinos, incluyendo 488 menores. A lo largo de todo el año, el Gobierno israelí continuó anunciando nuevos permisos y planes de construcción de miles de viviendas en distintas áreas de los territorios ocupados.

Respecto a la evolución de los acontecimientos, cabe destacar que **a finales de enero EEUU presentó finalmente –tras continuas postergaciones en los últimos años– su denominado “plan de paz definitivo” para la región**, oficializando el apoyo y alineamiento de la administración de Donald Trump a las posiciones de la extrema derecha israelí. El plan, detallado en un documento de 180 páginas y presentado por Trump en la Casa Blanca en compañía del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, contempla, entre otras medidas, el reconocimiento de asentamientos israelíes en territorios ocupados palestinos, rechaza el derecho a retorno de

la población refugiada palestina y ofrece una forma de estatalidad palestina con una capital en las afueras de Jerusalén, además de inversiones económicas. El plan alentó manifestaciones y muestras de rechazo entre la población y actores palestinos y fue catalogado por la AP como el resultado de una conspiración. Paralelamente, durante el primer trimestre continuaron los esfuerzos por intentar implementar una tregua informal en torno a la Franja de Gaza, mediada por Egipto en febrero. En este contexto, la expansión de la pandemia de la COVID-19 a partir de marzo favoreció una cierta cooperación entre la AP y el Gobierno israelí. Diversas voces alertaron sobre el potencial impacto del virus en la Franja de Gaza, debido a la fragilidad de sus infraestructuras de salud a causa de los ataques y el bloqueo impuesto por Israel en los últimos años. Representantes de Hamas y de AP también plantearon la necesidad de liberar prisioneros palestinos para evitar su exposición al virus y advirtieron sobre las responsabilidades de Israel, como potencia ocupante, por el impacto de la enfermedad en la población palestina.

Los meses siguientes estuvieron marcados por el clima electoral en Israel y por el resultado de los comicios, que derivaron en la conformación de un gobierno de coalición entre el Likud de Netanyahu y el partido Azul y Blanco de Benny Gantz. Según el acuerdo, ambos se rotarían en la posición de primer ministro, comenzando el turno Netanyahu. El acuerdo también refrendó –aunque sin detallar los mecanismos para su puesta en marcha– la **propuesta del líder del Likud para anexionar formalmente un tercio de los territorios ocupados de Cisjordania, incluyendo 235 asentamientos y la mayor parte del estratégico y fértil Valle del Jordán, fronterizo con Jordania.** La perspectiva de que el plan podía comenzar a implementarse a partir del 1 de julio, según lo anunciado por Netanyahu, elevó los niveles de tensión con las autoridades palestinas, alentó nuevas protestas y hechos de violencia, y motivó críticas y advertencias a nivel internacional. La AP denunció el plan y suspendió los acuerdos de cooperación con Israel en mayo, mientras que Hamas lo consideró como una “declaración de guerra”. Diversas voces insistieron que la medida implicaba violar los principios básicos del derecho internacional, minaba las perspectivas de una solución de dos Estados –considerada moribunda o ya del todo impracticable por muchos actores–, podía agravar los padecimientos de la población palestina y desestabilizar aún más la región. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó de la ilegalidad de cualquier anexión de Cisjordania. Más de mil parlamentarios europeos de 25 países firmaron una declaración exigiendo una respuesta de la UE

La propuesta del primer ministro israelí de anexionar formalmente un tercio de los territorios ocupados en Cisjordania provocó múltiples críticas y alarmas a nivel internacional, además de rechazo entre actores palestinos

ante el plan y varios países europeos integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU –Francia, Bélgica, Alemania, Estonia, Irlanda, Reino Unido y Noruega– advirtieron de manera conjunta que no reconocerían la anexión. Varios analistas destacaron la necesidad de poner en contexto la política anunciada por Netanyahu y considerarla como una pieza que solo hace más explícita una situación que de facto ya existe.⁷⁸ En cuanto a las reacciones en territorio palestino, ante el aumento de las hostilidades, una nueva intervención de Egipto y la ONU volvió a restablecer la tregua informal entre Hamas e Israel en agosto, que se mantenía al finalizar el año aunque con esporádicos incidentes.

En este escenario de críticas internacionales, y en medio de divisiones internas en el Gobierno israelí sobre la forma y el cronograma de implementación del plan, la iniciativa quedó temporalmente suspendida y dio paso

a una serie de acuerdos de normalización de relaciones con países de mayoría árabe promovidos por EEUU. A finales de agosto se anunció la normalización de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU), en septiembre con Bahrein y en octubre con Sudán. Más tarde, en diciembre Marruecos se sumó a la lista y a cambio Washington declaró reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.⁷⁹ EEUU insistió en presentarlos como acuerdos de paz a pesar de que, en la práctica, formalizaban relaciones ya existentes entre Israel y estos Estados, no implicados en el pasado en hostilidades directas con Israel, a excepción de Sudán. Aunque la normalización de relaciones fue defendida por estos países

como una manera de frenar el plan de anexión, Netanyahu aseguró que la propuesta seguía sobre la mesa. Las protestas palestinas ante estos acuerdos no consiguieron respaldo político ni siquiera entre la Liga Árabe, que en septiembre no llegó a aprobar una resolución de condena. Esta situación fue considerada por el primer ministro palestino como un símbolo de la inacción árabe. Pese a ello, en noviembre, la AP retomó la cooperación de seguridad con Israel, subrayó su disposición a reanudar conversaciones de paz tras la asunción de un nuevo gobierno en EEUU y propuso celebrar una conferencia internacional de paz para abordar el conflicto palestino-israelí en el primer semestre de 2021. En cuanto a Israel, cabe mencionar que durante el año se sucedieron masivas manifestaciones contra el Gobierno por su manejo de la crisis de la COVID-19, la situación económica y los casos de corrupción que involucran a Netanyahu. En diciembre, en medio de tensiones en la coalición gubernamental, el Ejecutivo israelí volvió a fracasar en su intento de aprobar los presupuestos, hecho que derivó en una convocatoria a nuevas elecciones –las cuartas en dos años– para marzo de 2021.

78. Para más información véase Escola de Cultura de Pau, Centre Delàs, IDHC, *¿Momento decisivo? La importancia de frenar el comercio de armas con Israel*, Escola de Cultura de Pau, Centre Delàs, IDHC, julio de 2020.

79. Véase el resumen sobre Marruecos - Sáhara Occidental en el capítulo 2 (Tensiones).

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio, a nivel internacional el régimen se ha caracterizado por sus políticas hostiles hacia Israel, y en el plano interno por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del establishment, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa ha adquirido una mayor complejidad y una creciente dimensión regional e internacional.

Durante 2020 el conflicto armado en Siria continuó siendo uno de los más graves a nivel mundial, caracterizándose por la implicación de numerosos actores armados locales, regionales e internacionales; por hostilidades y otros hechos de violencia que afectaron distintas zonas del país, con dinámicas propias en los diferentes frentes; y por gravísimos y persistentes impactos en la población, agravados este año por un acusado deterioro de la situación económica y por la pandemia de la COVID-19. Pese a las dificultades para hacer un seguimiento pormenorizado de los impactos de la violencia en el país, los datos disponibles confirman los elevados niveles de letalidad, aunque el balance sería menor a años precedentes. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR), el número de víctimas mortales del conflicto en 2020 se elevaría a 6.817 personas y sería la cifra más baja de muertes en el país desde el inicio de la revuelta contra el régimen de al-Assad hace casi una década. Los datos del centro de investigación ACLED apuntan a un balance superior, de unas 7.974 personas fallecidas en el mismo periodo. La cifra total de víctimas mortales sería, por tanto, relativamente inferior a la de 2019

–15.000–, y menor a la de 2018 –30.000–, según los datos de ACLED. Respecto a las víctimas civiles, los informes bimensuales del secretario general de la ONU hicieron un recuento no exhaustivo. A partir de ellos se concluye que, como mínimo, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 un total de 1.164 civiles habían muerto en hechos vinculados al conflicto, 42% de los cuales eran mujeres y menores de edad –145 y 343, respectivamente. Los datos de SOHR van en la misma línea: 1.528 civiles fallecidos, de los cuales 197 mujeres y 231 menores. Según los datos de la ONU, las víctimas civiles fallecieron principalmente a causa de ataques aéreos y terrestres, artefactos explosivos, restos de explosivos de guerra. Los informes periódicos de la ONU subrayaron que las continuas bajas entre la población indicaban que las partes involucradas en el conflicto persisten en no respetar principios fundamentales del derecho internacional humanitario, como la necesaria distinción entre civiles y combatientes.

En esta línea, la ONU alertó sobre otras acciones perpetradas por actores armados, entre ellas las detenciones arbitrarias –incluyendo numerosas denuncias de muertes bajo custodia gubernamental–, torturas, violencia sexual, confiscaciones de propiedades y tierras, ataques a centros de salud y escuelas. Según datos divulgados a finales de año, solo el 50% de los centros educativos del país estaban en funciones y había 2,1 millones de niños y niñas sin escolarizar. A esto se suma la gravísima situación humanitaria en el país. **Según ACNUR, Siria seguía siendo el principal país emisor de población refugiada y el primero en población desplazada interna del mundo.** 80% de la población desplazada son mujeres y menores y 28% de las mujeres desplazadas tienen algún grado de discapacidad. Los padecimientos de la población siria también se vieron agravados por el empeoramiento de la situación económica –la canasta básica de alimentos multiplicó su precio en más de un 200% en un año y se estimaba que 9,3 millones de personas padecían inseguridad alimentaria–, por los graves incendios en diversas zonas del país –en 2020 se habrían quemado más de 35.000 hectáreas de campos de cultivo, con severas consecuencias a largo plazo para la producción de alimentos– y por los crecientes obstáculos de acceso para la ayuda humanitaria –durante el año se cerraron varios pasos fronterizos clave para la entrada de asistencia. En este contexto, diversas voces alertaron sobre el impacto añadido de la pandemia, por el creciente número de casos, aunque seguía siendo difícil de determinar el alcance del brote en el país. La interpelación a las partes para que respondieran al llamamiento del secretario general de la ONU a un alto el fuego global para focalizar los esfuerzos en la pandemia no tuvo acogida en la inmensa mayoría de los actores armados sirios.

Respecto a la evolución del conflicto y sus principales protagonistas, **en el frente noroeste, se**

registraron elevados niveles de violencia y masivos desplazamientos forzados de población en los primeros meses del año, tras la decisión del régimen y Rusia de intensificar su campaña sobre Idlib, bastión opositor, en diciembre de 2019. Turquía, principal apoyo de grupos rebeldes de la región, lanzó críticas a Moscú por vulnerar los acuerdos previos que establecían una “zona de distensión” en Idlib. En medio de crecientes intercambios de artillería entre fuerzas turcas y sirias en esta zona, con bajas de ambos bandos, se encendieron las alarmas sobre una escalada en la confrontación. A finales de febrero una ofensiva aérea atribuida al régimen sirio y las fuerzas rusas contra un convoy militar turco en Balyun (Idlib) provocó la muerte a 34 soldados –el incidente con mayor número de muertes turcas desde su implicación en la guerra en Siria– y motivó que Ankara lanzara la operación Escudo de Primavera, incrementando su actividad militar en todas las líneas de frente. **No fue hasta principios de marzo que Rusia y Turquía acordaron una nueva tregua en torno a Idlib, motivada en parte por el deseo de Ankara de prevenir una nueva llegada masiva de personas refugiadas.** Para entonces la situación humanitaria en la región se había deteriorado dramáticamente: **en tan solo tres meses un millón de personas huyó de las hostilidades**, más de la mitad de las cuales se ubicaron en una estrecha franja paralela a la frontera sirio-turca que ya albergaba a cientos de miles de personas desplazadas. Turquía abrió temporalmente su frontera con Grecia y permitió la salida de personas migrantes y refugiadas en un intento por poner presión a la UE y conseguir apoyo a sus posiciones en el conflicto sirio. En los meses siguientes, Rusia y Turquía iniciaron, aunque con dificultades, patrullas conjuntas en Idlib. En paralelo, persistieron hechos de violencia producto de choques entre Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y grupos próximos a al-Qaeda como Hurras al-Din y entre estos grupos y las fuerzas del régimen. En junio se reanudaron los ataques aéreos rusos en Idlib, poco después de un ataque que hirió a varios soldados rusos y turcos reivindicado por un grupo denominado Kataib Khattab al-Sistani, supuestamente integrado por milicianos del Cáucaso. Durante el segundo semestre también se informó de los intentos de HTS por consolidar su posición en Idlib intensificando la represión a grupos rivales. Al finalizar el año el alto el fuego se mantenía formalmente a grandes rasgos en el noroeste, según la ONU, pero en medio de reiteradas violaciones, con intercambios de artillería casi diarios y crecientes enfrentamientos a lo largo de las líneas de control en Idlib y Alepo.

Durante el año también se produjeron choques intermitentes entre fuerzas respaldadas por Ankara y las SDF, lideradas por fuerzas kurdas YPG/YPJ, en torno a las líneas divisorias entre la operación turca “Escudo

del Éufrates” y Manbij y la más reciente operación de Ankara “Primavera de paz” y el área controlada por las SDF en el noroeste. A lo largo del año también se produjeron varios incidentes con explosivos que dejaron decenas de víctimas mortales en Afrin y un ataque con dron que causó la muerte a tres activistas kurdas en una acción que las SDF atribuyeron a Turquía. Las SDF se acogieron en marzo al llamamiento del secretario general de la ONU sobre una tregua por la pandemia y anunciaron una suspensión de sus actividades militares. Los choques continuaron, sin embargo, y en el segundo semestre destacaron los enfrentamientos en torno a Ain Issa, al norte de Raqqa. **En el frente nororiental ISIS también incrementó sus acciones tanto contra las SDF como contra fuerzas gubernamentales.**

Los enfrentamientos entre ISIS y fuerzas del régimen en una zona desértica de la provincia de Homs provocaron unas cuarenta muertes en abril. Durante el segundo semestre se registraron más enfrentamientos de ISIS con fuerzas del régimen con decenas de víctimas mortales en un área más amplia, que incluyó Raqqa, Aleppo, Deir Ez-Zor y Hama, alentando especulaciones sobre un posible resurgimiento del grupo. Según trascendió, remanentes del grupo estarían coaccionando a la población local a través de controles en carreteras y extorsiones, y entrenando a nuevos reclutas en la zona desértica de Siria nominalmente controlada por el régimen. Respecto a

EEUU, tras el anuncio de repliegue y acusaciones de abandono a sus aliados kurdos ante la incursión de Turquía a finales de 2019, sus fuerzas se concentraron en el noreste y durante 2020 continuaron con sus tareas de apoyo a las SDF en la protección de pozos petroleros, involucrándose en algunas acciones contra militantes de ISIS. En este ámbito, cabe mencionar también que hacia finales de año las SDF decretaron una amnistía para combatientes y presuntos colaboradores de ISIS que, según se informó, no estaban involucrados en delitos de sangre y habían renegado de su participación en el grupo. La medida supuso la excarcelación de más de 600 excombatientes, todos sirios. En la zona noreste preocupaba también de manera especial la situación en el campo de al-Hawl, donde permanecen retenidas personas desplazadas y familias de presuntos combatientes de ISIS. Al finalizar el año albergaba a casi 64.000 personas, de las cuales 94% eran mujeres y menores—53% de los niños y niñas, menores de 12 años.⁸⁰

En el suroeste, durante el año se intensificaron los disturbios populares. Aunque también se produjeron en otras áreas del país, en esta zona tuvieron especial notoriedad los **asesinatos selectivos, no siempre reivindicados, principalmente contra miembros de las fuerzas gubernamentales o progubernamentales y contra ex integrantes de grupos armados de oposición reconciliados con el régimen.** Solo entre abril y mayo

80. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

se notificaron más de 400 casos. A lo largo de todo el año se produjeron diversos ataques israelíes contra posiciones del régimen sirio, iraníes y de Hezbollah que provocaron la muerte a varias decenas de personas.⁸²

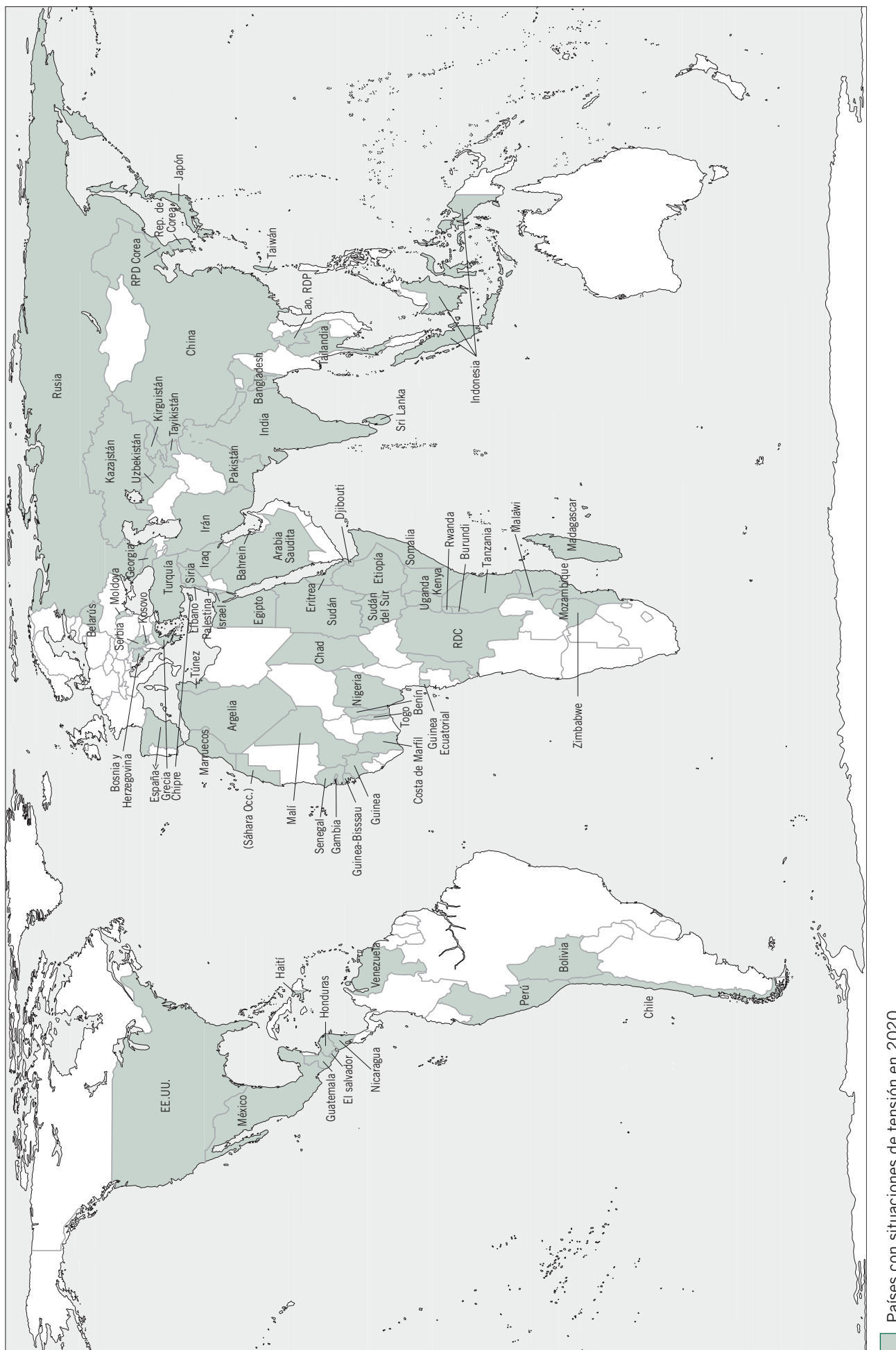
Finalmente, cabe destacar que en junio de 2020 entró en vigor la Caesar Act, la ley estadounidense que sanciona al régimen sirio, incluido su líder Bashar al-Assad, por crímenes de guerra perpetrados contra su población y que castiga a personas, entidades y países que negocien con el Gobierno de Damasco. La norma recibe su nombre de los llamados “archivos de César”, en alusión a las miles de imágenes que un fotógrafo sirio consiguió sacar del país en 2014 y que documentan las torturas y abusos en las cárceles

del régimen.⁸³ La iniciativa recibió el apoyo de la mayoría de países europeos, pero fue rechazada por Rusia y China, que denunciaron la unilateralidad de la medida y la consideraron como una vulneración de la soberanía siria. Este tema condicionó su actuación en el Consejo de Seguridad de la ONU en julio, donde ambos países vetaron la resolución sobre la asistencia humanitaria transfronteriza a Siria y defendieron que el régimen debía ser el distribuidor exclusivo de la ayuda. La resolución 2533 finalmente se aprobó, pero la operación de ayuda humanitaria quedó limitada de dos a un solo paso en el noroeste de Siria –el cruce de Bab al-Salam–, dificultando significativamente las tareas de asistencia. En enero se habían cerrado ya otros dos pasos fronterizos.

81. Véase el resumen sobre Israel - Siria, Líbano en el capítulo 2 (Tensiones).

82. US Department of State, *Caesar Syria Civilian Protection Act, Fact Sheet*, 17 de junio de 2020.

Mapa 2.1. Tensiones



Países con situaciones de tensión en 2020

2. Tensiones

- Durante 2020 se registraron 95 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (38) y Asia (25), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron en Oriente Medio (12), América (10) y Europa (10).
- Las medidas excepcionales del Gobierno de Nigeria para frenar el avance de la COVID-19, junto al uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, provocaron amplias movilizaciones sociales.
- En varios países africanos se acentuaron las crisis políticas debido a las tensiones generadas por la celebración de elecciones o reformas constitucionales que estuvieron marcadas por la represión política contra la oposición (Guinea, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Kenia, Malí, Malawi, Tanzania o Uganda, entre otros).
- En el Sáhara Occidental, tras una incursión de tropas marroquíes en la zona de Guerguerat, el Frente POLISARIO dio por finalizado el alto el fuego y se declaró en estado de guerra.
- El Gobierno de EEUU eliminó a Sudán de su lista de estados patrocinadores del terrorismo.
- En Centroamérica se registraron reducciones significativas en el número de asesinatos.
- El Gobierno de Venezuela anunció que las Fuerzas Armadas habían abortado una operación militar para capturar a Nicolás Maduro y perpetrar un golpe de Estado.
- En la península coreana se incrementó la preocupación por el programa armamentístico de Corea del Norte y se deterioraron gravemente las relaciones intercoreanas.
- Se agravó la crisis entre India y China, produciéndose el primer enfrentamiento con víctimas mortales en 45 años, que resultó en la muerte de 20 soldados indios.
- Persistió la crisis en la India por la aprobación de la Ley de Ciudadanía en 2019 y grupos extremistas hindúes y simpatizantes del BJP atacaron a población musulmana, desencadenándose violentos choques en los que murieron 53 personas.
- Estalló una grave crisis en Belarús, con movilizaciones antigubernamentales masivas en protesta por la reelección del presidente Aleksander Lukashenko, denunciada como fraudulenta, y con grave represión por parte de las autoridades.
- Se incrementó la tensión militarizada en el Mediterráneo oriental entre Turquía y Grecia y otros actores en torno a la exploración de hidrocarburos en aguas en disputa.
- La severa crisis política, económica y social que afronta Líbano se vio agravada en 2020 por la pandemia de la COVID-19 y por una explosión que devastó Beirut en agosto.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2020. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2020. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por situaciones de tensión durante 2020.

2.1. Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2020

Tensión ¹	Tipología ²	Actores principales	Intensidad ³
			Evolución ⁴
ÁFRICA⁵			
África Central (LRA)	Internacional	Fuerzas Armadas de Sudán, Sudán del Sur, RDC, RCA y Uganda, milicias comunitarias y grupos armados de los países de la región	1
	Recursos		=
Argelia	Interna	Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak	1
	Gobierno		↓
Argelia (AQMI)	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel	2
	Sistema		=
Benín	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Chad	Interna	Gobierno, grupos armados (UFR, UFDD), oposición política y social, milicias comunitarias	3
	Gobierno, Recursos, Territorio		↑
Costa de Marfil	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo, mercenarios, ONUCI	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		↑
Eritrea	Interna internacionalizada	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFD, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	2
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		=
Eritrea – Etiopía ⁶	Internacional	Eritrea, Etiopía	1
	Territorio		↓
Etiopía	Interna	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados	3
	Gobierno		↑
Etiopía (Oromiya)	Interna	Gobierno de Etiopía, gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF/OLA, IFLO	3
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Etiopía – Egipto – Sudán	Internacional	Etiopía, Egipto, Sudán	2
	Recursos		↑
Gambia	Interna	Gobierno, sectores del Ejército, oposición política	1
	Gobierno		↑
Guinea	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos	2
	Gobierno		↑
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, oposición política, redes internacionales de narcotráfico	2
	Gobierno		↑

1. En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
3. La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
4. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2020 con la del año 2019 apareciendo el símbolo ↑ si la situación general durante 2018 es más grave que la del año anterior, ↓ si es mejor y = si no ha experimentado cambios significativos.
5. Las situaciones de tensión relativas a Camerún, Chad y Níger presentes en 2016 debidas a la inestabilidad generada por el conflicto armado de Boko Haram se analizan en el capítulo 1 (Conflictos armados) en el caso Región Lago Chad (Boko Haram). A su vez, las situaciones de tensión relativas a Níger y Burkina Faso presentes en 2017 debidas a la inestabilidad generada por la presencia de insurgencia yihadista se analizan en el capítulo 1 (Conflictos armados) en el caso Región Sahel Occidental.
6. Véase el resumen sobre Eritrea-Etiopía en el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=
Kenia	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenia, ISIS	3
	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno		↑
Malawi	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Malí	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Madagascar	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Recursos		=
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional ⁷	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Mozambique	Interna	Gobierno, RENAMO	1
	Gobierno, sistema		↓
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, organizaciones de la sociedad civil, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN, IPOB, MASSOB	3
	Gobierno, Identidad, Recursos		↑
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, PANDEF, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	1
	Identidad, Recursos		=
RDC	Interna	Gobierno liderado por Cap pour le Changement (coalición liderada por Félix Tshisekedi), en coalición con el Front Commun pour le Congo (coalición liderada por Joseph Kabila, sucesora de la Alianza por la Mayoría Presidencial), oposición política y social, grupos armados del este del país	2
	Gobierno		↑
RDC – Ruanda	Internacional	RDC, Ruanda, grupos armados FDLR y M23 (ex CNDP)	1
	Identidad, Gobierno, Recursos		=
RDC – Uganda	Internacional	RDC, Uganda, grupos armados ADF, M23 (ex CNDP), LRA, grupos armados que operan en Ituri	1
	Identidad, Gobierno, Recursos, Territorio		=
Ruanda	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado ruandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora ruandesa en otros países de África y en Occidente	2
	Gobierno, Identidad		=
Ruanda - Burundi	Internacional	Ruanda, Burundi, grupos armados	3
	Gobierno		↓
Ruanda - Uganda	Internacional	Ruanda, Uganda	2
	Gobierno		↓
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, facciones del grupo armado Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC)	1
	Autogobierno		=
Somalia (Somalilandia-Puntlandia)	Interna	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo	2
	Territorio		=
Sudán	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↓
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Sudán, Sudán del Sur	1
	Recursos, Identidad		↓

7. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Tanzania	Gobierno	Gobierno, oposición política y social	2
	Interna		↑
Togo	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Túnez	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS	1
	Gobierno, Sistema		↑
Uganda	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
AMÉRICA			
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Chile	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
El Salvador	Interna	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	1
	Gobierno		↓
Guatemala	Interna	Gobierno, oposición política y social, pandillas	1
	Gobierno		↑
Haití	Interna	Gobierno, oposición política y social, BINUH, bandas armadas	2
	Gobierno		↓
Honduras	Interna	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	1
	Gobierno		↓
México	Interna	Gobierno, oposición política y social, cárteles, grupos armados de oposición	3
	Gobierno, Recursos		=
Nicaragua	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Perú	Interna	Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	2
	Gobierno, Recursos		↑
Venezuela	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↓
ASIA			
Bangladesh	Interna	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)	1
	Gobierno		↓
China (Xinjiang)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social	1
	Autogobierno, Sistema, Identidad		=
China (Tíbet)	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=
China (Hong Kong)	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ASIA			
China – Japón	Internacional	China, Japón	1
	Territorio, Recursos		=
China – Taiwán	Internacional	China, Taiwán	1
	Territorio, Recursos		=
Corea, RPD –EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁸	Internacional	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	2
	Gobierno		↑
Corea, RPD – Rep. de Corea	Internacional	RPD Corea, Rep. de Corea	2
	Sistema		↑
India	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Sistema, Gobierno		↑
India (Assam)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(IKS), ADF, RNLf, KPLT, NSLA, UPLA y KPLT	1
	Autogobierno, Identidad		↓
India (Manipur)	Interna	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)	1
	Autogobierno, Identidad		↓
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, NNC, ZUF	1
	Identidad, Autogobierno		↓
India – China	Internacional	India, China	3
	Territorio		↑
India – Pakistán	Internacional	India, Pakistán	3
	Identidad, Territorio		↑
Indonesia (Sulawesi)	Interna	Gobierno, grupo armado MIT	1
	Identidad, Sistema		↑
Indonesia (Papúa Occidental)	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↓
Kazajistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales	1
	Sistema, Gobierno		↑
Kirguistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	1
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↑
Lao, RDP	Interna internacionalizada	Gobierno, organizaciones políticas y armadas de origen hmong	1
	Sistema, Identidad		=
Mar de la China Meridional	Internacional	China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia, Brunei Darussalam	1
	Territorio, Recursos		=
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos	2
	Gobierno, Sistema		=
Sri Lanka	Interna	Gobierno, oposición política y social, partidos políticos y organizaciones sociales tamiles, grupo armado National Towheed Jamaat (NTJ)	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Tailandia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑

8. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ASIA			
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		↓
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, territorio		=
EUROPA			
Belarús	Interna	Gobierno, oposición social y política	2
	Gobierno		↑
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		=
Turquía - Grecia, Chipre ⁹	internacional	Turquía, Grecia, República de Chipre, autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, UE, Egipto, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia	2
	Territorio, Recursos, Autogobierno, Identidad		↑
España (Cataluña)	Interna	Gobierno de España, Gobierno de Cataluña, partidos políticos independentistas y no independentistas, actores de la sociedad civil, poder judicial	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↑
Moldova, Rep. de (Transnistria)	Interna internacionalizada	Moldova, autoproclamada República de Transnistria, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		=
Rusia (norte del Cáucaso) ¹⁰	Interno	Gobierno federal ruso, gobiernos de las república de Daguestán, Chechenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)	2
	Sistema, Identidad, Gobierno		↑
Serbia – Kosovo	Internacional ¹¹	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↓
Turquía	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen	2
	Gobierno, Sistema		=
ORIENTE MEDIO¹²			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	1
	Gobierno, Identidad		=
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Identidad		=
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		=
Irán	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG)	1
	Autogobierno, Identidad		=

9. La tensión "Turquía - Grecia, Chipre" era analizada en anteriores ediciones de este informe con el nombre de "Chipre".

10. En anteriores ediciones de este informe se analizaban por separado las tensiones Rusia (Daguestán) y Rusia (Chechenia).

11. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera "internacional" ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

12. Respecto a Yemen (sur), los acontecimientos relativos a esta disputa han dejado de ser analizados como tensión –como en pasadas ediciones del informe– y el análisis se ha integrado en el caso de conflicto armado Yemen (al-houthistas).

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ORIENTE MEDIO			
Irán (Sistán Baluchistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	1
	Autogobierno, Identidad		=
Irán – EEUU, Israel¹³	Internacional	Irán, EEUU, Israel	3
	Sistema, Gobierno		↑
Iraq	Interno internacionalizado	Gobierno, oposición política y social, Irán, EEUU	3
	Gobierno		=
Iraq (Kurdistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG), Turquía, Irán, PKK	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
Israel – Siria – Líbano	Internacional	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán, EEUU	3
	Sistema, Recursos, Territorio		=
Líbano	Interna internacionalizada	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham	2
	Gobierno, Sistema		=
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos salafistas	1
	Gobierno		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.
 †: escalada de la tensión; ‡: reducción de la tensión; =: sin cambios.
 Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2020

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2020, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

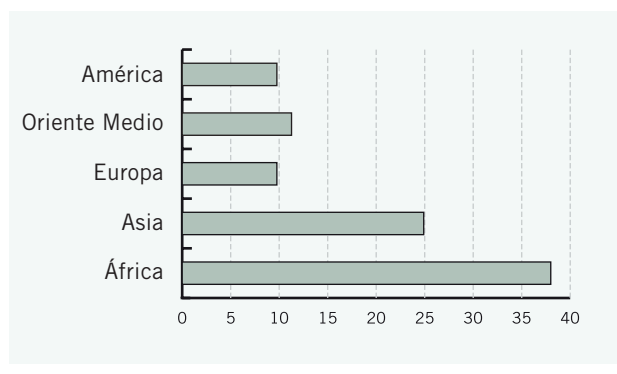
Durante 2020 se identificaron 95 escenarios de tensión en todo el mundo, un caso más que en el año anterior. Este incremento es significativamente menor que el que se registró en 2019 en comparación con 2018, pues entonces la cifra de tensiones aumentó en 11 casos. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas se concentró en África, con 38 casos, seguida de Asia (25), Oriente Medio (12 casos) y Europa y América Latina (10 en cada región). A pesar de que el incremento en el número de tensiones sociopolíticas en 2020 fue casi imperceptible, se identificaron seis nuevos casos de tensión. En cuanto a los nuevos casos, cuatro tuvieron lugar en África. En Malí el incremento de las tensiones políticas dio lugar a un golpe de Estado condenado de manera generalizada por la comunidad internacional. En Tanzania, la celebración

Durante 2020 se identificaron 95 escenarios de tensión, 38 en África, 25 en Asia, 12 en Oriente Medio, y 10 en América Latina y en Europa

de elecciones en octubre se vio acompañada de un creciente autoritarismo del partido gubernamental y de un incremento notable en las violaciones de derechos humanos, y además se registró el primer atentado en el país reivindicado por ISIS. En el caso de Argelia (AQMI), a pesar de que persisten las dinámicas subyacentes a la disputa y se registraron incidentes esporádicos a lo largo de 2020 (con un balance aproximado de 30 víctimas mortales), el descenso en los niveles de violencia y en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y AQMI motivaron que el caso dejara de ser considerado conflicto armado en 2019. En el caso de Etiopía-Egipto-Sudán, la disputa política derivada de la continuación de la construcción por parte de Etiopía de la presa hidroeléctrica más grande de África, la Gran Presa del Renacimiento de Etiopía en el río Nilo Azul, se agravó durante el año 2020. En Asia, se identificaron dos nuevos casos. La tensión entre China e India se incrementó notablemente, con varios enfrentamientos en su frontera común que provocaron víctimas mortales por primera vez en 45 años. Por otra parte, en la región indonesia de Sulawesi se observó un incremento de las actividades por parte del grupo armado MIT.

13. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.

Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones en 2020



En cuanto a la **intensidad** de las tensiones, la **gran mayoría (57%) de los casos fueron de intensidad baja, un 26% media y un 17% alta**. En comparación con el año anterior, el número de tensiones de mayor intensidad es prácticamente el mismo, pero se registró un claro incremento del porcentaje de casos de menor intensidad (del 49% en 2019 al 57% en 2020) y un consiguiente descenso en el porcentaje de tensiones de intensidad media (del 35% al 26%). De los 16 contextos de máxima intensidad, la mitad se concentraron en África. En **Chad**, persistieron la inestabilidad en el norte y este del país, la violencia intercomunitaria y las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad, que provocaron la muerte de centenares de civiles y el inicio de operaciones de contrainsurgencia que a su vez provocaron la muerte de más de un millar de combatientes. En **Malí**, el incremento durante la primera mitad del año de las protestas antigubernamentales por la crisis política y los altos niveles de inseguridad desembocaron en un golpe de Estado perpetrado por el autodenominado Comité Nacional para la Salvación del Pueblo y condenado de manera generalizadas por la comunidad internacional, cuyas presiones dieron lugar a la conformación de un gobierno mixto (militar-civil) de transición. En **Nigeria**, además de la persistencia del conflicto armado entre el Estado y Boko Haram en los tres estados del noreste del país y la cuenca del Lago Chad, se mantuvieron los enfrentamientos intercomunitarios en el cinturón central del país y se incrementaron notablemente las actividades de grupos criminales, que provocaron la muerte de alrededor de 2.500 personas. En **Etiopía**, cientos de personas murieron en el marco de los enfrentamientos entre el Estado y el grupo armado OLA y se registraron numerosos ataques contra la población amhara en varias partes del país por parte de diversas milicias y grupos de autodefensa. En **Etiopía (Oromiya)**, persistió un elevado clima de tensión derivada de las movilizaciones en contra de las reformas políticas

Las tensiones de mayor intensidad en 2020 fueron Chad, Malí, Nigeria, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenia, Marruecos-Sáhara Occidental, Ruanda-Burundi, México, Venezuela, India-China, India-Pakistán, Irán-EEUU, Israel, Egipto, e Israel-Siria-Líbano

impulsadas por el Gobierno federal, así como por los enfrentamientos intercomunitarios que se produjeron en diferentes momentos del año en la región. En **Kenia**, en paralelo al incremento de la polarización y la violencia política vinculadas a las elecciones previstas para 2022, persistieron los ataques por parte del grupo al-Shabaab y los enfrentamientos de corte intercomunitario (que provocaron más de 200 víctimas mortales) y se incrementaron notablemente las denuncias contra el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y por el alto número de víctimas mortales bajo custodia. En cuanto a la tensión entre **Ruanda y Burundi**, se registraron enfrentamientos esporádicos entre las Fuerzas Armadas de ambos países en las fronteras terrestre y marítima. La disputa entre **Marruecos y el Sáhara Occidental** vivió una de las escaladas de la tensión más importantes de los últimos años en 2020. Después de que las fuerzas marroquíes incursionaran en la región de Guerguerat para hacer frente a varias acciones de protesta por parte de población saharauí, el Frente POLISARIO dio por finalizado el alto el fuego y declaró el estado de guerra, mientras que Marruecos advirtió sobre una respuesta contundente en caso de amenaza a su seguridad.

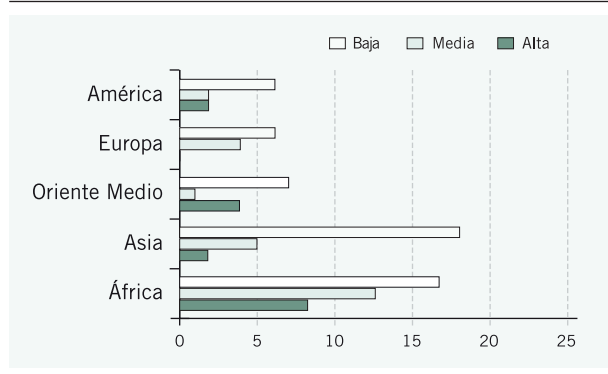
La otra región en la que se registraron mayor número de tensiones de máxima intensidad fue Oriente Medio. En el caso de **Irán – EEUU, Israel**, además del incremento de la tensión internacional en torno al programa nuclear iraní, cabe destacar el impacto desestabilizador que tuvo el asesinato en enero del general iraní Qassem Soleimani, jefe de la brigada al-Quds de la Guardia Revolucionaria, muerto en un ataque estadounidense en Iraq. En **Egipto**, persistieron y se agudizaron las políticas de represión y persecución a la disidencia por parte del Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi. En **Iraq**, más de un centenar de personas murieron en el marco de la represión de las protestas contra la corrupción, el nepotismo y la mala gestión que se habían intensificado a partir de octubre de 2019, así como los choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad iraquíes. En el caso de **Israel-Siria-Líbano**, que de manera creciente involucra también a Irán y EEUU, unas 90 personas murieron en el marco de los episodios de violencia que se produjeron en la región, especialmente ataques aéreos israelíes en torno a los Altos del Golán ocupados y en distintos puntos del territorio sirio, como Homs, Aleppo, Quneitra o Damasco. El resto de tensiones de alta intensidad se produjeron en Asia (dos casos) y en América Latina (otros dos casos). En Asia, los enfrentamientos bélicos entre las Fuerzas Armadas de **China e India** que se produjeron en la región fronteriza del valle de Gulwan provocaron víctimas mortales por primera vez en los últimos 45 años y motivaron una

de las escaladas de la tensión política más importante entre China e India desde la guerra que ambos países libraron en los años sesenta. En el caso de la tensión entre **India y Pakistán**, más de 70 personas murieron y otras decenas resultaron heridas por el fuego cruzado entre los Ejércitos de ambos países que se produjo de manera prácticamente ininterrumpida durante todo el año a lo largo de la Línea de Control, frontera de facto entre India y Pakistán. Finalmente, en América Latina destacaron los casos de Venezuela y México. En **Venezuela**, persistió la crisis política e institucional en el país —en 2020 muy vinculada a la celebración de elecciones legislativas y al control de la Asamblea Nacional—, se registró una de las tasas de homicidios más altas de América Latina y el Gobierno anunció que las Fuerzas Armadas habían abortado una operación militar para capturar a Nicolás Maduro y perpetrar un golpe de Estado. En **México** se registraron más de 35.000 homicidios, buena parte de los cuales vinculados a los enfrentamientos entre cárteles de la droga rivales o entre estos y los cuerpos de seguridad del Estado.

En cuanto a la evolución de las tensiones, el 38% de las mismas se agudizaron durante 2020, el 36% se mantuvo sin cambios sustantivos respecto del año anterior y en el 26% de los casos se observó una mejora de la situación. Globalmente, por tanto, el número de tensiones que escalaron durante el año (36) fue claramente superior al del número de contextos en que la tensión remitió. Sin embargo, cabe destacar que en 2019 el porcentaje de escenarios en que se incrementó la tensión (44% del total) fue netamente superior al del año 2020. Asimismo, cabe destacar también que en 2020 más de la mitad de las tensiones que escalaron estaban situadas en el continente africano. En cuanto a las principales causas o motivaciones de las tensiones, el panorama en 2020 fue muy parecido al del año anterior. **Un 73% de los casos analizados estaban vinculados a la oposición a las políticas internas o internacionales de determinados gobiernos o bien al sistema político, social o ideológico del Estado en su conjunto; un 39% a demandas de autogobierno y/o identitarias; y un 31% a disputas por el control de territorios y/o recursos.** Se observaron variaciones regionales significativas en cuanto a los factores de causalidad en las tensiones. A modo de ejemplo, los factores vinculados a la oposición al gobierno o al sistema estaban presentes en un 100% y en un 76% de los casos en América Latina y en Asia respectivamente, mientras que dichos porcentajes eran del 60% en Asia o en Europa. Del mismo modo, las reivindicaciones de tipo identitario o las demandas de mayor autogobierno eran significativas en un 80% de los

Un 73% de las tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos u oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados

Gráfico 2.2. Intensidad de las tensiones por regiones



casos en Europa, pero eran irrelevantes en América Latina o representaban menos de una tercera parte de los casos en África. Finalmente, cabe señalar que en África casi el 40% de los casos estaban vinculados a disputas por el territorio o los recursos, mientras que estos factores eran significativos en solamente dos casos en Europa u Oriente Medio.

En línea con años anteriores, **más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (53%),** aunque dicho porcentaje fue claramente superior en África (61%) o en América Latina, donde el 100% de las tensiones fueron de carácter interno. **Más de una cuarta parte de las tensiones fueron internas internacionalizadas (26%),** aunque en Oriente Medio y en Europa la mitad de las tensiones fueron de este tipo. Finalmente, **algo más de una quinta parte (21%) de las tensiones fueron de carácter internacional.** Cabe señalar que, a pesar de que las tensiones internacionales suponen un número

de casos comparativamente inferior al de las otras dos tipologías, estas representan un porcentaje significativo de las tensiones de máxima intensidad, como los casos de Marruecos-Sáhara, Ruanda-Burundi, India-China, India-Pakistán, Irán-EEUU, Israel, o Israel-Siria, Líbano.

2.2.2. Tendencias regionales

En 2020, **África** fue nuevamente el continente con mayor número de tensiones activas, registrándose concretamente 38 casos, el 40% del total. Esta cifra se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos años. Respecto del año anterior, se incluyeron cuatro nuevos casos —Malí, Tanzania, Argelia (AQMI) y Etiopía-Egipto-Sudán— y dejaron de considerarse como tensión otros dos —Angola (Cabinda) y Congo. Además de concentrar el mayor porcentaje de tensiones activas en todo el mundo, África también

albergó el mayor número de tensiones de máxima intensidad –ocho sobre un total de 16: Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Nigeria y Ruanda-Burundi. Ello supone un incremento importante respecto del año anterior, cuando las tensiones de máxima intensidad en el continente africano suponían el 35% del total de casos. Además, la mitad de las tensiones que escalaron en 2020 (concretamente un 53%) estaban localizadas en África: Benín, Chad, Costa de Marfil, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Etiopía-Egipto-Sudán, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Malawi, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Nigeria, RDC, Tanzania, Togo, Túnez y Uganda. Por el contrario, solamente hubo siete escenarios en los que la situación mejoró respecto del año anterior: Argelia, Eritrea-Etiopía, Mozambique, Ruanda-Burundi, Ruanda-Uganda, Sudán y Sudán-Sudán del Sur. A pesar de todo ello, cabe destacar que, en su conjunto, casi la mitad de las tensiones en África (un 45%) fueron de baja intensidad, una cifra relativamente parecida a la de años anteriores.

África concentró la mitad de las tensiones de máxima intensidad en todo el mundo: Chad, Malí, Nigeria, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenia, Marruecos-Sáhara Occidental, Ruanda-Burundi

En cuanto a los factores de causalidad, la oposición al Gobierno estaba presente en 27 de los 38 escenarios de tensión en el continente, una proporción comparativamente alta con otras regiones. Además, en otros cuatro casos la oposición al sistema también era una de las causas de fondo de la tensión: Mozambique, Kenia, Túnez y Argelia (AQMI). Una tercera parte de las tensiones en África tuvieron relación con las demandas identitarias y/o de autogobierno, pero cabe destacar que hubo solamente cinco casos específicamente vinculados a las peticiones de mayor autogobierno –Eritrea, Etiopía (Oromiya), Kenia, Marruecos-Sáhara Occidental y Senegal (Casamance)–, una cifra baja en comparación con otras regiones. Finalmente, en casi un 40% de los casos la competencia por el control de los recursos y/o el territorio fue un factor explicativo importante. En este sentido, se registraron 12 contextos en África en los que la competencia por los recursos fue una de las principales causas de la tensión en cuestión, una cifra claramente superior a la del resto de continentes. Por otra parte, la gran mayoría de las tensiones en África (23 casos) **fueron de carácter interno, la misma cifra que en el año anterior.** Aunque solamente alrededor de una cuarta parte de las tensiones en África fueron internacionales, estas supusieron casi la mitad de las tensiones internacionales registradas a escala global: África Central (LRA), Eritrea-Etiopía, Etiopía-Egipto-Sudán, Marruecos-Sáhara Occidental, RDC-Ruanda, RDC-Uganda, Ruanda-Burundi, Ruanda-Uganda y Sudán-Sudán del Sur. Finalmente, el 16% restante de los casos en África fueron tensiones internas

América Latina fue el único continente en el que todas las tensiones fueron internas

internacionalizadas en las que se observaron actores foráneos no estatales como la organización armada al-Shabaab (originaria de Somalia) en Kenia–, acciones de grupos yihadistas regionales o globales –como las filiales de ISIS y AQMI en Túnez y Argelia–, la presencia de tropas internacionales –como la ONUCI en Costa de Marfil o la MONUSCO en RDC– o la influencia de sectores de la diáspora y grupos armados locales presentes en territorios vecinos –como por ejemplo en los casos de Eritrea o Ruanda. Finalmente, cabe señalar que hubo varios países que estaban involucrados en varios escenarios de tensión, como Etiopía, RDC, Sudán o Ruanda (cuatro casos de tensión cada país).

En **América** se registraron 10 escenarios de tensión, un 11% del total. En comparación con el año anterior, se observaron dos casos menos, Colombia y Ecuador, donde las protestas remitieron significativamente respecto de los niveles de movilización social del año 2019. Aunque la región siguió albergando las mayores tasas de homicidios de todo el mundo, en términos generales se observaron menores niveles de conflictividad que en 2019, un año marcado por protestas significativas y multitudinarias en varios países latinoamericanos. En este sentido, en 2020 la tensión se redujo en el 70% de los casos analizados en este capítulo y esta solamente se incrementó en los casos de Guatemala –donde se registraron las protestas más importantes de los últimos años– y en Perú, donde la destitución del presidente Martín Vizcarra motivó protestas multitudinarias y donde se produjo un repunte en la actividad de una facción remanente de Sendero Luminoso. El 60% de las tensiones de la región fueron de baja intensidad, pero dos de las tensiones en el continente latinoamericano se contaron entre las de mayor gravedad en todo el mundo. En Venezuela, persistió la crisis política, social y económica, el país padeció una de las tasas de homicidios más altas de América Latina y el Gobierno anunció que las Fuerzas Armadas habían abortado una operación militar para capturar a Nicolás Maduro y perpetrar un golpe de Estado. En México, se registraron más de 35.000 homicidios, buena parte de los mismos vinculados a los enfrentamientos frecuentes y, en ocasiones de gran letalidad, entre cárteles de la droga y entre estos y las fuerzas de seguridad del Estado. El 100% de las tensiones en América Latina fueron internas, un porcentaje que casi dobla la media mundial. Finalmente, cabe señalar que todas las tensiones en la región tuvieron como una de sus causas principales la oposición a las políticas gubernamentales –en numerosos casos hubo protestas importantes contra el Gobierno y crisis políticas e institucionales–,

mientras que en los casos de México y Perú el control por los recursos también fue un factor explicativo significativo.

En **Asia** se contabilizaron 25 tensiones, el 26% del total a escala internacional. Respecto del año anterior, se identificaron dos nuevos casos: India-China –cuya tensión se incrementó notablemente, hasta el punto de que los enfrentamientos en su frontera común entre las Fuerzas Armadas de ambos países que provocaron víctimas mortales por primera vez en 45 años, e Indonesia (Sulawesi), donde el grupo armado MIT incrementó sus actividades armadas. Más de un 70% de las tensiones fueron de baja intensidad, y solamente dos casos fueron considerados de intensidad alta: India-China e India-Pakistán. En ambos casos fueron disputas principalmente fronterizas las que motivaron los enfrentamientos directos entre las Fuerzas Armadas de tres de los países más poblados del mundo, aunque cabe recordar que en el pasado India ya había mantenido conflictos armados tanto con Pakistán como con China. Más de una tercera parte de las tensiones en Asia escaló respecto del año anterior: Corea, RPD–EEUU, Japón, República de Corea; Corea, RPD–República de Corea; India; India-China; India-Pakistán; Indonesia (Sulawesi); Kazajistán; Kirguistán y Tailandia. En ocho casos la intensidad de la tensión no experimentó cambios relevantes en relación al año anterior, mientras que en otros ocho casos la tensión se redujo.

En Asia el 40% de las tensiones fueron internas y el 32% fueron internas internacionalizadas, ya sea por la presencia de grupos armados regionales y tensiones fronterizas, como en cuatro de los países de Asia Central –Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán–, por los vínculos transnacionales de organizaciones armadas locales –como en la provincia china de Xinjiang o el estado indio de Assam–, por la presencia de organizaciones hmong en Lao RPD o por la ubicación en India de la sede del Gobierno tibetano en el exilio. En Asia el 28% restante de las tensiones fueron internacionales, siendo, como en años anteriores, la región del mundo con un mayor porcentaje de tensiones de este tipo. La mayor parte de las mismas se sitúan en la zona comprendida entre el Mar Amarillo y el Mar de China Meridional: la disputa entre China y Japón (principalmente acerca de las islas Senkaku/Diaoyu); la tensión de Corea del Norte con su vecino del sur y también con varios países acerca de su programa armamentístico; o la tensión entre China-Taiwán, y la crisis en el Mar de la China Meridional que involucra a China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia y Brunei Darussalam. Las

Asia fue la región del mundo con un mayor porcentaje de tensiones internacionales, buena parte de las cuales en la zona comprendida entre el Mar Amarillo y el Mar de China Meridional

El 80% de las tensiones en Europa estuvieron vinculadas a cuestiones identitarias y a demandas de autogobierno

otras dos tensiones internacionales, como ya se ha mencionado, corresponden a las disputas entre India y China e India y Pakistán. En cuanto a las causas de fondo, el 60% de los casos estuvo vinculado a la oposición al gobierno o al estado, el menor porcentaje del mundo juntamente con Europa. Un 48% de los 25 casos estuvo vinculado a cuestiones identitarias o a demandas de autogobierno. Cabe destacar que Asia fue la región del mundo en la que se observaron un mayor número de tensiones asociadas a la identidad, concretamente 12: en China, las regiones de Xinjiang, Tíbet y Hong Kong; en India los estados de Assam, Manipur y Nagalandia, así como el propio contencioso histórico entre India y Pakistán; en Indonesia, las regiones de Sulawesi y Papúa Occidental; y también los casos de Kirguistán, Lao RPD y Sri Lanka. Finalmente, un 36% de los casos analizados en Asia estuvo motivado en

parte por cuestiones relacionadas con el control de los recursos o el territorio, un porcentaje parecido al de África y que hace que ambos continentes sean los que alberguen mayores tensiones vinculadas a esta cuestión. De los ocho casos en los que la tensión pivotaba alrededor de disputas por el territorio, cuatro casos estaban vinculados a China (China-Japón; China-Taiwán; India-China y Mar de la China Meridional); tres eran repúblicas ex soviéticas en Asia Central (Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán) y la otra era el conflicto entre India y Pakistán. Cabe destacar que hubo dos países, India y China, que estuvieron involucrados en ocho y seis escenarios de tensión respectivamente.

En **Europa** se contabilizaron 10 casos de tensión sociopolítica, un caso menos que en 2019. Hubo un escenario que dejó de ser considerado como tensión: Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), donde el reinicio de la guerra en el mes de septiembre y una escalada previa de las hostilidades en julio en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán provocaron la muerte de unas 5.000 personas y el desplazamiento forzado de otras decenas de miles (mayoritariamente armenias), de modo que este caso pasó a ser considerado como conflicto armado. En el Mediterráneo Oriental, el conflicto en torno a la delimitación de las aguas territoriales y sus zonas económicas exclusivas entre Turquía y Grecia y Chipre, así como las prospecciones de hidrocarburos en la zona, provocaron creciente militarización en la zona e internacionalización del conflicto, con países como Francia, Italia y EAU llevando a cabo ejercicios militares conjuntos poco después de una colisión entre dos barcos de guerra de Turquía y Grecia. Además del caso ya mencionado entre Turquía y Grecia y Chipre y de la situación en las dos repúblicas autoproclamadas independientes de Abjasia

y Osetia del Sur en Georgia, la tensión se incrementó también en Belarús (donde las multitudinarias protestas antigubernamentales que se produjeron tras la reelección del presidente Aleksander Lukashenko y la posterior campaña de represión por parte de las autoridades provocaron graves violaciones de derechos humanos y una importante crisis política y social en el país) y en Rusia (norte del Cáucaso), donde los incidentes de violencia entre fuerzas de seguridad federales y locales e insurgentes provocaron alrededor de 40 víctimas mortales durante el año.

Irán estuvo directa o indirectamente vinculado a siete escenarios de tensión de la región, mientras que EEUU lo estuvo en tres casos

En Europa hubo dos tensiones internacionales –la ya mencionada en el Mediterráneo Oriental y también la disputa entre Serbia y Kosovo–, cuatro internas y seis internas internacionalizadas. Cabe destacar que Rusia estuvo involucrada directamente en cuatro casos de tensión (las que acontecen en el norte del Cáucaso, en las autoproclamadas repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia en Georgia y en la autoproclamada república de Transnistria, en Moldova) y también jugó un rol importante en la crisis en Belarús. En cuanto a las causas, el 80% de los casos estuvieron vinculados a cuestiones identitarias y a demandas de autogobierno, un porcentaje parecido al de años anteriores y que hace de Europa la región del mundo en la que claramente estos factores están más presentes. La oposición al gobierno o al sistema también estuvo presente en un 60% de los casos, un porcentaje algo superior al del año pasado (55%), pero menor que en otras regiones. Las disputas por el control de los recursos y/o el territorio supuso solamente un 10% de los casos analizados, el menor porcentaje en todo el mundo.

Por último, en **Oriente Medio** se registraron 12 tensiones, las mismas que en 2019, lo cual supone un 13% del total de casos a nivel mundial. Un tercio de las tensiones en Oriente Medio fueron de alta intensidad (Egipto; Irán – EEUU, Israel; Iraq; e Israel – Siria – Líbano), de modo que fue la región con un mayor porcentaje de tensiones de este tipo. La práctica totalidad de los casos en Oriente Medio no experimentaron cambios significativos en cuanto a su intensidad respecto del año anterior, pero hubo un caso en que la tensión se redujo (Irán, que en 2019 fue escenario de unas multitudinarias protestas que provocaron la muerte de más de 300 personas) y otro en el que la situación empeoró (Irán – EEUU, Israel, escenario en el que la tensión internacional en torno al programa nuclear iraní se intensificó y en el que el asesinato en Iraq en un ataque estadounidense del general iraní Qassem Soleimani, jefe de la brigada al-Quds de la Guardia Revolucionaria, tuvo un importante impacto desestabilizador en la región). Cabe señalar que Irán estuvo directa o indirectamente vinculado a siete escenarios de tensión –Irán; Irán (noroeste); Irán (Sistán Baluchistán); Irán – EEUU, Israel; Iraq; Iraq (Kurdistán); e Israel – Siria – Líbano–, mientras que un país no perteneciente a la región como EEUU lo estuvo

a tres casos: Irán–EEUU, Israel; Iraq; e Israel–Siria–Líbano.

En lo concerniente a las causas de las disputas, el 75% de las tensiones registradas en la región (nueve de 12 casos) tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno o al sistema, las mismas cifras que el año pasado. Más del 40% de los casos estuvieron vinculados a cuestiones relacionadas con la identidad y el autogobierno, mientras que las disputas por el control de los recursos o el territorio fueron un aspecto relevante en un 17% de los casos, un porcentaje inferior al de otras regiones. La mitad de las tensiones en Oriente Medio fueron internas internacionalizadas (el mayor porcentaje del mundo junto con Europa), mientras que un tercio fueron internas y el 17% restante fueron internacionales. Cabe destacar que las dos tensiones internacionales fueron de máxima intensidad: Irán – EEUU, Israel e Israel – Siria – Líbano.

2.3. Tensiones: evolución anual

2.3.1. África

África Occidental

Malí	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Desde su independencia de Francia en 1960, Malí ha hecho frente a diversos periodos de inestabilidad, incluyendo el golpe militar de 1968; una rebelión popular y militar en 1991; y revueltas e insurgencia tuareg en demanda de mayor participación política y desarrollo del norte del país. Malí celebró sus primeras elecciones pluripartidistas en 1992, si bien desde entonces los diversos comicios han transcurrido en medio de críticas opositoras en relación a la falta de garantías democráticas. El peso del Ejército se evidenció con un nuevo intento de golpe militar en el año 2000, que fue desbaratado. La inestabilidad se incrementó una vez más en 2012, con la toma de control del norte por parte de grupos tuareg e islamistas y un golpe de Estado militar que forzó la caída del Gobierno. A partir de ese momento los sucesivos Gobiernos que ha tendido el país se han enfrentado a múltiples desafíos políticos, económicos y de seguridad, persistiendo la violencia en la zona septentrional del país, y extendiéndose hacia la región central. Durante 2019 se produjo un incremento significativo de las protestas y movilizaciones populares, que fueron seguidas en 2020 de un golpe de Estado y la conformación de un nuevo gobierno transicional en el país.

Durante el año se incrementaron las tensiones políticas en Malí dando lugar a un golpe de Estado que destituyó

al Gobierno y abrió un nuevo proceso transicional en el país. El primer semestre del año estuvo marcado por las manifestaciones y protestas sociales contra el Gobierno presidido por Ibrahim Boubacar Keïta, debido a la crisis política y al deterioro de la situación de seguridad en el país. A ello se sumó la indignación por el secuestro –perpetrado por supuestos militantes de Katiba Macina– de Soumaila Cissé, líder del principal partido de la oposición, Unión por la República y la Democracia, y de 11 miembros de su equipo en Tombuctú el 25 de marzo, mientras hacían campaña para las elecciones legislativas. A su vez, las controversias generadas por la anulación del Tribunal Constitucional de parte de los resultados de las elecciones legislativas celebradas entre el 29 de marzo (primera ronda) y el 19 de abril (segunda ronda), provocó un mayor descontento y un impulso de las movilizaciones populares. Las protestas, encabezadas por el denominado movimiento M5-RFP –compuesto por una coalición de grupos de oposición y grupos de la sociedad civil encabezados por el destacado Imán Mahmoud Dicko–, se incrementaron durante los meses de junio y julio, reclamando la dimisión de Keïta, la formación de un gobierno liderado por M5-RFP, la disolución de la Asamblea Nacional y el Tribunal Constitucional. Ante el aumento de las tensiones, el bloque regional de la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO) nombró al ex presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, enviado especial para Malí, y creó una delegación de alto nivel para mediar, solicitando la conformación de un gobierno de unidad y la repetición parcial de las elecciones legislativas. Las protestas se mantuvieron y el 18 de agosto un grupo de altos mandos militares autodenominado Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), encabezados por el coronel del Ejército Assimi Goïta, dio un golpe de Estado que obligó al presidente Keïta a dimitir. Varios altos funcionarios del Gobierno, incluidos Keïta y el primer ministro, Boubou Cissé, fueron arrestados.

Malí logró la conformación de un gobierno de transición cívico-militar después del golpe de Estado producido en agosto

El golpe, si bien fue recibido con satisfacción por parte del M5-RFP, generó la condena internacional generalizada, como la CEDEAO, ONU, UA, UE, EEUU, entre otros, que solicitaron la liberación inmediata del Gobierno y la vuelta al orden constitucional. La delegación de la CEDEAO mantuvo reuniones con el CNSP, Keïta y Cissé en Bamako a mediados de agosto para mediar en la vuelta del gobierno civil, sin lograr resultados. La CNSP anunció el inicio de un periodo transicional de tres años y liberó a Keïta, sin embargo, la CEDEAO exigió una transición inmediata dirigida por civiles y elecciones en el plazo de un año, imponiendo sanciones a Malí. Finalmente, tras meses de presiones y negociaciones entre la CNSP y grupos de la oposición y de la sociedad civil, incluida la coalición M5-RFP, en octubre se logró la creación de un gobierno transicional compuesto por civiles y militares que obtuvo el reconocimiento internacional. El nuevo presidente interino, Bah

N'Daw, nombró a los 25 miembros del nuevo Gobierno, adjudicando cuatro carteras clave a oficiales militares, tres para el movimiento civil, y dos para la Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA), entre otras. Sin embargo, el M5-RFP denunció que no había obtenido representación en el Gobierno, manteniendo las movilizaciones. A principios de noviembre el presidente N'Daw decretó la formación del cuerpo legislativo interino, denominado Consejo Nacional de Transición (CNT), otorgando al vicepresidente y líder del CNSP, Assimi Goïta, autoridad para nombrar a sus miembros. El CNT contará con 121 escaños, de los cuales el CNSP será el mejor representado, con 22. A la par, el Gobierno nombró a figuras militares como gobernadores de varias regiones, elevando a 13 (de las 20 existentes) las que están gobernadas por oficiales militares o de policía. El M5-RFP calificó los decretos de inaceptables, cuestionando la naturaleza militar de la transición y manteniendo el llamamiento a la movilización popular.

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN, IPOB, MASSOB

Síntesis:
Desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas.

En Nigeria se incrementó la violencia y la inestabilidad más allá del conflicto armado vinculado a las acciones de Boko Haram que afecta a los tres estados del noreste del país y la cuenca del Lago Chad.¹⁴ En el noroeste del país, se produjo un aumento de la tensión que se inició en 2018, centrado en las actividades de grupos criminales, a lo que se sumó el clima permanente de violencia intercomunitaria del cinturón central del país y, sobre todo, las medidas excepcionales impuestas por

14. Véase el resumen sobre la Región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

el Gobierno para frenar el avance de la pandemia de la COVID-19 y las movilizaciones sociales en contra del uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y, en especial, de la unidad especial antirrobo Special Anti-Robbery Squad (SARS). El aumento de la violencia criminal en el noroeste del país se expandió hacia la capital, Abuja, lo que provocó un incremento de la preocupación en términos de seguridad. Esta escalada de la violencia criminal ha causado alrededor de 8.000 víctimas mortales desde 2011 y el desplazamiento forzado de unas 200.000 personas a la vecina Níger, a pesar de los perativos militares y las iniciativas de construcción de paz impulsadas a nivel local y gubernamental, según destacó el International Crisis Group. Esta violencia ahonda sus raíces en la competencia por los recursos entre las comunidades ganaderas fulani y las comunidades agrícolas hausa, ha escalado por la implicación de bandas criminales dedicadas al robo de ganado, secuestros para obtener rescates y saqueos e incendios de diversas localidades, situación que han aprovechado actores con agendas yihadistas, según la organización. La violencia criminal causó miles de víctimas mortales durante el año, principalmente en los estados del noroeste, con 2.481 víctimas mortales según el Nigerian Security Tracker, la mayoría en los estados de Kaduna, Katsina y Zamfara. El balance de fallecidos fue superior al de 2019 cuando se constataron más de 2.000 víctimas mortales como consecuencia de las acciones de una multiplicidad de actores, entre ellos grupos criminales, cuerpos de seguridad, actores armados yihadistas, grupos vinculados a comunidades ganaderas, y milicias de autodefensa civiles. Por otra parte, cabe remarcar el persistente clima de violencia en los estados centrales conocidos como el cinturón central ("Middle Belt"), destacando los estados de Taraba, Benue, Plateau y Níger como consecuencia de enfrentamientos intercomunitarios entre pastores nómadas procedentes del norte de Nigeria y las comunidades agrícolas del centro y sur del país. Se siguieron registrando enfrentamientos comunales en espirales de acción-reacción que exacerbaban el clima de violencia -incluyendo saqueos e incendios de campos y robos y ejecuciones de ganado-, que causaron centenares de víctimas mortales durante el año.

Cabe destacar la escalada de la movilización popular que vino acompañada de una oleada de represión como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas por la pandemia de la COVID-19 y sobre todo, a raíz de las movilizaciones que tuvieron lugar en octubre. En aplicación de las medidas de excepción, los cuerpos de seguridad fueron acusados de cometer múltiples violaciones de los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza, según informaciones recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión recibió 209 denuncias de vulneraciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad, incluyendo al menos 29 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre el 30 de marzo y el 4 de mayo. Este clima de represión continuó durante el año

y se agravó en octubre. El 5 de octubre se produjeron movilizaciones y acampadas pacíficas en Abuja y Lagos en protesta por la brutalidad policial y la impunidad debido a un vídeo que se viralizó en el que se mostraba una unidad policial del escuadrón especial antirrobo SARS que disparó mortalmente a un hombre desarmado en la localidad de Ughelli, en el estado de Delta. Esta unidad tiene un largo y previo historial de abusos, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Las crecientes movilizaciones, centradas inicialmente en #ENDSARS y contra la brutalidad policial, fueron ampliando sus demandas y solicitando mayor democracia y libertades. En las movilizaciones participaron decenas de miles de personas en el país, entre las cuales numerosos jóvenes y mujeres y que recibieron el apoyo de celebridades locales e internacionales del mundo cultural y del deporte. Como consecuencia de todo ello, el 11 de octubre el Gobierno accedió a dismantelar la unidad policial SARS. Sin embargo, dos días después anunció la creación de una nueva unidad policial que la sustituiría, la Special Weapons and Tactics (SWAT). Esta decisión reactivó las protestas con más dureza. Decenas de miles de personas se movilizaron y las protestas se volvieron violentas a causa de la intervención de los cuerpos de seguridad para dispersarlas, incluyendo grupos parapoliciales que atacaron a los manifestantes, y de actos de saqueo y violencia criminal en numerosas ciudades. El 20 de octubre el Ejército abrió fuego contra las protestas en Lagos, ejecutando al menos una decena de personas según grupos de derechos humanos, muertes desmentidas por el Gobierno. Posteriormente, las movilizaciones destruyeron al menos 25 comisarías, mataron o hirieron a decenas de policías, facilitaron fugas que permitieron huir a más de 2.000 presos, saquearon centros comerciales y almacenes de alimentos. El Gobierno informó el 23 de octubre que 69 personas murieron en la violencia relacionada con las protestas, incluidos civiles, policías y soldados. A 25 de octubre, 27 gobiernos estatales y el gobierno del Territorio de la Capital Federal habían establecido comisiones judiciales para investigar los abusos policiales. No obstante, el Gobierno inició en noviembre acciones legales contra organizaciones y activistas vinculados a las movilizaciones sociales, como las activistas Rinu Oduala, la abogada Modupe Odele, o la organización feminista Feminist Coalition, incluyendo congelación de cuentas bancarias e incautación de documentos de viaje.

Cuerno de África

Etiopía	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados

Síntesis:

El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) está controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que rige el país con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Existe un descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multipartidista. Los siguientes comicios (2010, 2015) limitaron todavía más la apertura democrática al incrementar la verticalidad del régimen y la represión de la oposición política. La Ley antiterrorista de 2009 contribuyó a diezmar a la oposición. El intento desde 2014 de llevar a cabo el Addis Abeba Master Plan, plan que preveía la expansión territorial de la capital, Addis Abeba, a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, y la organización del desarrollo de la ciudad generó importantes protestas y represión mortal en la región de Oromiya, lo que contribuyó a incrementar la tensión. La movilización social contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn a inicios de 2018 y la designación de Abiy Ahmed, que emprendió una serie de reformas dirigidas a mitigar las tensiones étnicas en el país, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles. Sin embargo, los cambios introducidos por el Gobierno de Abiy Ahmed provocaron tensiones en la federación.

El país sufrió un grave deterioro de la situación como consecuencia del inicio de la conflagración bélica entre Tigray y el Gobierno federal,¹⁵ así como por los persistentes brotes de violencia intercomunitaria y por las acciones del Ejército de Liberación Oromo (OLA) en distintos momentos del año. Se produjeron actos de violencia por parte de grupos civiles de autodefensa y milicias contra la comunidad amhara –la más numerosa del país y con presencia en las diferentes regiones del país–, provocando el desplazamiento de decenas de miles de personas en diferentes regiones y entre miembros de la comunidad amhara y otras comunidades, principalmente en la región de Oromiya (centro del país). En la región de Oromiya, el OLA y los cuerpos de seguridad se enfrentaron causando centenares de víctimas mortales. Además, se produjeron graves enfrentamientos y brotes de violencia en la región de Benishangul-Gumuz (en especial, en la Zona Metekel), donde la comunidad amhara también sufrió represalias; y en la Región de Naciones, Nacionalidades

y Pueblos del Sur (SNNPR), contra población civil amhara. También se produjeron enfrentamientos y espirales de represalia entre comunidades afar y somalí en la zona fronteriza entre las regiones de Afar y Somali. Además, se produjeron multitudinarias movilizaciones en junio por la muerte del cantante y activista Hachalu Hundessa. Las protestas estuvieron protagonizadas por parte de juventudes de la comunidad oromo, movilizadas contra minorías de otras comunidades a las que responsabilizaron de su deceso. Fueron duramente reprimidas por los cuerpos de seguridad, causando al menos 239 víctimas mortales entre el 30 de junio y el 2 de julio en Addis Abeba y la región de Oromiya, el cierre de internet, el despliegue del Ejército en Addis Abeba y el arresto de al menos 5.000 personas. Entre las personas detenidas se encontraban voces críticas contra el Gobierno de Abiy Ahmed, como el líder opositor Jawar Mohammed, o el periodista Eskinder Nega –encarcelado en 2011 y liberado por el propio Ahmed en 2018– por su supuesto rol en instigar una respuesta violenta ante la muerte de Hundessa. Abiy Ahmed describió la muerte de Hundessa y la subsiguiente violencia como intentos coordinados para desestabilizar el país. El fiscal general anunció el arresto el 10 de julio de dos personas sospechosas que supuestamente habrían confesado el asesinato de Hundessa bajo órdenes del OLA con el objetivo de incitar tensiones para desestabilizar el Gobierno, aunque el grupo negó su responsabilidad en los hechos. Cabe destacar, además, que durante el año se constató el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en aplicación de las restricciones de la pandemia de la COVID-19, causando diversas víctimas. Por otra parte, en medio del debate en torno a los partidarios y detractores del sistema de federalismo étnico en el país¹⁶ el 18 de junio el Parlamento regional de la región de SNNPR transfirió el poder al nuevo estado federal de Sidama surgido del referéndum convocado por la comunidad del mismo nombre el 20 de noviembre de 2019¹⁷. Tras esto, el Parlamento federal aprobó el 6 de octubre la solicitud de convocar un referéndum sobre la creación de nuevos estados regionales por parte de otras cinco administraciones de zona y de un distrito de la región de SNNPR.

Según un informe de Amnistía Internacional hecho público en mayo, los cuerpos de seguridad vienen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos en los últimos años, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual, arrestos arbitrarios y detenciones, así como el incendio de casas en el marco de operaciones militares en las regiones de Amhara y Oromiya.¹⁸ El informe, realizado entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, señala estas vulneraciones de los derechos humanos a pesar de las reformas emprendidas por el Gobierno con la liberación de miles de detenidos,

15. Véase el resumen sobre Etiopía (Tigray) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

16. Véase Royo, Josep María, "Etiopía y la ofensiva sobre Tigray. Claves de una transición en riesgo", Apuntes ECP nº9, diciembre de 2020.

17. Véase el resumen de Etiopía en el capítulo 2 (Tensiones) del informe Alerta 2020. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Barcelona: Icaria, 2020.

18. Amnistía Internacional, *Beyond law enforcement: human rights violations by Ethiopian security forces in Amhara and Oromia*, AFR 25/2358/2020, 29 de mayo de 2020.

la apertura del espacio social y político y la derogación de leyes draconianas, como la Ley Antiterrorista. Sin embargo, al tratar de movilizar apoyos, la clase política ha estado instigando animosidades étnicas y religiosas, provocando violencia entre comunidades y ataques armados en cinco de los nueve estados regionales del país: Amhara, Benishangul-Gumuz, Harari, Oromiya y la Región de Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNPR), y en el estado administrativo de Dire Dawa.

Por otra parte, Etiopía, Sudán y Egipto decidieron reanudar el 21 de mayo las conversaciones tripartitas en torno a la construcción de la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) sobre el Nilo Azul, objeto de tensión entre estos tres países como consecuencia del control que puede ejercer Etiopía sobre un recurso estratégico que supone una amenaza para la seguridad nacional sudanesa y egipcia. Posteriormente el diálogo se paralizó por la decisión unilateral de Etiopía de empezar a rellenar las reservas del embalse como consecuencia de la estación de lluvias y la negativa etíope a aceptar el 13 de julio un mecanismo de resolución de disputas vinculante. Ante esta situación de estancamiento, la UA intentó reactivar las conversaciones el 3 de agosto. En paralelo, EEUU decidió recortar parte de la ayuda a Etiopía (unos 130 millones de dólares) ante la falta de progresos en las conversaciones tripartitas de cara a forzar las negociaciones. Egipto alertó en septiembre que las conversaciones no podían extenderse indefinidamente, a lo que Etiopía respondió que no tenía ninguna intención de perjudicar a Sudán y a Egipto y manifestó su compromiso con las conversaciones lideradas por la UA. Sin embargo, las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump en octubre agravaron la situación, al afirmar que Egipto no podría vivir con la presa y podría “volar” la construcción. El primer ministro etíope no respondió a estas incendiarias declaraciones pero poco después el ministro de Exteriores etíope llamó a consultas al embajador de EEUU para aclarar la posición de Washington en torno a la cuestión.

Kenia	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenia, ISIS

Síntesis:

La política y la economía de Kenia han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. A partir de 2002, el proceso clientelar para suceder al autocrático Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) se interrumpió por la victoria de Mwai Kibaki. Desde entonces, han aflorado diferentes conflictos etnopolíticos en el país lo que ha provocado un clima de violencia política durante los diferentes ciclos electorales. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras este proceso electoral se formó un frágil Gobierno de unidad nacional entre Mwai Kibaki y Raila Odinga. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, enjuiciado por la CPI por su vinculación con los hechos de 2007, aunque el tribunal retiró los cargos en 2015. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, la intervención militar de Kenia en Somalia desencadenó ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenia, la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenia, y tensiones entre Kenia y Somalia a causa de sus diferentes agendas políticas, lo que suponen retos añadidos a la estabilidad del país.

Diferentes cuestiones agravaron la situación política y social en Kenia durante el último año.

El clima de violencia política y polarización fue en aumento de cara a las elecciones de 2022. El grupo somalí al-Shabaab siguió llevando a cabo acciones armadas en el norte y este del país. Sin embargo, 2020 estuvo marcado por la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias que, como en otros países africanos, se han reflejado en un grave incremento de la brutalidad policial en aplicación de las restricciones para limitar la expansión de la enfermedad. Durante el año fue en aumento la polarización política entre los partidarios del actual presidente, Uhuru Kenyatta, y su vicepresidente William Ruto, que se vio progresivamente marginado por Kenyatta en el seno del partido y de las instituciones políticas. La carrera hacia las presidenciales de 2022 se preveía larga, y el primer evento clave será el referéndum para la reforma constitucional en junio de 2021, que ha unido a Kenyatta y al líder opositor, Raila Odinga, a favor de la consulta, en contra de Ruto. En este sentido, el 25 de noviembre el presidente firmó el acta que pone en marcha el referéndum para la reforma de la Constitución en junio de 2021.

A esta situación se le sumó el uso excesivo de la fuerza en aplicación de las restricciones para limitar la expansión de la pandemia de la COVID-19, registrándose numerosos casos de abusos y brutalidad policial que provocaron la muerte de decenas de personas, siendo denunciados a través de diferentes informes por parte de HRW¹⁹ o la Kenya National Commission on Human Rights,²⁰ entre otros. En consecuencia, se produjeron diversas demandas contra el Gobierno por presuntos

19. Human Rights Watch, *Kenya: Police Brutality During Curfew*, 2020.

20. Kimani, S., “Report outlines human rights violations in Kenya during COVID-19 containment”, *SABCNews*, 1 de julio de 2020.

asesinatos y violaciones de derechos humanos, así como múltiples movilizaciones en diversas ciudades en protesta por la brutalidad policial que fueron nuevamente reprimidas por la fuerza. Tras las fuertes críticas, el presidente Kenyatta el 1 de abril lamentó el uso excesivo de la fuerza pero no instruyó cambios para acabar con los abusos, según criticó HRW. En junio la Autoridad de Supervisión de la Policía Independiente, una institución gubernamental que supervisa la Policía en el país, afirmó que había habido al menos 15 muertes relacionadas con la acción policial durante la aplicación del toque de queda desde marzo. Organizaciones de derechos humanos señalaron que la cifra podría ser superior. Informaciones de prensa señalaron a empresarios y funcionarios del Estado por haberse apropiado indebidamente de 400 millones de dólares destinados a la respuesta a la pandemia de la COVID-19, lo que provocó nuevas movilizaciones.²¹ Este escándalo provocó la indignación pública y protestas organizadas por centenares de activistas anticorrupción entre el 21 y el 25 de agosto en Nairobi, Mombasa, Nakuru y Kisumu, en las que la Policía intervino con el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y arrestó a decenas de ellos. Kenyatta abrió una investigación sobre los contratos de la gubernamental Kenya Medical Supplies Authority (KEMSA) y extendió hasta finales de septiembre el toque de queda.

ACLED estableció en 208 las víctimas mortales vinculadas a acciones de al-Shabaab y a la violencia intercomunitaria, cifra superior a la de años anteriores. Cabe señalar los enfrentamientos entre milicias vinculadas a diferentes comunidades durante todo el año en la zona norte del país, por robo de ganado, demarcaciones fronterizas entre territorios de diferentes comunidades, represalias por ataques previos en torno a cuestiones vinculadas a la propiedad de la tierra, entre las principales cuestiones. Por otra parte, EEUU anunció el 10 de febrero el acuerdo con el Gobierno para la creación de una Joint Terrorism Task Force liderada por Kenia. En paralelo, **persistieron los ataques por parte del grupo armado somalí al-Shabaab** en el noreste y este del país, principalmente en los condados de Wajir, Mandera, Lamu, causando decenas de víctimas mortales durante el año, aunque también se produjeron acciones por parte de posibles miembros de al-Shabaab en el sur del país. En este sentido, cabe destacar que en enero al-Shabaab lanzó un ataque contra la base militar estadounidense Simba en Manda Bay, ataque en el que murieron tres estadounidenses, siendo el primer ataque de al-Shabaab contra la base militar norteamericana en el país. Por otra parte, cabe destacar el incremento del número de muertes a manos de la Policía en el año

2020 según desveló Deadly Force en comparación con los años anteriores.²² En 2015 murieron 143 personas a manos de la Policía, pasando a 205 personas en 2016, 256 en 2017, 250 en 2018, 122 en 2019 mientras que en 2020 murieron 137 personas. La escalada de la violencia policial en 2017 coincide con el ciclo electoral que vivió el país, por lo que la nueva escalada de la violencia puede coincidir con las restricciones vinculadas a la pandemia, el clima preelectoral que vive el país de cara al referéndum constitucional de 2021 y a las elecciones de 2022.

Por otra parte, se deterioraron las relaciones entre Kenia y Somalia durante el año, tras su mejora de finales de 2019. En diciembre de 2020 Somalia rompió relaciones diplomáticas con Kenia y ordenó la retirada del personal diplomático somalí de ese país acusando a su vecino de continuar inmiscuyéndose en los asuntos políticos internos e ignorar todos los llamamientos anteriores para dejar de violar su soberanía.²³ El anuncio se produjo a raíz de la reunión entre el presidente de Kenia con el líder de Somalilandia, Musa Bihi Abdi, en Nairobi. Somalilandia declaró unilateralmente su independencia de Somalia en 1991. Ambos líderes anunciaron que tejerían relaciones más cercanas con la apertura en marzo de un consulado de Kenia en Hargeisa, la capital de Somalilandia, y de conexión aérea directa entre Nairobi y Hargeisa. El ministro de Exteriores keniano Cyrus Oguna anunció el establecimiento de un comité para buscar una solución al conflicto diplomático, subrayando la acogida en Kenia de 200.000 personas refugiadas somalíes que viven en campos en el este del país desde hace casi 30 años, y que Kenia es en la actualidad uno de los principales contribuyentes de tropas a la misión de la UA en Somalia, AMISOM. En este sentido, diversos análisis señalaron que cualquier cambio en la situación de seguridad y el papel determinante de Kenia por su participación en la misión de la UA en Somalia pueden tener graves consecuencias, aludiendo a la posibilidad de que Kenia modifique su papel en la misión y reduzca sus tropas debido al clima de tensión entre ambos ejecutivos. Por otra parte, otro eje de tensión estuvo vinculado a la tensión entre Kenia y Somalia en torno al estado somalí de Jubalandia, estado fronterizo con Kenia. A finales de noviembre Somalia expulsó al embajador de Kenia y llamó a consultas a su representante en Nairobi, acusando a Kenia de interferir en el proceso electoral en el estado somalí de Jubalandia. Kenia acusa a Mogadiscio de intentar sustituir al presidente regional, Ahmed Madobe –actual aliado clave de Kenia–, por alguien más cercano a Mogadiscio. Además, Madobe a su vez es un aliado clave de Kenia, país que ve en Jubalandia una zona de seguridad contra

21. France24, “Kenya ministry told to publish Covid-19 deals amid graft scandal”, 31 de agosto de 2020.

22. Deadly Force es una base de datos de asesinatos cometidos por la Policía. El proyecto del rotativo keniano Daily Nation, Nation Newsplex, busca registrar todas las muertes resultantes de operaciones policiales en Kenia, basándose en informes públicos, incluyendo informaciones de individuos y organizaciones del sector público y privado. La base está configurada a partir de la recopilación de informaciones de los medios de comunicación, el Independent Policing Oversight Authority, otras agencias gubernamentales y recuentos realizados por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

23. Al-Jazeera, Somalia cuts diplomatic ties with Kenya citing interference, 15 de diciembre de 2020.

los combatientes de al-Shabaab, que han cometido numerosos atentados a través de la frontera común. El deterioro de las relaciones entre ambos países también está vinculado con el próximo proceso electoral, ya que la administración del presidente Famajo percibe que Kenia da apoyo a la oposición política somalí en contra de él, ya sea Madobe o cualquier otro líder regional somalí. Finalmente, ambos países mantuvieron disputas en torno a sus aguas territoriales debido a la posible existencia de hidrocarburos en ellas.

Grandes Lagos y África Central

Chad	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Recursos, Territorio Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado Boko Haram, otros grupos armados chadianos, oposición política y social, milicias comunitarias

Síntesis:

El golpe de Estado frustrado de 2004 y la reforma de la Constitución de 2005 boicoteada por la oposición fueron el germen de una insurgencia que intensificó su actividad durante el año 2006, con el objetivo de derrocar al Gobierno autoritario de Idriss Déby. Esta oposición estaba compuesta por diversos grupos y militares desafectos al régimen. A esto se añadió el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra que padece la vecina región sudanesa de Darfur, como consecuencia de las operaciones transfronterizas de los grupos armados sudaneses y las milicias árabes progubernamentales sudanesas janjaweed. Éstas atacaron las poblaciones y campos de refugiados de Darfur situados en el este del Chad, lo que contribuyó a una escalada de la tensión entre Sudán y Chad, que se acusaron de apoyar cada uno de ellos a la insurgencia del otro país. La firma de un acuerdo entre ambos países en enero de 2010 desencadenó el paulatino retorno y desmovilización de los grupos armados chadianos, aunque todavía existen algunos focos de resistencia. En paralelo, Idriss Déby continuó controlando el país de forma autoritaria. Tras las elecciones de 2016, ganadas sin sorpresas por Idriss Déby, persistió el clima de inestabilidad social. Por último, cabe destacar las intervenciones militares en el norte contra grupos con base en Libia y contra la minería ilegal, y contra Boko Haram en la región del Lago Chad, así como periódicos enfrentamientos intercomunitarios por la propiedad y usos de la tierra.

Persistió la inestabilidad en el norte y este de Chad, los ataques y actos de represalia en otras partes del país vinculados a violencia intercomunitaria y las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad.²⁴ Los ataques de BH se cobraron centenares de víctimas. La peor ofensiva cometida hasta la fecha se produjo en la península de Boma el 23 de marzo y causó la muerte de alrededor de 100 soldados. A raíz de esta acción, las Fuerzas Armadas chadianas llevaron a cabo

una operación militar a principios de abril durante la cual afirmaron haber ejecutado a 1.000 combatientes de BH, operación en la que murieron 52 soldados chadianos. Por su parte, el Gobierno instrumentalizó políticamente la situación de excepcionalidad para reprimir a la oposición política, tal y como ha sucedido en otras partes del continente africano. La violencia intercomunitaria causó más de un centenar de víctimas mortales durante el año. En especial, se produjeron enfrentamientos entre milicias de comunidades ganaderas y agrícolas en las provincias de Ouaddai (este), Dar Sila (este), Batha (centro), Tandjilé (sur), Mayo-Kebbi Est (suroeste), entre otras. Asimismo, persistió la tensión en las zonas mineras de la provincia de Tibesti (noroeste) y a partir de octubre se incrementó la tensión tras la decisión del Gobierno de eliminar todos los derechos de explotación de minas, excepto aquellos aprobados con compañías que demostraran experiencia en el sector. Esta decisión se produjo tras la retirada de la milicia de Miski del acuerdo alcanzado en 2019, en protesta por la decisión del Gobierno de cambiar el marco legal de explotación de los yacimientos de oro en detrimento de la milicia. Por otra parte, ante la persistencia de ataques por grupos rebeldes armados chadianos que disponen de sus bases en países vecinos como Libia y Sudán, el Gobierno intentó incrementar la seguridad y en noviembre el presidente Déby se reunió con Abdelwahid About Mackaye, líder rebelde con base en Sudán, al que le pidió que renunciara a la lucha armada. El grupo Military Command Council for the Salvation of the Republic (CCMSR), con base en Libia, perpetró algunas acciones durante el año, principalmente en febrero y septiembre en la zona de Kouri-Bougoudi, provincia de Tibesti (norte).

En el ámbito político, el presidente Idriss Déby estuvo presionando para impulsar la revisión de la Constitución de 2018 de cara a las elecciones presidenciales que debían celebrarse en diciembre y que finalmente se pospusieron a abril de 2021, citando interrupciones en los preparativos electorales como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Las elecciones legislativas fueron pospuestas a octubre de 2021. En un intento por mejorar la relación con los grupos comunitarios mayoritarios de cara a las elecciones de 2021, en agosto Déby reintegró al antiguo ministro de Defensa Mahamat Nour Abdelkerim en el Ejército y perdonó a tres líderes rebeldes encarcelados. La mayoría de la oposición y grupos de la sociedad civil boicotearon el gubernamental Foro Nacional Inclusivo sobre la reforma constitucional celebrado en N'Djamena entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre. Justificaron el boicot alegando que el Foro no pretendía tratar temas estructurales o la reforma del Ejército. En relación a los cuerpos de seguridad, en febrero Déby llevó a cabo una reestructuración nombrando a familiares y miembros de su grupo étnico como altos cargos del Ejército y la Policía. En el Foro, entre otras cosas, se discutió en torno a la creación de la figura de vicepresidente –nombrado por el presidente– cuestión que posteriormente fue

24. Véase el resumen sobre la Región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

aprobada, sembrando la preocupación por que Déby intente promover en este cargo a personas de su entorno más cercano. No obstante, en diciembre el Parlamento aprobó la reforma constitucional permitiendo que el jefe del Senado –y no el vicepresidente– ocupe el cargo de presidente en funciones, tal y como pretendía impulsar Déby, en caso de ausencia o incapacidad del presidente. Esta reforma finalmente entró en vigor el 14 de diciembre. Por otro lado, según diversos análisis, el Gobierno instrumentalizó políticamente la situación de excepcionalidad para reprimir a la oposición política en el marco de las restricciones derivadas para limitar la expansión de la pandemia de la COVID-19. Durante todo el año el Gobierno estuvo presionando a la oposición política y activistas de la sociedad civil. La mala gestión gubernamental de la crisis vinculada a la pandemia, según algunas voces, hizo que el partido en el poder y la oposición política se aliaran para exigir una mejora de la gestión al Gobierno, lo que llevó a Déby en mayo a disolver la institución gubernamental a cargo de la gestión de la pandemia y crear una nueva estructura bajo su liderazgo personal. El Gobierno suspendió el 11 de diciembre por tres meses al opositor Parti Réformiste después de que su líder, Yacine Abdramane Sakine, afirmara que el Ejército estaba controlado por una minoría para permitir la continuidad del régimen corrupto de Déby en el poder. El 12 y el 23 de diciembre el partido opositor Les Transformateurs organizó movilizaciones en N'Djamena para exigir mayor libertad política, movilizaciones que fueron dispersadas con gases lacrimógenos con el argumento de respetar las disposiciones de las regulaciones de la pandemia, con un balance de tres personas heridas. El Gobierno prohibió la celebración a finales de noviembre de un foro ciudadano organizado por la oposición argumentando las restricciones de la pandemia y detuvo a 70 personas, la mayoría periodistas, en las instalaciones de radio FM Liberté por intentar organizar dicho foro. En diciembre también un tribunal retiró los cargos contra el activista de derechos humanos Alain Kemba y otros dos colaboradores por organizar el foro en N'Djamena en noviembre, lo que les provocó la detención, acusados de actos de rebelión y quebrantamiento del orden público, así como de incumplir las restricciones de la COVID-19.

RDC	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno liderado por Cap pour le Changement (coalición liderada por Félix Tshisekedi), en coalición con el Front Commun pour le Congo (coalición liderada por Joseph Kabila, sucesora de la Alianza por la Mayoría Presidencial), oposición política y social

Síntesis:

Entre 1998 y 2003 transcurrió en RDC la llamada “primera guerra mundial africana”.²⁵ La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno Nacional de Transición (GNT) donde se integraron el antiguo Gobierno, la oposición política, los grupos armados RCD-Goma, RCD-K-ML, RCD-N, MLC y las milicias Mai Mai. A partir de 2003 el GNT estuvo dirigido por el presidente Joseph Kabila y cuatro vicepresidentes, dos de los cuales pertenecían a la antigua insurgencia. El GNT elaboró la Constitución, refrendada en diciembre de 2005. En 2006 se celebraron elecciones presidenciales para poner fin a la transición, en las que Kabila fue elegido presidente, en medio de un clima de alta tensión y acusaciones de fraude. La formación del nuevo Gobierno no frenó la inestabilidad y las disputas en el ámbito político. Las elecciones de noviembre de 2011, en las que se cometieron numerosas irregularidades, contribuyeron a avivar la inestabilidad. La prolongación del mandato del presidente Kabila, que debía expirar en las elecciones de 2016 que fueron pospuestas hasta finales de 2018, contribuyó a exacerbar la inestabilidad y la movilización política y social en contra de su permanencia en el poder, que fue reprimida con dureza.

La RDC siguió afectada por un clima de violencia e inestabilidad política derivada de las tensiones en el seno de la coalición gobernante, que finalmente se rompió en diciembre, y por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en el país. A esto se sumó la persistente violencia debido a la presencia de numerosos grupos armados en el este del país. En el ámbito político, las tensiones fueron constantes en el seno de la coalición gobernante entre el Cap pour le changement (CACH, alianza entre Félix Tshisekedi y Vital Kamerhe) del presidente Félix Tshisekedi y el Front Commun pour le Congo (FCC) del expresidente Kabila. Desde que se celebraron las controvertidas elecciones parlamentarias en marzo de 2019, que significaron la primera transición pacífica en el país –aunque bajo acusaciones de fraude por parte de la coalición opositora Lamuka–, el presidente Félix Tshisekedi ha gobernado gracias a una coalición entre el CACH y el FCC. Conforme se aproximan las elecciones presidenciales de 2023, estos grupos han aumentado sus disputas por el poder. El CACH y el FCC discutieron sobre puestos ministeriales, reorganizaciones militares, nombramientos para el poder judicial y el consejo electoral nacional y políticas anticorrupción. Las luchas políticas internas llevaron a una serie de protestas en toda la RDC durante julio, aunque en este momento Tshisekedi todavía era partidario de sostener la coalición. Las primeras protestas denunciaron los intentos de Kabila de ganar más poder e influencia antes de las elecciones mediante el nombramiento de su aliado, Ronsard Malonda, para encabezar la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), y fueron seguidas por contramanifestaciones de partidarios de Kabila. Organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos CACH y Lamuka (liderada por Martin Fayulu y que agrupa a los principales actores de la oposición, entre ellos Moïse Katumbi y Jean-Pierre Bemba), y algunos

25. Véase la síntesis de RDC (este) y RDC (este - ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

grupos religiosos organizaron protestas en todo el país. El presidente Tshisekedi aconsejó a los grupos encargados de designar a los miembros de la junta de la CENI que armonizaran sus posiciones y buscaran el consenso, y posteriormente declaró que no aprobaría a Malonda.

A pesar de las restricciones de movimiento relacionadas con la pandemia de la COVID-19, las organizaciones de la sociedad civil participaron activamente en la vida política y organizaron múltiples manifestaciones a gran escala en todo el país contra las reformas judiciales propuestas y el nombramiento del nuevo presidente de la CENI y a favor de las reformas electorales. Paralelamente, diversos anuncios por parte del FCC (una cláusula secreta en el pacto de gobierno establecería que Kabila podría participar en las elecciones de 2023 –desmentida por el CACH– o el anuncio de un ministro respecto a que estaban trabajando para el retorno de Kabila) y la aparición del expresidente en su escaño en el Senado levantaron los rumores sobre un posible retorno de Kabila. En octubre el FCC boicoteó el nombramiento de tres nuevos jueces para la Corte Constitucional propuesto por Tshisekedi, cuyo relevo era clave de cara a las próximas elecciones congoleesas para promover una mayor pluralidad e independencia en ese tribunal.

En noviembre se incrementó la tensión. En un intento por conseguir apoyo para su plan de separarse de la FCC, Tshisekedi celebró una serie de reuniones del 1 al 24 de noviembre con líderes religiosos y de la oposición, así como con algunos miembros de la FCC, para conseguir su apoyo. Después de que mensajes que circularon por las redes sociales a principios de noviembre pidieran al Ejército que se rebelara contra las malas condiciones laborales, el 12 de noviembre el cuerpo militar negó cualquier malestar en sus filas y advirtió a los políticos contra cualquier intento de manipularle. Miles de partidarios de Tshisekedi marcharon en la capital, Kinshasa, para exigir el fin de la coalición con la FCC. Durante la manifestación, una sección del partido Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS) de Tshisekedi acusó al ministro de Finanzas de la FCC de congelar fondos destinados a los salarios de los funcionarios públicos y especialmente a los militares, para volverlos contra el presidente. A principios de diciembre se aceleraron los acontecimientos que culminaron en la ruptura de la coalición de Gobierno, lo que generó grave preocupación por sus consecuencias en el conjunto del país. A principios de noviembre, la oposición había conseguido las firmas necesarias para presentar una moción de censura contra la presidenta de la Asamblea Nacional, Jeanine Mabunda (del FCC) acusada de parcialidad. El 10 de diciembre perdió la votación y Mabunda dejó la presidencia. En paralelo, el 6 de diciembre Tshisekedi anunció la disolución de la coalición entre el CACH y el FCC y su voluntad de construir una nueva mayoría o convocar nuevas elecciones si no era posible. El 7 de diciembre se produjeron graves enfrentamientos y altercados en la Asamblea Nacional entre diputados de las dos bancadas como consecuencia del anuncio de la víspera. No obstante, el conflicto era

inevitable, según diversos analistas, ya que si el primer ministro Sylvestre Ilunga Ilunkamba (del FCC) no dimitía, se puede dar la circunstancia que la Asamblea Nacional (donde el FCC tiene mayoría) reafirmara al actual primer ministro, ya que su partido tiene mayoría.

Por último, cabe destacar la crisis entre RDC y Zambia por el incremento en marzo de la tensión en torno a la demarcación fronteriza entre ambos países, cuando se produjeron enfrentamientos entre los Ejércitos en la zona fronteriza entre ambos países. Tras esta situación, el contencioso siguió abierto hasta que en julio la South Africa Development Community (SADC) desplegó una misión técnica en la zona fronteriza afectada, del 23 al 29 de julio, lo que dio lugar en septiembre a la adopción de un enfoque gradual para comenzar a demarcar las fronteras.

Ruanda – Burundi	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	Gobierno de Ruanda, Gobierno de Burundi, grupos armados

Síntesis:

El final de los conflictos armados respectivos en Ruanda en 1994 y en Burundi en 2004 revirtió el dominio político y étnico surgido en la independencia. En Ruanda, la revolución de 1959 derrocó la monarquía tutsi y llevó a las élites hutus al poder, que fueron expulsadas tras el genocidio de 1994 por los refugiados tutsis procedentes de Uganda, y que encumbraron al RPF liderado por el general tutsi Paul Kagame en el Gobierno del país. En Burundi, 40 años de regímenes militares tutsis terminaron con un conflicto armado y la victoria del movimiento pro hutu más importante de la rebelión armada, el CNDD-FDD. Su líder, Pierre Nkurunziza, consiguió tejer una red de equilibrios en su seno para encumbrarse en el poder. Ambos se han convertido en los “hombres fuertes” de la región para promover el desarrollo de sus países y poner fin a los conflictos en la zona. Ruanda, con el FPR en el poder, financió la campaña electoral de Nkurunziza, que es visto como moderado porque marginó a otros sectores de la rebelión hutu burundesa (las FNL de Agathon Rwaswa) con conexiones con su enemigo hutu ruandés FDLR. Nkurunziza y Kagame han intercambiado apoyos en torno a la persecución de sus respectivas insurgencias. No obstante, en 2013 esta relación se truncó cuando se produjo la derrota de la rebelión pro ruandesa del M23 en DRC (enemiga de las FDLR). Ruanda acusó a su vecino burundés de ser el refugio seguro para los combatientes cuya presencia en DRC había justificado la intervención de Ruanda hasta entonces.

Durante el año la relación entre Ruanda y Burundi siguió tensa, con acusaciones mutuas de incursiones y acciones militares en la frontera común. No obstante, desde inicios de año Ruanda había anunciado una disposición al diálogo de cara a normalizar las relaciones con Burundi. La tensión escaló gravemente cuando el 8 de mayo las Fuerzas Armadas de ambos países se enfrentaron militarmente en la frontera marítima del Lago Rweru, muriendo un soldado burundés. A pesar de ello,

el presidente ruandés Paul Kagame reiteró su voluntad de mejorar las relaciones con Burundi, y el 6 de junio felicitó a Ndayishimiye por su victoria electoral, así como también el 10 de junio le transmitió sus condolencias por la muerte de Nkurunziza. No obstante, el ministro de Defensa ruandés afirmó el 27 de junio que alrededor de 100 hombres armados procedentes de Burundi y con material de las Fuerzas Armadas burundesas habrían atacado un puesto del Ejército ruandés en Ruheru, cerca de la frontera, anuncio que fue desmentido por el Gobierno de Burundi aunque prensa independiente ratificó los hechos. El 10 de julio Kagame destacó que estaba listo para trabajar con el nuevo presidente de Burundi. Sin embargo, el 6 de agosto Ndayishimiye declaró que no deseaba mantener relaciones con un Estado “hipócrita” que estaba reteniendo a población refugiada burundesa en Ruanda. Pese a ello, Ruanda respondió facilitando el retorno de las primeras 500 personas refugiadas a finales de agosto. A la vez, los jefes de los servicios de inteligencia de ambos países se reunieron en el puesto fronterizo ruandés de Nemba y acordaron cooperar en lo concerniente a la seguridad fronteriza. Este encuentro es el primero de alto nivel que se produce entre ambos países desde 2015. Progresivamente el Gobierno burundés a mediados de septiembre inició los pasos para normalizar las relaciones con Ruanda, y el Gobierno de Ruanda inició los trámites para extraditar a los supuestos perpetradores del intento de golpe de Estado de 2015 contra el presidente Nkurunziza.

Sudán	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Sudán vive inmerso en un conflicto crónico derivado de la concentración del poder y los recursos en el centro del país. Aparte de los conflictos en las regiones marginalizadas de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, el resto del país sufre también problemas de gobernabilidad derivadas del régimen autoritario del presidente Omar al-Bashir que subió al poder con un golpe de Estado en 1989 y que ejerce un duro control y represión de los disidentes a través de los aparatos de seguridad del Estado. La situación de tensión en el país se agravó con la separación de Sudán del Sur en 2011 ya que afectó gravemente la economía del país que dependía en un 70% de la venta de petróleo, situado mayoritariamente en el sur. Las arcas del estado sudanés vieron disminuir drásticamente sus ingresos por la pérdida del control en la exportación del petróleo y, más tarde, por la falta de acuerdo con Sudán del Sur para su transporte por los oleoductos que pasan por Sudán. Una situación económica con una alta inflación y la devaluación de la moneda contribuyó al inicio de significantes protestas en verano de 2012 en varias ciudades del país que, a principios de 2019 conllevaron la caída del régimen de al-Bashir y la apertura de un proceso de transición.

Tras la conformación del Gobierno de transición en Sudán y la firma del nuevo acuerdo constitucional en 2019, el país avanzó en 2020 en la puesta en marcha de las reformas establecidas, así como en la búsqueda de la paz en las regiones en conflicto. A principios de año, como parte de las reformas en el sector de seguridad del antiguo régimen, las fuerzas de seguridad sudanesas tuvieron que hacer frente a un motín orquestado por parte de miembros de los antiguos Servicios de Seguridad e Inteligencia Nacional (NISS). El motín se originó debido a que en junio de 2019 el NISS había sido transformado en una nueva agencia denominada Servicios Generales de Inteligencia (GIS), generando resistencias. Como resultado del incidente, el presidente del Consejo Soberano, Abdel Fattah al-Burhan, anunció la sustitución del director de GIS, Abu Bakr Mustafa Damblab, por el jefe de inteligencia del Ejército. Posteriormente, el 9 de marzo se registró un atentado con coche bomba contra el primer ministro Abdalla Hamdok, que resultó ileso. El atentado, que fue reivindicado por el autodenominado Movimiento de la Juventud Islámica Sudanesa, motivó medidas adicionales para desmantelar el sistema de seguridad del antiguo régimen. De forma paralela a la implementación de las medidas de reforma del sector de seguridad, también se avanzó en nuevas medidas políticas y económicas a partir de negociaciones entre el Gobierno, el Consejo Soberano y la coalición de oposición Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FFC). Estos actores formaron el 6 de abril un comité para acelerar las reformas transicionales, comprometiéndose a nombrar el Consejo Legislativo de Transición y el Comité de Emergencia Económica para mediados de mayo, así como los gobernadores civiles para el 18 de abril. Sin embargo, los desacuerdos entre las partes, así como el impacto de la pandemia de la COVID-19, impidieron grandes avances en la agenda de la transición durante el año. Esta situación produjo importantes manifestaciones sociales demandando las reformas acordadas. De forma paralela, y tras un año de negociaciones de paz desarrolladas en la capital de Sudán del Sur, Juba, el Gobierno y la coalición rebelde Frente Revolucionario Sudanés (SRF) y la facción del Movimiento de Liberación de Sudán liderada por Minni Minnawi (SLM/A-MM) **firmaron el 31 de agosto un histórico acuerdo de paz.** El acuerdo no contó con la adhesión de la facción del grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán del Norte encabezada por Abdelaziz al-Hilu (SPLM-N) y de la facción del Movimiento de Liberación de Sudán liderada por Abdel Wahid al-Nur (SLM/A-AW), que siguen en procesos de negociación de paz separados.²⁶ Algunas de las cláusulas firmadas en el acuerdo establecen el inicio de un período transitorio de tres años; la integración de los ex líderes rebeldes en el Consejo Soberano, el gabinete ministerial y el Consejo Legislativo de Transición; el establecimiento de un sistema de gobierno regional federal en Sudán; la conformación de una fuerza de seguridad conjunta en Darfur; Darfur pasa a ser considerada una única

26. Véase el resumen sobre Sudán en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

región en donde el poder será compartido; o la concesión de autonomía a las Dos Áreas de Kordofán del Sur y Nilo Azul, además de a Kordofán Occidental. Posteriormente, en diciembre el jefe del Consejo Soberano de Sudán, al-Burhan, anunció la formación de un **Consejo de Socios de Transición (TPC)** compuesto por 29 miembros: el primer ministro, seis miembros del Ejército, 13 de las FFC y nueve miembros del SRF. El establecimiento del TPC se justificó debido a la necesidad de alinear el Acuerdo de Paz de Juba de 2020 con la Constitución. Sin embargo, el Consejo de Ministros, las organizaciones de la sociedad civil, los Comités de Resistencia, las FCC y los partidos políticos rechazaron su conformación, calificando la medida contraria al espíritu de la revolución de diciembre y los objetivos del período de transición, rechazando las competencias asignadas al TPC. La Alianza Nacional Sudanesa, que aglutina a entidades que fraguaron la transición en el país, solicitó congelar el trabajo del TPC hasta que se realicen más consultas, proponiendo una mayor representación de mujeres y jóvenes y de todas las partes del acuerdo de paz. Estos hechos hicieron que el jefe del Consejo Soberano diera marcha atrás en su decisión de conformar el TPC. Asimismo, la formalización del acuerdo de paz y su aprobación por el Consejo Soberano y su incorporación como declaración constitucional, generó recelos en la región este del país contra la que denominaron la “vía oriental” del acuerdo de paz, pidiendo la autodeterminación para el este de Sudán. Estos hechos generaron el estallido de episodios violentos en los estados de Mar Rojo y Kassala, con un balance de al menos 30 personas muertas el 20 de octubre.

El Gobierno estadounidense eliminó a Sudán de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo

humanidad y crímenes de guerra cometidos en la región de Darfur desde el inicio del conflicto armado en 2003. En febrero de 2020 el Gobierno acordó cooperar con la CPI, afirmando estar dispuesto a entregar a las personas acusadas, así como a firmar y ratificar el Estatuto de Roma. De forma paralela, en el mes de agosto se inició en Sudán el juicio contra al-Bashir y otros miembros de su régimen acusados de perpetrar el golpe de Estado de 1989 y otros cargos.

Finalmente, en otros asuntos destacados, el 23 de octubre, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden para **eliminar la designación de Sudán de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo**. La firma se produjo después de que Sudán acordara compensar económicamente a las familias de las víctimas de los atentados de Al Qaeda en 1998 contra las embajadas de EEUU en Kenia y Tanzania, así como a las del ataque en el año 2000 contra un buque de guerra estadounidense en Yemen. La normalización de las relaciones entre EEUU y Sudán también incluyó la aprobación por parte de EEUU de la llegada del embajador sudanés al país, hecho que no se producía desde hace dos décadas. De forma paralela, y como parte del acuerdo, el presidente Trump anunció que Sudán e Israel habían acordado normalizar las relaciones diplomáticas, las cuales habían estado rotas durante muchos años. Por otro lado, en diciembre, Rusia y Sudán firmaron un acuerdo para establecer una base naval rusa durante al menos 25 años en Port Sudan, en el Mar Rojo. El acuerdo establece que la base naval rusa debería “ayudar a fortalecer la paz y la estabilidad en la región” y no está dirigida contra terceros, y a cambio, Rusia proporcionará a Sudán armas y equipo militar.

Como parte de los avances en el proceso de transición, a principios de febrero, el secretario general de la ONU accedió a la solicitud del Gobierno de Sudán de establecer una misión política en el país para apoyar la construcción de la paz y el desarrollo. En junio de 2020, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió, en su resolución 2524, establecer la **Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán (UNITAMS)** a partir del 1 de enero de 2021. La nueva misión política complementará la labor de los organismos y programas de las Naciones Unidas en Sudán y colaborará estrechamente con el Gobierno de Transición y el pueblo del Sudán en apoyo de la transición. A su vez, el Consejo de Seguridad de la ONU anunció la finalización, después de 13 años, de la **Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID)**, que dejará de estar operativa en junio de 2021.

Por otro lado, durante el año también se registraron avances en relación al caso que mantiene abierto la **Corte Penal Internacional (CPI)** contra el ex-presidente Omar al-Bashir y otros cuatro ex funcionarios del régimen acusados de cargos de genocidio, crímenes de lesa

Tanzania	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
El partido Chama Cha Mapinduzi (CCM) ha ostentado el poder en Tanzania desde que accedió a la independencia en 1961, cimentando su dominio durante décadas bajo la fórmula de partido único de Estado, y no fue hasta 1995 cuando se introdujo en el país el sistema multipartidista. Desde la llegada al poder de John Magulufi (CCM) en 2015, este control se ha visto incrementado y el país se ha visto afectado por un creciente autoritarismo y un continuo hostigamiento hacia la sociedad civil y la oposición política, restringiendo el espacio político. Magulufi accedió a la presidencia del país gracias a un discurso de lucha contra la corrupción y con una retórica nacionalista, dibujando a la oposición política como saboteadores de la agenda de desarrollo del país e incluso de traidores en manos de Occidente. El país se ha visto crecientemente dividido y polarizado entre partidarios del gubernamental CCM y detractores, creando un clima de incertidumbre y

preocupación en torno a su futuro político. Magulufi ha prometido repetidamente que solo ejercería como presidente durante dos mandatos, tal y como establece la Constitución actual. Sin embargo, altos cargos del CCM han planteado eliminar el límite de mandatos a la presidencia, a lo que las elecciones celebradas en octubre de 2020 dejaron la puerta abierta dada la abultada victoria del CCM que les permitió superar los dos tercios de puestos parlamentarios necesarios para reformar la Constitución. Dichos comicios fueron tachados de fraudulentos y se vieron afectados por un clima de intimidación, violencia y detenciones arbitrarias. Asimismo, esta inestabilidad se ha visto acrecentada en el archipiélago semiautónomo de Zanzíbar, históricamente afectado por procesos electorales fraudulentos y violentos.

En Tanzania se produjo un grave deterioro del espacio político, con graves vulneraciones de los derechos humanos. El país se vio afectado por un creciente autoritarismo del partido en el poder, Chama Cha Mapinduzi, así como de su presidente, John Magulufi, que escaló con las elecciones generales que se celebraron el 28 de octubre. Su mandato se ha visto caracterizado por un continuo hostigamiento a la sociedad civil y la oposición política. A esta situación se sumó la respuesta del Gobierno a la pandemia de la COVID-19. El presidente Magulufi minimizó el riesgo que representaba la COVID-19 y silenció a los críticos de la respuesta del Gobierno, descartando el cierre de la capital económica o del país ante la escalada de contagios y la muerte de al menos dos parlamentarios y de un ministro; despidió al viceministro de Salud por haber criticado la respuesta del Gobierno ante la crisis; cuestionó la credibilidad del laboratorio nacional y a un comité especial sobre la COVID-19. Desde abril el Gobierno se negó a ofrecer cifras oficiales de expansión de la pandemia con el argumento de que se utilizaban para erosionarle.

En relación a la restricción del espacio político, durante el año fue en aumento la represión y la persecución a la oposición política, así como a los medios críticos con la gestión gubernamental. Un ejemplo fue la suspensión del medio Kwanza Online TV en julio por 11 meses, por transmitir una información de la embajada de EEUU alertando del crecimiento exponencial de la pandemia en el país. Tres relatores especiales de la ONU (sobre los derechos de asociación y reunión pacífica, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión) instaron en julio a poner fin a la represión del espacio cívico y a la retirada de medidas que coartaban diferentes derechos básicos. Amnistía Internacional alertó en octubre que el Gobierno había creado un arsenal de leyes para reprimir todas las formas de disidencia y reprimir eficazmente los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica antes de las elecciones del 28 de octubre.²⁷ Así, en los últimos meses, los candidatos de la oposición habían sido arrestados por

Se produjo un grave deterioro de la situación en Tanzania como consecuencia de la deriva autoritaria y represiva del Gobierno de John Magulufi

cargos falsos que los despojaban de su derecho a la libertad de reunión, asociación y circulación. Al mismo tiempo, entraron en vigor normas destinadas a reforzar el control del Gobierno sobre lo que publicaban los medios locales y extranjeros, violando el derecho a la libertad de expresión. El proceso electoral en Tanzania se caracterizó por un elevado clima de violencia durante la precampaña y campaña electoral, con continuos actos de represión de los partidos políticos, de sus candidatos y actos electorales, así como de organizaciones no gubernamentales y medios, tal y como señalaron numerosas organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. Decenas de miembros de la oposición política fueron arrestados desde junio, y la organización de derechos humanos Tanzania Human Rights Defenders Coalition (THRDC) suspendió sus actividades en agosto citando un incesante clima de intimidación e intromisión en sus actividades por parte de los cuerpos de seguridad. En octubre la violencia electoral afloró con la muerte de al menos 10 personas en el archipiélago de Zanzíbar a manos de la policía, y el partido opositor Chadema denunció la muerte de dos personas cuando dos oficiales del partido en el poder dispararon con fuego real en un acto electoral en la localidad de Nyamongo. Otras fuentes elevaban la cifra total de víctimas mortales a 15 hasta noviembre.

Se llevó a cabo el cierre de medios críticos y temporalmente internet y aplicaciones de mensajería digital el 27 de octubre, en vísperas de la jornada electoral. En la jornada electoral se constataron numerosas irregularidades y se denunció la existencia de fraude. Los resultados dieron la victoria al presidente John Magulufi con el 84% de los votos, y su partido obtuvo 253 de los 261 escaños, el 98%, cifra muy superior al 70% de los escaños de 2015. El grupo de expertos regionales Tanzania Elections Watch declaró el mismo día electoral que la evolución de la situación había significado una caída profunda de los estándares democráticos del país. Diversas figuras de la oposición tomaron el camino del exilio ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos (el candidato presidencial del partido Chadema, Tundu Lissu buscó refugio en la embajada alemana y posteriormente se desplazó a Bélgica, y el parlamentario Godbless Lema se exilió a Kenia), tras ser haber sido arrestados temporalmente antes de la celebración de protestas contra la reelección de Magulufi. En línea con el creciente clima de vulneración de derechos humanos, el país decidió restringir el acceso a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (AfCHPR) –tribunal creado por la UA que representa el principal mecanismo africano de derechos humanos– supuestamente por haber tenido respuestas desfavorables por parte de la Corte. Tanzania, país anfitrión de la Corte, se retiró el 21 de noviembre, un año después de la solicitud presentada por el Gobierno

27. Amnistía Internacional, *Lawfare – Repression by Law Ahead of Tanzania's General Elections*, 12 de octubre de 2020.

tanzano. Su retirada, sin embargo, no implica que el país no continúe adhiriéndose a disposiciones de su protocolo, ya que el tribunal permite que las personas y las ONG de otros países puedan demandar a Tanzania aunque se haya retirado.

Por otra parte, cabe destacar que el 14 de octubre se constató el primer atentado cometido por la insurgencia yihadista que opera en la vecina provincia mozambiqueña de Cabo Delgado en el país, ejecutando al menos a 22 personas, entre las cuales tres miembros de los cuerpos de seguridad, en la localidad de Kitaya, en la región de Mtwara, siendo el primer ataque reivindicado por ISIS en Tanzania. Posteriormente se produjeron otros ataques en otras localidades tanzanas.

Uganda	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

El presidente Yoweri Museveni ocupa el poder desde 1986, cuando al mando de un movimiento insurgente consiguió la toma del poder al derrocar al Gobierno de Tito Okello. Desde entonces ha gobernado Uganda de forma autoritaria, con todo el poder concentrado en sus manos y en su partido, el NRM (el Movimiento). En las elecciones presidenciales de 2001, Museveni venció a su principal opositor, Kizza Besigye, ex coronel del NRM, en medio de acusaciones de fraude. En un referéndum celebrado en julio de 2005, los ugandeses votaron en favor de un regreso al sistema multipartidista. Tras una enmienda a la Constitución en 2005, para aumentar el límite existente de dos mandatos consecutivos a tres, Museveni finalmente ganó las elecciones de 2006, en medio de serias acusaciones de fraude. Fueron las primeras elecciones multipartidistas desde la llegada de Museveni al poder en 1986. En las elecciones presidenciales de 2011 y 2016 Museveni volvió a imponerse a su eterno contrincante y antiguo aliado, Kizza Besigye, en medio de nuevas acusaciones de fraude, lo que generó una escalada de la tensión social y de la represión gubernamental contra las demandas de cambio democrático y las protestas contra el incremento del coste de la vida. En paralelo, la intervención militar de Uganda en Somalia incrementó las amenazas del grupo armado somalí al-Shabaab hacia Uganda. Finalmente, diversas zonas del país se ven afectadas por periódicas disputas intercomunitarias y agravios instrumentalizados en período electoral.

La tensión política en el país aumentó de manera considerable durante el año debido al inicio de la campaña electoral con vistas a la celebración de las elecciones presidenciales previstas para el 14 de enero de 2021. Siguiendo la tendencia de represión de otros años en campañas electorales del Gobierno de Uganda, el año estuvo marcado por la detención de líderes opositores y la criminalización y represión violenta contra el movimiento opositor al partido oficial. En las cinco semanas transcurridas desde el inicio de la campaña electoral el 9 de noviembre, decenas de

personas murieron en actos de violencia relacionados con las elecciones, la mayoría de ellas asesinadas a tiros por la Policía y otras fuerzas de seguridad. El presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, declaró que 54 personas perdieron la vida entre el 18 y 19 de noviembre en las protestas y los disturbios que siguieron a la detención del principal candidato presidencial de la oposición, Robert Kyagulanyi (conocido popularmente como Bobi Wine). Wine, una figura popular entre los jóvenes ugandeses anunció en 2019 que se presentaría a las elecciones de 2021, dando lugar al inicio de una campaña de represión y detenciones por parte de las autoridades ugandesas. El 6 de enero Wine sufrió la primera detención del año, acusado de violar la ley electoral de 2000 y la ley de Gestión del Orden Público de 2013. En marzo la Policía también detuvo a Henry Tumukunde, exgeneral retirado y exministro de seguridad, que planeaba presentarse a la carrera presidencial, por sospecha de traición. Posteriormente, el 14 de octubre las fuerzas de seguridad ugandesas volvieron a detener a Bobi Wine en una redada en la sede de campaña de su partido, la Plataforma de Unidad Nacional. La portavoz del Ejército, Flavia Byekwaso, justificó el arresto y la operación con el objetivo de incautar los trajes y boinas rojas que visten los partidarios de Wine, ya que en 2019 Uganda los designó como atuendo militar oficial, imponiendo un castigo de hasta cinco años de prisión a cualquier civil que los porte. Un nuevo arresto contra Bobi Wine se produjo el 18 de noviembre, acusado de infringir las restricciones sanitarias, desencadenando dos días de protestas que causaron más de 50 muertes producidas por parte de los cuerpos de seguridad. En total, según informaciones de la prensa local, más de 800 personas fueron detenidas en las protestas. Paralelamente, Patrick Oboi Amuriat, también candidato presidencial, fue detenido por organizar una manifestación no autorizada en la ciudad norteña de Gulu. Diferentes actores internos y externos, entre ellos la ONU, la embajada de EEUU, la delegación de la Unión Europea o dirigentes religiosos del país, hicieron un llamamiento contra la violencia de las fuerzas de seguridad, así como para velar por el correcto desarrollo de las elecciones. La UE pidió al Gobierno de Uganda una investigación sobre los eventos violentos producidos entre el 18 y 19 de noviembre. La ONG Human Rights Watch (HRW) acusó a Uganda de intentar militarizar las restricciones de la pandemia, utilizando las limitaciones sobre las reuniones para detener las manifestaciones políticas. La organización afirmó tener pruebas de la utilización de forma desproporcionada de la ley ugandesa con el fin de restringir las reuniones de la oposición. En este marco represivo, los medios de comunicación también vieron vulnerados sus derechos. La ONG ugandesa Human Rights Network for Journalists (HNRJ) informó de más de 100 casos de violaciones de derechos humanos contra periodistas producidos en el país en el marco de la campaña electoral, incluidos casos de violencia policial. A su vez, la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Uganda también informó de al menos tres incidentes de ataques policiales contra sus periodistas. El Consejo

de Medios de Comunicación ugandés canceló el 10 de diciembre la acreditación de todos los periodistas extranjeros, ordenándoles la obtención de un pase especial para los medios de comunicación antes del 31 de diciembre, medida aplicable también a todos los medios locales.

Norte de África - Magreb

Argelia	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak

Síntesis:

En la presidencia de Argelia sin contestación desde 1999, Abdelaziz Bouteflika se había mantenido en el cargo a pesar de padecer una grave enfermedad que le había supuesto estar al margen de la escena pública desde 2013. Una opaca coalición de figuras políticas y militares ha mantenido las riendas del poder en las sombras, identificada popularmente entre la población argelina como “le pouvoir”. En 2019 el anuncio de que Bouteflika (82 años) se presentaría a un quinto mandato alentó masivas movilizaciones populares de una intensidad no registrada desde la independencia del país en 1962. La presión popular forzó su dimisión y, desde entonces, el poder militar ha intentado controlar la transición y ha promovido medidas como la persecución y arresto de algunas figuras asociadas al antiguo régimen. El movimiento de protesta pacífico Hirak ha persistido en sus movilizaciones contra la corrupción, la influencia del poder militar sobre la política y contra la clase dirigente en general, insistiendo en sus demandas de cambio a un sistema genuinamente democrático capaz de impulsar reformas políticas, sociales y económicas.

Aunque las restricciones de movimiento impuestas por la pandemia de la COVID-19 afectaron la dinámica de movilizaciones masivas y periódicas que caracterizaron 2019, durante 2020 persistió el clima de tensión política en Argelia. Tras la elección en diciembre de 2019 de Abdelmadjid Tebboune –en unas elecciones que contaron con menos del 40% de participación, la cifra más baja en una votación presidencial desde la independencia del país en 1962–, el nuevo mandatario impulsó algunas medidas tendientes a aplacar la contestación del movimiento Hirak. Así, Tebboune abolió la figura de viceministro de Defensa –última posición civil ocupada por un miembro del Ejército–, transfirió poderes al primer ministro para designar altos cargos de la administración y estableció una comisión para diseñar la propuesta de nueva Constitución. Paralelamente, decenas de activistas de Hirak que permanecían en prisión fueron liberados. No obstante, este período de distensión duró pocas semanas. En febrero, ante la proximidad del primer aniversario de las multitudinarias protestas de Hirak,

las autoridades prohibieron reuniones de los colectivos implicados en este movimiento y, ya en marzo, impusieron una suspensión de las manifestaciones con motivo de la pandemia. De manera mayoritaria, Hirak acató las restricciones por salud pública como una manera de frenar los contagios de la COVID-19, y a partir del 20 de marzo se suspendieron las movilizaciones celebradas ininterrumpidamente los jueves y viernes desde febrero de 2019, con algunas excepciones. En el transcurso del año las protestas contra el régimen se hicieron más frecuentes, en un contexto marcado por la persecución contra destacados activistas de Hirak, periodistas y voces críticas. Durante todo el período se informó del encarcelamiento, presentación de cargos y sentencias contra dirigentes de Hirak y reporteros por delitos como “incitar a manifestaciones ilegales”, “poner en riesgo la seguridad del Estado”, “ataques contra la integridad territorial nacional”, “ataques al presidente”, “insultar a instituciones del Estado” e incluso por “incitación al ateísmo” y “ofensas al Islam”, en el caso de un destacado miembro de Hirak y representante de la comunidad amazigh. En abril las autoridades argelinas también aprobaron una ley que criminaliza la diseminación de información falsa. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional llamaron a las autoridades argelinas a no vulnerar la libertad de prensa y a frenar la campaña de acoso a los medios.

Las protestas antigubernamentales se multiplicaron a partir de junio, pese a los llamamientos y alertas de algunos dirigentes por los riesgos de contagio. En este contexto, algunos análisis destacaron la posición escéptica de Hirak hacia las autoridades, ya que el Gobierno se mantuvo reticente a cumplir algunas de sus principales demandas –total renovación de la clase política, no interferencia del poder militar en política, respeto genuino a la libertad de asociación, una comisión electoral y una corte constitucional independientes, una asamblea constituyente, entre otras medidas– por poner en riesgo la propia supervivencia del régimen.²⁸ En esta línea, y a pesar de un perdón presidencial para activistas opositores en julio, Hirak llamó a boicotear el plebiscito sobre la nueva Constitución anunciado en agosto por el gobierno, percibido como una maniobra para neutralizar al movimiento de protesta. En medio de la persistente represión a la disidencia, las manifestaciones se intensificaron y reunieron a cientos de personas en Argel y otras localidades en octubre, coincidiendo con un nuevo aniversario de las protestas de 1988 y en vísperas de la celebración del referéndum constitucional. Durante las movilizaciones se insistió en demandar la caída del régimen, un Estado civil y no militar, y la liberación de activistas de Hirak –según el Comité Nacional por la Liberación de Detenidos (CNLD), en noviembre un total de 90 personas próximas al movimiento permanecían detenidas. **La consulta sobre la nueva Constitución se celebró el 1 de noviembre y el nuevo texto fue aprobado por el 66,8% de los votos, pero con un récord histórico**

28. International Crisis Group, *Algeria: Easing the Lockdown for the Hirak?*, Crisis Group Middle East and North Africa Report No.217, 27 de julio de 2020.

de baja participación de 23,8%. El referéndum se vio eclipsado por la repentina marcha del país, tres días antes, del presidente Tebboune, trasladado de urgencia a Alemania tras contagiarse de la COVID-19. Analistas destacaron que la consulta no había conseguido el propósito de reforzar la legitimidad de Tabboune tras la baja tasa de participación en los comicios presidenciales de diciembre de 2019 y que, por el contrario, el desarrollo de los acontecimientos –que trajo a la memoria la frágil salud del expresidente Bouteflika en los últimos años de su mandato– reforzó la idea de que el nuevo Gobierno representa más una continuidad que una ruptura con el antiguo régimen.²⁹ En los días que Tabboune estuvo ingresado, de hecho, el máximo líder militar tuvo especial visibilidad en los medios. A su retorno al país, en diciembre, el presidente insistió en su intención de promulgar la nueva Constitución y organizar elecciones legislativas y municipales.

Argelia (AQMI)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, grupos armados AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel

Síntesis:

Desde los años noventa del siglo XX Argelia padeció un conflicto armado que ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a distintos grupos islamistas, tras un ascenso del movimiento islamista en Argelia que respondió al descontento de la población, la crisis económica y la falta de espacios de participación política. La confrontación se inició después de la ilegalización del Frente Islámico de Salvación (FIS) en 1992 tras su triunfo electoral frente al partido histórico que había liderado la independencia del país, el Frente de Liberación Nacional. La lucha armada enfrentó a varios grupos (EIS, GIA y el GSPC, escindiendo del GIA y convertido en Al Qaeda en el Magreb Islámico en 2007) con el Ejército, apoyado por milicias de autodefensa. El conflicto provocó unas 150.000 muertes durante los noventa y continuó cobrándose víctimas, aunque los niveles de violencia han descendido desde 2002, después de que algunos grupos renunciaran a la lucha armada. En los últimos años el conflicto estuvo protagonizado principalmente por AQMI, que se convirtió en una organización transnacional, ampliando sus operaciones más allá del territorio argelino y afectando a países del Sahel. Argelia, junto a Malí, Libia, Mauritania y Níger, entre otros, se han enfrentado a AQMI y otros grupos armados que operan en la zona, entre ellos el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y las organizaciones al-Mourabitoun (Firmantes de Sangre), Jund al-Khilafa (filial de ISIS) e ISIS. El descenso en los enfrentamientos y en los niveles de violencia motivó que el caso dejara de ser considerado conflicto armado en 2019, aunque algunas dinámicas asociadas a la disputa persisten.

Siguiendo la tendencia del año anterior, **en 2020 continuaron registrándose esporádicos hechos de violencia**

que involucraron a las fuerzas de seguridad argelinas con grupos armados de línea yihadista. Según el balance anual oficial de la lucha antiterrorista del Ministerio de Defensa argelino, durante el período habrían muerto 21 milicianos y se habría capturado a otros nueve, además de destruir decenas de presuntos refugios de combatientes y de confiscar armas (pistolas, fusiles, metralletas), municiones y explosivos. Las autoridades argelinas no precisaron el total de fallecidos entre las fuerzas de seguridad, pero informaciones de prensa indican que al menos cinco militares perecieron en incidentes con fuerzas yihadistas o como resultado de la detonación de explosivos. El centro de investigación ACLED, en tanto, contabilizó 31 personas fallecidas en una veintena de incidentes. Tanto el balance oficial como el de ACLED son ligeramente superiores a los registrados el año anterior –15 y 22, respectivamente–, pero confirman la violencia de baja intensidad en este contexto. Algunos incidentes que trascendieron en la prensa incluyeron un ataque suicida de un miembro de la filial de ISIS contra una base militar en Bord Badji Mokhtar, cerca de la frontera con Malí, en febrero, en el que murió también un soldado; la muerte de un soldado en una operación contra presuntos insurgentes en Ain Defla y de otros dos militares a causa de explosivos en Medea, ambos hechos en julio, en localidades ubicadas al sur de Argel; o los enfrentamientos en la zona de El Ancer, en la Provincia de Jijel (noroeste), en diciembre, en los que murieron un militar y tres militantes de AQMI, entre ellos un jefe regional y un miembro del consejo de la organización armada.

El hecho más destacado del año no tuvo lugar en territorio argelino ni fue protagonizado por las fuerzas de seguridad del país. Se trató de la **muerte, en junio, del histórico líder de AQMI, Abdelmalek Droukdel, en el marco de una operación de fuerzas especiales francesas en el noroeste de Malí**, en la localidad de Talhandak, cerca de la frontera con Argelia. El veterano dirigente –líder de AQMI desde 2007 y cuya muerte se anunció varias veces en el pasado– falleció junto a varios lugartenientes poco después de cruzar desde territorio argelino, y en un contexto caracterizado por la competencia, los choques y pugnas entre varios grupos yihadistas de la región por asentar su influencia en el Sahel.³⁰ En noviembre se anunció la designación de un nuevo emir de AQMI, Yazid Mebarek, alias Abu Ubayda Yusef al-Annabi, también argelino y veterano de la denominada lucha yihadista. Su nombramiento alentó diversas interpretaciones entre analistas. Por un lado, fue considerado como un error táctico de AQMI que, al optar por un nuevo jefe argelino, continuaba obviando el creciente peso y prioridades de actores subsaharianos vinculados a la organización. Otras voces resaltaron su falta de experiencia operacional y de combate. Algunos analistas destacaron que la forma en que se anunció la designación de al-Annabi indicaría el mayor peso, en la práctica, de otras ramas del grupo como Jama'at Nusra al-Islam wal-Muslimi (JNIM), coalición de varias filiales oficialmente afiliadas a AQMI, pero

29. Michaël Béchir Ayari, *Algérie: un air de déjà vu?*, Q&A Middle East North Africa, International Crisis Group, 6 de noviembre de 2020.

30. Véase resúmenes sobre Malí y Sahel Occidental en el capítulo 1 (Conflictos armados).

con mayor poder e independencia en la actualidad. La noticia del nuevo emir se difundió a través de un video por el canal oficial de AQMI, al-Andalus, pero a través de un alto cargo –Abu Numan al-Shanqiti, muy próximo al JNIM- y no incluyó una declaración de obediencia de esta última organización a al-Annabi. En este sentido, varias voces expertas coincidieron en que AQMI es percibido como un grupo en declive, afectado a nivel de cohesión interna por la muerte de su máximo líder, por la falta de conexión con nuevas generaciones argelinas y por la reorganización de fuerzas de línea yihadista que ha determinado una preeminencia del Sahel por encima del Magreb.³¹ En la misma línea, se apuntó que ante sus dificultades para reclutar nuevos militantes en Argelia, y para constituir una amenaza en ese país, la estrategia de AQMI sería mantenerse en áreas rurales y desérticas.³²

Marruecos-Sáhara Occidental	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ³³
Actores:	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO

Síntesis:

Las raíces del conflicto se encuentran en el fin del dominio colonial español en el Sáhara Occidental a mediados de los setenta. La distribución del territorio entre Marruecos y Mauritania, sin que se tuvieran en cuenta el derecho a la autodeterminación de los saharauis ni los compromisos sobre un referéndum de independencia en la zona, derivó en la anexión de gran parte del territorio por parte de Rabat y en el desplazamiento de miles de saharauis, que se refugiaron en Argelia. En 1976, el movimiento nacionalista Frente POLISARIO declaró un Gobierno en el exilio –la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)– y lanzó una campaña armada contra Marruecos. Las partes aceptaron un plan de paz en 1988 y desde 1991 la misión de la ONU en el Sáhara, MINURSO, supervisa el cese el fuego y se encarga de la organización de una consulta de autodeterminación en el territorio. En 2007, Marruecos presentó a la ONU un plan para la autonomía del Sáhara Occidental, pero el Frente POLISARIO reclama la celebración de un referéndum que incluya la opción de la independencia.

La tensión se incrementó notoriamente en 2020 respecto a años anteriores, en especial en el último trimestre, en un contexto de parálisis crónica de la vía diplomática para resolver la disputa. En los primeros meses del año prevalecieron dinámicas previas. Marruecos siguió con sus inversiones en infraestructura al oeste de la barrera de separación y, en enero, promulgó leyes sobre los límites de sus aguas territoriales y zona económica exclusiva que incluían

áreas situadas en las costas del Sáhara Occidental. Ambos hechos fueron denunciados ante Naciones Unidas por el Frente POLISARIO, que los consideró un reflejo de las políticas de Rabat para normalizar y consolidar la ocupación militar y la anexión ilegal de partes del Sáhara Occidental y como vulneraciones a su estatus jurídico como territorio no autónomo. Desde diciembre de 2019 y a lo largo de 2020 varios países africanos –Burundi, Comoras, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabón, Gambia, Guinea, Liberia, RCA y Santo Tomé y Príncipe– decidieron inaugurar “consultados generales” en El Aaiún o Dajla, en una acción que también fue denunciada por el Frente POLISARIO por atentar contra el estatus de territorio no autónomo del Sáhara Occidental. Marruecos mantuvo su postura de que la propuesta de autonomía presentada en 2007 era la única vía para avanzar en una solución al conflicto. Mientras, el Frente POLISARIO insistió en denunciar la incapacidad de la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) para cumplir su mandato –que incluía la celebración de una consulta, como su nombre indica– y alertó que estaba reconsiderando su participación en el proceso de paz de la ONU. En este sentido, cabe consignar que el puesto de enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental quedó vacante en mayo de 2019 tras la dimisión del expresidente alemán Horst Köhler y que el propio António Guterres reconoció en su informe anual sobre el Sáhara Occidental que existía una “pausa” en el proceso político derivada de su renuncia –al finalizar 2020 la ONU seguía sin designar a nadie para el cargo.³⁴ Paralelamente, durante el año se alertó de crecientes vulneraciones a las disposiciones relativas al cese el fuego, vigente desde 1991. El informe anual del secretario general de la ONU informó de 61 violaciones entre septiembre de 2019 y agosto de 2020, en particular al este de la barrera. En octubre, poco antes de la renovación del mandato de la MINURSO, el jefe de la misión también advirtió al Consejo de Seguridad de la ONU sobre un incremento de violaciones por ambas partes del acuerdo militar número 1, que regula la tregua.

En este contexto, la situación se deterioró en noviembre tras incidentes en Guerguerat, una zona que ya había sido objeto de tensión en los últimos años y que en 2020 también fue escenario de manifestaciones y barricadas saharauis ante lo que el Frente POLISARIO ha denunciado reiteradamente como un paso ilícito. El 21 de octubre una cincuentena de saharauis bloqueó el tráfico en esta zona, ubicada entre Mauritania y el área del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos, y se manifestaron para pedir que el Consejo de Seguridad de la ONU –que por esos días discutía la renovación del mandato de la MINURSO– cumpliera con el cometido

31. Dhalia Ghanem y Djallil Lounnas, The last emir? AQMI's decline in the Sahel, Middle East Institute, 7 de diciembre de 2020.

32. Yasmina Allouche, "Al-Qaeda's Maghreb branch has revealed its weakness with new leadership", *Middle East Eye*, 2 de diciembre de 2020.

33. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

34. Véase el resumen sobre el Sáhara Occidental en Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2021.

de celebrar un referéndum de autodeterminación. En línea con lo ocurrido en los últimos años, la resolución 2548 fue aprobada el 30 de octubre con un redactado más favorable a las tesis marroquíes: sin una mención explícita a la consulta y enfatizando la necesidad de una “solución política realista, practicable y duradera” a la cuestión del Sáhara Occidental. **La acción de protesta saharauí en Guerguerat persistió y el 13 de noviembre fuerzas marroquíes accedieron a esta zona en teoría desmilitarizada de separación (buffer zone) para dispersar la manifestación y restablecer el tráfico de mercancías. Ante esta incursión, el Frente POLISARIO dio por finalizado el alto el fuego y declaró el estado de guerra.** Marruecos evitó usar el término “guerra” y aseguró que se mantenía comprometido con el cese el fuego, pero advirtió sobre una respuesta contundente en caso de amenaza a su seguridad. Diversos análisis subrayaron que con esta aproximación el Frente POLISARIO pretendía alterar el statu quo, dar respuesta a la frustración de generaciones de jóvenes en los campos de refugiados que llevan décadas esperando una solución política y desafiar la estrategia de silenciamiento e invisibilización del conflicto impuesta por Marruecos. El secretario general de la ONU lamentó el fracaso de los esfuerzos de su organización para evitar una escalada, expresó su preocupación, llamó a evitar el colapso del cese el fuego y subrayó su determinación a eliminar los obstáculos para reactivar el proceso político. Pese a sus responsabilidades como potencia administradora del Sáhara Occidental, España mantuvo una posición discreta, limitada a respaldar las iniciativas de la ONU para garantizar la tregua.

Respecto a la evolución de la disputa, las informaciones son complejas de contrastar por las limitaciones de acceso de observadores independientes. Desde mediados de noviembre el Frente POLISARIO informó de la movilización de fuerzas armadas, ataques periódicos a bases marroquíes y anunció bajas en el bando rival –no confirmadas por Rabat–, sin comunicar bajas en sus filas. Otras fuentes apuntaron intercambios de fuego de baja intensidad en puntos de la barrera de 2.700 kilómetros construida por Marruecos. Paralelamente, se informó de un aumento de los hostigamientos y represión en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, incluyendo redadas, detenciones, agresiones, aumento de la vigilancia y supresión de manifestaciones en localidades como El Aaiún, Smara, Dakhla y Boujdour. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch subrayaron que, aunque no se había informado de víctimas civiles en las hostilidades, los hechos reforzaban la necesidad de un mecanismo efectivo de monitoreo de la situación de derechos humanos, incluyendo competencias en este ámbito por parte de MINURSO, continuamente rechazadas por Rabat. En este contexto, **en diciembre EEUU se**

convirtió en el primer país en reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, posición que el Gobierno de Donald Trump adoptó a cambio de que Rabat “normalizara” relaciones diplomáticas con Israel.³⁵ El Frente POLISARIO condenó el anuncio, subrayando que viola la legitimidad de resoluciones internacionales y obstruye los esfuerzos por alcanzar una solución. EEUU anunció que abriría un consulado en El Aaiún. Emiratos Árabes Unidos –que también firmó un acuerdo con Israel en agosto a instancias de EEUU– abrió una oficina diplomática en esta misma ciudad en noviembre e informaciones de prensa anunciaron que Bahrein y Jordania –otros dos aliados de Washington en la región– seguirían este camino. Aunque la medida de Trump fue presentada como un éxito y refuerzo a la posición marroquí, a finales de año no se preveían cambios en la aproximación de la ONU o la UE y tampoco estaba clara la postura que asumiría la nueva administración estadounidense a este respecto.

Tras una incursión de las fuerzas marroquíes en Guerguerat, en octubre, el Frente POLISARIO dio por finalizado el alto el fuego y declaró el estado de guerra

Túnez	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados incluyendo el Batallón Uqba ibn Nafi o Brigadas Oqba ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS

Síntesis:

Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por sólo dos presidentes. Durante tres décadas Habib Bourghiba sentó las bases del régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras un golpe de Estado en 1987. La concentración del poder, la persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, Túnez se erigió durante años como aliado privilegiado de Occidente. En diciembre de 2010 el estallido de una revuelta popular expuso las contradicciones del régimen, motivó la caída del Gobierno de Ben Alí a principios de 2011 e inspiró movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. Desde entonces, Túnez se ha visto inmerso en un accidentado proceso de transición en el que se han hecho evidentes las tensiones entre los sectores seculares e islamistas del país. Paralelamente, el país ha sido escenario de una mayor actividad de grupos armados, entre ellos filiales de AQMI e ISIS.

La tensión en Túnez se intensificó durante 2020 respecto al período anterior en un contexto marcado por una **mayor polarización e inestabilidad política, crisis económica, y por la frustración de sectores de la**

35. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en el capítulo 1 (Conflictos armados).

población ante la falta de mejoras en las condiciones de vida, en un año en que se conmemoró el décimo aniversario de la revuelta que derrocó al régimen de Zine el Abidine Ben Alí. Paralelamente, el país continuó siendo escenario de algunos hechos de violencia esporádicos que involucraron a las fuerzas de seguridad y grupos armados de línea yihadista. Cabe destacar que las elecciones parlamentarias de octubre de 2019 dibujaron un escenario político más fragmentado y tensionado –caracterizado por una mayor presencia de discursos populistas, radicales y nostálgicos con la dictadura; alianzas cambiantes y volátiles; y periódicas pugnas entre sectores islamistas y anti-islamistas, entre otras dinámicas– que repercutió en dificultades para formar un nuevo gobierno. A principios de enero Ennahda –el partido de línea islamista vencedor en los comicios, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario– promovió un gabinete que fue rechazado por la asamblea. El nuevo presidente, Kaïs Saïed –electo en octubre de 2019 con 73% de votos en unos comicios con 57% de participación– encargó la formación de un nuevo gobierno a Elyes Fakhfakh, del partido Ettakatol, quien consiguió la aprobación de su gabinete a finales de febrero. El nuevo Gobierno se configuró, por tanto, más de cuatro meses después de los comicios, período en el que se evidenciaron las pugnas y, en particular, la lucha de poder entre el presidente y Ennahda, que obtuvo siete ministerios en el nuevo gobierno. En los meses siguientes el panorama político estuvo marcado por la necesidad de dar respuesta a la pandemia –se aprobaron poderes de emergencia en abril–, por los crecientes debates sobre el sistema político –algunos sectores, incluido Saïed, promueven un sistema presidencial en lugar del parlamentario vigente, defendido por Ennahda– y por tensiones vinculadas al conflicto en la vecina Libia. El portavoz parlamentario y líder de Ennahda, Rached Ghannouchi, fue acusado de vulnerar la neutralidad tunecina respecto al conflicto libio por sus pronunciamientos favorables al Gobierno libio liderado por Fayez al Serraj (con sede en Trípoli y apoyado por Turquía) y por sus contactos con Ankara.³⁶

En este contexto, las acusaciones de la oficina nacional anticorrupción contra el primer ministro Fakhfakh por conflicto de intereses, en julio, motivaron una moción de censura impulsada por Ennahda que acabó con su renuncia y con el gobierno. Otra moción contra Ghannouchi en el mismo período no prosperó. El ministro del Interior Hichem Mechichi recibió el encargo de formar un nuevo gobierno tecnocrático, que fue aprobado en septiembre tras nuevas luchas de poder –Ennahda rechazó inicialmente un gabinete que no reflejara las fuerzas políticas del Parlamento, pero acabó aceptando pese a sus reservas ante la compleja situación del país. El gobierno de Mechichi se convirtió así en el tercero en menos de un año. En los últimos meses de 2020, se evidenciaron nuevas tensiones, ahora entre Saïed y el primer ministro, por la decisión de este último de designar como asesores

a antiguos colaboradores de Ben Alí. Asimismo, hubo crispación en el Parlamento y llamamientos de grupos políticos a disolver la asamblea. En este contexto, el principal sindicato del país, UGTT, llamó en diciembre a poner en marcha un diálogo nacional, con el que el presidente se comprometió al finalizar el año como una manera de corregir el curso de la revolución. Ennahda también expresó su apoyo a esta iniciativa, impulsada en medio de las **protestas conmemorativas del décimo aniversario de la revuelta en las que se puso de manifiesto la desafección y decepción de sectores de la población con la clase política.** Durante el segundo semestre y en particular en los últimos meses de 2020 se intensificaron las protestas, sobre todo en las regiones más pobres del país. Asimismo, se alertó sobre el incremento en el número de jóvenes tunecinos que están emigrando a Europa. Según los datos del Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales cerca de 13.000 jóvenes tunecinos llegaron a las costas italianas en 2020 –respecto a 2.654 en 2019 y 5.200 en 2018.

Respecto a los **hechos de violencia que involucraron a las fuerzas de seguridad y grupos armados de línea yihadista, según los datos del centro de estudios ACLED una decena de personas fallecieron en incidentes de este tipo durante 2020.** A lo largo del año se informó del descubrimiento de campos de entrenamiento y de presencia de explosivos en la zona de Kasserine (febrero); la muerte de cuatro milicianos de Jund al-Khilafa en sendas operaciones de las fuerzas de seguridad (febrero y abril); un doble ataque suicida que también causó la muerte de un policía en un ataque contra un control de seguridad próximo a la embajada de EEUU en la capital tunecina (marzo); el ataque a un control de seguridad en Sousse en la que murió un guardia y, posteriormente, en la muerte de tres de los presuntos atacantes (septiembre). En noviembre el Gobierno informó que había dado muerte a cuatro dirigentes y herido a un número indeterminado de milicianos en una operación de las fuerzas de seguridad (en fecha sin determinar) en la que también se confiscaron armas, municiones y equipamientos electrónicos. Según el balance oficial, en los 11 primeros meses del año se había arrestado a 1.020 personas sospechosas de terrorismo.

2.3.2. América

América del Norte, Centroamérica y Caribe

El Salvador	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)

36. Véase el resumen sobre Libia en el capítulo 1 (Conflictos armados)

Síntesis:

Tras el fin de un conflicto armado (1980-1992), que dejó un balance de alrededor de 75.000 muertes, la situación en El Salvador se ha caracterizado por altos niveles de pobreza y desigualdad, por la proliferación de pandillas juveniles y otras estructuras de crimen organizado, así como por unas altas tasas de homicidios que han convertido al país en uno de los más violentos de la región y del mundo. Durante el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) se logró una tregua con las pandillas que comportó una reducción significativa en la tasa de homicidios, pero la llegada a la presidencia de Sánchez Cerén en 2015 comportó un endurecimiento de las políticas de seguridad y un sustancial incremento en los niveles de violencia, generando ello una crisis de desprotección y de desplazamiento forzado de miles de personas.

El número de asesinatos (1.257 hombres y 72 mujeres) se redujo en un 45% respecto del año anterior, alcanzándose así la tasa de homicidios más baja desde fin de la guerra civil en el país en 1992. En efecto, en 2020 dicha tasa fue de 20 homicidios cada 100.000 habitantes, una cifra claramente inferior a los 36 del año 2019 y a los 103 que se registraron en el año 2015, convirtiendo entonces a El Salvador en el país con mayores tasas de violencia del mundo. Desde entonces el país ha experimentado un descenso paulatino en el número de homicidios, que ha sido más pronunciado desde que Nayib Bukele asumiera la presidencia del país en junio de 2019 (entonces la tasa de homicidios era de 50 cada 100.000 habitantes). **Según el Gobierno, la reducción en los niveles de violencia se debe principalmente a la implementación del llamado Plan de Control Territorial, consistente en incrementar la presencia policial y militar en aquellos territorios con fuerte implantación de las maras y a la vez en un mayor control de las cárceles** en las que se encuentran los principales líderes de las pandillas (según informaciones de prensa, actualmente cumplen pena de prisión unos 17.000 de los entre 60.000 y 70.000 miembros de las maras que se estima hay en El Salvador).

Sin embargo, algunos analistas sostienen que la drástica reducción en el número de homicidios no se explica únicamente por las políticas del Gobierno, sino también por el impacto de la pandemia del coronavirus (el mes de marzo fue el menos violento de la historia del país desde que hay registros de homicidios, mientras que en otros países de la región también se habría producido una reducción sustancial en el número de homicidios en los meses en los que hubo medidas restrictivas más contundentes). Estos mismos analistas sostienen que el hecho de que los niveles de violencia se redujeran en todo el país y no solamente en los 22 municipios en los que se focaliza el Plan de Control Territorial invitan a pensar en explicaciones más estructurales y sistémicas. Así, según investigadores del International Crisis Group, tras más de 15 años de guerra abierta entre las principales maras del país (en especial la MS13 y la Barrio 18) por el control de varias zonas del país, los niveles de violencia entre las maras y entre estas y las fuerzas y cuerpos de

seguridad del Estado se redujeron sustancialmente una vez quedaron delimitadas y estabilizadas las áreas de influencia de cada pandilla. Según estos análisis, las maras habrían tomado la decisión de reducir los niveles de confrontación entre ellas y con el Estado puesto que los mecanismos de extorsión y enriquecimiento a través de actividades ilícitas funcionaban razonablemente bien en sus respectivas áreas de influencia sin recurrir a los elevados niveles de violencia que se alcanzaron en 2015 y en los años precedentes. En esta misma línea de poner el acento en las decisiones de las maras de reducir los niveles de violencia y no tanto en el impacto de las políticas del Gobierno contra la inseguridad ciudadana, algunos medios de comunicación sostuvieron que el pico de violencia que se produjo entre el 24 y 27 de abril, en el que se registraron 74 asesinatos, debería ser interpretado como un mensaje de las maras (en especial de la MS13) sobre su presencia en las comunidades y sobre su control sobre los niveles de violencia en el país.

Finalmente, cabe destacar la crisis política que se vivió en el país a principios de año después de que la mayoría de la Asamblea Legislativa rechazara aprobar los fondos necesarios para la aplicación de la tercera fase del mencionado Plan de Control Territorial, y que provocó la militarización del Parlamento por parte de Bukele para presionar a los diputados que se oponían a sus planes. Tras varios llamamientos de la comunidad internacional a poner fin al grave enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo y tras las críticas de la oposición por considerar tal acción un autogolpe y un acto de sedición, el Poder Judicial exigió a Bukele que no utilizara al Ejército para llevar a cabo actuaciones inconstitucionales.

Guatemala	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)

Síntesis:

Aunque el fin de la guerra civil (1960-1996), una de las más longevas y letales de todo el siglo XX en América Latina, propició una notable disminución en los niveles de violencia en el país, la creciente articulación territorial de las maras (especialmente la MS 13 y la Barrio 18) y de otras organizaciones de crimen organizado vinculadas al narcotráfico provocaron que Guatemala haya tenido una de las tasas de homicidios más altas de la región en las últimas décadas. En 2020, la oposición de sectores importantes de la población a la aprobación de los nuevos presupuestos por parte del Congreso, así como el cuestionamiento de asuntos sociales, políticos y económicos más estructurales, dieron lugar a una de las protestas más intensas de los últimos años.

La cifra de homicidios se redujo considerablemente respecto del 2019 y de los años anteriores, pero a finales de año el nuevo Gobierno de Alejandro Giammattei enfrentó algunas de las protestas más intensas de los últimos tiempos. Según datos del Gobierno, en 2020 se registraron 2.574 homicidios, un 28% menos que en 2019. La tasa de homicidios cada 100.000 habitantes fue de 15, mientras que en 2019 había sido de 22. Esta reducción en el número de homicidios está en línea con la reducción progresiva de los niveles de violencia directa que ha experimentado el país en la última década. En 2009, por ejemplo, la tasa de homicidios era de 46 (más del triple que la de 2020), y desde entonces se ha ido reduciendo cada año ininterrumpidamente. Según datos de la ONG Grupo de Apoyo Mutuo, en 2020 se registraron 3.472 personas asesinadas (2.978 hombres y 494 mujeres), un 25% menos que en 2019. Según el Gobierno, el 32% de las muertes violentas se concentró en el departamento de Guatemala, seguido de Escuintla (12%) e Izabal (8%). Varios analistas señalaron que, **así como ha sucedido en muchos otros países, el principal motivo que explica la reducción de las muertes violentas fueron las medidas de restricción de la movilidad vinculadas a la pandemia de la COVID-19** (como así lo atestiguaría el hecho de que marzo, abril y mayo fueran claramente los meses con menor incidencia de homicidios), pero la Policía hizo hincapié en las políticas de lucha contra el crimen organizado impulsadas por el nuevo Gobierno. En este sentido, ya en su discurso de investidura a mediados de enero Giammattei prometió hacer de la lucha contra la inseguridad ciudadana una de sus prioridades de gobierno; se comprometió a impulsar una nueva legislación para declarar a las maras como organizaciones terroristas; e instó a los Gobiernos de Honduras y El Salvador (que conjuntamente con Guatemala conforman el llamado Triángulo Norte, la zona del mundo con mayor arraigo de las llamadas maras) a unir esfuerzos para luchar contra maras como la Mara Salvatrucha (o MS13) o la Barrio 18. En febrero se inició la tramitación parlamentaria de dicha ley (con las críticas de varias organizaciones de derechos humanos) y además, citando la necesidad de luchar contra el crimen organizado con instrumentos adecuados, **el Gobierno impuso en varias ciudades (Mixco, San Juan Sacatepéquez, Escuintla o Chimaltenango) el estado de prevención, una medida excepcional que no requiere de la aprobación del Congreso y que confiere poderes adicionales a las fuerzas de seguridad del Estado.** En escasos cinco días tras la aplicación de dicha medida, más de 120 personas habían sido detenidas solamente en las ciudades de Escuintla y Chimaltenango.

Por otra parte, **uno de los hechos que lograron captar la atención mediática nacional e internacional fueron las protestas que se registraron en noviembre en la capital, en las que, entre otras cuestiones, se incendió el Parlamento y se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía.** El detonante de las protestas fue la oposición a la aprobación del proyecto de ley de presupuestos por parte del Congreso, pero

algunos analistas sostienen que había otros factores que explican tanto el hartazgo de sectores importantes de la población como la congregación de miles de personas en la capital de finales de noviembre, como el impacto del huracán Eta y la tormenta Lota (que provocaron en noviembre la muerte de un mínimo de 57 personas y la desaparición de otras 96); el incremento de los niveles de desnutrición (el Programa Mundial de Alimentos señaló que 921.000 hogares estaban en riesgo de inseguridad alimentaria y que había 13.000 menores con malnutrición aguda en el país); el aumento del coste de la electricidad; las acusaciones de corrupción en la gestión de los fondos asignados a la lucha contra la pandemia (que provocaron la destitución del ministro de Sanidad y otros altos cargos del Gobierno en el mes de junio); o la gestión de las medidas de restricción de la movilidad vinculadas a la COVID-19 (entre finales de marzo y mediados de junio casi 25.000 personas fueron detenidas por violar el confinamiento). Tras los graves incidentes, el Congreso retiró el mencionado proyecto de ley de presupuestos, pero las protestas continuaron en los siguientes días y prosiguieron las demandas de dimisión al presidente y buena parte de los miembros del Parlamento. Giammattei calificó los incidentes de intento de golpe de Estado e invocó la carta democrática de la OEA para preservar la institucionalidad democrática del país. Por su parte, Naciones Unidas instó a investigar el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, que habría provocado numerosos heridos durante las protestas.

Haití	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, BINUH, bandas armadas

Síntesis:

La actual crisis que atraviesa el país, con movilizaciones masivas y numerosos episodios de violencia registrados en 2019, está vinculada con las acusaciones de corrupción, fraude electoral y negligencia en la acción de gobierno del Presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, la situación de parálisis institucional, fragilidad económica y crisis sociopolítica empezó a agudizarse tras la salida forzada del país del ex presidente Jean Bertrand Aristide en febrero de 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país. Desde entonces, el despliegue de una Fuerza Multinacional Provisional y posteriormente de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSTAH, sustituida por MINUJUSTH en 2017 y por BINUH en 2019) y la mayor implicación y coordinación de la comunidad internacional en la normalización del país han propiciado avances en determinados ámbitos de la gobernabilidad del país, pero no han conseguido lograr una estabilidad política, social y económica, ni reducir los altos niveles de corrupción, pobreza, exclusión social y tasas de delincuencia, ni eliminar completamente el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas del país.

Aunque las protestas fueron sensiblemente menos intensas que las del año 2019, en las que alrededor de 70 personas murieron, en Haití persistió la crisis política, se registraron movilizaciones y enfrentamientos de manera casi ininterrumpida durante el año, se agudizó la crisis económica y migratoria y se incrementó la violencia vinculada a las numerosas bandas armadas que operan en determinados barrios de la capital y de otras ciudades. En cuanto al primer punto, la crisis política se exacerbó significativamente respecto del año anterior por la intención del Gobierno de aprobar una reforma de la Constitución durante el primer trimestre de 2021 y antes de la celebración de las siguientes elecciones legislativas, que deberían haberse celebrado en noviembre de 2019. Esta circunstancia provocó que **en enero finalizara el mandato de dos terceras partes del Senado y que el presidente, Jovenel Moïse, gobernara desde entonces a través de decretos presidenciales principalmente.** Además, la polarización entre el Gobierno y la oposición se incrementó por la interpretación dispar sobre cuándo finaliza el mandato del actual presidente, si en febrero de 2021, como sostiene la oposición, o en febrero de 2022, como sostiene el Gobierno. En este contexto de polarización política y fragilidad institucional, tanto el Core Group (conformado por Naciones Unidas, la OEA, la UE y los Gobiernos de Alemania, Brasil, Canadá, España y EEUU) como la BINUH (Oficina Integrada de Naciones Unidas), como también numerosas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos expresaron su preocupación por el incremento de la violencia en determinadas ciudades del país y por la creciente implantación territorial y coordinación de determinadas bandas armadas. A modo de ejemplo, en julio la Comisión Episcopal Paz y Justicia (Ce-Jilap) declaró que 244 personas habían muerto en los seis primeros meses del año solamente en la región metropolitana de Puerto Príncipe en episodios de violencia vinculados a bandas armadas. Ce-Jilap relató en su informe que numerosas de las víctimas mortales fueron quemadas, linchadas o decapitadas. En la misma línea, en agosto la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos alertó de que solamente en el mes de junio en el barrio de Cité Soleil habían muerto 111 personas, 48 habían desaparecido y 20 más habían resultado heridas por enfrentamientos y ataques protagonizados por grupos armados. La Fundación Je Klere (FKJL) denunció en un informe publicado a mediados de año que los enfrentamientos entre bandas no responden solamente a motivaciones económicas y por el control del territorio, sino que muy a menudo tienen connotaciones políticas, con algunas bandas más identificadas con el Gobierno y otras con otras formaciones políticas. Esta fundación, por ejemplo, denunció la connivencia del Gobierno en asesinatos cometidos por razones ideológicas en zonas de mayoría opositora, así como el intento por parte del Ejecutivo de controlar a determinadas bandas armadas con objetivos electorales y también para amedrentar a determinadas

En Haití, uno de los hechos más preocupantes del año fue la conformación de G9 an Fanmi, una coalición de como mínimo nueve grupos armados

formaciones políticas o evitar que estas promuevan o capitalicen protestas antigubernamentales.

Según algunos analistas, **uno de los hechos más preocupantes del año fue la conformación en junio de G9 an Fanmi (G9 y Familia), una coalición de como mínimo nueve grupos armados** creada y liderada por Jimmy Chérizier, alias Barbecue, un expolicía involucrado en las masacres de Grand Ravine en noviembre de 2017 (ejecución extrajudicial de 14 personas) y La Saline en noviembre de 2018 (asesinato de 71 personas), ambas estando en activo en el cuerpo policial. A pesar de tener una orden de búsqueda y captura en su contra desde febrero de 2019 bajo cargos de múltiples asesinatos, Chérizier estuvo involucrado en varios ataques en el mismo año en la barriada de Bel Air. Tras su presentación pública en junio, el llamado G9 participó en numerosos actos de violencia en varios barrios cercanos a la capital en los que numerosas personas fueron asesinadas y decenas de casas fueron incendiadas. Además, cientos de miembros de esta coalición de grupos armados protagonizaron violentas protestas para exigir su reconocimiento legal como autoridades locales en las áreas que controlan y también para exigir la liberación de uno de sus líderes, Albert Stevenson (alias Djouma). La Fundación Je Klere (FKJL) denunció que la responsabilidad y connivencia del Gobierno y la Policía en la creación y posterior implantación del G9, mientras que otras organizaciones de la sociedad civil declararon que algunas bandas llegaban incluso a utilizar coches y uniformes de la Policía para llevar a cabo secuestros (cuyo número se incrementó durante el año) y otras actividades ilícitas.

Otro de los principales focos de tensión durante el año estuvo vinculado a la Policía. En el primer trimestre, **la negativa del jefe del cuerpo a la creación de un sindicato policial provocó numerosas y violentas protestas por parte de cientos de policías durante el mes de febrero y principios de marzo, en las que se registraron decenas de cortes de carreteras, edificios y coches incendiados y en las que tres personas murieron a causa de los choques violentos que se produjeron.** Aunque a mediados de marzo el Gobierno autorizó dicho sindicato, a lo largo del año fue tomando gran protagonismo el grupo conocido como Fantom 509, una célula policial que protagonizó numerosas protestas y disturbios en varios momentos del año en exigencia de varias demandas laborales y también para pedir la renuncia del presidente de Haití y la liberación de un líder del grupo detenido en mayo. El Gobierno criticó que tal grupo llevara a cabo cortes de carretera, barricadas e incendios con uniformes de la Policía y llegó a amenazar con designar a Fantom 509 como organización terrorista. Durante todo el año se produjeron manifestaciones y protestas en contra del Gobierno y del incremento de la inseguridad y la violencia en el país, pero las movilizaciones y los disturbios fueron especialmente intensos en el último

trimestre del año. **Solamente en noviembre 11 personas murieron en los disturbios que se registraron en Puerto Príncipe y en otras ciudades del país.** Finalmente, cabe destacar que la grave situación política y social que enfrenta el país y el impacto de la pandemia provocada por el coronavirus agudizó la crisis económica y migratoria en Haití. Según varias fuentes, el número de personas que padecen inseguridad alimentaria se incrementó hasta los cuatro millones de personas. Del mismo modo, aumentaron significativamente los flujos migratorios desde Haití hasta el punto de que República Dominicana cerró la frontera y desplegó a 10.000 soldados adicionales para prevenir la entrada de personas haitianas indocumentadas.

Honduras	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)

Síntesis:

La situación política y social del país se caracteriza principalmente por las altas tasas de homicidios de Honduras, que en los últimos años suele considerarse entre los países más violentos del mundo, así como por la polarización social y política que se produjo tras la llegada al poder de Manuel Zelaya en 2006. Las críticas de amplios sectores de la población por su intención de convocar un referéndum para reformar la Constitución y poder presentarse así a un nuevo mandato o bien por su relación con los Gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), en especial con Venezuela, desembocaron en un golpe de Estado en 2009 que provocó la condena de la comunidad internacional, la suspensión de su membresía en la OEA y el exilio de Zelaya, que le impidió participar en las elecciones presidenciales de 2009. A pesar de que Zelaya pudo regresar al país en 2011, desde entonces ha persistido una importante polarización política y social en el país. La actual fase de la crisis, que ha desembocado en movilizaciones antigubernamentales masivas y en graves episodios de violencia, se agudizó tras los comicios presidenciales de 2017 entre el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, y Salvador Nasralla, un candidato muy cercano políticamente a Zelaya, en los que Hernández, finalmente reelecto por un estrecho margen de votos, fue acusado de fraude electoral.

Se incrementaron las protestas vinculadas a la escasez de alimentos y al deterioro de las condiciones de vida, así como la tensión entre el Gobierno y la oposición de cara a las elecciones previstas para el año 2021, pero en cambio se produjo una importante reducción en el número de homicidios. Según el Gobierno, en 2020 se registraron 3.482 homicidios, una disminución notable respecto de los 4.082 contabilizados en 2019 y en los años anteriores (3.864 en 2018 y 3.732 en 2017). Los niveles de violencia en el país se incrementaron drásticamente en el período entre 2005 y 2011, en el que Honduras alcanzó la mayor tasa de

homicidios en todo el mundo (92 homicidios cada 100.000 habitantes). Desde entonces, se ha registrado una disminución progresiva (con la excepción del incremento de homicidios en 2019 respecto de 2018) hasta alcanzar una tasa de homicidios de 37 en 2020. En dicho año, también disminuyó el número de “asesinatos múltiples” respecto del año anterior (66 en 2019 y 44 en 2020). **El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional de Honduras declaró que el descenso de la violencia es atribuible principalmente a las medidas de confinamientos, toque de queda y restricciones de la movilidad vinculadas a la gestión de la pandemia de la COVID-19.** El Gobierno reconoció tal impacto, pero a la vez insistió en la eficacia de su estrategia de combate a la criminalidad, centrada según el Ejecutivo en la desarticulación de cárteles de la droga (extradición de personas, incautaciones de droga, desarticulación pistas de aviación y laboratorios clandestinos); creación de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (que hasta diciembre de 2020 habían detenido a casi 1.700 pandilleros); la recuperación de territorios controlados por dichas pandillas; los cambios legislativos para enfrentar en mejores condiciones el narcotráfico, el crimen organizado y el blanqueo de capitales; o la depuración del cuerpo policial para hacerlo más efectivo y mejorar su reputación. Según el mencionado Observatorio de la Violencia, el 65% de las muertes violentas en el país están vinculadas al narcotráfico. A pesar de esta reducción en los niveles de violencia, durante 2020 se siguieron registrando numerosos episodios de violencia política y de asesinatos contra líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos, activistas medioambientales.

Por otra parte, sin embargo, se incrementó notablemente la tensión política entre el Gobierno y la oposición por la organización de las elecciones primarias y generales previstas para marzo y noviembre de 2021, respectivamente, debido a la falta de acuerdo para aprobar una nueva legislación electoral (especialmente en cuanto a la instauración de un segundo mandato presidencial y la creación de una segunda vuelta en los comicios presidenciales), y por los problemas para actualizar el censo electoral (a finales de año, las autoridades competentes declararon detectar problemas en la identidad de 500.000 personas, lo que según algunos analistas podría comportar serias tensiones en el proceso electoral y cuestionar la legitimidad de los resultados). **La tensión política también se agudizó por las acusaciones al presidente Orlando y a personas de su confianza de cercanía y connivencia con el crimen organizado** (en 2019 un tribunal de EEUU condenó a su hermano por tráfico de drogas), así como por la finalización del mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras en enero, tras la falta de acuerdo entre el Gobierno y la OEA para la continuación de sus actividades. Finalmente, cabe destacar que durante todo el año se registraron movilizaciones y protestas por la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida.

México	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, cárteles, grupos armados de oposición

Síntesis:

Desde el año 2006, en el que el presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra al narcotráfico”, tanto los niveles de violencia como las violaciones de derechos humanos en todo el país se incrementaron sustancialmente hasta convertir al país en uno de los que concentra más homicidios en todo el mundo. Desde entonces, se han multiplicado el número de estructuras de crimen organizado vinculadas principalmente al narcotráfico, que en algunas partes del país disputan al Estado el monopolio de la violencia. Según algunas estimaciones, a finales de 2017 la “guerra contra el narcotráfico” había provocado la muerte de más de 150.000 personas y la desaparición de más de 30.000. Además, en México existen algunos movimientos insurgentes en estados como Guerrero y Oaxaca –entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. En el estado de Chiapas, tras el breve alzamiento armado del EZLN en 1994, se han mantenido ciertos niveles de conflictividad en las comunidades zapatistas.

En términos generales, los niveles de violencia fueron similares a los del año anterior. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 se registraron 35.484 homicidios (133 menos que en 2019) y la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes fue de 27. El Ejecutivo advirtió que **la mayor parte de estos homicidios (20.188) se cometieron con armas de fuego y que el número de homicidios dolosos con armas de fuego se ha incrementado en un 133% en los últimos cinco años.** Cabe señalar que dichas cifras no incluyen a las personas desaparecidas ni los cadáveres encontrados en fosas comunes. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1964 han desaparecido más de 200.000 personas, de las que casi 82.000 no han sido localizadas. En 2020 desaparecieron 15.656 personas (un 23% menos que en 2019), de las cuales 6.753 seguían en paradero desconocido al finalizar el año. **Según estimaciones de prensa a partir de datos oficiales, desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 se han registrado más de 300.000 homicidios en México.** En 2020, el 52% de los homicidios se concentró en cinco estados (Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán), y tal porcentaje superaba el 80% si se incluían otros cuatro Estados (Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Colima). Según datos del Gobierno publicados en agosto, en México operan 19 cárteles principales, ocho de los cuales habían incrementado sus operaciones durante el año 2020: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Cártel de Sinaloa a nivel nacional, y Los Viagras en Michoacán; Guerreros Unidos y Rojos en

Guerrero; Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato; y Unión Tepito y Cártel de Tláhuac en la capital del país. Varios análisis destacaron la rápida expansión del CJNG, que en 2010 tenía presencia solamente en dos estados y en 2020 tenía una sólida implantación en 24, incluyendo varios de los bastiones tradicionales del Cártel de Sinaloa (considerado actualmente el segundo mayor cártel del país) como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Colima, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Según informaciones de la DEA, los seis cárteles con mayor capacidad para ingresar narcóticos en EEUU eran CJNG, Sinaloa, Beltrán Leyva, Juárez, Golfo y Los Zetas. En este sentido, cabe destacar que en el mes de diciembre el presidente estadounidense Donald Trump señaló que, a pesar del diseño de una nueva estrategia antidrogas y los progresos en materia de decomisos y extradiciones que se han llevado a cabo bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, el país tenía que conseguir muchos más logros en esta materia y corría el riesgo de no cumplir con sus compromisos internacionales en política antinarcótica.

En cuanto a las dinámicas de violencia, durante el 2020 se registraron enfrentamientos casi diarios entre cárteles rivales o entre estos y fuerzas de seguridad del Estado. Algunos de los episodios que generaron mayor atención política y mediática fueron dos ataques contra un centro de rehabilitación en Irapuato (Guanajuato) en el que murieron 10 personas en junio y otras 27 en julio; los enfrentamientos en enero y abril entre el CJNG y Los Viagras en Michoacán y Guerrero, que provocaron la muerte de 10 y 21 personas, respectivamente; los enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y Juárez en Chihuahua en abril, que provocaron la muerte de 19 personas; la muerte de 12 presuntos miembros del Cártel del Nordeste en julio en Tamaulipas a manos del Ejército; los enfrentamientos en Zacatecas en diciembre entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa, que provocaron la muerte de un mínimo de 28 personas; el asesinato de 26 personas y el desplazamiento de más de 1.000 por las disputas entre el CJNG y una alianza de organizaciones de crimen organizado en Michoacán en diciembre; o el hallazgo de fosas comunes en Guanajuato en noviembre (76 cadáveres en la localidad de Salvatierra y otros 45 en la localidad de Cortázar) o en Colima en agosto (22 cadáveres).

Según algunas estimaciones, desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 se han registrado más de 300.000 homicidios en México

El Gobierno puso en valor su política en materia de seguridad ciudadana y lucha contra las drogas, señalando que los datos de 2020 suponen la primera reducción en el número de homicidios en los últimos cinco años y alegando una reducción significativa de los secuestros (36%) y de los robos (21%). Además, el Gobierno anunció un acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que un grupo de expertos reanude la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes

en Ayotzinapa (Guerrero) en 2014, y que en su momento había hallado pruebas sobre la complicidad de fuerzas de seguridad estatales y federales en tal desaparición. Sin embargo, **tanto organizaciones de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos criticaron la creciente militarización de las políticas de seguridad ciudadana**, especialmente después de que, en el mes de mayo, López Obrador firmara un decreto presidencial que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en un amplio abanico de funciones vinculadas a la seguridad pública hasta mayo de 2024. Según estas organizaciones, tal decreto no especifica bajo qué circunstancias y en qué ámbitos puede utilizarse a las Fuerzas Armadas. En la misma línea, organizaciones de la sociedad civil alertaron de que actualmente hay un 31% más de soldados desplegados en todo el país que durante los dos gobiernos anteriores.

América del Sur

Bolivia	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Aunque la renuncia y salida del país del presidente Evo Morales a finales de 2019 se precipitaron tras las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales celebradas ese mismo año, el país está inmerso en una situación de polarización política y social prácticamente desde que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se exiliara en EEUU en 2003 tras la represión de unas protestas antigubernamentales en las que más de 100 personas murieron. Tras un periodo de incertidumbre en el que dos presidentes asumieron el poder de forma interina, Evo Morales ganó las elecciones en diciembre de 2005, convirtiéndose en el primer mandatario indígena del país. Sin embargo, su acción de gobierno, especialmente la reforma agraria, la nacionalización de los hidrocarburos o la aprobación de una nueva Constitución, se vio obstaculizada por la férrea oposición por parte de varios partidos políticos y de las regiones orientales del país que, lideradas por el departamento de Santa Cruz, exigen mayor autonomía. En paralelo a la lucha política entre el Gobierno y la oposición, en los últimos años Bolivia ha enfrentado uno de los mayores índices de conflictividad social de todo el continente, con movilizaciones de distinto signo vinculadas a demandas laborales sectoriales, a la actividad de las empresas extractivas o a los derechos de los pueblos indígenas. La crisis política se agudizó especialmente en 2016 después de que el oficialismo perdiera por estrecho margen de votos –la primera derrota electoral de Evo Morales– un referéndum de reforma constitucional para permitir o no a Evo Morales una nueva reelección y concurrir así a las elecciones presidenciales de 2019.

Aunque hubo protestas significativas antes y después de las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en octubre, la tensión política y social en Bolivia se redujo considerablemente respecto del año anterior, en el que el país vivió una importante crisis que provocó

la muerte de más de 30 personas y el asilo político del entonces presidente Evo Morales. A principios de año las protestas remitieron significativamente en comparación con el último trimestre del 2019, y más después de que a principios de enero el Tribunal Supremo Electoral convocara la repetición de las elecciones para el 3 de mayo. Sin embargo, en febrero se incrementó nuevamente la tensión después de que el mencionado Tribunal rechazara la candidatura de Evo Morales al Senado (alegando que no residía en Bolivia) y de que se iniciaran dos procedimientos penales distintos contra el exmandatario por acusaciones de terrorismo, por un lado, y fraude electoral en los comicios de octubre de 2019, por otro. Sin embargo, el momento de mayor crispación política y social se vivió a partir de finales de julio, cuando el Tribunal Supremo Electoral pospuso las elecciones por tercera vez, en esta ocasión hasta el 18 de octubre (alegando la imposibilidad de celebrarlas antes por la pandemia de la COVID-19). Tal retraso fue criticado tanto por Morales como por varios sectores de la oposición por considerar que el Gobierno interino liderado por Jeanine Áñez estaba utilizando la pandemia como pretexto para prolongar y consolidar su mandato. En tales circunstancias, **el sindicato Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones que la prensa considera afines a Morales impulsaron movilizaciones, convocaron una huelga general y, ya a principios de agosto, llevaron a cabo más de 70 cortes y bloqueos de carreteras en todo el país**. Tras la falta de acuerdo en las conversaciones entre varias de estas organizaciones y el Gobierno, se incrementaron las protestas en varias regiones del país, provocando decenas de heridos y el desabastecimiento de varias zonas de Bolivia. De hecho, el Gobierno desplegó el Ejército para garantizar el transporte de oxígeno para personas enfermas por coronavirus.

Las protestas remitieron después de que Áñez firmara un decreto en el que se fijaba el 18 de octubre como plazo máximo para la convocatoria de nuevos comicios y de que Morales instara a la desconvocatoria de cortes de carretera. Días más tarde, la sede de la COB y de otro sindicato fueron atacadas con artefactos explosivos y, ya a principios de septiembre, el Gobierno provisional instó a la Corte Penal Internacional a iniciar una investigación por crímenes contra la humanidad contra los organizadores de las protestas y los bloqueos. En los meses de septiembre y octubre se registraron decenas de episodios de violencia política contra miembros o simpatizantes de partidos oficialistas y opositores, tal y como denunció la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, el Gobierno, el Tribunal Supremo Electoral y cuatro misiones de observación electoral, incluyendo la de la OEA, certificaron que los comicios legislativos y presidenciales del 18 de octubre fueron libres y pacíficos. **El partido de Evo Morales (Movimiento al Socialismo, MAS) obtuvo la victoria en ambas cámaras del Congreso, mientras que su candidato presidencial, Luis Arce, ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales, obtuvo una abultada victoria** (más del

55% de los votos) frente al expresidente Carlos Mesa (29%) o Luis Fernando Camacho (14%). A pesar de estos resultados, en los meses de octubre y noviembre siguieron produciéndose protestas de manera recurrente principalmente en Santa Cruz y Cochabamba por parte de personas y organizaciones que consideraban que había habido fraude electoral y que pedían una auditoría de los resultados de los comicios. Finalmente, cabe señalar que un juez anuló la orden de detención por delitos de terrorismo y sedición que pesaba contra Evo Morales (que regresó a Bolivia desde Argentina a principios de noviembre) y que el Congreso saliente aprobó una moción a finales de octubre en la que pedía que Áñez y 11 de los ministros de su Gobierno fueran procesados por su responsabilidad en los hechos de violencia acontecidos en los últimos meses de 2019, en los que centenares de personas resultaron heridas y más de 30 fallecieron.

Perú	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición armada (Militarizado Partido Comunista del Perú), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)

Síntesis:

En 1980, precisamente el año en que el país recuperaba la democracia, se inició un conflicto armado entre el Gobierno y el grupo armado maoísta Sendero Luminoso que se prolongó durante dos décadas y que costó la vida a más de 60.000 personas. Al amparo de la política contrainsurgente, en los años noventa el Estado sufrió una deriva autoritaria de la mano de Alberto Fujimori, que en el año 2000 se exilió en Japón tras ser depuesto por el Congreso y acusado de numerosos casos de corrupción y violación de los derechos humanos. Desde el año 2008 las acciones de facciones remanentes de Sendero Luminoso se han incrementado significativamente en las regiones del Alto Huallaga y, especialmente, del Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El Gobierno, que vincula a Sendero Luminoso con el narcotráfico, ha intensificado notablemente sus operaciones militares en ambas regiones, se ha negado a mantener ningún tipo de diálogo con la organización y ha intensificado la lucha política y legal contra su brazo político, Movadef. Por otra parte, varios colectivos, especialmente los pueblos indígenas, han mantenido movilizaciones periódicas para protestar contra la política económica de los sucesivos gobiernos y contra la actividad de empresas extractivas.

La destitución del presidente Martín Vizcarra por parte del Congreso en noviembre provocó el inicio de algunas de las protestas más importantes de los últimos años en numerosas regiones del país, que a su vez provocaron la dimisión del nuevo presidente, Manuel Merino, y de todo su Gobierno. Las manifestaciones se iniciaron en Lima y otras ciudades del país el mismo día que el Congreso aprobó por amplia mayoría (105 votos de un total de 130) la destitución de Vizcarra bajo la figura

de “incapacidad moral permanente” por acusaciones de corrupción durante su mandato como gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014. Previamente, en septiembre, el mismo Congreso había iniciado un procedimiento de destitución de Vizcarra –acusado en esta ocasión de prácticas corruptas para favorecer a un cantante– que finalmente no fue aprobado por falta de apoyos parlamentarios. Tras la destitución de Vizcarra y la asunción como nuevo mandatario del hasta entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, decenas de miles de personas participaron en movilizaciones en todo el país, especialmente en las tres llamadas “marchas nacionales” los días 12, 14 y 17 de noviembre respectivamente. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dos personas murieron, más de 100 resultaron heridas (más de 60 hospitalizadas) y más de 40 desaparecidas durante los numerosos disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y policías. Varias organizaciones de la sociedad civil acusaron a la Policía de usar perdigones de goma y gases lacrimógenos de manera indiscriminada, mientras que organismos internacionales como **la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch expresaron su preocupación por la actuación de la Policía en la contención de las protestas, exigiendo al Estado la correspondiente investigación.**

Ante la magnitud de las protestas, el presidente Merino y la mayor parte de su gabinete dimitieron del cargo poco después del fallecimiento (por heridas de armas de fuego) de dos manifestantes. Tras el posterior nombramiento como nuevo presidente del país del congresista Francisco Sagasti (que en su momento votó en contra de la destitución de Vizcarra), las protestas remitieron en intensidad a finales de mes, y más después de que Sagasti anunciara la reforma de la Policía, el nombramiento de un nuevo jefe del cuerpo y la destitución de varios agentes acusados de brutalidad policial. Según algunos analistas, el motivo fundamental de las protestas fue la destitución de Vizcarra, calificada por algunas voces como golpe de Estado encubierto por parte del Congreso para evitar que Vizcarra llevara a cabo sus medidas en el terreno de la lucha contra la corrupción. Según varios medios de comunicación, 68 de los 130 diputados estaban siendo investigados por fraude, blanqueo de capitales, soborno y otras formas de corrupción. Otros analistas consideran que las protestas también estuvieron alentadas por otros factores más estructurales, como el deterioro de la economía, las críticas al sistema de partidos, la gestión de la pandemia de la COVID-19 (Perú tuvo en varios momentos del año la tasa de mortalidad por coronavirus más alta del mundo), la exigencia de una nueva Constitución o el hartazgo de la ciudadanía por los altos niveles de corrupción en la política peruana. Finalmente, también cabe destacar que durante el año se incrementaron las acciones de la facción remanente de Sendero Luminoso que actúa

en el Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), que se da a conocer como Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). Según el recuento a partir de informaciones en prensa, **un mínimo de 16 personas (la mitad policías o militares) murieron y otras varias resultaron heridas en varios episodios de violencia, la mayoría emboscadas del MPCP.**

Venezuela	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La actual crisis política y social que atraviesa el país se remonta a la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 y a su impulso de la llamada Revolución Bolivariana, pero se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 y su sustitución por el entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, que fue considerada inconstitucional por parte de la oposición. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. En un contexto de creciente crisis económica y de movilizaciones recurrentes y en ocasiones masivas, la crisis política en Venezuela se agudizó después de que la oposición ganara cómodamente las elecciones legislativas de diciembre de 2015, obteniendo su primera victoria en unos comicios en dos décadas. Tal victoria provocó una situación de una cierta parálisis institucional entre la Asamblea Nacional, por un lado, y el Gobierno y buena parte del poder judicial por otra.

No se registraron movilizaciones multitudinarias ni episodios de violencia significativos, pero persistió la crisis política e institucional en el país — en 2020 muy vinculada a la celebración de elecciones legislativas y al control de la Asamblea Nacional—, el Gobierno acusó a la oposición de instigar un golpe de Estado y siguieron registrándose un alto número de homicidios. Respecto a la crisis política que padece el país, a principios de año el Gobierno desplegó a la Guardia Nacional en los alrededores del Parlamento para evitar que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, votara sobre la prolongación durante un año del mandato de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea, cargo disputado también por el candidato oficialista Luis Parra (expulsado a finales de 2019 del partido de Guaidó). Parra se proclamó nuevo presidente del Parlamento, pero la oposición advirtió que tal votación no había tenido el quórum necesario y llevó a cabo una sesión fuera de la Asamblea en la que Guaidó fue ratificado en el cargo. Días más tarde, Guaidó desistió de llevar a cabo una sesión legislativa después

El Gobierno de Venezuela anunció que las Fuerzas Armadas habían abortado una operación militar para capturar a Nicolás Maduro y perpetrar un golpe de Estado

de que grupos de personas conocidas como “colectivos” atacara a un convoy que trasladaba a varios diputados a la Asamblea. En febrero, poco después de que Juan Guaidó regresara de una gira internacional de tres semanas en la que fue recibido como jefe de Estado por varios países, el Gobierno llevó a cabo unos ejercicios militares en los que habrían participado 2,3 millones de personas, combinando las Fuerzas Armadas (con unos 365.000 efectivos) y buena parte de una milicia civil conformada por unos 3,7 millones de reservistas que el Gobierno habría incorporado formalmente a las fuerzas de seguridad del Estado.

El momento de máxima tensión en el año se produjo en el mes de mayo, cuando **el Gobierno anunció que las Fuerzas Armadas habían abortado una operación militar para capturar a Nicolás Maduro y perpetrar un golpe de Estado.** Esta operación militar en la ciudad de Macuto se saldó con la muerte de ocho personas y estuvo liderada por un antiguo capitán de la Guardia Nacional y por un ex miembro de las fuerzas especiales el Ejército de EEUU y entonces responsable de la empresa de seguridad privada Silvercorp. **El Gobierno de Maduro acusó a la oposición y al Gobierno de EEUU de estar detrás de la tentativa golpista,** y algunos de los involucrados confirmaron contactos con determinadas personas cercanas a Guaidó, pero tanto este como el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, negaron cualquier vínculo con la llamada Operación Gedeón. Durante el mes de mayo, una treintena de personas fueron detenidas por su presunta vinculación con dicha operación, y el Fiscal General instó a la Corte Suprema a declarar al partido de Guaidó como organización terrorista. La tensión política continuó en junio, después de que la Corte Suprema nombrara a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y modificara la ley electoral. Tal movimiento provocó las quejas de la oposición y buena parte de la comunidad internacional por considerar que tales nombramientos y modificaciones legislativas corresponden únicamente a la Asamblea Nacional y no a la Corte Suprema, y que el único objetivo del Gobierno era controlar las elecciones legislativas convocadas para diciembre. En tales circunstancias, la mayor parte de la oposición decidió boicotear los comicios, en los que la participación (según el Gobierno) fue del 30% y en los que los partidos que apoyan al Gobierno de Maduro obtuvieron más del 90% de los escaños. Guaidó desconoció tales resultados y declaró que la Asamblea Nacional saliente (controlada por la oposición) era el único parlamento legítimo hasta que se convocaran elecciones libres y justas. A finales de año dicha Asamblea prolongó durante un año más su mandato (que oficialmente finalizaba el 4 de enero de 2021), pero tanto el Gobierno como la Corte Suprema declararon tal extensión de mandato inconstitucional.

En cuanto al número de homicidios, el Observatorio Venezolano de la Violencia señaló que en 2020 se habían

registrado 11.891 muertes violentas, una disminución significativa respecto de los 16.506 del año 2019. **La tasa de homicidios cada 100.000 habitantes sería de 45,6, la más alta de América Latina** según dicha organización. De las muertes violentas en 2020, 4.231 se produjeron bajo la categoría “resistencia a la autoridad”. Según este mismo organismo, por primera vez el número de fallecimientos a manos de agentes y estructuras del Estado fue superior al de homicidios de tipo delincencial. En su momento, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, ya había pedido la disolución de cuerpos como la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional tras recibir numerosas denuncias por ejecuciones extrajudiciales, aunque otros cuerpos como la Guardia Nacional o las fuerzas de seguridad de algunos estados también habrían perpetrado algunos abusos. En este sentido, en septiembre una misión de investigación de Naciones Unidas acusó a varios cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado de varias violaciones de derechos humanos (como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas) que podrían suponer crímenes contra la humanidad desde 2014, señalando que Maduro y otros altos cargos del Gobierno conocían esta situación, haciendo un llamamiento a una investigación internacional al respecto. Poco después, **la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, declaró que existía una base razonable para creer que se pudieron haber cometido crímenes contra la humanidad desde 2017**, pidiendo al Estado venezolano la información sobre los procedimientos legales iniciados contra los presuntos perpetradores de dichos crímenes y comprometiéndose a iniciar una investigación completa al respecto en 2021. Previamente, en marzo, el fiscal general de EEUU había anunciado el procesamiento de Maduro, el ministro de Defensa y otras personas por delitos vinculados al narcotráfico. El Gobierno venezolano rechazó tajantemente todas estas acusaciones.

2.3.3. Asia y Pacífico

Asia Central

Kirguistán	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán

Síntesis:

Desde su emergencia como Estado independiente en agosto de 1991, la exrepública soviética de Kirguistán ha atravesado diversos periodos de inestabilidad y conflicto sociopolítico. La etapa presidencial de Askar Akayev (1991-

2005), que comenzó con un impulso reformador, derivó progresivamente en autoritarismo y corrupción. En marzo de 2005, una serie de manifestaciones que denunciaban fraude en las elecciones de ese año derivaron en una revuelta social que forzó la caída del régimen. Las promesas de cambio del nuevo presidente, Kurmanbek Bakiyev, fueron rápidamente diluidas, dando paso a un modelo de presidencialismo autoritario, corrupto y nepotista, especialmente a partir de finales de 2007. Todo ello en un contexto de dificultades económicas para la población, tensiones latentes entre el norte y sur del país y exclusión de las minorías étnicas de los ámbitos de decisión política. Cinco años después, en abril de 2010, una nueva revuelta popular desembocó en el derrocamiento del régimen, con enfrentamientos que causaron 85 muertos y cientos de heridos, a la que siguió un junio una ola de violencia con dimensión interétnica, con más de 400 víctimas mortales. Otros ejes de tensión en Kirguistán están vinculados a la presencia de grupos armados regionales de corte islamista en el Valle de Fergana (área entre Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán) y a las disputas fronterizas con países vecinos

Se produjo una crisis postelectoral en octubre, con protestas y un controvertido cambio de régimen, mientras continuaron las tensiones fronterizas con países vecinos.

En relación a la crisis política interna, el país celebró elecciones parlamentarias el 4 de octubre, en un contexto de denuncias previas de intimidación y compra de voto, fuerte impacto económico por la pandemia de la COVID-19, desafección con la clase dirigente por los niveles de corrupción y elevado faccionalismo político. Solo cuatro de los 16 partidos políticos autorizados a participar en los comicios superaron el umbral del 7%, dejando fuera del Parlamento a la práctica totalidad de la oposición. El partido Birimdik (Unidad), favorable al presidente, Sooronbay Jeenbekov, ganó las elecciones con el 24,9% de los votos; seguido de Mekenim (Patria), con el 24,27%, asociado a la familia Matraimov, cuyo miembro y ex alto cargo de aduanas Raimbek Matraimov estaba en el foco de investigaciones por una supuesta trama de blanqueo de dinero y contrabando. A su vez, el Partido Kirguistán obtuvo el 8,9% y Butun (Kirguistán Unido) el 7,25%. Este último fue la única formación opuesta al Gobierno que entró en el Parlamento. La oposición denunció fraude. Se desencadenaron protestas el 5 de octubre, promovidas por las formaciones que quedaron sin representación parlamentaria, a las que se unieron simpatizantes de Butun. Las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas con violencia. **Manifestantes opositores tomaron la sede parlamentaria y otros edificios estatales** y liberaron de la cárcel al expresidente Almazbek Atambayev, y al exparlamentario y miembro del partido Mekenchil, Sadyr Japarov, entre otras figuras relevantes. **El núcleo de la protesta se produjo en la capital, Bishkek, si bien también hubo protestas en las localidades del norte Talas, Naryn y Karakol**, en el contexto de divisiones políticas regionales norte-sur. El 6 de octubre el primer ministro dimitió. También renunciaron el presidente del Parlamento, el alcalde de la capital y varios gobernadores regionales.

Pese a que las autoridades electorales anulaban los resultados electorales el mismo 6 de octubre,

la inestabilidad continuó. Se formaron tres autodenominados consejos de coordinación que pretendían liderar la transición de poder. El 9 de octubre el presidente decretó el estado de emergencia, autorizó el despliegue del Ejército, cesó a todo el gabinete y denunció un golpe de Estado. En días posteriores pasó a estar en paradero desconocido, mientras la oposición reclamó su dimisión. Se produjo un controvertido traspaso de poder, en el cual **el Parlamento saliente, en reunión extraordinaria en un hotel, designó a Japarov como primer ministro, decisión rechazada por el presidente alegando procedimiento ilegítimo.** Medios de comunicación informaron de que Japarov había sido nominado con 61 votos, mientras solo había 51 personas en la votación (de los 120 diputados). En rueda de prensa Japarov defendió la legitimidad de su elección. En otra reunión extraordinaria el 13 de octubre, el Parlamento designó a un nuevo presidente parlamentario, Kanat Isayev. **El presidente kirguizo anunció su dimisión el 15 de octubre e instó a la oposición política a retirar de las calles a sus bases de simpatizantes y a optar por vías no violentas.** Tras la salida del presidente y la renuncia del presidente del Parlamento a asumir la presidencia interina, el Parlamento transfirió los poderes presidenciales a Japarov, quien pasó a ostentar simultáneamente el cargo de primer ministro en funciones y el de presidente. La crisis llevó inicialmente a Rusia –socio estratégico de Kirguistán, con una base militar en el país y con vínculos con las diversas facciones políticas– a anunciar la suspensión de la ayuda financiera a Kirguistán hasta que se garantizase la estabilidad política. El viceprimer ministro de Rusia, Smirny Kozak, se reunió el 12 de octubre en la capital kirguiza con Jeenbekov y con Japarov, en lo que algunos análisis señalaban como un intento de facilitar una solución a la crisis. En diversas declaraciones, Japarov confirmó el interés en mantener relaciones estratégicas con Rusia. Con la evolución de la situación, Rusia confirmó el desembolso de los fondos previstos. En el caso de China –con creciente peso económico en el país y acreedor de más del 42% de la deuda externa de Tayikistán–, Beijing mantuvo un perfil bajo ante la crisis.

La comisión electoral anunció a finales de octubre elecciones presidenciales para el 10 de enero de 2021, así como la repetición de los comicios parlamentarios el 10 diciembre, si bien posteriormente retrasó esta última hasta una fecha no posterior a julio de 2021. En noviembre Japarov dejó la presidencia y la jefatura de Gobierno, con el objetivo de ser elegible a las elecciones presidenciales. Asimismo, el Gobierno presentó un borrador de reforma constitucional que ampliaba los poderes presidenciales, concentrando el poder Ejecutivo en la Presidencia y reducía el tamaño del Parlamento. La propuesta desencadenó protestas de centenares de manifestantes y críticas de diversos expresidentes y otras figuras políticas, por suponer una amenaza para el proceso democrático y cuestionando la legitimidad del gobierno interino para impulsar una reforma de tal calado. El Gobierno dio luz verde ese

mismo mes de noviembre a cambios en la legislación electoral, bajando el umbral electoral del 7% al 3%. **El Parlamento también aprobó, a propuesta gubernamental en diciembre, una ley para celebrar un referéndum sobre la controvertida reforma constitucional impulsada por Japarov.** La aprobación de la ley para el referéndum generó protestas de decenas de activistas y defensores de derechos civiles.

Por otra parte, otro eje de tensión durante el año fueron las tensiones fronterizas con países vecinos. Se produjeron diversos incidentes de violencia con Tayikistán junto a varias localidades de la región de Batken que generaron evacuación de población, un fallecido y varios heridos en diversos momentos del año. Kirguistán y Tayikistán establecieron un grupo de trabajo conjunto a principios de año para avanzar en la delimitación de la frontera, si bien la tensión se mantuvo activa durante el año. Por otra parte, también se produjeron choques en torno a la frontera con el distrito de Sokh –enclave en el Valle de Ferghana perteneciente a Uzbekistán dentro de Kirguistán– por cuestiones de acceso a agua, con más de 180 heridos entre población de Uzbekistán y otros 25 de Kirguistán. El incremento de tensión desencadenó conversaciones telefónicas entre los presidentes de ambos países.

Kazajstán	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Identidad, Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales

Síntesis: Desde su independencia de la URSS en 1991, Kazajstán ha experimentado un crecimiento económico significativo en paralelo a una evolución política y social mayoritariamente estable. No obstante, los 30 años en la presidencia del país de Nursultán Nazarbáyev también estuvieron marcados por el déficit democrático y políticas de tendencias autoritarias, sin espacio para la oposición política y social. Tras su salida en 2019, Nazarbáyev continuó detentando posiciones de liderazgo, incluyendo como Líder de la Nación y presidente del partido oficialista Nur Otan. Los ejes de conflicto incluyen la tensión entre las autoridades y sectores de oposición en torno a la gobernanza y el acceso al poder político; así como entre las autoridades y grupos sectoriales en torno a elementos socioeconómicos, en un contexto de desigualdad económica y deficitarias condiciones de trabajo en sectores como el de los hidrocarburos. Por otra parte, en el conjunto de Asia central, actores armados locales y regionales de inspiración islamista han protagonizado incidentes de violencia en diversos momentos, incluyendo en Kazajstán, mientras gobiernos de la región también han instrumentalizado el supuesto riesgo de violencia islamista para justificar prácticas represivas.

Se incrementó la tensión el país, con un aumento de movilizaciones opositoras, mientras las autoridades reprimieron las protestas. Un año después de la dimisión del presidente Nursultán Nazarbáyev –quien continúa

como presidente del Consejo de Seguridad, presidente del partido gobernante y cargo vitalicio de Líder de la Nación–, continuaron produciéndose movilizaciones en diversos momentos del año, tanto en la capital, Nursultán, como otras localidades. A principios de año se intensificó la persecución contra simpatizantes del Partido Democrático de Kazajstán, lo que dificultó sus planes de celebración de su congreso fundacional previsto para el 22 de febrero. En su lugar la oposición llevó a cabo movilizaciones de protesta pacífica, en demanda del registro de partidos opositores, reformas democráticas y contra las prácticas de represión. El periodista, activista y líder del Partido Democrático de Kazajstán, Janbolat Mamai, fue detenido un día antes de las protestas. Varias decenas de personas fueron detenidas –entre un centenar y dos centenares según algunas fuentes. En mayo el Gobierno aprobó legislación que permitía cierto grado de manifestación solo en determinadas circunstancias, con graves restricciones al derecho a reunión y manifestación. En meses siguientes continuó la represión contra expresiones de protesta social y política. **La gestión gubernamental de la pandemia fue también cuestionada en las protestas y ONG internacionales denunciaron instrumentalización de las medidas restrictivas por la pandemia para perseguir la actividad opositora.** Otro centenar de manifestantes fueron detenidos en nuevas protestas en junio, organizadas por el Partido Democrático de Kazajstán y por el movimiento Opción Democrática de Kazajstán, partido no registrado y considerado por las autoridades como organización extremista. A lo largo del año hubo protestas también por la muerte en detención preventiva en febrero del defensor de derechos civiles Dulat Aghadil, con demandas de investigación independiente sobre su muerte. Sectores de la oposición llamaron en noviembre al boicot a las elecciones parlamentarias previstas para enero de 2021 y la persecución de la oposición y detenciones se mantuvo hasta finales de año.

También hubo diversas movilizaciones en torno a demandas socioeconómicas en diversos momentos del año, incluyendo protestas de mujeres en demanda de ayudas sociales en diversas localidades. Otro eje de tensión incluyó **violencia en febrero entre población kazaja y de la minoría dungan en varias localidades del distrito de Korday (región de Zhambyl, sureste), con 11 víctimas mortales y 192 heridos** y daños a 168 casas y 122 vehículos, según las autoridades. El Ministerio de Interior desplegó fuerzas especiales. Los incidentes desplazaron a 24.000 personas de etnia dungan. **El Gobierno negó que se tratara de disputas por motivación étnica y lo atribuyó a violencia entre bandas criminales, mientras algunas organizaciones lo señalaron como conflicto étnico y pogromos contra la minoría étnica dungan en las localidades de Masanchi, Sortobe, Bular Batyr y Aukhaty.** La violencia estuvo precedida de dos incidentes inconexos que involucraron a personas kazajas y dungan y que, según algunos análisis, fueron interrelacionados en redes sociales, generaron reacciones nacionalistas y dieron paso a la

violencia posterior. Representantes dungan denunciaron detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos contra personas de su grupo de población por parte de las fuerzas de seguridad tras los hechos de febrero.

Asia Meridional

Bangladesh	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)

Síntesis:

Desde la creación de Bangladesh como Estado independiente en 1971 tras su secesión de Pakistán en un conflicto armado que ocasionó tres millones de muertes, el país ha vivido una complicada situación política. Las elecciones de 1991 dieron paso a la democracia tras una sucesión de gobiernos militares autoritarios que dominaron el país desde la independencia. Los dos principales partidos, BNP y AL, se han sucedido desde entonces en el poder después de diferentes elecciones, siempre contestadas por la formación perdedora, dando lugar a gobiernos que no han dado respuesta a los principales retos del país como la pobreza, la corrupción o la baja calidad de la democracia, y que han respondido a intereses partidistas. En 2008, la AL accedió al poder después de un periodo de dos años dominado por un Gobierno interino militar que trató de poner fin sin éxito a la crisis política que había sumido al país en una situación de violencia en los meses previos y que llevó incluso al encarcelamiento de las líderes de los dos partidos. La convocatoria de elecciones para 2014 en un contexto político muy frágil y con una fuerte oposición del BNP a las reformas emprendidas por la AL, como la eliminación del Gobierno interino para supervisar los procesos electorales, derivaron en una grave y violenta crisis política durante el año 2013. En paralelo, el establecimiento en 2010 de un Tribunal para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra de 1971, instrumentalizado por el Ejecutivo para acabar con la oposición islamista, en particular el partido Jamaat-e-Islami, agravó la situación en el país.

Se redujo considerablemente la violencia en Bangladesh, aunque persistió la tensión política en el país. Durante el año se intensificaron las detenciones de disidentes políticos, así como las operaciones policiales antiterroristas contra integrantes de diferentes grupos armados. Así, se produjeron decenas de detenciones de miembros del principal grupo armado en el país, JMB. Hubo algunos atentados esporádicos en diferentes momentos del año, sobre todo contra integrantes de las fuerzas de seguridad, que causaron heridos. Además, la celebración de elecciones locales fue también fuente de tensión y enfrentamientos entre militantes y seguidores de los partidos AL (en el Gobierno, y que obtuvo la victoria en las elecciones de Dhaka, la capital) y el BNP (principal partido de la oposición, que reiteró las acusaciones de fraude). En marzo se produjo la puesta en libertad temporal de la cárcel de la ex primera

ministra y líder del BNP, Khaleda Zia, aunque debía permanecer en su domicilio. Por otra parte, según señaló la organización International Crisis Group, el Gobierno utilizó las restricciones para contener la pandemia para incrementar la persecución y detenciones de opositores políticos. También se produjeron numerosas detenciones, sobre todo de periodistas, intelectuales y personas vinculadas a la academia, al amparo de la Ley de Seguridad Digital. Además, miles de trabajadores del sector textil se manifestaron para protestar por la situación generada por la suspensión de la producción como consecuencia del confinamiento, exigiendo medidas de apoyo. En noviembre, miles de personas se manifestaron contra el presidente francés, Emmanuel Macron, por su defensa de las viñetas satíricas contra Mahoma y se produjeron varios ataques contra comunidades hindúes por su supuesta defensa de la posición de Macron. Varias viviendas pertenecientes a personas hindúes fueron incendiadas. Por otra parte, siguió sin resolverse la situación de centenares de miles de rohingyas en el campo de refugiados de Cox Bazar.

Más de 50 personas murieron en India como consecuencia de los ataques por parte de simpatizantes del partido gubernamental BJP contra población musulmana en el marco de las protestas contra la Ley de Ciudadanía

La situación de tensión continuó siendo grave en India, con episodios de violencia comunitaria que fueron especialmente intensos en Delhi en marzo. Durante varios días se produjeron violentos

enfrentamientos en la zona nordeste de la ciudad después de que un líder local del partido gubernamental BJP, Kapil Mishra, amenazara con desalojar de forma violenta a un grupo de musulmanes que protestaban de forma pacífica contra la Ley de Ciudadanía aprobada en diciembre de 2019. Desde la aprobación de la ley, centenares de miles de personas, en su mayoría musulmanas, protagonizaron protestas en contra de la ley en todo el país. Estas amenazas llevaron a **que grupos extremistas hindúes y simpatizantes del BJP atacaran a población musulmana, desencadenándose violentos choques**

en los que murieron 53 personas, en su mayoría musulmanas, y numerosas viviendas y negocios propiedad de musulmanes fueron atacados e incendiados, así como mezquitas. Los enfrentamientos se produjeron entre población hindú y musulmana y contra la Policía, que fue acusada por organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, de graves violaciones a los derechos humanos, brutalidad y complicidad con los grupos hindúes que atacaron violentamente a población musulmana. Los disturbios se prolongaron durante varios días y se extendieron a otras zonas de la capital, acrecentándose por los falsos rumores que circularon entre la población acerca de que varias mezquitas estaban organizando acciones para expulsar a la población hindú de Delhi. Los enfrentamientos se produjeron coincidiendo con la visita a Delhi del presidente de EEUU, Donald Trump, que en declaraciones públicas expresó su apoyo al primer ministro indio, Narendra Modi. Los gobiernos de varios estados (Maharashtra, Punjab, Kerala, Odisha, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Rajashtan) se negaron a aplicar la ley. Por otra parte, **India continuó siendo escenario de alarmantes cifras de violencia sexual**, especialmente contra las mujeres Dalit. Según los datos de National Crime Records Bureau, durante 2019 más de 32.000 mujeres fueron víctimas de violaciones, lo que podría representar solamente una pequeña proporción de los casos reales, ya que la violencia sexual continúa siendo infradenunciada. Finalmente, cabe destacar que durante 2020 se produjeron masivas manifestaciones protagonizadas por agricultores en las que participaron centenares de miles de personas, con marchas a la capital para protestar por la legislación aprobada por el Gobierno que favorecía a grandes corporaciones frente a pequeños agricultores. En los últimos años, centenares de pequeños agricultores indios se han suicidado por no poder hacer frente a las deudas como consecuencia de diferentes legislaciones perjudiciales para dichos productores agrícolas.

India	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

En mayo de 2014, el partido nacionalista hindú BJP ganó las elecciones y asumió el Gobierno del país, encabezado por Narendra Modi como primer ministro. En 2019, Modi renovó su victoria electoral. Desde entonces, el Ejecutivo ha promovido un programa de gobierno nacionalista hindú acompañado de un discurso, medidas y políticas discriminatorias contra la población musulmana. Las tensiones entre hindúes y musulmanes en la India se habían acrecentado en las décadas previas, especialmente a raíz de los graves episodios de violencia en Gujarat en el año 2000, cuando tras el incendio de un tren en el que viajaban peregrinos hindúes y en el que murieron 58 personas, se desataron violentos disturbios en los que murieron cerca de 800 musulmanes y más de 250 hindúes, aunque organizaciones de la sociedad civil sostienen que las cifras fueron mucho mayores. Modi, ministro jefe de Gujarat en ese momento y miembro de la organización ultranacionalista hindú RSS, fue acusado de connivencia e incluso incitación a la violencia contra la población musulmana. En 2019, el Gobierno de Modi aprobó varias medidas consideradas muy perjudiciales para la comunidad musulmana, como la retirada del estatus especial de autonomía y la condición de estado a Jammu y Cachemira; el Registro Nacional de Ciudadanía en Assam, que excluía de la ciudadanía india a dos millones de musulmanes; y la aprobación de la Ley de Ciudadanía, excluyendo a la población musulmana procedente de Afganistán, Pakistán y Bangladesh de la posibilidad de acceder a la ciudadanía india.

India (Assam)	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB-IKS, ADF, RNLF, KPLT, NSLA, UPLA y KPLT

Síntesis:

El grupo armado de oposición ULFA surge en 1979 con el objetivo de liberar el estado de Assam de la colonización india y establecer un Estado soberano. Las transformaciones demográficas en el estado tras la partición del subcontinente indio, con la llegada de dos millones de personas procedentes de Bangladesh, están en el origen de la reclamación de la población de origen étnico asamés de un reconocimiento de sus derechos culturales, civiles y de creación de un Estado independiente. Durante las décadas de los ochenta y noventa se producen varias escaladas de violencia, así como intentos de negociación que fracasan. En el año 2005 se inicia un proceso de paz que tiene como consecuencia una reducción de la violencia y que se interrumpirá en el año 2006 dando lugar a una nueva escalada del conflicto. Por otra parte, en los ochenta surgen grupos armados de origen bodo, como el NDFB, que reivindican el reconocimiento de su identidad frente a la población mayoritaria asamesa. Desde 2011 se ha producido una reducción significativa de la violencia y numerosos grupos armados han entregado las armas o iniciado conversaciones con el Gobierno.

La tensión se redujo notablemente en el estado indio de Assam y la actividad de los grupos armados de oposición disminuyó enormemente, consolidándose la tendencia de años anteriores.

En enero 644 integrantes de diferentes grupos insurgentes se rindieron y entregaron las armas en una ceremonia oficial. Los insurgentes pertenecían a los grupos armados National Liberation Front of Bengalis (NLFB) (301), Adivasi Dragon Force (ADF) (178), National Santhal Liberation Army (NSLA) (87), United Liberation Front of Asom-Independent (ULFA-I) (50), Rabha National Liberation Front (RNLF) (13), National Democratic Front of Bodoland-Saoraigwra (NDFB-S) (8), Kamtapur Liberation Organisation (KLO) (6) y CPI (Maoist) (1). La rendición se produjo como consecuencia de negociaciones entre los grupos armados y el Gobierno indio. En noviembre se produjo también la entrega de un importante dirigente del ULFA-I, Drishti Rajkhowa, en Meghalaya, quien era considerado muy cercano al líder del ULFA-I, Paresh Baruah.

Algunos análisis apuntaron a que la práctica desaparición de la actividad armada en Assam, así como en otros estados del nordeste de la India, se debía a factores como el incremento en el presupuesto del Ministerio del Interior en los últimos años (que había llevado a un mayor despliegue policial y de las fuerzas de seguridad en la región), la utilización de acuerdos de alto el fuego o la cooperación en materia antiterrorista con los países fronterizos.³⁷

China e India se enfrentaron violentamente por primera vez en 45 años en la zona fronteriza en disputa en el valle de Gulwan

India – China	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Territorio Internacional
Actores:	India, China

Síntesis:

La frontera compartida por China e India ha sido objeto de disputas desde la década de 1950, tras la partición de India y Pakistán y la fundación de la República Popular China en 1949. Esta frontera nunca ha sido formalmente delimitada mediante un acuerdo entre ambos países y son varias las zonas sobre cuya demarcación existe conflicto. En la zona occidental de la frontera la disputa gira en torno a la zona de Aksai Chin, un área deshabitada cuyo territorio India reclama y considera que pertenece a la región de Ladakh (parte de Jammu y Cachemira) y que administra China como parte de la región de Xinjiang. El anuncio por parte de China de la construcción de una carretera que unía Xinjiang con Tíbet atravesando la región de Aksai Chin incrementó la tensión con la India, que se vio agravada tras la concesión de asilo al Dalai Lama en India en 1959. En los años siguientes se produjeron movimientos de tropas por partes de ambos países en la zona. En 1962 se inició una guerra que finalizó con la derrota militar de India, pero sin que se resolviera la cuestión de la demarcación, asunto que siguió condicionando las relaciones entre ambos Estados, así como con otros países de la región, especialmente con Pakistán. En 1988 los dos Gobiernos acordaron resolver la disputa por vías pacíficas. No obstante, desde entonces no se han logrado avances en las negociaciones y la tensión militar en las zonas en disputa ha persistido.

La tensión entre China e India se incrementó durante el año, llegándose a producir enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad de ambos países en la zona fronteriza del valle de Gulwan.

Los choques tuvieron lugar en Línea de Control Real, tal y como se conoce a la frontera entre ambos Estados, no demarcada y en disputa durante las últimas décadas.

La tensión entre India y China era creciente desde mayo, cuando tuvieron lugar varios enfrentamientos entre los soldados indios y chinos desplegados en la frontera y en los que se produjeron heridos. El detonante de los enfrentamientos habría sido la oposición de China a la construcción por parte de India de una carretera en la zona en disputa, así como diferentes infraestructuras que podrían facilitar el acceso militar de India a la zona, de muy difícil acceso por ser un área montañosa de elevada altitud. Como consecuencia de la escalada de la tensión se produjo un incremento en el número de tropas desplegadas a ambos lados de la frontera. Aunque las partes acordaron reducir la tensión, **el 15 de junio se produjo el primer enfrentamiento con víctimas mortales en 45 años, que resultó en el fallecimiento de 20 soldados indios.** China no reveló información respecto a si se habían producido

37. Staniland, Paul, *Political Violence in South Asia: The Triumph of the State?*, Carnegie Endowment for International Peace, 3 de septiembre de 2020.

víctimas mortales entre sus soldados. Los soldados se enfrentaron con palos, piedras y a puñetazos, pero no utilizaron armas de fuego. Ambas partes se acusaron mutuamente de ser las responsables de la escalada de la violencia. China señaló que soldados indios habían atravesado la Línea de Control Real y se habían involucrado en “actividades ilegales”, iniciando un ataque provocativo. Por su parte, India señaló que los enfrentamientos comenzaron durante una reunión en la que participaban centenares de soldados de ambos bandos, que inicialmente tenía el objetivo de discutir medidas de desescalada, pero durante la cual se sintieron insultados por China. Otras fuentes apuntaron a un encuentro fortuito entre patrullas de ambos países que desembocó en un gran enfrentamiento en el que participaron centenares de soldados. Tras los violentos enfrentamientos, altos mandos militares de los dos países mantuvieron reuniones in situ para tratar de rebajar la tensión, aunque se repitieron las acusaciones mutuas. El 24 de junio las partes alcanzaron un acuerdo en el marco del Mecanismo de Trabajo de Consulta y Coordinación de Asuntos Fronterizos India-China, con nuevas reuniones posteriores, que se repitieron durante julio. A finales de agosto, no obstante, India acusó a China de haber llevado a cabo movimientos militares que calificó de “provocativos” y que señaló tenían la intención de alterar la configuración de la Línea de Control Real.

Sin embargo, en septiembre, y tras una nueva escalada de la situación, tuvo lugar un encuentro de los secretarios de Defensa de los dos países en Rusia, la reunión de más alto nivel desde la reactivación de la crisis en abril. Tres días después de la reunión en Rusia se produjo una nueva escalada, con denuncias de ambas partes de disparos de advertencia, lo que suponía la violación de un acuerdo vigente durante décadas que prohibía el uso de armas de fuego en la frontera, y que de hecho había evitado su uso en los diferentes enfrentamientos a lo largo de 2020. No obstante, días después ambos Gobiernos emitieron una declaración conjunta por la que acordaban que no se produjesen nuevos enfrentamientos. En el comunicado de los secretarios de Exteriores de ambos países se recogió que tanto China como India acordaron “continuar el diálogo, retirarse lo antes posible, mantener una distancia apropiada y mitigar las tensiones”. En los meses siguientes se repitieron las conversaciones para tratar de reducir la tensión, sin que se llegara a ningún acuerdo, pero sin nuevas escaladas ni episodios de violencia.

India – Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Territorio Internacional
Actores:	India, Pakistán

Síntesis:

La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y partición de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En cuatro ocasiones (1947-1948; 1965; 1971; 1999) se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos países la soberanía sobre esta región, dividida territorialmente entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 1947 dio lugar a la actual división y frontera de *facto* entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se trasladó al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión derivó en el hasta ahora último conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera de *facto* que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de que éstos habían sido organizados en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos diplomáticos.

Persistió la situación de tensión entre India y Pakistán, que tras el grave deterioro sufrido en año 2019 después de la anulación de la autonomía de Jammu y Cachemira por parte de la India, no logró reconducirse.

Durante todo el año se reiteraron los enfrentamientos retóricos y diplomáticos y también se produjo fuego cruzado entre las Fuerzas Armadas de ambos países desplegadas a lo largo de la Línea de Control, frontera de *facto*, con intercambio de fuego todos los meses. De acuerdo con cifras recopiladas por International Crisis Group, 74 personas murieron a ambos lados de la frontera a lo largo del año como consecuencia de los disparos y ataques por parte de los Ejércitos indio y pakistaní, gran parte de ellas civiles. Además, decenas de personas resultaron heridas como consecuencia de dichos enfrentamientos, que representaban violaciones del acuerdo de alto el fuego de 2003. Los episodios más graves de violencia se produjeron en noviembre, en el que al menos 30 personas (23 de ellas civiles) murieron como consecuencia de diferentes acciones armadas. El valle de Neelum, en la Cachemira administrada por Pakistán, fue una de las zonas más afectadas por la violencia en noviembre, donde además de los fallecimientos se produjo destrucción de al menos un centenar de casas. Medios de comunicación se hicieron eco de un incremento en las violaciones al alto el fuego desde finales de 2019, especialmente aquellas relacionadas con la infiltración transfronteriza de insurgentes armados procedentes de Pakistán. Sin embargo, este país reiteró su rechazo a las acusaciones de favorecer la actividad armada de grupos insurgentes. Además de la violencia armada también se produjeron incidentes diplomáticos y en junio las misiones diplomáticas de ambos países en las respectivas capitales redujeron a la mitad su personal desplegado, en medio de acusaciones

de actos de espionaje por parte de funcionarios, así como de contactos con organizaciones terroristas. El Gobierno indio acusó a Pakistán del secuestro de dos diplomáticos que fueron retenidos de forma ilegal durante 10 horas y puestos en libertad posteriormente tras la intervención del Ministerio de Exteriores indio, según señaló este Gobierno. Pakistán afirmó que los funcionarios fueron detenidos tras haber protagonizado un atropello y darse a la fuga posteriormente. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU volvió a abordar la situación de Cachemira en agosto, la tercera ocasión desde la pérdida de autonomía de la región en 2019. El debate se produjo a petición de Pakistán, con el apoyo de China, pero sin que el debate derivara en ninguna acción concreta. En diciembre, el Gobierno indio rechazó una resolución aprobada por la Organización para la Cooperación Islámica en la que se condenaba el cambio de estatus de Jammu y Cachemira.

Asia Oriental

Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ³⁸	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia
Síntesis:	La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado “eje del mal”. Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea de Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

Se incrementó la preocupación de EEUU y otros países por el desarrollo de nuevo armamento y por el incremento sustancial de ensayos balísticos por parte de Corea del Norte. Con motivo de su discurso de fin de año, **Kim Jong-un había advertido que su país ya no se sentía vinculado a los compromisos adquiridos en materia de desnuclearización (especialmente en relación a la moratoria sobre ensayos nucleares y balísticos), que tenía la intención de fortalecer su programa armamentístico y que en breve su país presentaría una**

nueva arma estratégica. Dichas palabras de Kim Jong Un fueron ratificadas por el Gobierno norcoreano en enero durante la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas, en la que Pyongyang advirtió que jamás habría ningún proceso de desnuclearización en Corea del Norte si EEUU no retiraba sus sanciones y persistía en su política hostil hacia el país. A raíz del lanzamiento de misiles de corto alcance por parte de Corea del Norte durante varios días en el mes de marzo, los Gobiernos de Reino Unido, Bélgica, Alemania, Francia y Estonia condenaron tales ensayos, mientras que el secretario de Defensa de EEUU advirtió que Corea del Norte estaba tratando de modernizar todo su sistema de misiles. En abril, Corea del Norte llevó a cabo ejercicios de artillería y nuevos ensayos con misiles crucero y con misiles aire-tierra disparados desde aviones de combate. Además de la preocupación que durante todo el año expresaron varios gobiernos por el notable incremento de la ciberactividad en Corea del Norte, a finales de 2021 se incrementó la tensión alrededor del programa armamentístico norcoreano por dos motivos. En primer lugar, porque la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) advirtió en noviembre sobre la reanudación de la actividad nuclear en las instalaciones de Kangson. Previamente, informaciones de prensa habían alertado sobre la fabricación por parte de Pyongyang de dispositivos nucleares miniaturizados que podían ser transportados en misiles. El segundo factor de preocupación fue la presentación en octubre (durante un desfile militar conmemorativo de la fundación del Partido de los Trabajadores) de nuevos misiles balísticos intercontinentales y de misiles lanzados desde submarino no vistos hasta el momento. Poco después, **EEUU probó por primera vez el sistema de defensa antimisiles instalado en las islas Marshall.** En paralelo a estos acontecimientos, se incrementó la tensión entre China y varios países a raíz de la publicación de un informe por parte del panel de sanciones de Naciones Unidas en el que se señalaba que Corea del Norte había violado varias sanciones de Naciones Unidas en 2019 con el apoyo de la industria naviera china y, más concretamente, en la importación de petróleo refinado y la exportación de carbón por parte de Corea del Norte.

Corea, RPD – Rep. de Corea	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia
Síntesis:	Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio –por lo que técnicamente ambos países

38. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano.

permanecen en guerra– y con el establecimiento de una frontera de facto en el paralelo 38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en la frontera común entre ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental. Aunque en el año 2000 los líderes de ambos países mantuvieron una reunión histórica en la que acordaron el establecimiento de medidas de confianza, tras la llegada a la presidencia surcoreana de Lee Myung-bak en el año 2007 la tensión volvió a incrementarse significativamente y volvieron a producirse algunos enfrentamientos bélicos en la frontera. Posteriormente, la muerte de Kim Jong-il a finales de 2011, sucedido en el cargo por su hijo Kim Jong-un, así como la elección de Park Geun-hye como nueva presidenta surcoreana a finales de 2012, abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

En paralelo al deterioro de las relaciones entre EEUU y Corea del Norte acerca de la desnuclearización de la península coreana, **el llamado diálogo intercoreano no solamente no se reanudó, sino que la tensión entre Corea del Norte y del Sur escaló de manera significativa respecto de años anteriores.** Ya desde principios de año, Pyongyang había descartado cualquier reanudación de las conversaciones con Seúl acerca de una posible reunificación o de cualquier otro aspecto y, además, había pedido al presidente surcoreano, Moon Jae-in, que dejara de intentar facilitar un acercamiento entre Corea del Norte y EEUU. Sin embargo, la tensión entre ambos países alcanzó su punto más álgido de los últimos años en mayo y junio. A principios de mayo, Corea del Norte habría disparado en varias ocasiones en la llamada Zona Desmilitarizada, impactando algunos proyectiles en un puesto fronterizo surcoreano, que respondió con disparos de advertencia. Posteriormente, Corea del Norte no respondió a la petición de explicaciones por parte de Seúl ni colaboró con la investigación por parte de Naciones Unidas. Dicho incidente, el primero en la Zona Desmilitarizada desde que el Ejército norcoreano disparara contra un desertor en 2017, tuvo lugar poco después de la reaparición en público de Kim Jong-un (tras varias semanas de especulaciones acerca de su estado de salud e incluso de rumores sobre su fallecimiento). Pocos días más tarde del intercambio de fuego, Corea del Norte amenazó con represalias a Corea del Sur por unos ejercicios militares cercanos a la frontera en disputa en el Mar Amarillo. Seúl consideró que estas maniobras se llevaron a cabo en sus aguas territoriales y que no contravenían el acuerdo de 2018 en el que se establecía una zona de seguridad libre de ejercicios militares en dicha área.

A principios de junio, Pyongyang cortó todas las comunicaciones militares y políticas con Seúl (incluyendo la línea directa entre Kim Jong-un y Moon Jae-in), calificó a Corea del Sur de enemiga, rompió relaciones con sus autoridades y anunció la remilitarización de tramos de la frontera común que habían sido desmilitarizados y pacificados en virtud de los acuerdos bilaterales previos alcanzados desde el año

2018. Poco después, **Pyongyang detonó la oficina de enlace en la localidad norcoreana de Kaesong que ambos países habían establecido en 2018.** Además, el Gobierno norcoreano amenazó con desplegar tropas en las zonas fronterizas cercanas de Mount Kumgang y Kaesong. En 2018, ambos países habían empezado a dismantelar puestos militares fronterizos y a desactivar minas en la Zona Desmilitarizada, pero tales avances llegaron a su fin con la interrupción del diálogo intercoreano y de las negociaciones entre Corea del Norte y EEUU. Según la prensa, el motivo principal de las acciones de Corea del Norte fue la presunta inactividad de Seúl ante el envío de globos aerostáticos con panfletos antigubernamentales, tarjetas de memoria y comida por parte de organizaciones privadas. Algunos analistas señalaron que dicha crisis coincidía con el 20º aniversario de la primera cumbre intercoreana entre los dos máximos mandatarios de ambos países y que dio lugar a una época de distensión en la península coreana. Por su parte, Moon Jae-in instó a salvar el diálogo intercoreano y sugirió que un enviado especial tratara de desescalar tensiones, pero dicho ofrecimiento fue desestimado por parte de Corea del Norte. Seúl también se comprometió a investigar las acusaciones de Pyongyang e incluso a presentar cargos contra las mencionadas organizaciones privadas, pero a la vez dejó claro que habría una respuesta contundente ante cualquier provocación militar. A finales de junio, la prensa norcoreana destacó que Pyongyang había abandonado sus acciones militares contra Corea del Sur. Sin embargo, **en septiembre la tensión entre ambos países volvió a incrementarse tras el fallecimiento de un oficial de pesca surcoreano por disparos de un soldado norcoreano en la frontera marítima de facto entre ambos países.** Pyongyang amenazó con nuevas acciones si Corea del Sur proseguía con las operaciones navales de recuperación del cadáver, pero días más tarde se disculpó por tales disparos.

Sudeste Asiático y Oceanía

Indonesia (Papúa Occidental)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport

Síntesis:

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones

de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

En términos generales se mantuvieron los niveles de violencia derivados de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición OPM, pero la letalidad vinculada a las protestas en Papúa Occidental disminuyó drásticamente respecto del año anterior, en el que casi 60 personas murieron y miles fueron detenidas durante las manifestaciones que se registraron entre agosto y septiembre. El Gobierno no ofreció datos de mortalidad asociado al conflicto, pero según informaciones de prensa y de centros de investigación cabe estimar que alrededor de una treintena de personas fallecieron durante el año. **En julio organizaciones de la sociedad civil protestaron contra las violaciones de derechos humanos en la región y contra el asesinato de más de 200 civiles entre diciembre de 2018 y julio de 2020.** A finales de año, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre el incremento de la tensión y la violencia en la región en los últimos meses, e instó al Estado a investigar el incremento de los ataques contra civiles y contra personas defensoras de derechos humanos. En cuanto a las dinámicas bélicas del conflicto, cabe destacar especialmente la ofensiva militar que se inició en abril en respuesta a un ataque reivindicado por el OPM contra la empresa extractiva FP Freeport –una de las mayores del mundo en el sector de la minería– en el que una persona de nacionalidad neozelandesa murió y otras dos personas indonesias resultaron heridas. En plena ofensiva, el 11 de abril el OPM emitió un comunicado en el que ofrecía al Estado indonesio un alto el fuego para contener la expansión del coronavirus en la región y también en respuesta al llamamiento de Naciones Unidas para que las partes en conflicto cesaran sus acciones armadas. Sin embargo, el Gobierno no respondió a tal iniciativa. También cabe mencionar el asesinato de un destacado líder del OPM, Henking Wanmang, en agosto. En los días siguientes, el OPM declaró haber matado a varios miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en septiembre 12 policías y militares también murieron tras presuntos ataques del grupo armado, incluyendo uno perpetrado en el distrito de Nduga en el que ocho militares murieron.

En el plano político, cabe destacar las **numerosas protestas que se produjeron en varias provincias del país entre julio y diciembre en contra de la extensión del estatus de autonomía especial concedido a Papúa Occidental en 2001**, y cuya prorrogación se discutía en el Parlamento este año. En julio una coalición de organizaciones (Petitsi Rakyat Papua) exigió el fin de la autonomía especial y pidió la convocatoria de

un referéndum de autodeterminación. En agosto se registraron protestas en varias ciudades contra el Acuerdo de Nueva York de 1962, por el que Holanda (potencia colonial en la región) cedía la administración de Papúa a Indonesia. En septiembre y octubre se registraron enfrentamientos importantes entre la Policía y manifestantes, que se saldaron con la detención de más de 150 personas. En noviembre cerca de un centenar de personas también fueron detenidas durante varias protestas contra la autonomía. Por otra parte, también cabe reseñar que en diciembre el líder del Movimiento Unido de Liberación de Papúa Occidental, Benny Wenda, anunció la creación de un gobierno provisional en el exilio con sede en Londres y él como presidente, pero dicho anuncio fue rechazado por Yakarta y desconocido por otros actores que abogan por la autodeterminación de Papúa Occidental, como el OPM o el Comité Nacional para Papúa Occidental.

2.3.4. Europa

Europa Oriental

Belarús	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La exrepública soviética de Belarús alcanzó su independencia en 1991, convirtiéndose en una república presidencialista. Desde 1994 ha estado gobernada por Alexander Lukashenko, cuyos poderes presidenciales y límite de mandatos se ampliaron en referéndum en 1996 y 2004. Con una economía centralizada, heredera de la etapa soviética, y dependiente energéticamente de Rusia, Belarús ha oscilado entre relaciones de alianza estratégica con Rusia y una política de afirmación de la soberanía nacional que le ha reportado etapas de crisis con su país vecino. El régimen de autoritarismo político y de vulneración de derechos humanos ha dejado escaso margen para la oposición política y social al tiempo que ha sido motor de tensión de baja intensidad. En 2020 la reelección de Lukashenko generó movilizaciones antigubernamentales masivas.

El país fue escenario de una grave crisis política, con protestas antigubernamentales de gran escala tras la reelección del presidente Aleksander Lukashenko en unos comicios considerados fraudulentos, y una campaña de represión por parte de las autoridades que resultó en detenciones masivas y graves violaciones de derechos humanos. Tras el anuncio de la convocatoria de elecciones para agosto, sectores de la oposición expresaron su intención de presentar candidatos alternativos a Lukashenko –en la Presidencia desde 1994– e iniciaron recogidas de firmas y movilizaciones en los meses previos a los comicios. Centenares de personas fueron arrestadas en esos meses, incluyendo líderes, activistas y periodistas. Entre ellos, Serguéi

Tijanovski, conocido bloguero y que aspiraba a ser registrado como candidato, detenido en protestas a finales de mayo, y cuya esposa, Svetlana Tijanóvskaya, tomó el relevo como candidata; y Viktor Babariko, exbanquero de Gazprombank y con amplio apoyo en la recogida de firmas para su candidatura, detenido en junio. En julio la Comisión Electoral Central autorizó solo cuatro candidaturas además de la de Lukashenko, entre ellas la de Tijanóvskaya, mientras otras como la Barbariko y la del diplomático y empresario Valeri Tsepkaló fueron denegadas. Tsepkaló había marchado del país en mayo, ante una orden de detención en su contra. Ambos pasaron a dar su apoyo a la candidatura de Tijanóvskaya. Asimismo, Veronika Tsepkaló –esposa de Valeri Tsepkaló– y María Kolesnikova –jefa de campaña de Babariko– se unieron a la campaña de Tijanóvskaya. La denegación de candidatos desencadenó protestas, fuertemente reprimidas por la Policía. Amnistía Internacional denunció el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. El presidente bielorruso advirtió que estaba preparado para utilizar el Ejército si era necesario para restablecer el orden.

Los comicios se celebraron el 9 de agosto, en un contexto en que la gestión de la pandemia por parte del Gobierno –negando la existencia del coronavirus en el país– agravó el malestar de amplios sectores de la población. **Según las autoridades electorales, Lukashenko logró el 80% de los votos, seguido de Tijanóvskaya (10%), con una participación del 84% del electorado. La oposición denunció fraude y reclamó nuevos comicios.** Los resultados desencadenaron movilizaciones en Minsk y otras localidades, incluyendo Brest, Gomel, Grodno y Vitebsk. Amnistía Internacional reiteró sus denuncias sobre el uso de “violencia brutal contra protestantes pacíficos” por parte de la policía antidisturbios en las protestas tras los comicios. A su vez, Tijanóvskaya instó a la Policía y fuerzas del Ministerio de Interior a poner fin a la violencia, así como a los manifestantes a no dar motivos para la utilización de la fuerza contra ellos. Tras permanecer unas horas detenida, Tijanóvskaya huyó a Lituania en agosto y en días posteriores anunció la creación del llamado Consejo de Coordinación, con el objetivo de promover una solución pacífica a la crisis política y una transición de poder. **Lukashenko descartó celebrar nuevos comicios y la Fiscalía General abrió una causa penal contra el Consejo de Coordinación con acusaciones de intentos de tomar el poder de manera ilegal** y de tener una agenda anti-rusa. Varios de los miembros de su dirección se exiliaron en las semanas posteriores a su creación o fueron detenidos, algunos de ellos por hombres enmascarados.

Durante las semanas posteriores a las elecciones se sucedieron las movilizaciones y se prolongaron de forma casi continuada durante meses, con participación masiva de hasta cientos de miles de personas en

algunas de ellas. Fueron movilizaciones con estrategias pacíficas y de desobediencia civil no violenta por parte de los manifestantes. También se produjeron huelgas en empresas. En el conjunto de las movilizaciones destacó la elevada participación de mujeres, tanto en el nivel de liderazgo político, como en las protestas, con marchas pacíficas que multiplicaron a su vez la participación de mujeres. **Numerosas personas denunciaron tortura y malos tratos bajo custodia policial. Varios cientos resultaron heridos y varias personas fallecieron.** Varios miles de personas fueron detenidas (28.000 hasta mediados de diciembre, según algunos medios; 32.000, según Tijanóvskaya).

En octubre, el Consejo de Coordinación a través de la líder opositora Tijanóvskaya, amenazó a Lukashenko con una huelga general si no daba respuesta a tres demandas: su salida de la Presidencia, la finalización de la violencia policial contra los manifestantes y la liberación de las personas presas políticas. Además, Tijanóvskaya reclamó que unas nuevas elecciones deberían contar con observación internacional, mientras señaló en varios momentos del año que ella no se presentaría a nuevos comicios. Lukashenko no respondió al ultimátum y el 26 de octubre diversos sectores del país participaron en la convocatoria de huelga, incluyendo estudiantes y pensionistas, si bien tuvo seguimiento desigual. Según el Gobierno todas las compañías funcionaban con normalidad. Previamente, **el 10 de octubre Lukashenko se reunió con varias personas opositoras detenidas. Según medios oficiales, en la reunión se abordó**

la posibilidad de un proceso de reforma constitucional. Sectores asesores de Tijanóvskaya señalaron que había algunos contactos entre el Consejo de Coordinación y el régimen. A finales de noviembre el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunió en Minsk con Lukashenko, con el objetivo de impulsar la adopción de reformas constitucionales. Analistas señalaron el interés de Rusia en un escenario de reformas constitucionales encaminado hacia un sistema multipartidista en el que poder establecer vínculos de ascendencia sobre algunas facciones. **Un día después de la visita de Lavrov, Lukashenko afirmó que dejaría la Presidencia una vez se adoptase una nueva Constitución, si bien no ofreció un cronograma con los posibles cambios.** A principios de diciembre el presidente ruso, Vladimir Putin, instó al Gobierno y a la oposición de Belarús a resolver el conflicto por vías dialogadas y afirmó que esperaba que pudiese darse un diálogo político interno con todas las fuerzas políticas para resolver las cuestiones internas sin interferencias ni presión externa. Por su parte, a lo largo de la crisis la UE condenó las violaciones de derechos humanos, instó al diálogo para resolver la crisis e impuso tres rondas de sanciones contra altos cargos del régimen con responsabilidad en la represión de las movilizaciones,

así como contra algunos actores económicos. Sin embargo, analistas señalaron el impacto limitado de las sanciones. Por su parte, el movimiento opositor mantuvo su voluntad de no transformar la crisis interna en un conflicto geoestratégico internacional. A finales de año continuaban las protestas opositoras de forma descentralizada, aunque en menor número e intensidad, y continuaban las prácticas de represión de las autoridades. Tijanóvskaya advirtió que pasado el invierno las protestas se intensificarían de nuevo.

Rusia y Cáucaso

Rusia (norte del Cáucaso)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Identidad, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno federal ruso, gobiernos de las repúblicas de Daguestán, Chechenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)

Síntesis:

El norte del Cáucaso es escenario de diversos focos de tensión, incluyendo en forma de conflictividad armada que enfrenta a fuerzas de seguridad federales y locales, por un lado, y a actores insurgentes yihadistas, por otro. La violencia es resultado de un cúmulo de factores, incluyendo la regionalización e islamización de la insurgencia procedente de Chechenia –república escenario de dos guerras, entre 1994-1996 y entre 1999 y principios del siglo XXI–, así como del impacto de políticas de persecución contra el islam salafista, graves violaciones de derechos humanos, déficits de gobernabilidad y malestar social. A lo largo de los años se establecieron estructuras armadas locales en repúblicas como Daguestán, Chechenia, Ingushetia y Kabardino-Balkaria, conectadas regionalmente a través del llamado Emirato Caucásico. A partir de finales de 2014 diversos comandantes del norte del Cáucaso proclamaron su lealtad a ISIS, escindiéndose del Emirato Caucásico y estableciendo una rama caucásica vinculada a ISIS (Vilayat Kavkaz). Además, una parte de la insurgencia se desplazó a Siria e Iraq, uniéndose a diversos grupos armados. Los niveles de violencia han ido fluctuando en las diversas repúblicas, considerados como conflicto armado en el caso de Daguestán entre los años 2010 y 2017, y en el conjunto del norte del Cáucaso la violencia armada ha remitido en los últimos años. A la violencia armada se añaden otros ejes de tensión, como las graves violaciones de derechos humanos, especialmente contra activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes, así como las disputas en torno a cuestiones fronterizas, tensiones interétnicas, rivalidades por el poder político y violencia de corte criminal.

Continuó la tensión de baja intensidad en el norte del Cáucaso, con incidentes de violencia entre fuerzas de seguridad federales y locales e insurgentes. Durante el año, hubo al menos 40 víctimas mortales vinculadas al conflicto, según el balance del portal independiente

Caucasian Knot, en su mayoría supuestos insurgentes. Se produjeron tiroteos y enfrentamientos en el marco de operaciones de contrainsurgencia. Las autoridades llevaron a cabo operaciones y redadas y detuvieron a decenas de supuestos combatientes y presuntos simpatizantes de organizaciones armadas, incluyendo de ISIS. En octubre, diversos análisis señalaron un incremento de la conflictividad en Chechenia e Ingushetia. Ese mes, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo la primera operación antiterrorista en la república de Chechenia desde noviembre de 2018, a la que siguieron otras varias. En Ingushetia se llevó a cabo más de una decena de operaciones de ese tipo durante el año. Por otra parte, la pandemia agravó la situación socioeconómica en la región y supuso sobrecargas a la infraestructura sanitaria en la región. Hubo protestas contra las medidas de confinamiento en Osetia del Norte, con más de un millar de personas, que fueron dispersadas por la Policía y más de medio centenar de ellas arrestadas. También en Daguestán hubo protestas ciudadanas en junio contra la violencia policial contra ciudadanos que habían incumplido las restricciones relativas a la pandemia. A su vez, medios de comunicación rusos informaron que el presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, fue ingresado en mayo en Moscú por coronavirus. A finales de mes, Kadyrov confirmó que se encontraba bien de salud. Por otra parte, continuaron las denuncias sobre violaciones de derechos humanos por las autoridades locales en el norte del Cáucaso. Asimismo, 16 gobiernos de la OSCE trasladaron al organismo un comunicado en que denunciaban que Rusia no ha abordado las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades en Chechenia y constatadas en un informe elaborado por la OSCE en noviembre de 2018, en que se señalaban desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos contra la población que incluía a personas LGTBI, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes, entre otros. Los firmantes denunciaron que en Chechenia continuaba el clima de impunidad de la violencia contra esos sectores de población.

Sudeste de Europa

Turquía - Grecia, Chipre	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Territorio, Recursos, Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Turquía, Grecia, República de Chipre, autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Egipto, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia

Síntesis:

Turquía, Grecia y la República de Chipre mantienen disputas en torno a varios ejes de tensión en el Mediterráneo Oriental, con un creciente número de actores internacionales involucrados y de escenarios de conflicto entrecruzados. Las disputas incluyen, por un lado, el conflicto sobre la isla de Chipre, dividida desde la invasión turca en 1974 que siguió al intento de golpe de Estado que pretendía su unificación con Grecia y que desencadenó masivos desplazamientos de población turcochipriota y grecochipriota. La República de Chipre es reconocida internacionalmente –y miembro de la UE desde 2004–, mientras el tercio norte de la isla funciona como Estado de facto con apoyo de Turquía. El conflicto sobre el estatus de la isla lleva asociadas disputas que involucran a Turquía en torno a las fronteras marítimas de Chipre y el acceso a sus recursos naturales. A su vez, Turquía y Grecia mantienen conflictos en torno a la delimitación de fronteras marítimas, de sus zonas económicas exclusivas, sus plataformas continentales y espacio aéreo, así como sobre la soberanía de algunas islas. La tensión ha tenido expresión militarizada en diversos momentos en las últimas décadas. El descubrimiento de hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental –incluyendo en aguas en disputa– y la aproximación de cooperación energética entre diversos países (Grecia, Chipre, Egipto, Italia, Israel, entre otros) mediante mecanismos que excluyen a Turquía –con quien rivalizan en diversos ámbitos, incluyendo motivos ideológicos– ha agravado la tensión entre Ankara y dichos países en la región. La tensión se proyecta también en el conflicto armado en Libia, donde Turquía apoya al Gobierno de Acuerdo Nacional reconocido por la ONU, frente a los intentos de ampliar poder y control territorial por parte del grupo armado de Khalifa Haftar, apoyado por Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Francia, entre otros.

Se incrementó la crisis en el Mediterráneo Oriental entre Turquía y Grecia y Chipre en torno a la delimitación de las aguas territoriales y sus zonas económicas exclusivas y las prospecciones de hidrocarburos, con una creciente militarización en la zona e internacionalización del conflicto, y que se proyecta en otras disputas, como la de Libia. En enero de 2020 Grecia, Chipre, Israel, Italia, Egipto, Jordania y Palestina firmaron la carta fundacional del Foro de Gas del Mediterráneo Oriental (EMGF, por sus siglas en inglés), plataforma creada el año anterior para la promoción de cooperación gasística y la creación de un mercado regional sin contar con Turquía, y a la que Francia también solicitó ingresar. Turquía denunció el interés del EMGF en excluirla. **Durante el año Turquía continuó con su actividad de exploración de hidrocarburos en aguas consideradas de la República de Chipre** y de su zona económica exclusiva, desplegando varios buques de perforación en los primeros meses del año. La UE advirtió con sanciones e instó a la paralización de la actividad exploratoria, mientras Ankara rechazó y confrontó las advertencias de la UE. A su vez, Egipto, Grecia, Chipre y Francia (en el marco de su coordinación periódica, conocida como 3+1) y a los que se sumó Emiratos Árabes Unidos (EAU) emitieron una declaración conjunta en mayo en la que expresaron preocupación por la escalada en esta área del Mediterráneo y denunciaron las actividades

“ilegales” de Turquía en aguas de Chipre. Advirtieron también sobre una escalada de violaciones de Turquía del espacio aéreo de Grecia sobre sus aguas y se reafirmaron en su rechazo a los dos memorándums de delimitación de aguas marítimas en el Mediterráneo y de cooperación militar firmados en 2019 entre Turquía y el Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia (GAN) – actor reconocido por la ONU y combatido por el grupo armado de Khalifa Haftar, líder armado del este de Libia y apoyado por Egipto, EAU y Francia, entre otros.

A mitad de año la tensión escaló. En julio Turquía emitió una alerta naval (Navtex) sobre actividad de perforación de petróleo y gas hasta el 20 de agosto cerca de la isla griega de Kastellorizo, en aguas de Grecia disputadas por Turquía. Ese mismo mes el Ministerio de Defensa griego ordenó al Ejército pasar a situación de alerta elevada, emitió su aviso de operaciones militares y aumentó su presencia naval cerca de Kastellorizo. Si bien Grecia y Turquía se mostraron en los primeros días de agosto abiertas a iniciar conversaciones, el clima se deterioró gravemente. En esas fechas, principios de agosto, se anunció un acuerdo de demarcación parcial de las fronteras marítimas entre Grecia y Egipto –que generaba una zona económica exclusiva y derechos sobre los recursos naturales en ella, y que invalidaba el acuerdo de delimitación marítima entre Turquía y Libia de 2019. Unos días después, el 10 de agosto, Turquía envió su buque de perforación *Oruç Reis*, escoltado por barcos de guerra. Dos días después **dos barcos de guerra de Grecia y Turquía colisionaron, episodio que Turquía calificó de provocación de Grecia y fuentes de Defensa de Grecia de accidente. Grecia, Chipre y actores internacionales aliados de éstos, incluyendo a Francia, Italia y EAU llevaron a cabo ejercicios militares conjuntos en la zona ese mismo mes,** incluyendo el despliegue de dos aviones de guerra y una fragata por Francia, así como aviones de combate de EAU en Grecia. Por su parte, Turquía advirtió a Grecia de represalias si llevaba a cabo nuevas provocaciones contra el *Oruç Reis*, lanzó nuevos avisos de acción exploratoria, llevó a cabo maniobras militares navales y, en paralelo, advirtió a la UE sobre las consecuencias de otorgar apoyo incondicional a Grecia. A finales de agosto, el Ministro de Exteriores turco afirmó que si Grecia expandía sus fronteras marítimas en el mar Egeo, Turquía lo abordaría como una causa de guerra. El presidente del Consejo de la UE expresó pleno apoyo a Grecia e instó a una desescalada y a priorizar el diálogo. Además, la UE avanzó sobre un listado de sanciones contra Turquía si Ankara no se retiraba de aguas que Grecia considera suyas antes de la cumbre extraordinaria de la UE del 24 de septiembre.

Turquía retiró su buque *Oruç Reis* de la zona en septiembre. El presidente turco se mostró dispuesto al diálogo y vinculó el repliegue con dar una oportunidad a la vía diplomática, aunque condicionando el diálogo a que la UE no impusiera las sanciones anunciadas.

Por su parte, Grecia celebró la retirada del buque, mientras en paralelo anunció medidas de incremento de su Ejército, tanto en número de tropas como de compra de vehículos de guerra (aviones de combate, fragatas y helicópteros militares navales). Ambos países anunciaron la reanudación de las conversaciones directas exploratorias suspendidas en 2016 –60 rondas en 14 años– para la delimitación de la plataforma continental y la zona económica exclusiva de ambos países. La disposición al diálogo entre las partes llevó a la UE a no imponer sanciones en su cumbre de octubre –aunque advirtiendo de que usaría todos los instrumentos a su alcance para defender los intereses de sus Estados miembros–, mientras Turquía continuó descalificando a la UE. **Tras contactos de alto nivel, Grecia y Turquía acordaron el establecimiento de un mecanismo de conversaciones técnicas en el marco de la OTAN para avanzar hacia una desescalada militar y reducir el riesgo de incidentes en el Mediterráneo Oriental.**

En septiembre se llevaron a cabo varias rondas de conversaciones técnicas en la sede de la OTAN en Bruselas y en octubre se estableció formalmente el mecanismo, que incluyó una línea directa de comunicación entre Grecia y Turquía para contribuir a la desescalada en el ámbito naval y aéreo. También Alemania impulsó gestiones para reconducir el conflicto.

Pese a la apertura al diálogo y el establecimiento del mecanismo de la OTAN, las tensiones se incrementaron de nuevo en los últimos meses de 2020 en torno a varios elementos. Por una parte, Turquía continuó con su actividad de perforación. Además, se incrementó la tensión política por la visita del presidente turco a la localidad de Varosha –ciudad costera en el norte de Chipre, de la que huyó su población grecochipriota tras la invasión turca en 1974, abandonada y cerrada desde entonces y parcialmente reabierto poco antes de las elecciones turcochipriotas de octubre de 2020. En un discurso en su visita, Erdogan llamó a discutir y negociar una solución de dos Estados al conflicto por la división de Chipre –confrontando la solución de federación bizonal sobre la que ha pivotado el proceso de paz–, posición defendida también por el nuevo líder turcochipriota, Ersin Tatar. A su vez, Turquía impidió a la operación naval de la UE IRINI, el registro de un buque de carga turco sobre el que existían sospechas de transporte de armas a Libia, incrementándose la tensión entre Turquía y la UE. Bruselas impuso en diciembre sanciones a oficiales turcos y entidades involucradas en la actividad de exploración de hidrocarburos, si bien retrasó la decisión sobre medidas de presión más amplias, como embargo de armas y aranceles comerciales para establecer antes consultas con la nueva administración estadounidense.

2.3.5. Oriente Medio

Golfo

Irán	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La tensión se enmarca en un contexto político caracterizado por la polarización, desde hace décadas, entre sectores conservadores y reformistas en Irán, y por el papel clave que juegan las autoridades religiosas y los cuerpos armados –en particular la Guardia Republicana– en el devenir de Irán. La tensión interna se agudizó a mediados de 2009, cuando Ahmadinejad fue reelecto en unos comicios denunciados como fraudulentos por la oposición que motivaron las mayores protestas populares en el país desde la revolución islámica de 1979. El fin de los dos mandatos consecutivos de Ahmadinejad y la llegada al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani en 2013 parecieron abrir una nueva etapa en el país, despertando expectativas respecto a una posible reducción de la tensión política interna y sobre un eventual cambio en las relaciones de Irán con el exterior. No obstante, las tensiones internas persisten.

Aunque a nivel general persistió el clima de persecución a las voces críticas en Irán, **la tensión interna en el país se redujo en comparación a 2019, año en que se produjo la mayor convulsión interna en una década**, con multitudinarias protestas reprimidas por las fuerzas de seguridad que resultaron en la muerte de al menos 304 personas. Al comenzar 2020, Irán se vio sacudido por la noticia del asesinato del general iraní Qassem Soleimani, jefe de la brigada al-Quds de la Guardia Revolucionaria (IRGC), en un ataque estadounidense en Iraq. Tras la muerte del alto militar y en un clima de alta tensión con EEUU, **las protestas antigubernamentales se reactivaron en enero cuando la Guardia Revolucionaria admitió haber derribado accidentalmente un avión ucraniano en el que viajaban 176 civiles, en las proximidades de Teherán.**³⁹ Las manifestaciones por el derribo del avión, cuya responsabilidad había sido negada inicialmente por la IRGC, se extendieron a diferentes ciudades del país y las fuerzas de seguridad utilizaron fuego real para dispersar a los manifestantes en la capital iraní. Las autoridades enjuiciaron a una veintena de personas por su participación en estas protestas y dos destacados activistas fueron condenados a hasta cinco años de cárcel por su implicación en las protestas y mensajes en redes sobre estas movilizaciones. Paralelamente, durante 2020 organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional presentaron evidencias del uso deliberado de fuerza letal en la campaña de represión de las manifestaciones de finales de 2019 y advirtieron

39. Véase el resumen sobre Irán - EEUU, Israel en este capítulo.

sobre el arresto de más de 7.000 personas, muchas de ellas víctimas de graves vulneraciones –detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, entre otras.⁴⁰ Diversas organizaciones solicitaron una investigación independiente liderada por la ONU sobre los hechos de noviembre de 2019.⁴¹ Reforzando las demandas de rendición de cuentas, en diciembre un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU interpelló a las autoridades iraníes por masacres contra disidentes perpetradas en prisiones en 1988, advirtiendo que podrían constituir crímenes contra la humanidad y que solicitarían una investigación internacional si estas violaciones persistían en la actualidad. **Irán también continuó siendo uno de los países más activos en la aplicación de la pena de muerte y hasta noviembre había ejecutado a 233 personas**, según datos de Human Rights Watch. Respecto a las dinámicas políticas internas, cabe destacar el triunfo de las fuerzas conservadoras en las elecciones de febrero y la convocatoria a comicios presidenciales para junio de 2021.

Irán – EEUU, Israel ⁴²	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Internacional
Actores:	Irán, EEUU, Israel
Síntesis:	
Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Jomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del “eje del mal” y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, despertó expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras el inicio de negociaciones sobre el dossier nuclear iraní a fines de 2013 y la firma de un acuerdo en este ámbito a mediados de 2015. En los últimos años la retirada de EEUU del acuerdo en 2018 y la intensificación de su política de sanciones, el progresivo alejamiento de Irán de los compromisos adquiridos en el acuerdo y un convulso contexto regional han agravado la tensión y dificultaban la búsqueda de una salida a esta disputa.	

Siguiendo la tendencia del año anterior, la tensión internacional en torno al programa nuclear iraní se intensificó también en 2020, en un contexto marcado por diversos factores que expusieron los retos para mantener vigente el acuerdo nuclear –Plan Integral de Acción Conjunta, JCPOA, por sus siglas en inglés–, suscrito en 2015. Entre ellos, cabe consignar el abandono del pacto por el Gobierno de Donald Trump (en 2018) y su preferencia por una estrategia de coerción y máxima presión de EEUU sobre Irán; el progresivo distanciamiento por parte de Teherán de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo (desde 2019); una serie de incidentes que afectaron a infraestructuras, altos cargos y científicos iraníes en 2020; y diversos hechos de violencia que involucraron a fuerzas iraníes y estadounidenses –y también israelíes– en distintos puntos de Oriente Medio y que hicieron saltar las alarmas sobre el potencial de escalada de la tensión entre las partes. A este respecto, cabe destacar el **impacto desestabilizador que tuvo el asesinato los primeros días de enero del general iraní Qassem Soleimani, jefe de la brigada al-Quds de la Guardia Revolucionaria, muerto en un ataque estadounidense en Iraq**. Los funerales de Soleimani congregaron a decenas de miles de personas en la localidad iraní de Kerman, donde una estampida causó la muerte de 56 personas. La muerte de Suleimani también derivó en acciones de represalia por parte de Irán, que lanzó ataques contra posiciones estadounidenses en territorio iraquí. En enero la Guardia Revolucionaria reconoció haber derribado accidentalmente un avión civil ucraniano en las afueras de Teherán, provocando la muerte a 176 personas. A lo largo de 2020 se produjeron otros hechos de violencia y escaramuzas, principalmente en Iraq y en el Golfo Pérsico, que dejaron en evidencia la tensión entre las partes. Adicionalmente se informó de una serie de ataques y actos de sabotaje en julio contra infraestructuras vinculadas al programa atómico iraní, entre ellas las plantas de Natanz e Isfahan. En noviembre, causó especial revuelo el asesinato del principal responsable del programa nuclear iraní, una acción en la que habrían participado fuerzas israelíes, según Teherán. Paralelamente, el Gobierno de Donald Trump se afianzó en su política de sanciones contra la república islámica y aprobó una serie de medidas de esta naturaleza a lo largo del año, contra personas, empresas, científicos, bancos, compañías de transporte y de metal, proveedores de combustible y energía eléctrica, entre otros. Según International Crisis Group, en un período de dos años y medio –hasta diciembre de 2020– Washington había aprobado casi 1.500 sanciones unilaterales contra la república islámica, con dramáticas consecuencias para la economía iraní. Estas sanciones no solo se mantuvieron, sino que se intensificaron durante 2020, a pesar de que Teherán

40. Amnesty International, *Iran: Trampling Humanity - Mass Arrests, Disappearances and Torture since Iran's 2019 November Protests*, 2 de septiembre de 2020.

41. Amnesty International, *Joint call for states to mandate a UN-led inquiry into the serious human rights violations, including enforced disappearances, torture and unlawful killings during and in the aftermath of the November 2019 protests in Iran, on the occasion of the 45th session of the HRC*, 9 de septiembre de 2020.

42. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

pidió a la ONU que propiciara un levantamiento de estas medidas restrictivas para facilitar la respuesta a la pandemia de la COVID-19, que afectó severamente al país.

Adicionalmente, la república islámica continuó incurriendo en vulneraciones al acuerdo sobre el programa nuclear. A principios de año los tres Estados europeos implicados en el acuerdo –Francia, Alemania y Reino Unido, conocidos como el grupo E3– activaron el mecanismo de resolución de disputas previsto en el pacto ante los incumplimientos detectados. Pese a ello, durante una visita del representante de la política exterior de la UE a Teherán, en febrero, el presidente iraní insistió en que su país mantenía la adhesión al acuerdo y continuaría colaborando con la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA). En junio, el informe de la AIEA constató que la república islámica había continuado enriqueciendo y acumulando uranio por encima de los límites permitidos por el JCPOA y alertó sobre la falta de cooperación de Teherán para acceder a dos sitios donde se habían identificado actividades sospechosas. Los países del E3 instaron a Irán a cooperar con la AIEA y en julio se amplió el plazo para aplicar el mecanismo para la resolución de conflictos. En noviembre, nuevas informaciones de la AIEA confirmaron que Irán continuaba manteniendo reservas de uranio por encima de los umbrales acordados y que el país debía dar explicaciones sobre sitios en los que se habían identificado trazas de actividad nuclear.

Cabe destacar que en agosto Washington intentó sin éxito reactivar las sanciones de Naciones Unidas contra Irán vigentes antes del acuerdo sobre el programa nuclear de 2015, un derecho reservado para los actores signatarios del acuerdo, que EEUU abandonó. La acción generó debates en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU y evidenció la disparidad de posiciones entre EEUU y los países firmantes del acuerdo, hecho que Teherán celebró como una victoria. Coincidiendo con la expiración del embargo de armas de la ONU contra Irán, el Gobierno de Trump aprobó nuevas sanciones unilaterales contra la república islámica. Al finalizar el año, informaciones de prensa generaron cierta alarma al apuntar que Trump había considerado acciones militares contra la principal instalación atómica de Irán, alertando que no se podían descartar iniciativas del presidente contra la república islámica hasta los últimos días de su mandato. En este sentido, cabe mencionar que en febrero el Senado de EEUU aprobó una norma para prevenir que el mandatario pudiera lanzar alguna acción militar contra Irán sin autorización del Congreso.

Al finalizar 2020 las expectativas descansaban en los cambios que se podrían generar tras la llegada al poder del nuevo Gobierno de EEUU. En declaraciones previas a su elección como presidente, Joe Biden se mostró partidario de reanudar los compromisos de EEUU con el JCPOA. En diciembre, en su primera reunión en un año, los ministros de Exteriores de los países signatarios del acuerdo –Francia, Alemania, Reino Unido, China, Rusia e Irán– se mostraron partidarios de no establecer

precondiciones y dieron la bienvenida a un posible retorno de EEUU al acuerdo. Paralelamente, y en respuesta al asesinato en noviembre de un destacado científico nuclear iraní en un ataque atribuido a Israel, el Parlamento de Irán aprobó en diciembre una ley que insta al Gobierno a enriquecer uranio al 20% (según el JCPOA debería mantenerse por debajo del 4%) y a bloquear el acceso de la AIEA si en los primeros meses de 2021 no se levantaban las sanciones contra la república islámica.

Mashreq

Egipto	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

En el marco de las llamadas “revueltas árabes”, las movilizaciones populares en Egipto llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak a principios de 2011. Durante tres décadas, Mubarak había liderado un gobierno autoritario caracterizado por la acumulación de poder en torno al oficialista Partido Nacional Democrático, las Fuerzas Armadas y élites empresariales; así como por un pluralismo político artificial, con constantes denuncias de fraude en las elecciones, políticas de acoso a la oposición y la ilegalización del principal movimiento disidente, los Hermanos Musulmanes (HM). La caída del régimen de Mubarak dio paso a un escenario político inestable, en el que se hizo evidente el pulso entre sectores que exigían profundizar en los objetivos de la revuelta, los grupos islamistas que aspiraban una nueva posición de poder y el estamento militar que deseaba garantías de preservación de su influencia y privilegios en el nuevo esquema institucional. En este contexto, y tras un gobierno de transición liderado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el triunfo electoral de los HM en los comicios parlamentarios y presidenciales pareció abrir una nueva etapa en el país en 2012. Sin embargo, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, cuando cumplía su primer año de mandato, abrió nuevas interrogantes sobre el futuro del país en un contexto de persistente violencia, polarización, persecución política y de creciente control por parte de sectores militares.

El Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi continuó concentrando mayores cuotas de poder en Egipto, mientras en paralelo mantuvo sus políticas de represión y persecución a la disidencia. A lo largo del año se celebraron varias rondas de elecciones legislativas que reforzaron al mandatario. Su partido aliado, Mustaqbal Watan, obtuvo en agosto una abrumadora mayoría de escaños en el nuevo Senado, en unos comicios que contaron con una muy baja participación (15%) y que fueron boicoteados por grupos de la oposición. En diciembre los resultados finales de las elecciones para la Cámara Baja confirmaron la preeminencia de Mustaqbal Watan y de otros partidos afines a al-Sisi en el Parlamento. Pese al clima represivo, durante 2020 sectores disidentes continuaron denunciando y

expresando su rechazo al Gobierno. Así, en septiembre se registraron movilizaciones que llamaron a la renuncia del presidente. Centenares de manifestantes salieron a las calles en ciudades como El Cairo, Alejandría, Aswan, Luxor o Giza para protestar contra la corrupción, la crisis económica y la represión policial y se produjeron algunos incidentes con las fuerzas de seguridad –al menos un manifestante fallecido en Giza. Paralelamente, durante 2020 continuó el acoso a voces críticas. **Según estimaciones de grupos de derechos humanos, unas 60.000 personas permanecían encarceladas en Egipto por razones políticas**, entre ellas activistas seculares, periodistas, abogados, académicos e islamistas. Uno de los casos más notorios de 2020 se produjo en noviembre, cuando las autoridades egipcias arrestaron a tres altos cargos de la ONG Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) con acusaciones que incluían “pertenencia a grupo terrorista” y “difusión de noticias falsas”. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y organizaciones como Amnistía Internacional alertaron que las detenciones se habían realizado en represalia por una reunión de EIPR con personal diplomático en la que habían abordado la situación de los derechos humanos en el país. El caso también motivó que varios Estados expresaran su preocupación.

El Gobierno de al-Sisi continuó concentrando poder y con sus políticas de persecución a la disidencia: unas 60.000 personas permanecían encarceladas en Egipto por razones políticas, según estimaciones de grupos de derechos humanos

Organizaciones internacionales de derechos humanos también advirtieron sobre el incremento de las ejecuciones en el país. Según datos de Human Rights Watch (HRW) y del Egyptian Front for Human Rights, entre enero y octubre las autoridades egipcias habían aplicado la pena de muerte a 83 personas, 25 de las cuales con cargos vinculados a violencia política.⁴³ En la misma línea, Amnistía Internacional alertó que solo entre octubre y noviembre se ejecutaron 57 personas, cifra que casi duplica el total de ejecuciones en Egipto en todo 2019 (32 casos).⁴⁴ A lo largo del año, diversas voces alertaron también sobre las precarias condiciones de las personas detenidas en el país, agravadas en el contexto de pandemia. HRW denunció que decenas de personas encarceladas por motivos políticos murieron en custodia, incluyendo al menos 14 a causa de la COVID-19 entre marzo y julio, y que las autoridades también arrestaron a funcionarios de salud que criticaron la respuesta del Gobierno ante la pandemia. Si bien el Gobierno excarceló a casi 20.000 personas entre marzo y julio, grupos de derechos humanos informaron que la medida excluyó a los detenidos por razones políticas y que las condiciones de hacinamiento en las cárceles persistían. HRW también informó y documentó otros variados abusos, entre ellos detenciones sin juicio; acoso y arresto de familiares de egipcios y egipcias disidentes

que viven en el extranjero; acusaciones de vulneraciones a la “moral” contra mujeres populares en redes sociales y contra testigos en casos de abusos; arrestos, detenciones arbitrarias y desapariciones de opositores, incluyendo menores, por parte de las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior y de la Agencia de Seguridad Nacional; y arrestos arbitrarios, abusos y torturas a personas por razón de orientación sexual o de género. Respecto a esto último, cabe destacar que en junio de 2020 se suicidó la destacada activista feminista y por los derechos LGBTI egipcia Sarah Hegazy, exiliada en Canadá tras haber sido detenida y sometida a malos tratos durante varios meses en 2017. Pese a la situación de derechos humanos y a la intensificación de la deriva autoritaria en el país, diversos países continuaron privilegiando sus relaciones comerciales y/o estratégicas con el Gobierno egipcio y la colaboración en ámbitos como la seguridad. Así, durante 2020 trascendieron informaciones sobre cuantiosos contratos de ventas de armas por parte de países como EEUU, Francia o Italia. Finalmente, cabe mencionar que el expresidente egipcio Hosni Mubarak, que gobernó el país durante tres décadas hasta ser derrocado en 2011 en el marco de las revueltas árabes, murió en febrero en un hospital militar.

Iraq	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Interno internacionalizado Gobierno
Actores:	Gobierno, oposición política y social, Irán, EEUU

Síntesis:

La invasión internacional de Iraq liderada por EEUU en 2003 derivó en el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein y en la configuración de un nuevo sistema político. El nuevo sistema instaurado a instancias de Washington dividió el gobierno en función de líneas sectarias. En este contexto, en los últimos años ha crecido la desafección y frustración ante una clase dirigente percibida como corrupta y motivada por intereses personales y de grupos, a expensas de la calidad de vida de la ciudadanía. Así, desde 2015, se han sucedido las manifestaciones populares –protagonizadas mayoritariamente por jóvenes– que denuncian la corrupción endémica, los déficits de gobernanza, los graves problemas en la provisión de servicios, el desempleo y la falta de perspectivas de futuro. En 2019, las movilizaciones antigubernamentales masivas y la severa represión de las fuerzas de seguridad expusieron la seria crisis política que afronta el país, la falta de legitimidad de sus autoridades y los recelos ante la influencia de actores externos –y en particular a la creciente ascendencia de Irán– en los asuntos iraquíes.

43. Human Rights Watch, “Egypt: Events of 2020”, *HRW World Report 2021*, enero de 2021

44. Amnesty International, *Egypt: Chilling rise in executions reveals depth of human rights crisis*, 2 de diciembre de 2020.

El clima de contestación, las protestas antigubernamentales y los altibajos en el plano político persistieron en 2020 en Iraq, siguiendo la estela de las masivas movilizaciones contra la corrupción, el nepotismo y la mala gestión que se intensificaron a partir de octubre de 2019. Aunque las manifestaciones no fueron tan masivas como el año anterior, en parte a causa de la pandemia de la COVID-19, las movilizaciones no cesaron en 2020. **La represión de las protestas y los choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad iraquíes, incluidas milicias Unidades de Movilización Popular (PMU, pro-iraníes), habrían causado la muerte de más de un centenar de personas.** Según los datos de Human Rights Watch, al menos 560 murieron en estas circunstancias entre octubre de 2019 y finales de 2020, principalmente en Bagdad y ciudades del sur (Najaf, Kerbala, Nassiriyah) –en su mayoría en el último trimestre de 2019, en el que se contabilizaron más de 400 personas fallecidas. Los datos del centro de estudios ACLED indican que 104 personas fallecieron en 2020 en Iraq en el marco de disturbios, protestas violentas, manifestaciones pacíficas y a causa de uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad. Tras la renuncia del primer ministro Adel Abdul Mahdi a finales de 2019, en los primeros meses de 2020 hubo varias tentativas de formar gobierno que naufragaron por falta de apoyo político, mientras persistían las protestas contra las autoridades y la clase política, la represión y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Después de los intentos infructuosos de Mohammed Tawfiq Allawi –exministro, que falló por el boicot de partidos kurdos y suníes– y Adnan al Zurfi –exgobernador de Najaf, que acabó retirándose por falta de apoyo de partidos shííes–, el presidente iraquí nombró en abril al director de inteligencia, Mustafá al-Khadimi, como nuevo primer ministro. Al-Khadimi –rechazado por el grupo Kataib Hezbollah, que lo acusó de implicación en el asesinato del general iraní Qassem Soleimani en Bagdad a principios de enero⁴⁵ obtuvo el voto de confianza del Parlamento en mayo. Una de las primeras medidas del nuevo Gobierno fue reponer en su cargo de jefe de contraterrorismo al general Abdul-Wahab al-Saedi –su destitución había sido uno de los detonantes de las protestas en 2019– y estableció un comité para investigar los abusos cometidos contra los manifestantes, aunque hasta finalizar el año no se conocían resultados de su trabajo. A mediados de año las autoridades anunciaron compensaciones para las familias de las personas asesinadas durante las protestas, tratamientos médicos para las heridas y arrestos de algunos oficiales de bajo rango, pero no se informó sobre procesos a altos cargos.

Las protestas continuaron, con demandas de depuración de responsabilidades por la represión, creación de empleos, mejoras en los servicios públicos, renuncias de autoridades locales y en algunos casos derivaron en ataques contra sedes de partidos. En agosto, el asesinato

de dos activistas en Basora –incluyendo una destacada dirigente– alentó varios días de manifestaciones y ataques incendiarios a edificios gubernamentales y derivó en la destitución del gobernador, del director de la oficina de seguridad nacional y el jefe de la policía de esta provincia. En octubre, miles de personas se congregaron para conmemorar el primer aniversario de la masiva contestación popular –posteriores choques con la Policía causaron decenas de heridos– y hasta finalizar el año las movilizaciones proseguían en Bagdad y diversas ciudades. En este contexto, diversas voces alertaron sobre la persistencia de abusos y exigieron rendición de cuentas. **Un informe de la misión de la ONU en Iraq, UNAMI, y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OHCHR) concluyó a finales de agosto que, a pesar de algunas medidas prometedoras adoptadas por el nuevo Gobierno, la impunidad y los abusos en la respuesta a las manifestaciones continuaban.**⁴⁶ El documento advierte sobre un uso deliberado de la violencia para silenciar a activistas, documenta la muerte de 487 personas y heridas a 7.715, en su mayoría hombres, entre octubre de 2019 y abril de 2020 e identifica patrones de uso excesivo de la fuerza, incluyendo fuego real, contra los manifestantes. Además, estima que unas 3.000 personas habían sido detenidas en este período; alerta sobre torturas, secuestros y detenciones arbitrarias; y denuncia la imposición de restricciones a la libertad de expresión, con ataques a periodistas, redadas contra medios y cortes de internet. Coincidiendo con el informe de UNAMI y OHCHR, el balance anual de Human Rights Watch sobre la situación en Iraq hasta diciembre de 2020 alertó sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de manifestantes y lamentó que, pese a los compromisos asumidos al iniciar su mandato, el nuevo Gobierno no hubiera frenado los abusos contra los manifestantes. En su último informe periódico del año sobre la situación en Iraq, en noviembre, el secretario general de la ONU también consideró insuficientes las medidas concretas adoptadas para garantizar verdad y rendición de cuentas frente a los abusos a los derechos humanos durante a las manifestaciones.⁴⁷

Israel – Siria – Líbano	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán, EEUU

Síntesis:

La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de personas refugiadas palestinas que

45. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

46. OHCHR, *UN: Accountability for human rights violations during peaceful protests is key*, Ginebra, 27 de agosto de 2020.

47. UNSG, *Report of the secretary general on the implementation of resolution 2522 (2020)*, 10 de noviembre de 2020.

se establecieron en Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país hasta ocuparlo en 1982. El nacimiento del grupo armado chií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano, con una agenda de resistencia contra Israel y de liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala de julio de 2006. Por otra parte, la guerra de 1967 significó la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios que, junto al apoyo de Siria a Hezbollah, explica la tensión entre Israel y Siria. Desde 2011, el estallido del conflicto armado en Siria ha tenido un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa.

En consonancia con la tendencia registrada en los últimos años, **la tensión internacional histórica que involucra a Israel, Siria y Líbano –y de manera creciente a Irán y también a EEUU– continuó motivando periódicos hechos de violencia que causaron la muerte de unas 90 personas**, según recuentos informales. Como en años previos, la mayor parte de los incidentes asociados a esta disputa fueron ataques aéreos israelíes en distintos puntos del territorio sirio, incluyendo las zonas de Homs, Alepo, Quneitra y Damasco, además de incidentes en torno a los Altos del Golán ocupados. De acuerdo a las informaciones que trascendieron durante 2020, los hechos más graves se produjeron en febrero, cuando una serie de ataques israelíes causaron la muerte a 26 militares sirios y milicianos pro-iraníes en las proximidades de Damasco; en junio, cuando otra serie de ofensivas aéreas contra presuntos objetivos iraníes y pro-iraníes causaron la muerte a otras 26 personas en distintos puntos de Siria; y en noviembre, cuando otros 27 supuestos milicianos pro-iraníes fallecieron en ofensivas similares. En julio, el primer ministro israelí reconoció abiertamente que su país estaba atacando sin cesar a objetivos iraníes en Siria. Benjamin Netanyahu advirtió al presidente sirio sobre los riesgos de permitir una mayor presencia militar iraní y amenazó con nuevos ataques. Adicionalmente, en julio se informó de la muerte de un miliciano de Hezbollah en Siria y de posteriores incidentes a lo largo de la disputada frontera con Líbano, aunque no se informó de víctimas. Según Israel, sus fuerzas de seguridad dispararon contra un grupo de cinco presuntos milicianos de Hezbollah que cruzaron la zona de la Línea Azul. En agosto, el grupo shií libanés reivindicó el derribo de un avión no tripulado israelí. En noviembre, Israel aseguró haber eliminado un dron de Hezbollah que se encontraba en espacio aéreo israelí. Respecto a esto último, y como en años previos, cabe destacar que informes del secretario general de la ONU sobre la misión en Líbano (UNIFIL) alertaron sobre las continuas violaciones del espacio aéreo libanés por parte de Israel, de manera casi diaria, la mayor parte de ellas con aviones no tripulados. António Guterres expresó su preocupación por este hecho y por los indicios sobre ataques israelíes en Siria.⁴⁸

Durante el año no hubo progresos para establecer un cese el fuego permanente entre Líbano y Siria. No obstante, ambos Gobiernos anunciaron en octubre un acuerdo marco para discutir sobre la definición del límite marítimo, bajo la mediación de EEUU y con participación de la ONU a través de su Coordinador Especial para Líbano. Aunque en su momento se destacó que se trataba de los primeros contactos no relacionados con temas de seguridad en tres décadas, y de que se celebraron varias reuniones en el último trimestre, al finalizar el año fuentes vinculadas al proceso advertían sobre las distancias entre las partes. Adicionalmente, durante 2020 el Gobierno de EEUU intensificó su política de castigo y sanciones contra personas e instituciones vinculadas a Hezbollah. Además, Israel y EEUU plantearon la necesidad de cambiar el mandato de la UNIFIL, demanda que fue rechazada públicamente por el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Según trascendió, el Gobierno de Trump argumentó que el mandato de la misión debía reconsiderarse para otorgarle un papel más activo para confrontar a Hezbollah.

Líbano	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham

Síntesis:

El asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en febrero de 2005 desencadenó la llamada “Revolución del Cedro” que, tras manifestaciones masivas, forzó la retirada de las Fuerzas Armadas sirias –presentes en el país desde hacía tres décadas– exigida en la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, impulsada por EEUU y Francia en septiembre de 2004. La inmediata polarización entre, por una parte, opositores a la influencia de Siria (encabezados por el hijo de Hariri, quienes culpaban al régimen sirio del asesinato) y, por otra parte, sectores más vinculados a Siria como Hezbollah, originó una crisis política, social e institucional marcada por divisiones confesionales. En un clima de persistente división política interna, el conflicto armado que estalló en Siria en 2011 ha influido en un agravamiento de la tensión entre sectores políticos y sociales libaneses y ha favorecido un significativo incremento de la violencia en el país.

Si en 2019 Líbano fue escenario de las mayores movilizaciones antigubernamentales en una década, **en 2020 la situación en el país se agravó significativamente a causa de múltiples crisis superpuestas e interrelacionadas: un acusado deterioro de la situación económica, una crónica inestabilidad política y un**

48. UN Secretary General, *Report on the implementation of the Security Council resolution 1701 (2006)*, 14 de julio de 2020 y 12 de noviembre de 2020.

persistente malestar social, agravados a partir del primer trimestre por el impacto de la pandemia de la COVID-19 y, en agosto, por una devastadora explosión que arrasó parte de la capital, Beirut. Cabe recordar que el año se inició en medio de manifestaciones de rechazo al nuevo gabinete propuesto por el entonces primer ministro en funciones, Hassan Diab, designado en el cargo después de que las protestas de octubre de 2019 desembocaran en la renuncia del gobierno de Saad Hariri. El Parlamento dio su voto de confianza al nuevo Gobierno de Diab en febrero, en un contexto de contestación, movilizaciones periódicas y choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad que en los primeros meses del año dejaron heridas a centenares de personas y derivaron en numerosas detenciones. Los manifestantes expresaron su rechazo a un gabinete –que consideraron como parte de la élite política libanesa– y a la rampante inflación, devaluación de la moneda e incremento de la pobreza. Las manifestaciones, ataques incendiarios e incidentes persistieron a pesar de las restricciones a la movilidad impuestas para frenar la pandemia en ciudades como Beirut, Trípoli, Sidón y Tiro. En Trípoli, por ejemplo, tres días de enfrentamientos con las Fuerzas Armadas libanesas a finales de abril acabaron con la muerte de un manifestante, 77 civiles y 159 soldados heridos, según datos de la ONU. En junio y julio las protestas se intensificaron ante una depreciación de la libra libanesa que alcanzó el 85% (respecto a octubre de 2019), los crecientes cortes de electricidad (que alcanzaron hasta 22 horas diarias) y a causa del suicidio de dos hombres atribuido por sectores disconformes a la ineptitud de las autoridades para gestionar la crisis. Se produjeron ataques a bancos y algunos enfrentamientos con tintes sectarios, después de que algunos manifestantes exigieran el desarme de todas las milicias, incluyendo Hezbollah. Los incidentes de junio y julio dejaron más de un centenar de heridos y decenas de personas detenidas. El presidente Michel Aoun intentó entonces –sin éxito– activar un diálogo nacional para evitar una escalada, alertando sobre el peligroso clima de confrontación en el país. Mientras, persistía el bloqueo en las conversaciones entre el Gobierno y el FMI para negociar un plan de “rescate”.

En este contexto altamente convulso, **el 4 de agosto se produjo una enorme explosión en el puerto de Beirut que destruyó una parte importante de la ciudad, provocando la muerte de más de 200 personas, dejando heridas a 7.000 y motivando el desplazamiento forzado de 300.000.** La detonación se produjo a causa de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estuvieron almacenadas en el puerto durante seis años sin las apropiadas medidas de seguridad, ante la indolencia de las autoridades, según denunciaron diversos informes de prensa. El impacto de la explosión agravó aún más

La crisis económica, política y social que afronta Líbano se vio agravada en 2020 por la pandemia de la COVID-19 y por la devastadora explosión en el puerto de Beirut, que en agosto provocó la muerte de 200 personas y dejó heridas a otras 7.000

la crisis socioeconómica y afectó especialmente la provisión de alimentos –Líbano importa 85% de sus alimentos y el puerto era la entrada para 70% de estos suministros–, destruyó o dañó casi 200 escuelas de la ciudad y dejó inoperativos a la mitad de los centros de salud, que ya operaban al límite antes de la deflagración a causa de la pandemia. La detonación alentó masivas protestas y nuevos choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en los que resultaron heridos 700 civiles y 70 policías. Activistas denunciaron el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. El Gobierno de Diab dimitió una semana después atribuyendo la crisis a la “corrupción endémica en la clase política, la administración y el Estado” y a finales de agosto el Parlamento votó al diplomático Mustafá Adib como nuevo primer ministro. Sin embargo, Adib renunció semanas después ante la imposibilidad de conformar un gabinete, en un contexto de creciente polarización. A las pugnas entre los actores políticos libaneses se sumaron las diferencias entre actores foráneos, principalmente EEUU y Francia, sobre el papel que debía desempeñar Hezbollah en una nueva administración. El presidente galo, Emmanuel Macron, promovió una conferencia de donantes –co-liderada por la ONU– y se desplazó a Líbano para intentar presionar por reformas políticas y se mostró partidario de incorporar a Hezbollah, mientras que EEUU intensificó su campaña de presión y sanciones contra el grupo shíí. Algunos análisis sugirieron que no era el momento propicio para cuestionar el papel de Hezbollah en Líbano, ya que ello podría incrementar la polarización en el país.⁴⁹ En

este contexto, en octubre –justo un año después de ser expulsado del poder–, Saad Hariri consiguió los votos necesarios en el Parlamento para asumir nuevamente como primer ministro y, en teoría, para nombrar un gabinete tecnocrático para implementar las propuestas de reforma de la iniciativa francesa. Al finalizar el año, sin embargo, persistían las luchas de poder, Hariri no había conseguido conformar su gabinete y tanto el primer ministro como el presidente se acusaban del bloqueo político. Francia, la ONU y la UE anunciaron en diciembre un fondo de ayuda condicionado a la formación de un nuevo gobierno y de reformas políticas. Las protestas sociales, en tanto, continuaban a fines de 2020, en especial tras los anuncios de las autoridades sobre la pronta suspensión de subsidios a productos básicos. La investigación sobre la explosión de agosto señaló en diciembre al ex primer ministro Diab y otros tres ministros por su responsabilidad en los hechos, pero la evolución del proceso judicial permanecía incierta. Voces locales e internacionales abogaron en diversas ocasiones por una investigación independiente.

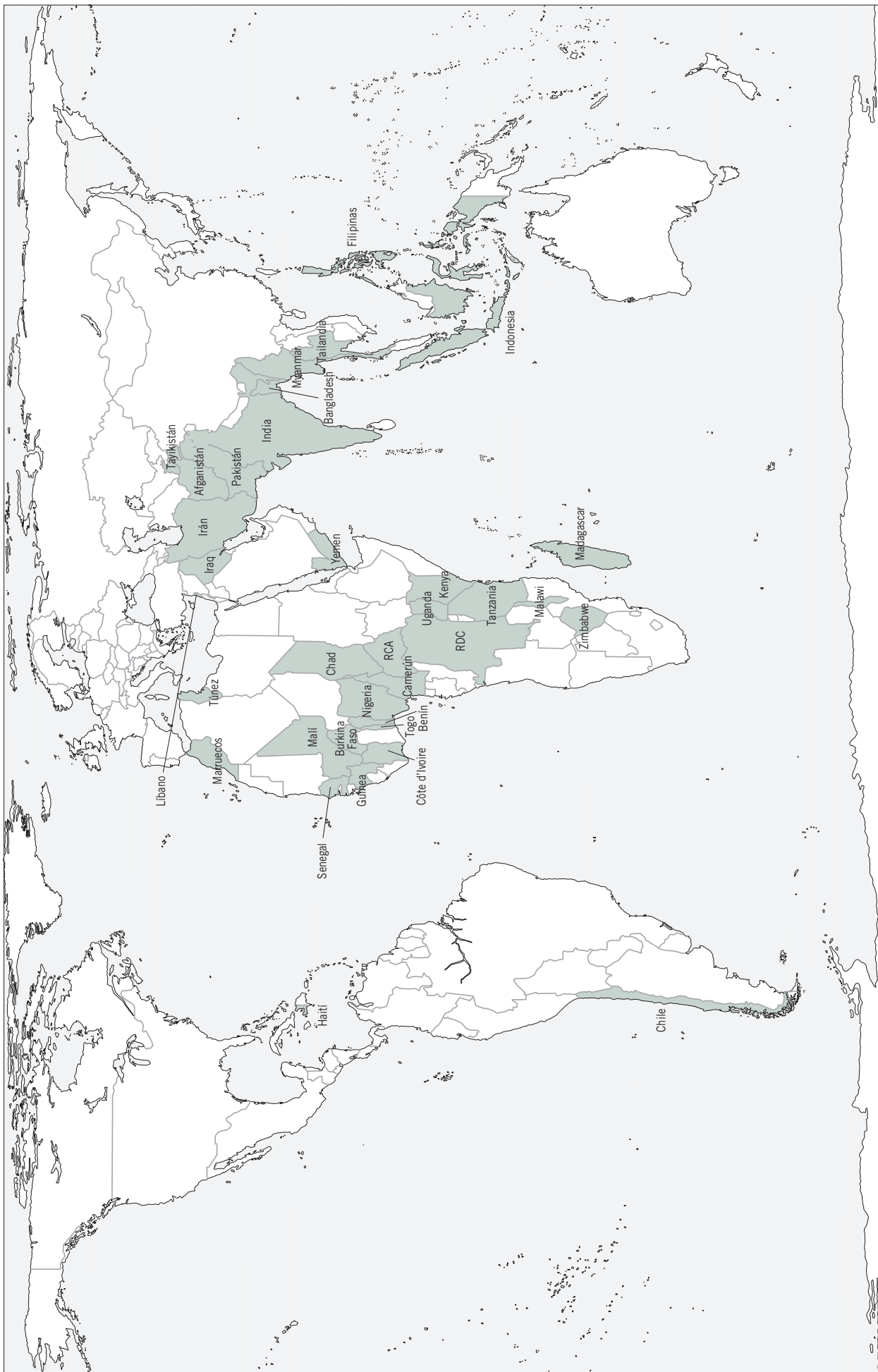
En paralelo, cabe destacar que durante 2020 también se produjeron diversos hechos de violencia vinculados

49. International Crisis Group, *Avoiding Further Polarisation in Lebanon*, Middle East and North Africa Briefing 81, 10 de noviembre de 2020.

a choques entre facciones rivales que provocaron la muerte de numerosas personas en distintos puntos del país. Además, las autoridades alertaron sobre el aumento de la criminalidad en el último año, de varios episodios violentos entre las fuerzas de seguridad y presuntos combatientes de ISIS –que dejaron una decena de fallecidos entre agosto y octubre– y también de diversos incidentes que involucraron a población siria refugiada en el país. Medios de prensa y ONG alertaron sobre crecientes tensiones entre refugiados y población libanesa, en un contexto caracterizado por la extrema precariedad de los sirios y sirias que viven en el país. Según HRW, el **78% del 1,5 millón**

de personas refugiadas sirias carecía de estatus legal y, en consecuencia, enfrentaban un alto riesgo de padecer abusos, explotación, arrestos y deportaciones. La ONG también alertó que 21 municipios libaneses introdujeron restricciones discriminatorias para población siria – no aplicables a residentes libaneses– en el marco de las medidas contra la COVID-19. Finalmente, cabe mencionar que en agosto el Tribunal Especial para Líbano condenó a un miembro de Hezbollah por su implicación en el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri en 2005 en un ataque explosivo, y que no se probó la participación de la dirigencia del grupo o de Siria en el crimen.

Mapa 3.1. Género, paz y seguridad



Países en conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos 2020

3. Género, paz y seguridad

- 20 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2020 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles medios, altos o muy altos de discriminación.
- El Secretario General de la ONU denunció que la pandemia por la COVID-19 estaba exacerbando el impacto de la violencia sexual en los conflictos, dificultándose el acceso de las víctimas a los sistemas de justicia.
- En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz recibió informes relativos a víctimas de violencia sexual cometida durante el transcurso del conflicto armado con las FARC-EP.
- En 2020 se cumplieron 20 años de la aprobación de la resolución 1325 por el Consejo de Seguridad de la ONU y 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing.
- A finales de 2020, 18 países en situación de conflicto armado contaban con un Plan de Acción Nacional sobre la resolución 1325.

El capítulo Género, paz y seguridad analiza los impactos de género de los conflictos armados y las tensiones sociopolíticas, así como la integración de la perspectiva de género en diversas iniciativas de construcción de paz en el ámbito internacional y local por parte de las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, de los Gobiernos, así como de diferentes organizaciones y movimientos de la sociedad civil locales e internacionales.¹ Además se hace un seguimiento de la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad. La perspectiva de género permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a esta construcción. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Instituciones Sociales y Género; en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Instituciones Sociales y Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

3.1. Desigualdades de género

El Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI)² es una medición de la discriminación contra las mujeres en las instituciones sociales, que refleja las leyes, normas y prácticas discriminatorias en 180 países teniendo en cuenta cinco dimensiones: la discriminación en el seno de la familia, la violencia contra las mujeres, la preferencia por hijos varones, el acceso de las mujeres a los recursos y su acceso al espacio público. Las instituciones sociales discriminatorias (normas formales e informales, actitudes y prácticas) restringen el acceso de las mujeres a los derechos, la justicia y el empoderamiento, y perpetúan las desigualdades de género en áreas como la educación, la salud, el empleo o la participación política.

1. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.

2. El SIGI es un índice elaborado por la OCDE que mide cinco subíndices integrados por 16 indicadores que incluyen: matrimonio infantil, responsabilidades en el hogar, divorcio, herencias, violencia contra las mujeres, mutilación genital femenina, autonomía reproductiva, abortos selectivos por sexo, acceso seguro a la tierra, acceso seguro a la propiedad de otros recursos, acceso seguro a servicios financieros formales, derechos laborales, derechos de ciudadanía, participación política, libertad de movimiento y acceso a la justicia. OCDE, *Social Institutions & Gender Index*, OCDE, 2019.

Tabla 3.1. Países que son escenario de conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos³

	Niveles medios de discriminación	Niveles altos de discriminación	Niveles muy altos de discriminación	Sin datos
Conflictos armados	Burkina Faso ⁴ India (2) RDC (3) Tailandia	Chad ⁵ Malí Myanmar Nigeria ⁶ RCA	Afganistán Camerún (2) ⁷ Filipinas (2) Iraq Pakistán (2) Yemen (2)	Burundi Egipto Israel ⁸ Libia Níger ⁹ Palestina ¹⁰ Siria Somalia Sudán (2) Sudán del Sur
Tensiones	Chile Haití India (6) ¹¹ Kenya RDC (4) ¹² Senegal Tailandia Tayikistán Zimbabwe	Chad Côte d'Ivoire Indonesia (2) Malawi Malí Madagascar Nigeria (2) RCA ¹³ Sri Lanka Tanzania Togo Túnez Uganda (4) ¹⁴	Bangladesh Guinea Irán (4) Iraq (2) Líbano (2) ¹⁵ Marruecos Pakistán (2)	Arabia Saudita Argelia (2) Bahrein Brunei Darussalam Burundi China (7) Corea, RPD Egipto Eritrea Gambia Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Israel (2) Kosovo Malasia Palestina ¹⁶ Sáhara Occidental Siria Somalia Sudán (4) ¹⁷ Sudán del Sur (2) ¹⁸ Taiwán Uzbekistán Venezuela

De acuerdo con el SIGI, los niveles de discriminación contra las mujeres fueron altos o muy altos en 29 países, concentrados principalmente en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este índice con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que **14 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2020 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos de discriminación, seis en países con niveles medios de discriminación y nueve conflictos armados tenían**

lugar en países sobre los que no hay datos disponibles al respecto –Burundi, Egipto, Israel, Libia, Níger, Palestina,¹⁹ Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur–. Asimismo, en otros cuatro países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles bajos (Etiopía, Mozambique, Ucrania y Turquía) o muy bajos (Colombia) de acuerdo con el SIGI. En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, **al menos 45 de las 96 tensiones activas durante el año 2020 transcurrieron en países en los que existían graves desigualdades de género (niveles**

3. Tabla elaborada a partir de los niveles de la discriminación de género del SIGI (OCDE) señaladas en el último informe disponible (2019) y de las clasificaciones de conflicto armado y tensión de la Escola de Cultura de Pau (véase capítulo 1, Conflictos armados y capítulo 2, Tensiones). El SIGI establece cinco niveles de clasificación en función del grado de discriminación: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Entre paréntesis, el número de conflictos armados o tensiones en que está involucrado dicho país.
4. Burkina Faso, Níger y Malí protagonizan un único conflicto armado, denominado Región Sahel Occidental.
5. Nigeria, Camerún, Chad y Níger protagonizan un único conflicto armado, denominado Región Lago Chad (Boko Haram).
6. Ibid.
7. Ibid. Camerún además es escenario de otro conflicto armado denominado Camerún (Ambazonia/North West y South West).
8. Israel y Palestina protagonizan un único conflicto.
9. Véase nota 5.
10. En el SIGI Palestina recibe la denominación Gaza y Cisjordania.
11. Una de las tensiones protagonizadas por la India hace referencia a la que mantiene con Pakistán y otra con China.
12. En el caso de RDC una de las tensiones es la tensión internacional denominada África Central (LRA), en la que intervienen las Fuerzas Armadas congoleesas. Véase el capítulo 2 (Tensiones).
13. La tensión de RCA hace referencia a la tensión denominada África Central (LRA). Véase el capítulo 2 (Tensiones).
14. Una de las tensiones de Uganda hace referencia a la tensión denominada África Central (LRA). Véase el capítulo 2 (Tensiones).
15. Una de las tensiones en Líbano hace referencia a la que mantiene con Israel y Siria.
16. Véase nota 11.
17. Una de las tensiones de Sudán hace referencia a la tensión denominada África Central (LRA). Véase el capítulo 2 (Tensiones).
18. Una de las tensiones de Sudán del Sur hace referencia a la tensión denominada África Central (LRA). Véase el capítulo 2 (Tensiones).
19. Véase la nota 11.

medios, altos o muy altos según el SIGI). 32 tensiones transcurrían en países sobre los que no hay datos disponibles (Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Burundi, China, Corea RPD, Egipto, Eritrea, Gambia, Palestina, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Israel, Kosovo, Sáhara Occidental, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Taiwán, Uzbekistán y Venezuela).

3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género

En este apartado se aborda la dimensión de género en el ciclo del conflicto, en especial en referencia a la violencia contra las mujeres. La perspectiva de género es una herramienta de utilidad para el análisis de los conflictos armados y las tensiones de carácter sociopolítico y que permite dar visibilidad a aspectos generalmente obviados en este análisis tanto en términos de causas como de consecuencias.

3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones

Al igual que en años anteriores, durante 2020 la violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos.²⁰ Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes, así como por medios de comunicación locales e internacionales.

En julio se celebró el **debate abierto sobre violencia sexual** que anualmente tiene lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU y que en esta ocasión fue pospuesto de abril a julio como consecuencia de la pandemia por la COVID-19.²¹ El debate estuvo promovido por Alemania y República Dominicana, países que copresiden el Grupo Informal de Expertos sobre mujeres, paz y seguridad, y los temas centrales del debate fueron

20 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar en 2020 se dieron en países donde existían niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos

la promoción de la rendición de cuentas en materia de violencia sexual y la implementación de un enfoque centrado en las personas supervivientes, en la línea de la resolución 2467, impulsada por Alemania en 2019. En el marco del debate, la representante especial del secretario general de la ONU para la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, destacó que la presencia de armas contribuye a agravar la violencia sexual en los conflictos y que esta violencia tiene lugar en contextos de militarización. En el debate participaron en representación de la sociedad civil Khin Ohmar, defensora de los derechos humanos de Myanmar, que denunció la utilización de la violencia sexual por parte de las Fuerzas Armadas de Myanmar, y también Nadia Carine Therese Fornel-Poutou, jurista de la RCA, que instó al Consejo de Seguridad a garantizar la protección de la población civil por parte de la MINUSCA. En lo que respecta al informe del secretario general, analizó la situación de 19 países, 15 de ellos en situación de conflicto:²² RCA, RDC, Burundi, Libia, Malí, Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Nigeria,²³ Colombia, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria, Yemen.

De los 19 contextos²⁴ que fueron objeto de análisis en el informe del secretario general de la ONU, doce registraron niveles elevados de intensidad durante 2020 –Libia, Malí, RDC (este), RDC (este – ADF), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)– superando en general el millar de víctimas mortales anuales y generando graves impactos en las personas y el territorio, entre los que se incluía la violencia sexual relacionada con el conflicto armado. En siete de ellos también se produjo una escalada de la violencia durante el 2020 con respecto al año anterior –Malí, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), RDC (este-ADF), Colombia, Myanmar, Yemen (al-houthistas)–. La mayoría de los actores armados identificados por el secretario general como responsables de violencia sexual en conflictos armados eran actores no estatales, algunos de los cuales habían sido incluidos en las listas de organizaciones terroristas de Naciones Unidas.

20. La ONU considera violencia sexual relacionada con los conflictos los “incidentes o pautas de violencia sexual [...], es decir, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable que se cometa contra las mujeres, los hombres, los niños o las niñas. Estos incidentes o pautas de comportamiento se producen en situaciones de conflicto o posteriores a los conflictos o en otras situaciones motivo de preocupación (por ejemplo, durante un enfrentamiento político). Además, guardan una relación directa o indirecta con el propio conflicto o enfrentamiento político, es decir, una relación temporal, geográfica o causal. Aparte del carácter internacional de los supuestos crímenes, que, dependiendo de las circunstancias, constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio u otras violaciones manifiestas de los derechos humanos, la relación con el conflicto puede ser evidente teniendo en cuenta el perfil y las motivaciones del autor, el perfil de la víctima, el clima de impunidad o la situación de colapso en que se encuentre el Estado en cuestión, las dimensiones transfronterizas o el hecho de que violen lo dispuesto en un acuerdo de cesación del fuego”. UN Action Against Sexual Violence In Conflict, *Marco analítico y conceptual de la violencia sexual en los conflictos*, noviembre de 2012.

21. Security Council Report, *What's in Blue. Conflict Related Sexual Violence: Open Debate*, Security Council Report, 16 de julio de 2020.

22. De acuerdo con la definición de conflicto armado y la clasificación recogida en este informe (véase capítulo 1, Conflictos armados).

23. Nigeria participa como actor principal en el conflicto armado Región Lago Chad (Boko Haram).

24. En algunos países recogidos en el informe del secretario general de la ONU se produjo más de un conflicto armado de acuerdo con la definición de la Escola de Cultura de Pau. El listado completo de conflictos armados en los países recogidos en el informe del secretario general es: Burundi, Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram) –incluye Nigeria–, Región Sahel Occidental (incluye Malí), RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), RDC (Kasai), Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Colombia, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria, Yemen (al-houthistas) y Yemen (AQPA).

Cuadro 3.2. Actores armados y violencia sexual en conflictos²⁵

El informe del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos publicado en junio de 2020 incluyó una lista de actores armados sobre los que pesan sospechas fundadas de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia sexual o de ser responsables de ellos en situaciones de conflicto armado, que son objeto de examen por el Consejo de Seguridad.²⁶

	AGENTES ESTATALES	AGENTES NO ESTATALES
Iraq		ISIS
Mali		MNLA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, Grupos de Autodefensa de los Tuareg Imgad y sus Aliados
Myanmar	Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw)	
RCA		LRA; Facciones de ex-Seleka: Unión por la paz en la República Centroafricana, Movimiento Patriótico por la República Centroafricana, Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana/facción gula, Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana/facción de Abdoulaye Hussein, Agrupación Patriótica para la Renovación de la República Centroafricana, Movimiento Nacional por la Liberación de la República Centroafricana, Movimiento de Libertadores Centroafricanos para la Justicia; Frente Democrático del Pueblo Centroafricano/Abdoulaye Miskine; Revolución y Justicia; Retorno, Reclamación y Rehabilitación/Abbas Sidiki; Milicias asociadas a los Grupos antibalaka
RDC	Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo; Policía Nacional Congoleesa	Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano-Janvier; Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano-Renovada; Fuerzas Democráticas Aliadas; Fuerzas para la Defensa del Congo; Milicias Bana Mura; Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda; Fuerzas de Resistencia Patrióticas de Ituri; Kamuina Nsapu; LRA; Nduma Defensa del Congo; Mai-Mai Kifufua; todas las facciones Mai-Mai Simba; Nyatura; Nduma Defensa del Congo-Renovado; Mai-Mai Raia Mutomboki; todas las milicias twa; Mai-Mai Apa Na Pale; Mai-Mai Malaika; Mai-Mai Fimbo Na Fimbo; Mai-Mai Yakutumba; Milicias lendus
Siria	Fuerzas Armadas sirias, servicios de inteligencia sirios, Fuerzas de Defensa Nacional y milicias progubernamentales	ISIS; Hay'at Tahrir Al-Sham (encabezada por Frente Al-Nusra); Ejército del Islam, Ahrar Al-Sham
Somalia	Ejército Nacional Somalí; Policía Nacional Somalí y sus milicias aliadas; Fuerzas de Puntlandia	Al-Shabaab
Sudán	Fuerzas Armadas Sudanesas; Fuerzas de Apoyo Rápido	Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Ejército de Liberación del Sudán-Abdul Wahid
Sudán del Sur	Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur; Policía Nacional de Sudán del Sur	LRA; Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición partidario de Riek Machar; Fuerzas del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición alineadas con el Vicepresidente Taban Deng
Otros casos		Boko Haram

Por otra parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, que la **pandemia por la COVID-19** estaba exacerbando el impacto de esta violencia. Como consecuencia de los confinamientos implantados para combatir el coronavirus se dificultó el acceso de las víctimas a los sistemas de justicia, incrementándose las graves barreras estructurales a la denuncia de la violencia sexual en los contextos de conflicto. Además, el secretario general advirtió del riesgo de que dejasen de priorizarse los servicios de atención a las víctimas de violencia sexual como el acceso a refugios, servicios psicosociales y de salud y se incrementase la impunidad. La pandemia no solo impactó sobre la violencia sexual en los conflictos armados, sino que incrementó el riesgo para muchas mujeres de sufrir violencia en el ámbito familiar y doméstico.

En lo que respecta a la **violencia sexual contra menores**, cuatro personas expertas en derechos de los niños y

niñas de Naciones Unidas –Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del niño; Mama Fatima Singateh, relatora especial sobre la venta y explotación sexual de los niños; Najat Maalla M'jidd, representante especial del secretario general sobre la violencia contra los menores; y Virginia Gamba, representante especial del secretario general para los niños y los conflictos armados– hicieron un llamamiento a todos los Estados miembros para reforzar la protección de los menores frente a la explotación sexual y el reclutamiento y a la ratificación universal de los instrumentos internacionales que protegen a niños y niñas de estas graves violaciones de los derechos humanos. Se trata del Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, vigente en 176 países en la actualidad y el Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados, vigente en 170 países. Ambos fueron proclamados hace 20 años. Se trata de protocolos facultativos de la Convención de los Derechos del Niño,

25. En esta tabla se utiliza la denominación de los actores armados tal y como aparece recogida en el informe del secretario general y que no necesariamente coincide con la utilizada en los capítulos 1 y 2 de este anuario.

26. Consejo de Seguridad de la ONU, *Violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del Secretario General, S/2020/48703*, junio de 2020.

que han permitido que, por ejemplo, más de 100 países hayan establecido los 18 años como edad mínima para el reclutamiento y participación en hostilidades, y más de 80 países hayan prohibido penalmente el reclutamiento de menores por las partes en un conflicto.

En **Mozambique** ACNUR expresó su preocupación por el incremento en el número de personas desplazadas en la provincia de Cabo Delgado. La agencia de Naciones Unidas señaló que algunas mujeres y niñas habían sido secuestradas y estaban siendo víctimas de matrimonios forzados, violaciones y otras formas de violencia sexual. Más de 530.000 personas estaban desplazadas en diferentes provincias del país como consecuencia de los enfrentamientos armados en el norte del país.

También en **Camerún** Naciones Unidas expresó su preocupación en febrero por la situación de la población civil, que estaba siendo víctima de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, incluyendo violaciones y otras formas de violencia sexual. Organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales también alertaron de que la violencia sexual era utilizada con frecuencia como arma de guerra en los conflictos que afectan al país (el conflicto armado en las regiones de Ambazonia/North West y South West, así como el conflicto regional que protagoniza Boko Haram y países de la región de Lago Chad).²⁷

En relación al conflicto armado en la región de **Tigray**, en **Etiopía**, la ONU alertó en diciembre de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo violencia sexual contra mujeres y niñas. La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, señaló que habían corroborado información al respecto. Bachelet también alertó de los obstáculos de comunicación y acceso a las zonas más afectadas. La situación de conflicto fue calificada de sumamente preocupante y volátil, en creciente escapada y con impactos devastadores sobre la población civil, que abarcaba víctimas mortales civiles, secuestros y violencia sexual contra mujeres, entre otros. En las primeras semanas de 2021, la representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, Pramila Patten, expresó grave preocupación por las denuncias de violencia sexual en Tigray, incluyendo un elevado número de violaciones en la capital, así como por las denuncias de personas forzadas a cometer violaciones contra sus familiares, así como por las crecientes informaciones sobre violencia sexual contra mujeres y contra niñas en campos de refugiados. La representante especial instó a todas las partes en conflicto a prohibir el uso de la violencia sexual y cesar las hostilidades en la región. Alertó también de la reducción de asistencia a las supervivientes de violencia causada por las dificultades de acceso humanitario y de recursos limitados.

ACNUR alertó en 2020 sobre informaciones relativas a secuestros, agresiones sexuales y violaciones contra mujeres y niñas en la **región de Mopti, en Malí**. Según la agencia de la ONU, se habrían registrado en torno a un millar de casos en esa región en el año 2000. Así advirtió en el marco de una alerta más amplia en diciembre sobre el incremento de la trata de menores, trabajos forzados y reclutamiento forzado de menores por grupos armados en el conjunto de Malí. ACNUR alertó de que niños y niñas estaban siendo obligados a combatir y hacían frente a la trata, a violaciones sexuales, a ser forzados a servidumbre sexual y doméstico, así como a matrimonios forzados.

En relación al conjunto del **Sahel occidental**, los actores del Área de Responsabilidad sobre Violencia de Género (GBV AoR) del llamado Global Protection Cluster (red de ONG, organizaciones internacionales, agencias de la ONU, involucradas en trabajo de protección en crisis humanitarias, incluyendo relativas a conflictos armados) alertaron del incremento de los niveles de violencia de género a causa de la pandemia de la COVID-19 y del aumento de la violencia y la inseguridad. Alertaron de los elevados niveles de matrimonio temprano y forzado en Burkina Faso y Malí; del incremento en el Sahel en 2020 del matrimonio infantil, en el contexto de incremento de inseguridad física y alimentaria; de la preocupación entre mujeres y niñas relativa a la problemática de la trata de personas y la violencia ejercida por actores armados. También alertaron del incremento en la región de en torno al 12% de los niveles de violencia en el ámbito de la pareja a causa de la pandemia de la COVID-19 y del riesgo de creciente aumento de la trata la explotación y abusos sexuales y la mutilación genital femenina. Señalaron que el Sahel central afronta los niveles más elevados de violencia de género del mundo, en un contexto afectado por crisis humanitarias, agravadas por la pandemia y la violencia. Alertaron de que pese a ello, la repuesta humanitaria en la zona continua sin priorizar la prevención y repuesta a la violencia de género.²⁸

También en **Nigeria**, en relación a los escenarios de violencia presentes en el Delta del Níger, en los estados del cinturón central (Middle Belt) y en el contexto del conflicto entre Boko Haram (BH) y los cuerpos de seguridad nigerianos, en diciembre de 2020 la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, presentó las conclusiones de la apertura del examen preliminar relativo a la situación de violaciones de derechos humanos en el país y los posibles crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en los citados escenarios. Bensouda afirmó que existe una base razonable para creer que tanto miembros de la insurgencia de BH y sus grupos escindidos, así como miembros de cuerpos de seguridad cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre los

27. Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS), Cordaid, Association Rayons de Soleil, *Policy Paper-Cameroon. Gender-Based (Sexual) Violence: An unfolding crisis*. 15 de julio de 2020

28. Gender-Based Violence AoR, Global Protection Cluster, *GBV in the Central Shale. Briefing Document for the Central Sahel Ministerial Meeting*, 20 de octubre de 2020.

que se incluyen violación; reclutamiento y alistamiento de niños menores de quince años en las Fuerzas Armadas y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades; persecución por motivos políticos y de género; y otros actos inhumanos. Además, en el caso de la insurgencia de BH también se añaden, entre otros, esclavitud sexual, incluidos embarazos y matrimonios forzados; toma de rehenes. Y en el caso de las investigaciones contra las fuerzas de seguridad, también se incluyen acusaciones de desaparición forzada y traslado forzoso de población.

3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados

A lo largo del año se produjeron diferentes iniciativas de respuesta frente a la violencia sexual en el marco de los conflictos armados, así como de lucha contra la impunidad en diferentes estamentos judiciales. A continuación se recogen algunas de ellas.

En relación a la respuesta de Naciones Unidas frente a la explotación y abusos sexuales por parte de personal que desempeña servicio bajo su mando, continuó desplegándose la estrategia impulsada por el secretario general de la ONU, António Guterres, desde 2017, que busca dar prioridad al fin de la impunidad frente a los abusos y explotación y a la dignidad de las víctimas. Según el propio secretario general se dieron avances en cuanto a alineación y coherencia de enfoques de prevención y respuesta, sensibilización y cambio de actitudes, si bien se continuaba haciendo frente a desafíos de peso. Entre los avances señalados, el establecimiento de requisitos para un marco de rendición de cuentas más sólido, que incluye que las entidades de Naciones Unidas deben presentar planes de acción obligatorios sobre medidas de prevención y respuesta. En 2019 – año objeto de estudio del informe de 2020– 50 jefes de departamento, oficinas, comisiones regionales, organismos, fondos y programas de Naciones Unidas presentaron sus planes de acción –frente a 37 y 35 planes en 2018 y 2017. Guterres también destacó que se había avanzado en la institucionalización del enfoque centrado en las víctimas, y que el protocolo de las Naciones Unidas sobre la prestación de asistencia a las víctimas de explotación y abusos sexuales –aprobado a finales de 2019 por el Grupo Directivo de Alto Nivel de la ONU sobre la prevención de la explotación y los abusos sexuales– fue desplegado sobre el terreno en 2020. No obstante, continuaban existiendo numerosos desafíos, tal como alertó Guterres. Entre ellos, y según las conclusiones del informe, la falta de servicios específicos para las víctimas. Además, en la mayoría de países en los que había desplegadas entidades de Naciones Unidas no había una figura de coordinador designado específicamente para garantizar

la implementación del enfoque centrado en las víctimas (con solo cuatro Defensores de los Derechos de las Víctimas en el terreno). Otro desafío identificado continuaba siendo el de la escasez de recursos.

La ONU siguió haciendo frente a denuncias de explotación y abusos sexuales por personal militar y civil desplegado en misiones de mantenimiento de la paz y en misiones políticas especiales. **Según los datos del informe de 2020 del secretario general, se produjo un aumento de denuncias en 2019, con 80 denuncias, frente a las 56 presentadas en 2018 y las 63 en 2017.** Del conjunto de las 80 denuncias, 24 eran relativas a abusos sexuales –la cifra más baja desde 2010, según el informe del secretario general– y 56 a explotación sexual. El 70% de las denuncias eran relativas a la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) y la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), que concentraban 41 y 15 denuncias respectivamente – en línea con 2018, en que el 74% de las denuncias hacían referencia también a ambas misiones. Otro 23% afectaba a la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS), la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), la antigua Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) y la antigua Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). El otro 7% afectaba a tres misiones políticas especiales (Oficina del Enviado Especial del Secretario General para Siria, Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau).

En **Colombia**, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió informes relativos a víctimas de violencia sexual cometida durante el transcurso del conflicto armado con las FARC-EP.²⁹ Así, víctimas de violencia sexual en Montes de María participaron en una primera audiencia virtual con la JEP para exponer sus casos. La mayoría de las mujeres fueron víctimas de violencia sexual por parte de la guerrilla de las FARC-EP y algunas por parte de miembros del Ejército Nacional y de la Policía. La Corporación Humanas y el Colectivo de Abogadas Helenita González documentaron estos casos de violencia sexual para presentar evidencias ante la JEP. Estos hechos de violencia tuvieron lugar entre 1983 hasta el 2014, aunque la mayor parte de los delitos de violencia sexual cometidos por las FARC-EP se centraron entre 1998 y 2002, y en el caso de los delitos de la Fuerza Pública estos tuvieron lugar mayoritariamente entre 2002 y 2009. Las organizaciones de derechos humanos

29. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, establecido en el acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con la finalidad de administrar justicia transicional e investigar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016.

identificaron algunos patrones en la comisión de esta violencia: el castigo a las mujeres a las que se acusaba de tener relación con alguno de los actores armados; el control de la sexualidad de las mujeres, imponiendo con quien se podía mantener relaciones sexuales; las violaciones como premio y satisfacción de las tropas; la violencia sexual como estrategia de desplazamiento forzado; y la violencia sexual para instaurar jerarquías en el interior de los grupos armados. Posteriormente, se presentaron también los testimonios de 21 víctimas de violencia sexual en diez municipios del departamento de Norte de Santander por hechos que tuvieron lugar entre 1991 y 2016, cometidos por las FARC-EP, el Ejército y la Policía Nacional. Una tercera parte de las mujeres que prestaron su testimonio eran menores de edad cuando sufrieron los abusos. Por otra parte, víctimas y organizaciones de defensoras de derechos humanos solicitaron a la JEP que abra un macroproceso sobre violencia sexual, ya que muchos de los casos investigados incluyen violencia sexual. Además, la Comisión de la Verdad siguió recopilando investigaciones de víctimas de violencia sexual, incluyendo violencia reproductiva cometida por los diferentes actores armados del conflicto a través de prácticas como la anticoncepción forzada, esterilización forzada, maternidades forzadas, embarazos forzados, abortos forzados y violencia reproductiva institucional como abortos involuntarios resultado de las aspersiones con glifosato.

En el caso de **Siria**, siete sobrevivientes de violencia sexual presentaron la primera querrela criminal por este tipo de abusos contra el régimen de Bashar al-Assad ante la fiscalía de Alemania, que ya ha iniciado varias investigaciones contra nueve altos cargos del Gobierno sirio por crímenes cometidos durante el conflicto armado. El grupo de supervivientes –cuatro mujeres y tres hombres– padecieron los abusos mientras se encontraban prisioneros en cárceles de Damasco, Alepo y Hama entre abril de 2011 y agosto de 2013. En ese período fueron víctimas o testigos de tortura y violencia sexual, incluyendo violación, descargas eléctricas en genitales y aborto forzado. La iniciativa judicial contó con el apoyo de 42 entidades sirias y organizaciones internacionales feministas, que esperan que la justicia alemana aplique el principio de justicia universal para ampliar sus investigaciones y perseguir estos abusos como crímenes contra la humanidad.

3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado

Además de la violencia sexual, los conflictos armados y las tensiones tuvieron otros graves impactos de género. La impunidad en torno a las violaciones de derechos humanos continuó siendo un elemento recurrente. El informe anual sobre **desplazamiento forzado** presentado por ACNUR, recogió los datos demográficos sobre la

población desplazada en el mundo durante 2019.³⁰ ACNUR ofreció algunos datos desagregados por sexo, señalando que el 48% de las personas refugiadas eran mujeres. En este año se registró una cifra global de 79,5 millones de personas desplazadas en el mundo, incluyendo 26 millones de personas refugiadas. Según los datos de la agencia de Naciones Unidas, en la década comprendida entre 2010 y 2019, al menos 100 millones de personas en el mundo han tenido que desplazarse de manera forzada de sus hogares, sin que la mayor parte de estas personas lograra una solución a su situación. Solo 3,9 millones de personas lograron retornar a sus lugares de origen y 1,1 millones fueron reasentados en otros Estados. Desde el año 2011 la cifra anual de personas refugiadas no ha dejado de crecer. Sin embargo, en lo que respecta a los datos de la población desplazada internamente, las mujeres representaban el 52% de esta población en las 16 de las 20 operaciones para las que ACNUR disponía de datos demográficos. En algunos contextos como Burundi o Sudán, las mujeres representaban el 65% y el 57% respectivamente. Respecto a la población apátrida, las mujeres representaban el 51%. Además, ACNUR advirtió sobre la situación de las mujeres refugiadas en el contexto de la pandemia por la COVID-19 y el incremento del riesgo de sufrir violencia de género durante las situaciones de confinamiento en las que el acceso a servicios básicos se vio notablemente reducido. Un informe de Refugees International señaló los impactos específicos que la pandemia estaba teniendo en la población refugiada, incluyendo las mujeres y las niñas.³¹ Así, se destacaba que la pandemia podría perjudicar gravemente a las niñas refugiadas debido a las restricciones impuestas a la educación presencial y las enormes dificultades para esta población para acceder a la educación a distancia. También se identificaban dificultades adicionales para las mujeres refugiadas en el acceso al mercado laboral. Como consecuencia del incremento en las tareas de cuidado que recaen sobre las mujeres fruto de los impactos de la pandemia en salud, y por otra parte, las mayores restricciones a la economía informal impuestas por los Gobiernos durante los confinamientos, las mujeres refugiadas podrían ver gravemente limitado su acceso al mercado laboral remunerado.

Diferentes organizaciones denunciaron la violencia que se produjo contra personas trans en contextos de conflicto armado y de crisis humanitarias. En Pakistán, la organización TransAction Alliance Khyber Pakhtunkhwa denunció el asesinato a tiros de la activista trans Gul Panra en Peshawar, señalando que en los últimos cinco años 1.500 personas trans han sido víctimas de violencia sexual y 68 han sido asesinadas. Human Rights Watch denunció que en 2018 se produjeron 479 ataques contra mujeres trans. En Siria, Human Rights Watch denunció que en el marco del conflicto armado se produjo violencia contra mujeres trans, percibidas como hombres gays y atacadas por su orientación

30. ACNUR, Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2019, ACNUR, junio de 2020.

31. Devon Cone, Issue Brief. Gender Matters: COVID-19's Outsized Impact on Displaced Women and Girls, Refugees International, 7 de mayo de 2020.

sexual. Estas mujeres fueron sometidas a situaciones de acoso en puestos de control militares y fueron víctimas de tortura y violencia sexual en centros de detención. Además, Human Rights Watch señaló que las víctimas no buscaron apoyo médico o psicológico en Siria, por temor a las represalias y que también enfrentaron numerosas dificultades en Líbano, lugar de destino como consecuencia de su desplazamiento forzado fruto del conflicto armado y la represión. En Guatemala, el asesinato de una persona trans demandante de asilo procedente de El Salvador puso de manifiesto la situación de violencia que sufre la población LGTBI en Centroamérica, agravada por la pandemia por la COVID-19. ACNUR hizo un llamamiento a los Estados de la región para que llevaran ante la justicia a los responsables de la violencia contra las personas trans y al respeto al derecho de asilo para quienes solicitan protección en otros Estados. Un informe de la organización Comcavis Trans señaló que la población trans en El Salvador se desplaza forzosamente en el país como consecuencia de la violencia constante y la discriminación que sufre, tanto por parte de actores armados como grupos criminales y pandillas, como por parte de la Policía y funcionariado público.³²

El experto independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género presentó su informe sobre la situación de las personas LGTBI en el contexto de la pandemia por coronavirus.³³ El experto destacó el impacto desproporcionado que esta situación estaba teniendo, con consecuencias como el aumento de la violencia en los entornos cercanos debido a la situación de confinamiento y señalando que la respuesta a la pandemia reproducía y exacerbaba los patrones de exclusión social y violencia previamente identificados contra las personas LGTBI. Además, las situaciones de violencia y discriminación a las que habitualmente se enfrentan las personas LGTBI podía llevarles a no recurrir a la asistencia sanitaria, agravándose su situación en un contexto de emergencia sanitaria como el de la pandemia. El experto advirtió también de posibles regresiones en la política de refugio y asilo, así como la intensificación de la violencia contra las personas LGTBI y de género diverso en los países de origen de las personas forzadas a desplazarse y la expansión de la COVID-19 en los campamentos para personas refugiadas, debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad en estos emplazamientos.

En toda la región del norte de África y Oriente Medio causó especial consternación el suicidio, en junio, de la activista Sarah Hegazy. Su caso expuso el acoso y persecución que padece el movimiento LGTBI en Egipto. La activista queer se había exiliado en Canadá tras sufrir una campaña de persecución contra personas homosexuales por parte del Gobierno de Abdel Fattah

al-Sisi y tras haber sido detenida en 2017 por exhibir símbolos asociados a la comunidad LGTBI. Durante los tres meses que pasó en prisión fue víctima de malos tratos. A lo largo de 2020 organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch insistieron en que el Gobierno egipcio continuaba deteniendo arbitrariamente a personas basándose en su identidad sexual o de género y denunciaron casos como la campaña de acoso contra mujeres activas en las redes sociales (*influencers*) que desembocó en el arresto de al menos una quincena de personas por cargos difusos vinculados a la “moral pública” o a la vulneración de “valores familiares”. Estimaciones apuntan que desde la llegada al poder de al-Sisi en 2013 y hasta 2017 un total de 232 personas habían sido detenidas por su orientación sexual o identidad de género. En marzo de 2020, durante el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las autoridades egipcias rechazaron las recomendaciones que instaban al país a poner fin a los arrestos y discriminaciones basados en la orientación sexual y la identidad de género.

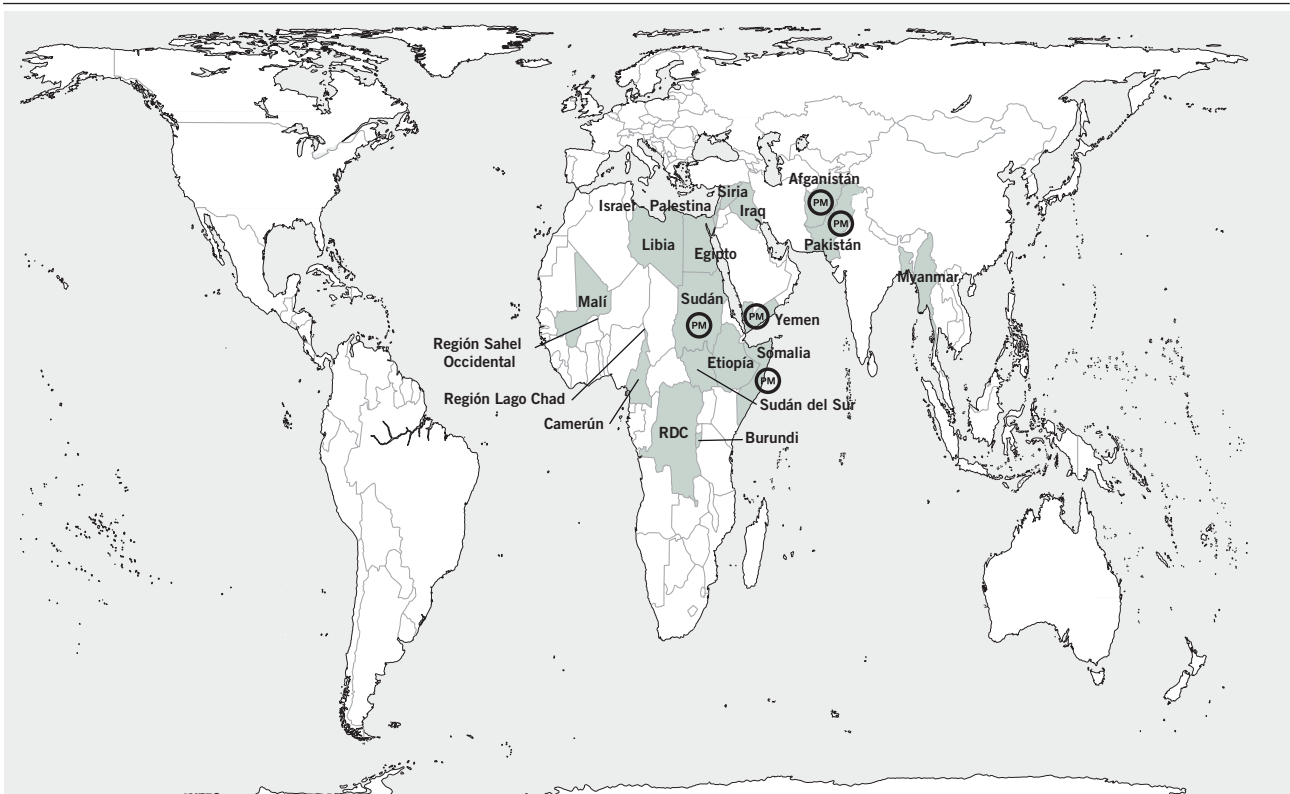
Asimismo, también es significativo reseñar, que si bien África subsahariana sigue siendo la región en la que más países criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo, o persiguen a las personas y colectivos LGTBI, se observa una tendencia hacia la despenalización. Durante 2020 se observaron dos importantes avances, con la derogación en el mes de julio en Sudán de la pena de muerte y los castigos corporales por actos consensuales entre personas de mismo sexo, y la revocación por parte del Parlamento de Gabón de la disposición criminalizadora que se había introducido en 2019. Estos avances hacia la descriminalización se unen a los conseguidos solo en la última década en Lesoto (2010), Santo Tomé y Príncipe (2012), Mozambique (2015), Seychelles (2016) o Angola y Bostwana (2019), entre otros.

Con respecto a la violencia de género en el contexto de pandemia, un ejemplo de ello fue la RCA, donde el PNUD publicó un estudio en julio en el que se constató una escalada de la violencia de género desde la puesta en marcha de las medidas para evitar la expansión de la pandemia de la COVID-19, aumento que se estimó en un 69%. A pesar de la existencia de una estrategia nacional para reducir la violencia, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina, las estadísticas empezaron a aumentar incluso antes de la pandemia, con 11.777 casos identificados en 2019, lo que supone un incremento del 174% respecto a 2014. La RCA también ostenta el segundo puesto en el ranking de desigualdad de género a nivel global, según el Índice de Desigualdad de Género del PNUD de 2019. Las mujeres, sobre todo en las áreas rurales, se ven más afectadas por la pobreza (81%) comparado con los hombres

32. COMCAVIS Trans, El desplazamiento forzado interno de la población LGTBI en El Salvador, COMCAVIS Trans, diciembre de 2019.

33. Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. *La violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y la identidad de género durante la pandemia de enfermedad coronavirus (COVID-19) A/75/258*

Mapa 3.2. Países en conflicto armado y con legislación discriminatoria contra la población LGBTI



■ Países en conflicto armado en 2020 y con legislación discriminatoria contra la población LGBTI (incluye ilegalidad de actos sexuales consensuales, barreras legales a la libertad de expresión sobre cuestiones de orientación sexual y barreras para la formación de ONG)

PM Países en conflicto armado donde está codificada la pena de muerte para la población LGBTI. (ILGA, *Homofobia de Estado*, 2021)

Fuente: Elaboración propia con datos de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2020. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2021. ILGA World: Lucas Ramón Mendos, Kellyn Botha, Rafael Carrano Lelis, Enrique López de la Peña, Iliia Savelev y Daron Tan, *Homofobia de Estado 2020: Actualización del Panorama Global de la Legislación*. Ginebra; ILGA, diciembre de 2020.

Tabla 3.3. Conflictos armados en 2020 en países con legislación discriminatoria contra la población LGBTI³⁴

ÁFRICA	ASIA	ORIENTE MEDIO
Burundi Camerún (Ambazonia/North West y South West) Etiopía Libia Malí Región Lago Chad (Boko Haram) Región Sahel Occidental RDC (este) RDC (este-ADF) Somalia Sudán (Darfur) Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) Sudán del Sur	Afganistán Myanmar Pakistán Pakistán (Baluchistan)	Egipto (Sinaí) Iraq Israel - Palestina ³⁵ Siria Yemen (al-houtistas) Yemen (AQPA)

Fuente: Elaboración propia con datos de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2020. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2021. ILGA World: Lucas Ramón Mendos, Kellyn Botha, Rafael Carrano Lelis, Enrique López de la Peña, Iliia Savelev y Daron Tan, *Homofobia de Estado 2020: Actualización del Panorama Global de la Legislación*. Ginebra; ILGA, diciembre de 2020.

34. En esta lista se incluyen aquellos países incluidos en el informe de ILGA en las categorías de Criminalización (Actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo y Actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo) y Restricción (Restricciones a la libertad de expresión en temas relacionados con orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales y Restricciones al registro u operación de organizaciones de la sociedad civil). ILGA World: Lucas Ramón Mendos, Kellyn Botha, Rafael Carrano Lelis, Enrique López de la Peña, Iliia Savelev y Daron Tan, *Homofobia de Estado 2020: Actualización del Panorama Global de la Legislación*. Ginebra; ILGA, diciembre de 2020.

35. El informe de ILGA señala la criminalización y restricción en Gaza (Palestina).

(69%), y el país ocupa el segundo puesto a nivel global en los índices de mortalidad materna a nivel global. Las medidas para mitigar la expansión de la COVID-19, como el cierre de negocios y colegios, han provocado el aumento de las cargas domésticas que soportan las mujeres y las niñas y han reducido drásticamente sus ingresos, aumentando las vulnerabilidades existentes, confinándolas a hogares que a menudo comparten con sus abusadores y limitando el acceso a apoyo y servicios de salud. Desde abril la violencia de género se incrementó en un 10%, mientras que las lesiones reportadas a mujeres y menores aumentó en un 69%, las violaciones en un 27% y otras agresiones en un 45%, según un informe de junio de la MINUSCA. Desde que se informó el primer caso de COVID-19 en el país, el 97% de las víctimas de violencia de género han sido mujeres y el 76% menores de edad. La ciberviolencia también está en aumento, según el informe, con más personas confinadas en sus hogares y pasando más tiempo en línea.

Por otra parte, otras formas de violencia de género en el marco de tensiones se dieron en casos como **Belarús**. Amnistía Internacional (AI) denunció en julio, previo a las elecciones presidenciales consideradas fraudulentas de agosto, una campaña deliberada del régimen contra mujeres activistas y familiares de opositores políticos con represalias específicas, incluyendo amenazas de uso de violencia sexual así como amenazas de retirarles la custodia de sus hijos. Amnistía Internacional también denunció que las mujeres afrontaban persecución política, intimidación, acoso y represalias, como multas desproporcionadamente altas y denegación de productos de higiene personal a las mujeres detenidas por participación en protestas. Según AI, esas prácticas de discriminación estaban alimentadas por la misoginia alentada por el Estado. Por otra parte, a lo largo de los meses de protestas, mujeres y hombres denunciaron tortura y malos tratos bajo custodia policial. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, alertó de la criminalización del trabajo de defensa de derechos humanos en Belarús, así como de la persecución específica contra mujeres defensoras de derechos humanos, incluyendo casos como Maria Rabkova, Irina Sukhiy y Marina Dubina. Además, durante la campaña electoral el presidente, Aleksandr Lukashenko, utilizó estrategias de deslegitimación de la candidata opositora Tijanóvskaia mediante estereotipos de género.

Respecto al **impacto de los conflictos armados en niños y niñas**, el secretario general de la ONU presentó su informe anual en el que recogía algunos impactos específicos de género sobre la población infantil.³⁶ El informe señaló

que se registraron 735 denuncias de violencia sexual en países como RDC, Somalia, RCA, Sudán y Sudán del Sur y se constató que se había duplicado el número de casos atribuidos a agentes estatales. La violencia sexual afectó de forma especialmente grave a las niñas. Otras violaciones a los derechos humanos de niñas y niños en contextos de conflicto armado fueron ataques a centros escolares y secuestros. Además, se advirtió de la situación de riesgo en la que se hallan niños y niñas detenidas y privadas en libertad en situaciones de conflicto, que con frecuencia son víctimas de violencia sexual y torturas.

3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género

En este apartado se analizan algunas de las iniciativas más destacadas para incorporar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de la construcción de la paz.

3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad

En 2020 se cumplieron **20 años de la aprobación de la resolución 1325 por el Consejo de Seguridad de la ONU y 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing**.³⁷ Se trataba de dos aniversarios de enorme trascendencia en el ámbito de la agenda mujeres, paz y seguridad y que debían haber servido para efectuar una evaluación de los avances y los retos pendientes en la aplicación de los compromisos adquiridos en estas dos décadas. No obstante, el impacto de la pandemia por la COVID-19 empañó ambos aniversarios, restándoles visibilidad y el debate abierto en el Consejo de Seguridad tuvo que celebrarse online. **Rusia, que ostentaba la presidencia del Consejo de Seguridad, presentó una propuesta de nueva resolución sobre mujeres, paz y seguridad que no fue aprobada al no contar con los apoyos suficientes.** La resolución recibió el voto afirmativo de China, Vietnam, Indonesia, Rusia y Sudáfrica y 10 abstenciones (Bélgica, República Dominicana, Estonia, Francia, Alemania, Níger, San Vicente y las Granadinas, Túnez, Reino Unido y EEUU). Algunos análisis apuntan a diferentes motivos detrás del rechazo a la resolución, entre ellos el hecho de que la nueva resolución no incluyera aspectos novedosos o el clima de tensión en el que se aprobaron las últimas resoluciones en 2019 (2467 y 2493),³⁸ que llevó a que muchos miembros del Consejo prefirieran la fórmula de una declaración presidencial antes que una nueva resolución para marcar el 20º aniversario.³⁹ El hecho de que la resolución estuviera

36. Los niños y los conflictos armados. Informe del Secretario General. A/74/845-S/2020/525. Asamblea General de la ONU, Consejo de Seguridad de la ONU, 9 de junio de 2019.

37. Para ampliar el análisis sobre el 20º aniversario véase Villellas Ariño, María, *20 años de implementación de la Agenda Género, Paz y Seguridad*, Apunts ECP de Conflictos i Pau nº3, Escola de Cultura de Pau, marzo de 2020.

38. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2020! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2020.

39. Security Council Report, *Women, Peace and Security: The Agenda at 20*, Research Report No.3, 2020.

centrada en aspectos socioeconómicos, sin abordar derechos no agradó a algunos miembros del Consejo y la sociedad civil señaló que se trataba de un intento de rebajar el perfil y diluir los compromisos adquiridos por los estados en el marco de la agenda.⁴⁰ Además, las enormes diferencias políticas entre los miembros del Consejo de Seguridad tampoco contribuyeron a facilitar la aprobación de la resolución, y la votación se produjo reproduciendo alianzas geoestratégicas en el ámbito internacional.

El secretario general de la ONU presentó su informe anual, que incluyó una extensa evaluación de la situación en la que se encuentra la implementación de la agenda, identificando los principales retos.⁴¹ En lo que respecta a la participación en los procesos de paz, el informe destacó que entre 1992 y 2019, el 13% de las personas que negociaron, el 6% de quienes desempeñaron tareas de mediación y el 6% de quienes firmaron acuerdos de paz eran mujeres. Siete de cada diez procesos de paz seguían sin incluir mujeres mediadoras o signatarias. Siete misiones de mantenimiento de la paz desplegadas por Naciones Unidas seguían sin contar con una figura de asesoramiento de género entre su personal. En clave de avance limitado, entre 1995 y 2019 se pasó del 14 al 22% en el porcentaje de acuerdos de paz que incluyeron disposiciones relativas a la igualdad de género. En el año 2019, en los procesos de paz facilitados o cofacilitados dirigidos o codirigidos por Naciones Unidas, el 30% de las personas integrantes de los equipos de apoyo eran mujeres. El informe también abordó otros temas de la agenda, como la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos, recogiendo que entre 2015 y 2019, al menos 102 defensoras fueron asesinadas en 26 países en los que tenían lugar conflictos armados.

En relación a los impactos de género del armamentismo a nivel internacional, el informe del secretario general destacó que **únicamente el 30% de los Planes Nacionales de Acción sobre la 1325 incluyeron la cuestión del desarme, en un contexto de creciente gasto militar mundial** –1,9 billones de dólares en 2019–. En este sentido se pronunció también la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en un informe sobre el impacto de las transferencias de armas en los derechos humanos, en el que recogió las múltiples repercusiones de género.⁴² La ACNUDH destacó que las armas de fuego no reguladas exacerban la violencia contra las mujeres y especialmente la violencia sexual, ya que muchos grupos armados utilizan armas adquiridas de forma ilícita en la perpetración de esta violencia. Además, la circulación de armas impone enormes restricciones a la movilidad y libre circulación de las mujeres en contextos de grave

inseguridad y también puede impactar en el derecho a la educación de las niñas, ya que los ataques contra centros educativos derivan en la privación de este derecho.

Más de 550 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo se dirigieron al Consejo de Seguridad con motivo del debate abierto exigiendo un firme compromiso con la participación directa y formal de las mujeres como requisito en todos los procesos de paz apoyados por la ONU.⁴³ En la carta señalaban que esta participación se podía lograr “priorizando, dotando de recursos y apoyando activamente la participación plena, igualitaria y significativa de mujeres y niñas; basando la formulación de políticas de paz y seguridad, estrategias y programas en el derecho internacional de los derechos humanos y la ley humanitaria; previniendo amenazas y violencia contra las mujeres líderes diversas, defensores de los derechos humanos y constructores de paz; haciendo que todos los actores, incluidas las Naciones Unidas y otras organizaciones regionales relevantes, rindan cuentas”.

En vísperas del vigésimo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres, la paz y la seguridad, se celebró el diálogo “20 años de participación de las mujeres africanas en la agenda de mujeres, paz y seguridad: perspectivas de la sociedad civil”. El evento fue organizado conjuntamente por 11 organizaciones de la sociedad civil en África, entre ellas: Human Sciences Research Council; Africa Institute of South Africa; Women’s International Peace Centre; Femmes Africa Solidarité (FAS); South African Women in Dialogue (SAWID); West Africa Network for Peacebuilding (WANEP); African Women in Dialogue (AfWID); African Leadership Centre; Institute for Security Studies (ISS); Training for Peace (TfP); ACCORD; y finalmente, el South Africa Department of Science and Innovation. Los objetivos de la reunión fueron escuchar las perspectivas de las mujeres sobre los avances y desafíos desde la adopción de la resolución 1325 y trazar nuevos caminos para las mujeres en África en el ámbito de la paz y la seguridad. La reunión se centró en cuatro temas: prevención y protección, mediación, mantenimiento de la paz y reconstrucción y consolidación de la paz después de los conflictos. Durante el debate plenario, Pravina Makaan-Lakha de ACCORD, se refirió al balance desigual de resultados emergentes. Por ejemplo, en el sur del continente, aunque hay una creciente representación femenina en los parlamentos, este progreso no se está traduciendo en realidades en la comunidad, ya que los países siguen recibiendo clasificaciones deficientes en términos del Índice de Desigualdad de Género. Para ilustrar, en enero de 2019, el 46,8% del parlamento

40. NGO Working Group on Women, Peace and Security, *Security Council members unite to protect the Women, Peace and Security agenda on its 20th anniversary*, 30 de octubre de 2020.

41. Las mujeres y la paz y la seguridad. Secretario General de la ONU, S/2020/946, Consejo de Seguridad de la ONU, 25 de septiembre de 2020.

42. ACNUDH, *Repercusiones de las transferencias de armas en los derechos humanos. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/44/29*, 19 de junio de 2020.

43. NGO Working Group on Women, Peace and Security, 2020 Open Letter to Permanent Representatives to the United Nations on the occasion of the 20th anniversary of Resolution 1325 (2000), octubre de 2020.

Tabla 3.4. Planes de Acción Nacional sobre la 1325 en países en situación de conflicto armado

Conflictos en países con NAP 1325	
Burundi (2011)*	Sudán (Kordofan Sur y Nilo Azul) (2020)
Camerún (Ambazonia/North West y South West) (2017)	Sudán del Sur (2015)
Malí (2012)	Afganistán (2015)
Mozambique (2019)	Filipinas (NPA) (2009)
Región Lago Chad (Boko Haram): Nigeria (2013), Camerún (2017), Níger (2016)	Filipinas (Mindanao) (2009)
Región Sahel Occidental: Burkina Faso (2012), Malí (2012), Níger (2016)	Ucrania (2016)
RCA (2014)	Iraq (2014)
RDC (este) (2010)	Israel-Palestina: Palestina (2015)
RDC (este ADF) (2010)	Yemen (al-houthistas) (2019)
Sudán (Darfur) (2020)	Yemen (AQPA) (2019)
Conflictos en países sin NAP 1325	
Etiopía (Tigray)	Pakistán
Libia	Pakistán (Baluchistán)
Región Lago Chad (Boko Haram): Chad	Tailandia (sur)
Somalia	Turquía (sudeste)
Colombia	Egipto (Sinaí)
India (Jammu y Cachemira)	Israel-Palestina: Israel
India (CPI-M)	Siria
Myanmar	

*Entre paréntesis año de aprobación del PAN

de Sudáfrica eran mujeres, sin embargo, el país ocupó el puesto 97 en el Índice de Desigualdad de Género. Además, en lo que respecta a la mediación en África, de los 16 acuerdos de paz firmados entre 1992 y 2011, solo dos incluyeron mujeres como signatarias y solo tres incluyeron mujeres como mediadoras principales. Pravina Makan-Lakha agregó que, más recientemente, las mujeres de Libia, RCA, Sudán y Sudán del Sur se han enfrentado a numerosos obstáculos, así como a una resistencia abierta, a las demandas de su participación en los procesos de paz

Con respecto a los planes de acción nacional sobre la 1325, cabe destacar que el Gobierno de Chipre aprobó el primer Plan de Acción Nacional del país para la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata de un plan de cinco años (2021-2025) con cuatro pilares principales: participación y empoderamiento, protección, prevención y promoción e información de la Resolución 1325. El principal objetivo del plan es la identificación de los impactos desproporcionados del conflicto armado en las mujeres, así como la prevención y resolución de conflictos a través de las experiencias de las mujeres. El Plan de Acción Nacional de Chipre ha sido preparado por la Oficina del Comisionado para la Igualdad de Género, en cooperación con el Ministerio de Exteriores, así como con otros ministerios y servicios gubernamentales y con participación de organizaciones de la sociedad civil. A lo largo del proceso ha habido diversos espacios de participación. En el proceso de preparación hubo participación de organizaciones de la sociedad civil,

A finales de 2020, 18 países en situación de conflicto armado contaban con un Plan de Acción Nacional sobre la resolución 1325

algunas de cuyas aportaciones quedaron incorporadas al borrador, según informó la Oficina del Comisionado para la Igualdad de Género en junio de 2019. A su vez, en febrero de 2020 se abrió un mes de consultas sobre el borrador, durante el cual organizaciones de la sociedad civil podían remitir sugerencias y opiniones. Inicialmente el plan estaba previsto para el período 2020-2024. Además de Chipre, durante 2020 también aprobaron Planes de Acción Nacional otros cinco países: Malta, Eslovaquia, Letonia, Sudáfrica y Sudán.

El informe del secretario general señala que en junio de 2020 solo el 24% de los planes NAP en vigor tenían un presupuesto asignado (20 planes).

A finales de 2020, 18 países en situación de conflicto armado contaban con un Plan de Acción Nacional sobre la resolución 1325, 11 de ellos en África (Burundi, Camerún, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, Burkina Faso, RCA, RDC, Sudán y Sudán del

Sur). Asia era la región con menos países en conflicto con Planes Nacionales de Acción aprobados, ya que únicamente Afganistán y Filipinas contaban con uno.

Por otra parte, **el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en 2020 la resolución 2538 sobre mantenimiento de la paz, centrada en la participación de las mujeres en estas misiones. Se trata de la primera resolución centrada de forma exclusiva en las mujeres y el mantenimiento de la paz** y fue promovida por el Gobierno de Indonesia. La resolución, que no se aprobó bajo el paraguas de la agenda mujeres, paz y seguridad, hace un llamamiento a los estados, Naciones Unidas y organizaciones regionales

para que promuevan la participación plena, efectiva y significativa de las mujeres de las fuerzas de seguridad y civiles en las operaciones de mantenimiento de la paz. Además, de manera específica demanda a los Estados miembros que formulen estrategias y medidas para aumentar el despliegue de mujeres integrantes de las fuerzas de seguridad. Las últimas estadísticas disponibles en materia de participación de mujeres en las fuerzas de mantenimiento de la paz señalaban que las mujeres representaban el 7%, aunque si se diferencia entre fuerzas policiales y militares se aprecian notables diferencias, ya que las mujeres constituyen el 17,5% de las fuerzas policiales desplegadas en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU y el 5,7% de las militares. Algunos análisis apuntaron a un cambio de lenguaje importante en esta resolución, que no centraba la justificación en la participación de las mujeres en las misiones en sus supuestas capacidades para contrarrestar los efectos negativos de la participación masculina en términos de abusos y explotación sexual. En los últimos años se ha aludido a estereotipos esencializadores de las mujeres para argumentar las contribuciones de las mujeres a la efectividad operativa de las misiones. Así, se situaba sobre ellas la responsabilidad de reducir el impacto de la violencia sexual en la población civil. Sin embargo, esta resolución, como consecuencia de las presiones de algunos estados, finalmente no incluyó este tipo de lenguaje en su texto.

Cuatro mujeres formaron parte de la delegación negociadora gubernamental en el proceso de diálogo intraafgano entre el Gobierno y los talibanes

de EEUU y los talibanes alcanzaron un acuerdo de paz después de un proceso de negociaciones que tuvo lugar sin participación de mujeres.⁴⁵ El acuerdo de paz no incluyó ninguna mención explícita a la agenda mujeres, paz y seguridad, a los derechos de las mujeres o a la igualdad de género a pesar de que tanto el Plan de Acción Nacional de EEUU del año 2016 como la Women, Peace, and Security Act (con rango de ley) establecen que se debe promover esta participación en los procesos de paz. El acuerdo de paz entre EEUU y los talibanes abrió la puerta al inicio de un proceso de diálogo intraafgano en el que sí participaron algunas mujeres. El equipo negociador gubernamental, encabezado por Masum Stanekzai, estaba integrado por personas que representan diferentes facciones políticas y señores de la guerra del país, reflejando al mismo tiempo diversidad étnica y geográfica. Cuatro mujeres forman parte del equipo: Fawzia Kufi, Fatema Gailani, Habiba Sarabi y Sharifa Zurmati. Por parte talibán el equipo negociador, liderado por Abdul Hakim, era enteramente masculino. Organizaciones de mujeres de la sociedad civil expresaron sus demandas con respecto a las negociaciones de paz.⁴⁶ Cabe destacar que en julio el Consejo de Seguridad de la ONU acogió una sesión de fórmula Arria⁴⁷ sobre la participación de las mujeres en el proceso de paz en Afganistán que contó con la participación de líderes políticas y de la sociedad civil afgana.

3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz⁴⁴

Varios procesos de paz fueron relevantes desde un punto de vista de género durante el año 2019. Organizaciones de mujeres reclamaron una mayor participación en diferentes negociaciones en todo el mundo así como la inclusión de agendas de género. Sin embargo, en la mayoría de los procesos negociadores no se pusieron en marcha transformaciones de calado para incluir la participación de las mujeres de forma significativa.

Afganistán

El proceso de paz en Afganistán experimentó importantes avances durante el año 2020. En febrero el Gobierno

Colombia

En lo que respecta al enfoque de género en el proceso de paz, cabe destacar que este continuó formando parte de manera transversal de todo el proceso de implementación. El Instituto Kroc presentó su informe de seguimiento a la implementación del enfoque de género en el acuerdo de paz, constatando que todavía existe una brecha con respecto a las disposiciones de género del acuerdo, cuyo grado de implementación es menor que el del acuerdo en su conjunto. Los principales avances se dieron en los procesos que permitieron la participación de mujeres, población LGTBI e indígena en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, aunque en otros puntos del acuerdo no se produjeron tantos avances, como en el de participación. Especialmente grave fue la situación con

44. Para una información más exhaustiva sobre la integración de la perspectiva de género en los procesos de paz actualmente activos, puede consultarse en el anuario de la Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*. Icaria editorial, 2021.

45. Véase Jorrit Kamminga, Lotje Boswinkel y Tamara Göth, *Because She Matters*, Oxfam International, Cordaid and Association for Inclusive Peace, septiembre de 2020 y María Vilellas Ariño, *Las negociaciones de paz en Afganistán en un año decisivo*, Apunts ECP de conflictes i pau nº8, noviembre de 2020.

46. Véase el resumen sobre Afganistán en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*. Icaria editorial, 2021.

47. Según el manual de métodos de trabajo del Consejo de Seguridad “Las reuniones celebradas con arreglo a la «fórmula Arria», de carácter muy oficioso, permiten a los miembros del Consejo de Seguridad cambiar impresiones de manera franca y confidencial, en un marco flexible en materia de procedimiento, con personas a las que, en opinión del miembro o miembros del Consejo que cursan la invitación (quienes también actúan como moderadores u organizadores) resultaría interesante escuchar o a quienes podrían desear transmitir un mensaje. Estas reuniones ofrecen a los miembros del Consejo que estén interesados la oportunidad de participar en un diálogo directo con los altos representantes de los gobiernos y las organizaciones internacionales, a menudo previa solicitud de estos últimos, así como con las partes no estatales, sobre cuestiones que les afectan y que están comprendidas en el ámbito de responsabilidad del Consejo de Seguridad.

respecto a las garantías de seguridad y protección dadas las numerosas amenazas y agresiones contra defensoras de derechos humanos y lideresas. La plataforma de organizaciones de la sociedad civil GPAZ también evaluó la implementación del enfoque de género constatando la desaceleración de la implementación.⁴⁸ Además, en paralelo, otras instituciones vinculadas al acuerdo de paz prosiguieron su trabajo. Cabe remarcar varias iniciativas que tuvieron lugar en el marco del trabajo de la Comisión de la Verdad, como el espacio de escucha sobre la violencia reproductiva en el conflicto armado en el que se recogieron testimonios de las víctimas de esta violencia reconocida como una práctica sistemática en el marco del conflicto armado y perpetrada tanto por las FARC como por la fuerza pública. Además, también se produjo la entrega por parte de la Fundación Círculo de Estudios del informe “Derecho de Voz: informe sobre 479 casos de violencia sexual por motivo del conflicto armado en Colombia”. Además, organizaciones de mujeres exigieron que la Jurisdicción Especial para la Paz abra un macro proceso por los casos de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado.

Malí

El Centro Carter, organismo independiente encargado de monitorizar la implementación del Acuerdo de Paz de Argel de 2015, constató que tanto el Comité de Seguimiento del Acuerdo (CSA) como diversos socios internacionales han avanzado en tratar de promover de manera activa la participación de las mujeres en los órganos de seguimiento del acuerdo de paz. Durante las sesiones del CSA realizadas en junio y noviembre de 2020, nueve mujeres (tres por cada parte signataria) participaron, lo cual representa un progreso real con respecto a la composición anterior del CSA. Sin embargo, el Centro Carter señaló que aún queda pendiente la inclusión de mujeres en los cuatro subcomités y los demás órganos de ejecución, así como la creación de los Observatorios de la Mujer en las regiones norteñas del país.

Libia

Durante 2020, el proceso de negociación en el país norteafricano ilustró los retos para la participación de las mujeres. El componente político de las negociaciones promovidas por la ONU, el llamado Libyan Political Dialogue Forum (LPDF), inició su trabajo formalmente en noviembre, aunque estuvo precedido de consultas en las que mujeres, jóvenes y grupos de la sociedad civil pudieron plantear algunas recomendaciones. El LPDF pasó a estar integrado por 75 representantes, 17 de los cuales mujeres (23%). Las 17 integrantes del LPDF emitieron una declaración conjunta en la que plantearon sugerencias para mejorar e incrementar la participación de las mujeres en el proceso político y exigieron que las mujeres representaran un mínimo del 30% en las posiciones de liderazgo en la nueva autoridad ejecutiva

que emanara de las negociaciones y que una mujer ocupara uno de los dos puestos de viceprimer ministro. En su comunicado reivindicaron la resolución 1325 de Naciones Unidas y también enfatizaron la importancia del respeto a los derechos de las mujeres, las medidas para combatir la discriminación contra las mujeres –en especial de las supervivientes de la violencia asociada al conflicto–, la provisión de servicios de apoyo legal y psicosocial a las supervivientes de violencia de género y la protección de mujeres activistas y que desempeñan tareas en el ámbito político. En esta línea, ONU Mujeres alertó sobre las amenazas y riesgos personales asumidos por las propias mujeres participantes en el LPDF y exigió que se adoptaran medidas para garantizar su protección y participación en el proceso.

Yemen

Durante 2020 organizaciones de mujeres yemeníes reiteraron sus demandas de inclusión en las negociaciones para abordar los conflictos que afectan al país. Tras la aprobación del Plan de Acción Nacional para la implementación de la resolución 1325 en diciembre de 2019 –aunque presentado formalmente en mayo de 2020 por el Gobierno internacionalmente reconocido del país de Abdo Rabbo Mansour Hadi–, activistas y organizaciones criticaron algunos aspectos del texto y el proceso de aprobación, pero valoraron positivamente el compromiso explícito para la inclusión de un 30% de mujeres en las negociaciones de paz e instaron a su puesta en práctica. A lo largo del año, plataformas como el “Grupo de las Nueve”, integrado por nueve entidades de mujeres y jóvenes de la sociedad civil, insistieron en la necesidad de un proceso de paz inclusivo y exigieron a todas las partes contendientes que se comprometieran de manera efectiva con un cese el fuego, en sintonía con el llamamiento del secretario general de la ONU que instó a una tregua global para centrar esfuerzos en la respuesta a la pandemia. Desde abril, el enviado especial de la ONU para Yemen intentó negociar una declaración conjunta con el Gobierno internacionalmente reconocido y con los al-houthistas, con foco en un cese el fuego, medidas humanitarias y la reactivación del proceso político. Entidades como Peace Track Initiative alertaron en julio que la sociedad civil, incluyendo mujeres y jóvenes, no estaba siendo consultada en este proceso. Paralelamente, redes como la Women Solidarity Network plantearon propuestas concretas para un cese el fuego en la provincia de Maarib, escenario de un incremento de las hostilidades desde el primer trimestre de 2020. Al finalizar el año, tras la formación de un gobierno de unidad entre las fuerzas de Hadi y sectores secesionistas del sur, en el marco de la implementación del Acuerdo de Riad, grupos de mujeres criticaron que el nuevo Ejecutivo estuviera integrado exclusivamente por hombres. Denunciaron la marginación de las mujeres y recordaron las conclusiones de la Conferencia de Diálogo Nacional

48. GPAZ, *La paz avanza con las mujeres. Observaciones sobre la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz, GPAZ – 2019, GPAZ, 2020.*

(2013-14), que entre sus conclusiones incluyó una participación mínima del 30% de mujeres en todos los espacios de decisión.

UE

El nuevo documento guía de la Unión Europea en el ámbito de la mediación, *Concept on EU Peace Mediation*, aprobado en diciembre de 2020 y que sustituye al *Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities* (2009), fortaleció la dimensión de género con respecto al anterior documento marco. El *Concept on EU Peace Mediation* especifica como uno de sus 12 principios la promoción de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, ampliando el foco con respecto al equivalente principio en 2009, centrado entonces en promover la participación de las mujeres. En su actual forma, la UE se compromete con la plena implementación de la agenda de mujeres, paz y seguridad, incluyendo con la implementación de los estándares internacionales de apoyo a la mediación con perspectiva de género. La UE se compromete a incluir y facilitar la participación de mujeres como mediadoras, jefas negociadoras y representantes políticas. Se fija un umbral de un mínimo del 33% de participación de mujeres en todas las acciones de la UE relacionadas con los procesos de paz. También enfatiza la importancia de la integración sistemática de la perspectiva de género en todas las actividades de mediación y de prevención de conflictos. En el documento la UE se compromete a dar apoyo a la participación activa y efectiva de las mujeres en los procesos de paz y pone en valor el trabajo de las redes nacionales y regionales de mujeres mediadoras. Asimismo, el nuevo documento marco incorpora otros principios, como el de inclusividad, en el que la UE también se compromete con la consulta sistemática a la sociedad civil y en el que señala de forma específica a las mujeres como sector de población al que prestar especial atención en el ámbito de la participación sustantiva. Como en anteriores etapas, el principal reto en relación a los compromisos de género de la UE en el ámbito de la mediación residía en su implementación y en el tránsito hacia una cultura organizativa que integre de manera sistemática el análisis de género y las prácticas con perspectiva de género, ante las carencias y brechas identificadas en diversos análisis en periodos recientes.⁴⁹

3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil

Durante 2020 tuvieron lugar diferentes iniciativas de construcción de paz lideradas y protagonizadas por organizaciones de mujeres de la sociedad civil. En este apartado se recogen algunas de las más relevantes.

Organizaciones de mujeres hicieron propuestas para incorporar los principios de igualdad de género y los presupuestos de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad al llamamiento a un alto el fuego global del secretario general de la ONU

En marzo, el secretario general de la ONU lanzó su **llamamiento para un alto el fuego global** en el marco de la pandemia por coronavirus, instando a todos los actores armados a cesar la violencia para garantizar la protección y la salud de la población en los contextos afectados por conflictos armados. En respuesta a este llamamiento, diferentes organizaciones de la sociedad civil expresaron su apoyo a la iniciativa. Organizaciones de mujeres hicieron propuestas para incorporar los principios de igualdad de género y los planteamientos de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad al llamamiento. Así, cinco organizaciones –WILPF, MADRE, Kvinna till Kvinna, Medica Mondiale y Nobel Women’s Initiative– se unieron para presentar cinco principios feministas para un alto el fuego significativo incluyendo garantías para la participación plena y efectiva de las mujeres y los grupos de la sociedad civil; actuaciones a partir de prioridades sociales, económicas y humanitarias; priorización del acceso urgente y no discriminatorio a los servicios para las supervivientes; compromiso con el desarrollo de medidas prácticas para garantizar la sostenibilidad de los altos el fuego; y reasignación de gastos militares para financiar iniciativas de la sociedad civil local encaminadas a la recuperación, la reconciliación y la reconstrucción.

Por otra parte, más de noventa organizaciones de mujeres de **Iraq, Libia, Siria, Yemen y Palestina** presentaron una declaración conjunta uniéndose al llamamiento del secretario general instando a los actores armados de los países árabes a unirse al alto el fuego e iniciar procesos de diálogo para poner fin a los conflictos armados que afectan a la región. El llamamiento se hizo coincidiendo con la festividad religiosa de Eid al-Fitr.

Miles de mujeres se manifestaron en octubre en cuatro de las principales ciudades de **RDC** exigiendo justicia por la violencia sexual y los asesinatos cometidos en el marco del conflicto armado en el país. Las movilizaciones transcurrieron de forma pacífica, aunque en Kisangani, una de las localidades donde tuvieron lugar muchos de los abusos investigados por la ONU, las autoridades prohibieron la manifestación y la Policía intervino llevando a cabo un uso excesivo de la fuerza, golpeando a las manifestantes. En la movilización más numerosa, en Bukavu, se sumaron a la protesta alrededor de 3.500 víctimas de la violencia sexual, que estuvieron encabezadas por abogadas y que conmemoraban que había pasado una década desde que Naciones Unidas documentó cientos de crímenes que habían tenido lugar en el país entre 1993 y 2003. Las manifestaciones contaban con el apoyo del premio Nobel de la paz Denis Mukwege, comprometido con la atención y el apoyo a las víctimas de la violencia sexual. Durante las protestas se expresó solidaridad con Mukwege, quien

49. Véase el capítulo 4 (Oportunidades de paz).

había recibido amenazas por su trabajo con las víctimas de violencia sexual. La misma ACNUDH, Michelle Bachelet, había condenado las amenazas vertidas sobre Mukwege y solicitado al Gobierno congolés que garantizara la seguridad del premio Nobel, de su familia y del trabajo realizado en el Hospital Panzi, en Bukavu. Como consecuencia de la pandemia, en mayo la ONU había retirado la protección que ofrecía a Mukwege, aunque volvió a desplegarla en septiembre. Una de las exigencias de las movilizaciones era que los informes de Naciones Unidas de 2010 sirvieran de base para los enjuiciamientos de los responsables y se demandaba a la organización internacional que hiciera públicos los nombres de aquellos perpetradores que no habían sido hechos públicos anteriormente.

En **Belarús**, las mujeres desempeñaron un papel protagónico en las masivas movilizaciones contra el régimen de Aleksandr Lukashenko, tanto previas como posteriores a las elecciones presidenciales de agosto, en las que Lukashenko –26 años en el poder– obtuvo la victoria, mientras la oposición denunció fraude electoral. La participación de las mujeres se dio tanto en el nivel de movilizaciones en las calles como de liderazgo político opositor. Activistas de Belarús destacaron el elevado número de participación de mujeres, con estrategias de acción no violenta. Asimismo, algunas voces feministas locales también advirtieron de que la representación y promoción de algunas protestas, como las de Mujeres de Blanco, ponían énfasis en cuestiones estereotipadas, con calificativos como la marcha de las mujeres bellas, poniendo de manifiesto que las mujeres aún no eran percibidas como sujetos políticos.⁵⁰ La participación

de mujeres en las protestas se dio antes y después de las elecciones. Tras las elecciones, las movilizaciones continuaron teniendo una elevada participación de mujeres. Destacó la primera marcha de mujeres tras los tres primeros días de protestas poselectorales con grave violencia policial, con más de 200 mujeres. Algunos análisis la señalaban como movilización catalizadora, que contribuyó a multiplicar la participación de población en sucesivas protestas –incluyendo de forma específica, de mujeres–, y que contribuyó a centrar la estrategia de acción no violenta.

En el nivel de liderazgo, la denegación de las candidaturas de figuras como Serguéi Tijanovski, Viktor Babariko y Valeri Tsepkalo, y su persecución, llevó a la iniciativa política de varias mujeres, algunas de ellas sin trayectoria previa en el ámbito político. Svetlana Tijanóvskaya, esposa de Tijanovski, presentó su candidatura, que fue autorizada por las autoridades, y que recibió el apoyo de Babariko y Tsepkalo. Además, Veronika Tsepkalo –esposa de Valeri Tsepkalo– y María Kolesnikova –jefa de prensa de Babariko– se unieron al equipo de Tijanóvskaya, impulsando el liderazgo político de mujeres, cuestionando así el régimen de décadas de política de dominación masculina y verticalidad de poder. Confrontaron también las estrategias de deslegitimación por parte de Lukashenko que en campaña cuestionó a Tijanóvskaya como candidata mediante estereotipos de género. Algunos análisis señalan la subestimación por parte del régimen de una candidatura femenina. Activistas opositoras señalaron que la misoginia de Lukashenko fue un factor que movilizó en su contra a numerosas mujeres.

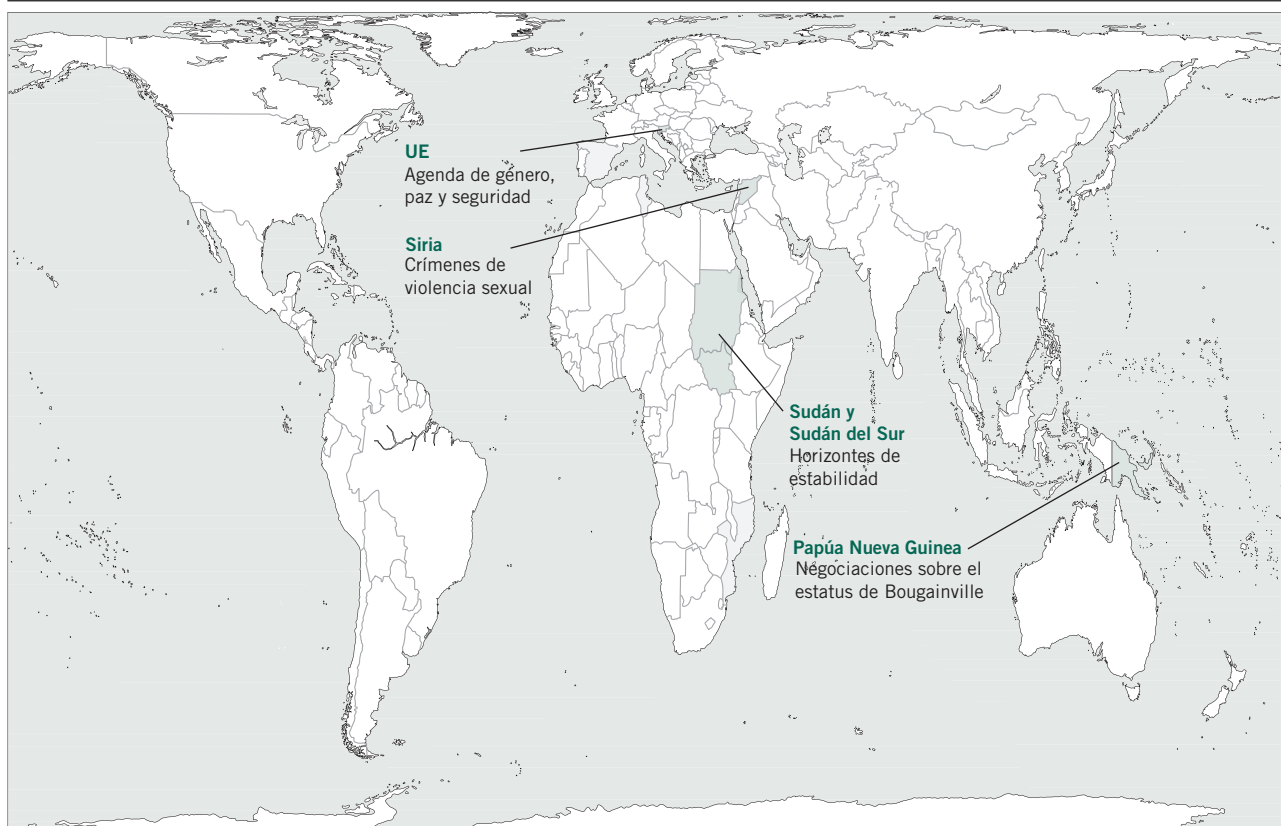
50. WILPF, *The “Women in White” and Belarus’ Emerging Women’s Movement*, WILPF, 16 de octubre de 2020.

4. Oportunidades de paz para 2021

Tras analizar el año 2020 en materia de conflictividad y construcción de paz, la Escola de Cultura de Pau de la UAB destaca en este capítulo cuatro ámbitos que constituyen oportunidades de paz para el futuro. Se trata de contextos donde existe o ha habido en el pasado una situación de conflicto armado o de tensión en los que confluyen una serie de factores que pueden conducir a su transformación positiva. Las oportunidades identificadas de cara a 2021 hacen referencia a las perspectivas de estabilidad en Sudán y Sudán del Sur en el marco de sendos procesos de transición; a las posibilidades de resolución del estatus político de la isla de Bougainville en el marco de las negociaciones entre Gobierno Autónomo de Bougainville y el Gobierno de Papúa Nueva Guinea; a los avances hacia una mayor centralidad de la agenda de género, paz y seguridad en las políticas de la Unión Europea; y a las tímidas perspectivas de justicia y reparación que se han abierto para supervivientes del conflicto armado en Siria.

Todas estas oportunidades de paz requerirán del esfuerzo y compromiso real de las partes implicadas y, en su caso, del apoyo de actores internacionales para que las sinergias y factores positivos ya presentes favorezcan la construcción de la paz. En este sentido, el análisis de la Escola de Cultura de Pau pretende ofrecer una visión realista de estos escenarios y temáticas, identificando los elementos positivos que alimentan las expectativas de cambio, pero también poniendo de manifiesto las dificultades y problemáticas que existen y que podrían suponer obstáculos para su materialización como oportunidades de paz.

Mapa 4.1. Oportunidades de paz para 2021



4.1 Nuevos horizontes, retos y esperanzas para la estabilidad en los sudanes

En la última década la región que integra a Sudán y Sudán del Sur ha pasado de una importante crisis política incrementada tras la independencia de Sudán en Sur en julio del 2011, a la apertura de sendos procesos transicionales en los últimos años que abren un nuevo camino de esperanza para la construcción y consolidación de la paz y la estabilidad en la zona. Si bien el referéndum celebrado el enero de 2011 en la región meridional de Sudán –previsto en el acuerdo de paz alcanzado en 2005– trajo como resultado el nacimiento del Estado sursudanés, representando un punto de inflexión en las confrontaciones armadas en la región, la independencia sursudanesa generó nuevos procesos de confrontación y violencia al interior de ambos Estados. En Sudán, las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul, que habían quedado excluidas del referéndum, prosiguieron la guerra contra el Gobierno de Jartum de la mano del SPLM-N, uniéndose de este modo al otro frente de conflicto armado en el oeste del país, en la región de Darfur. Por otro lado, en Sudán del Sur, año y medio después de la proclamación de la independencia, en diciembre de 2013, estalló la guerra civil, marcada por las líneas de lealtades entre los partidarios del presidente Salva Kiir y del ex vicepresidente Riek Machar. Paralelamente la tensión entre Jartum y Juba aumentó con acusaciones mutuas de apoyar las rebeliones del vecino, así como debido a las disputas generadas por la demarcación fronteriza inconclusa entre ambos Estados, teniendo el enclave de Abyei como principal foco de tensión.

Sin embargo, en los últimos años, debido a las importantes presiones externas sobre los países para poner fin a la violencia, así como al aumento de las protestas y movilización ciudadana, principalmente en el caso de Sudán, se ha generado un nuevo escenario en los dos sudanes, marcado por la creación de sendos Gobiernos transicionales, así como por la firma de dos importantes acuerdos de paz que han abierto nuevos horizontes en la región. En Sudán, tras la caída de Omar al-Bashir en abril de 2019 –tras 30 años en el poder–, a mediados de 2019 se logró la conformación de un gobierno de transición creado por el Consejo Militar (TMC) y la coalición opositora Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FFC).¹ Posteriormente, en octubre de 2020, el nuevo Gobierno logró la firma de un histórico acuerdo de paz con algunos de los principales actores armados de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, la coalición rebelde Frente Revolucionario Sudanés (SRF), la facción del Movimiento de Liberación de Sudán liderada por Minni Minnawi (SLM/A-MM) y la facción del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N) dirigida

por Malik Agar. Paralelamente, pero de forma inversa, en Sudán del Sur se conseguía, en agosto de 2018, la ratificación del acuerdo de paz de 2015, rebautizado como Acuerdo revitalizado sobre la resolución del conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS), que dio pie a la conformación, en febrero de 2020, del ansiado Gobierno de unidad (RTGoNU). Un aspecto a destacar de ambos procesos remite al hecho de que en el logro de la estabilidad en cada país, ha sido fundamental el compromiso y la mediación del Estado vecino en la firma de la paz –Jartum fue la sede de la firma del acuerdo de paz de Sudán del Sur, mientras que Juba jugó un papel análogo en el acuerdo de paz del vecino del norte–, lo cual ha allanado las relaciones bilaterales y diplomáticas entre ambos Estados y ha facilitado avances en la disminución de las tensiones relativas a la demarcación fronteriza pendiente de resolución.

En ambos Estados, las cláusulas de la conformación de los Gobiernos de transición y de los acuerdos de paz establecen diferentes aspectos que versan sobre compartir el poder político (a nivel estatal –órganos ejecutivo y legislativo– y a nivel subestatal), la descentralización política-administrativa del territorio, reformas del sistema político, legal, económico y del sector de seguridad (conformación de ejércitos de unidad), o el establecimiento de una hoja de ruta para el periodo transicional (de unos tres años en ambos Estados) que debe dar paso a la celebración de elecciones, previstas en el caso de Sudán del Sur para 2022, y en el caso de Sudán para 2024.

Para acompañar el desarrollo del proceso transicional y la estabilización en ambos países, Naciones Unidas ha mantenido las misiones de mantenimiento de la paz desplegadas. En el caso de Sudán, la Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán (UNITAMS), que es la última misión aprobada por el Consejo de Seguridad en junio de 2020 en su resolución 2524 (2020). En Sudán del Sur, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS), desplegada desde el año 2011. A su vez, en el disputado enclave de Abyei se mantiene la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA). A estas misiones se le suma el compromiso de organismos regionales como la UA o la IGAD, garantes de los acuerdos de paz, para velar por su correcta implementación.

Si bien en ambos países se han dado importantes pasos hacia la construcción de la paz y la estabilidad, los grandes retos que se observan en el horizonte

Ambos países han logrado la firma de un acuerdo de paz y han puesto en marcha sendos procesos transicionales en los últimos años

1. Véase Josep María Royo Aspa, “La revolución sudanesa y sus mujeres”, *Apunts ECP de Conflictes i Pau*, Núm.1, Escola de Cultura de Pau, 2020.

remiten, por un lado, a la capacidad de incorporar a los actores armados no signatarios de los acuerdos de paz a los mismos; y por otro, a la estabilización de los gobiernos transicionales y el cumplimiento de la hoja de ruta acordada. En relación al primero, en Sudán el Gobierno mantiene abierto un proceso de diálogo con la facción del grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte encabezada por Abdelaziz al-Hilu (SPLM-N) y con la facción del Movimiento de Liberación de Sudán encabezada por Abdelwahid al-Nur (SLM/A-AW). Paralelamente, en Sudán del Sur la situación es similar, manteniéndose conversaciones de paz entre el Gobierno y los grupos no signatarios del R-ARCSS, organizados inicialmente a través de la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA). Estas conversaciones lograron el 12 de enero de 2020 la firma de la “Declaración de Roma sobre el Proceso de Paz en Sudán del Sur”, en donde las partes se comprometieron a un alto el fuego, a garantizar el

acceso humanitario y a mantener un diálogo continuo. La coalición rebelde SSOMA se fracturó a mediados de 2020 por discrepancias entre sus organizaciones, sin embargo las conversaciones se mantienen en mesas diferenciadas. Por otro lado, en relación a la consolidación de los avances transicionales, si bien hasta la fecha se han dado importantes pasos, ambos países tienen que encontrar fórmulas efectivas para reducir la animosidad y las fracturas regionales-étnicas-identitarias fraguadas durante décadas, así como reducir los efectos del colapso de sus economías en la sociedad y reconstruir la confianza de la sociedad en sus instituciones tras años marcados por la mala gobernanza. El plazo para consolidar estos importantes retos se sitúa en el horizonte de 2022, en el caso de Sudán del Sur, y en 2024 en el caso sudanés, por lo que los avances que se construyan durante estos próximos años serán capitales para el devenir futuro de la región.

4.2. Las negociaciones entre Papúa Nueva Guinea y Bougainville

Durante el año 2020, el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y el Gobierno Autónomo de Bougainville sentaron las bases de un proceso de negociación que podría conducir a la resolución sobre el estatus político de la isla de Bougainville y culminar así un proceso de paz iniciado en los años noventa. En efecto, tras un conflicto armado entre 1988 y 1998 en el que alrededor de 20.000 personas murieron, el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y el Ejército Revolucionario de Bougainville firmaron una tregua en 1998 que facilitó la firma del Acuerdo de Arawa en 2001. Entre otras cuestiones, dicho acuerdo preveía el establecimiento de la Región Autónoma de Bougainville (RAB), el desarme y la desmovilización de combatientes, y la celebración de un referéndum de independencia no vinculante en un período máximo de 15 años posteriormente a la elección del primer Gobierno de la RAB, que finalmente tuvo lugar en 2005. Fueron precisamente los claros resultados de dicho referéndum celebrado a finales de 2019 (87% de participación y 98% de votos a favor de la independencia de la isla) los que motivaron el inicio del proceso de diálogo entre los Gobiernos de Papúa Nueva Guinea y de Bougainville, que deberían desembocar en una propuesta sobre el estatus político de Bougainville que tendrá que ser ratificada por el Parlamento nacional.²

A pesar de que la pandemia de la COVID-19, la celebración de elecciones en Bougainville y el estallido de una crisis política en el seno del Gobierno de Papúa Nueva Guinea ralentizaron y el inicio de las negociaciones en 2020, en varias ocasiones durante el año ambas partes reiteraron su compromiso con el proceso de negociación y su respeto por los resultados del referéndum. A principios de enero de 2021, el primer ministro de Papúa, James Marape, y el nuevo presidente de la RAB, Ishmael Toroama, se reunieron en la capital del país, Port Moresby, y acordaron las bases del proceso negociador, como el entramado institucional de la negociación, la agenda sustantiva y la facilitación del diálogo a manos de una tercera parte neutral (a finales de 2020 había trascendido que tal función recaería en Bertie Ahern, ex primer ministro de Irlanda y presidente de la Comisión del Referéndum en Bougainville). Ambos líderes también mostraron su acuerdo en que en los últimos años el Gobierno Autónomo de Bougainville había cumplido con dos de los tres pilares fundamentales del acuerdo de paz (buena gobernabilidad y desarme y desmovilización de combatientes) y reiteraron que previamente ambos Gobiernos habían consensuado que el concepto de independencia incluía plena soberanía, reconocimiento bajo el derecho internacional y separación de Papúa Nueva Guinea.³ Este último punto es relevante por cuanto, según algunos análisis, el Gobierno de Papúa Nueva Guinea podría haber intentado centrar las negociaciones en la independencia económica y la autodeterminación, excluyendo del diálogo la separación de Bougainville del resto del país.

Varios analistas han señalado la importancia de los liderazgos en ambas partes de la negociación. James Marape llegó al cargo de primer ministro de Papúa Nueva Guinea pocos meses antes de la celebración del referéndum y, según varios medios de comunicación, facilitó su organización y manifestó de antemano su respeto por el resultado del mismo. Por otro lado, el presidente de Bougainville fue elegido para el cargo en los comicios que se celebraron entre el 12 de agosto y el 1 de septiembre de 2020, los quintos desde la concesión de un régimen autonómico a Bougainville y en los que Toroama derrotó por un amplio margen al resto de las 24 candidaturas que concurrían a las elecciones. El hecho de que Ishmael Toroama hubiera sido comandante del Ejército Revolucionario de Bougainville y de que hubiera tenido un rol importante en la desmovilización del grupo podría reforzar el proceso de negociación en un doble sentido. En primer lugar, porque las negociaciones sobre el estatus político de la isla van a ser una de las prioridades de su acción de gobierno, como él mismo ya ha manifestado. En segundo lugar, porque su trayectoria personal le podría otorgar una cierta ascendencia e influencia política sobre aquellos sectores que, actualmente o en el futuro, puedan mostrarse más escépticos con la evolución o el resultado de las negociaciones.

Otro de los elementos que confiere cierta solidez al proceso de negociación es el apoyo internacional con el que ha contado hasta el momento. Ya en la década de los años noventa y a principios del siglo XXI Naciones Unidas se involucró activamente en la supervisión de la tregua firmada en 1998 (Lincoln Agreement), en la facilitación del diálogo político que condujo al acuerdo de paz del año 2001 y en la supervisión de la implementación del mismo a través de la Oficina Política de Naciones Unidas en Bougainville (dependiente del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas y no del de Operaciones de Mantenimiento de la Paz), y la Misión de Observación de las Naciones Unidas en Bougainville. Por otra parte, ya desde finales de los años noventa, varios países de la región, como Australia, Nueva Zelanda, Vanuatu y Fiji, participaron activamente en el Grupo de Supervisión de la Tregua y, posteriormente, en el Grupo de Supervisión de la Paz, clave en la verificación del proceso de desarme. Más recientemente, Bertie Ahern, ex primer ministro de Irlanda presidió la Comisión del Referéndum en Bougainville encargada de organizar la mencionada consulta. Además, en 2018, los Gobiernos de Papúa Nueva Guinea y de Bougainville, a través del Organismo Conjunto de Supervisión —principal órgano de supervisión de la implementación del acuerdo de paz—, acordaron la creación del Grupo de Trabajo de Planificación del Post-referéndum de cara a la negociación que ambos Gobiernos debían iniciar tras la celebración del referéndum. Dicho Grupo de Trabajo contó con el apoyo y la participación del

2. Bohane, Ben, *The Bougainville referendum and beyond*, Lowy Institute, octubre de 2019.

3. Jackson, Keith, "Crucial Bougainville independence talks begin", PNG Attitude.com, 13 de enero de 2021.

PNUD y de la ONG británica Conciliation Resources. De hecho, ambos Gobiernos han solicitado formalmente a Naciones Unidas que apoye al secretariado conjunto de dicho proceso de negociación, y a finales de 2020 trascendió a la prensa que habían acordado la designación de Bertie Ahern como facilitador del proceso de consultas entre ambos Gobiernos. Finalmente, cabe destacar que en los últimos años el PNUD, ONU Mujeres y UNFPA han implementado (y han manifestado su intención de seguir haciéndolo en el futuro) proyectos del Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas para garantizar la inclusividad del proceso de paz en su conjunto y del proceso de negociación sobre el estatus político de Bougainville, así como la participación de mujeres, jóvenes y ex combatientes en ambos procesos. En este sentido, cabe destacar que a finales de enero el Gobierno Autónomo de Bougainville organizó en la ciudad de Buka el Foro de Consultas de Bougainville, en el que se conformó un equipo de 56 representantes de varios sectores de la sociedad civil organizada para recabar las demandas de la sociedad civil y ayudar al Gobierno de Bougainville a diseñar su estrategia negociadora con el Gobierno de Papúa Nueva Guinea. También cabe señalar que a mediados de junio fue aprobada la Ley de la Federación de Mujeres de Bougainville, que según el Gobierno Autónomo de Bougainville garantiza la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en el ámbito político y también el sector privado.

A pesar de la buena predisposición política de ambas partes negociadoras, el apoyo de la comunidad internacional y los esfuerzos para que el proceso sea lo más participativo e inclusivo posible, las negociaciones venideras entre Port Moresby y Bougainville también enfrentan algunos retos importantes, como el hecho de que, según el acuerdo de paz, el referéndum de independencia no sea vinculante, que el resultado final de la negociación deba ser ratificado por el Parlamento nacional o que las negociaciones entre ambos Gobiernos no tengan un calendario definido.⁴ De hecho, algunos medios de comunicación han señalado que, desde la perspectiva del Gobierno de Papúa Nueva Guinea, esta negociación podría prolongarse varios años. De hecho, si ambos Gobiernos no llegaran a acordar ninguna propuesta conjunta, prevalecería el *statu quo* actual. A pesar de que desde un primer momento el primer ministro Marape mostró un mayor apoyo a la celebración del referéndum que sus antecesores en el cargo, en varias ocasiones ha insistido en una tercera vía más allá de las dos que se planteaban en el referéndum (independencia o mayor autonomía) y que consistiría en la independencia económica de la región.⁵ Marape en alguna ocasión también ha señalado que considera más importante el empoderamiento económico de Bougainville que el contenido político de las negociaciones entre ambos Gobiernos. Además de estas cuestiones más estructurales, algunas voces en Bougainville también mostraron su

escepticismo sobre la voluntad política del Gobierno de Papúa Nueva Guinea de iniciar el proceso de negociación, especialmente después de que no se llevara a cabo la reunión formal del Organismo de Supervisión Conjunto (Joint Supervisory Body) prevista para finales de noviembre de 2020 en la que debían discutirse aspectos fundamentales de la negociación. Dicho encuentro había sido acordado por Marape y Toroama en una reunión previa en Port Moresby, pero finalmente no pudo llevarse a cabo por la situación política del Gobierno de Papúa Nueva Guinea, marcada por la renuncia de varios ministros y la posibilidad de que la oposición presentara una moción de censura contra Marape.

Por otra parte, algunos análisis sobre la situación política en Bougainville sostienen que la celebración de un referéndum de autodeterminación con tan altas tasas de participación y con un resultado tan claro podrían alentar tensiones centrífugas y demandas de mayor autogobierno en Papúa Nueva Guinea, un estado conformado por numerosas islas, así como también fortalecer las demandas de celebración de referendos en la región. En este sentido, cabe destacar, a modo de ejemplo, el referéndum en Nueva Caledonia (Francia) celebrado en septiembre de 2020; en la isla de Chuuk (Micronesia) previsto para marzo de 2020 (pospuesto hasta 2022); en la región indonesia de Papúa Occidental —donde organizaciones nacionalistas papús han señalado que el referéndum de 1969 que permitió la incorporación de la región a Indonesia tuvo errores importantes y no expresó el sentir mayoritario de la población respecto del estatus político de Papúa, de modo que esta región no habría ejercido así su derecho a la autodeterminación— o incluso en la provincia indonesia de Aceh, donde a pesar de la firma de un acuerdo de paz en 2005 que preveía mayores niveles de autonomía que el resto de provincias del país, recientemente ha habido voces que han reivindicado la celebración de un referéndum de autodeterminación.

A pesar de todas las incertidumbres y riesgos que se vislumbran de cara al futuro, las negociaciones políticas que recientemente han iniciado los Gobiernos de Bougainville y Papúa Nueva Guinea no solamente suponen la posibilidad de implementar plenamente el acuerdo de paz del año 2001, superar uno de los conflictos más letales de la región en las últimas décadas o tomar una decisión consensuada sobre el estatus político de la isla, sino que también pueden erigirse en un ejemplo interesante de resolución de conflictos por la autodeterminación por cuanto el ejercicio de dicho principio (en este caso en forma de referéndum) fue acordado por ambas partes en conflicto y fue condicionado a la materialización de los otros pilares fundamentales del acuerdo de paz: el desarme, desmovilización y reintegración de combatientes; el establecimiento de instituciones autónomas en Bougainville y el posterior despliegue de políticas de buena gobernabilidad en la isla.

4. Peake, Gordon, *Consulting on Bougainville's future: The what, who, how and when*, The Interpreter, 8 de julio de 2020.

5. Kylie McKenna, *The Bougainville referendum: Celebrations turn to sadness and hope*, The Interpreter, 20 de enero de 2020.

4.3 ¿Hacia una mayor centralidad de la agenda de género, paz y seguridad en la UE?

En los últimos años el marco normativo de la Unión Europea (UE) relativo a la agenda internacional de mujeres, paz y seguridad se ha ampliado y afianzado en su dimensión formal. Han confluído diversos pasos que hacen del nuevo marco una herramienta potencial para su uso por parte de organizaciones de mujeres en contextos de conflicto y/o en procesos de paz que demandan mecanismos de participación efectiva de mujeres, entre otros. Los avances formales incluyen un marco más sólido e integral, mayores conexiones entre agendas complementarias, así como cierta apertura a la interseccionalidad. No obstante, persisten riesgos y obstáculos, incluyendo la crónica brecha entre compromisos formales e implementación práctica, así como el peso de la incoherencia de políticas, en que la agenda de mujeres, paz y seguridad –que aspira a la defensa de los derechos de las mujeres y la promoción de su agencia– coexiste con otras políticas europeas que menoscaban los derechos de las mujeres, como por ejemplo las políticas migratorias o de promoción de vastos tratados de libre comercio.

Entre los avances que configuran esta oportunidad, cabe destacar el fortalecimiento del marco político de la agenda de mujeres, paz y seguridad de la UE, actualizado y reforzado en los últimos años. Por una parte, la UE aprobó a finales de 2018 el Enfoque Estratégico sobre Mujeres, Paz y Seguridad (Strategic Approach to Women, Peace and Security), que sustituye, actualiza y amplía el anterior Enfoque Integral sobre Mujeres, Paz y Seguridad, de 2008. El Enfoque Estratégico supone un paso cualitativo adelante, al fortalecer la dimensión de agencia de las mujeres y el enfoque de derechos humanos y los aspectos de análisis de género de los conflictos, promover la participación efectiva en procesos de paz, hacer más robusta la dimensión de prevención, ampliar las referencias al espectro de actores de la UE con responsabilidades para la implementación de la agenda, entre otros elementos. Entre los objetivos del nuevo marco, la promoción del liderazgo y agencia de las mujeres en todos los ámbitos relacionados con paz y seguridad, la participación sustantiva de mujeres en la prevención y resolución de conflictos, así como la prevención de todas las formas de violencia sexual y de género, y la promoción y protección del ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y el empoderamiento de mujeres y niñas. Establece entre otros principios el nexo entre política interior y exterior, señalando que la agenda de mujeres, paz y seguridad es de aplicación universal y que, por tanto, debe ser implementada de forma sistemática por todos los actores de la UE en todas políticas, programas y acciones internas y externas. Organizaciones de la

El nuevo marco normativo de la agenda de mujeres, paz y seguridad de la UE ofrece oportunidades a las organizaciones de mujeres en contextos de conflicto, si bien persisten los déficits de implementación y en coherencia de políticas

sociedad civil del ámbito de la UE articuladas en el grupo de trabajo de género de la plataforma European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) lograron incidir en el proceso de elaboración, de manera que gran parte de sus recomendaciones quedaron incorporadas en el documento aprobado oficialmente.

Por otra parte –y a diferencia del documento marco anterior, de 2008– el Enfoque Estratégico ha ido acompañado de un Plan de Acción. Este incluye seis objetivos (participación, transversalización de género, liderazgo de ejemplo, prevención, protección y ayuda/recuperación), criterios para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, así como acciones –de corto, medio y largo plazo– relativas a cada objetivo y que asigna a los respectivos actores de la UE. Contempla acciones relevantes para la implementación de la agenda, como el establecimiento e institucionalización de un mecanismo de consulta con mujeres y organizaciones de la sociedad civil, en los Estados miembro y en países en conflicto en que opera la UE (acción 1.6), así como el desarrollo y aplicación de un sistema de análisis de género y conflictos en todas las contribuciones de la UE sobre prevención de conflictos y construcción de paz (acción 4.1). El Plan de Acción, por tanto, aterriza y operacionaliza compromisos respecto del extenso Enfoque Estratégico, lo que refuerza potencialmente la oportunidad de implementación de la agenda y la rendición de cuentas. No obstante, los indicadores y criterios de cumplimiento de los objetivos son vagos y dificultan el seguimiento y evaluación de la puesta en práctica del plan. Además, en muchos casos, las acciones propuestas van acompañadas de cierto grado de ambigüedad que puede amparar una implementación anecdótica o avanzar hacia una práctica más sistematizada. Pese a ello, la aprobación del plan supone un avance en tanto que genera una herramienta con objetivos y acciones prácticas.

Otro elemento significativo es la reciente integración de la agenda de mujeres, paz y seguridad en la llamada agenda de igualdad de género y empoderamiento de mujeres (GEWE, por sus siglas en inglés, sucesora de la agenda de género y desarrollo de la UE). En décadas anteriores ambas agendas de la UE –sus circuitos, actores– habían permanecido en buena parte desconectadas entre ellas, pese a los evidentes nexos entre ambas. Y aunque un principio básico de la agenda de mujeres, paz y seguridad ha sido la transversalidad de género, la UE –como otros actores de gobierno en la escena internacional– ha mantenido mayoritariamente aislada la agenda de mujeres, paz y seguridad del resto de agendas y políticas. El nuevo Plan de Acción

de Género III (2020-2025) incorpora la agenda de mujeres, paz y seguridad –con los objetivos del plan de acción de mujeres, paz y seguridad– como una de sus seis áreas temáticas, alineando finalmente ambas agendas y ampliando su potencial. También la actualización del documento marco sobre mediación de la UE ha incluido un fortalecimiento de su perspectiva de género, avanzando en la alineación de políticas. Así, el Concepto sobre Mediación de Paz de la UE (Concept on EU Peace Mediation), aprobado en 2020, amplía y fortalece su principio de “promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres” y transversaliza algunos elementos de género. Entre otros elementos concretos, la UE fija un mínimo del 33% de participación de mujeres en todas las acciones de la UE relacionadas con procesos de paz, subraya la importancia de transversalizar la perspectiva de género mediante el análisis de género e incorporándola en el establecimiento de agendas políticas y se compromete a la implementación de los estándares internacionales de género de apoyo a la mediación. Pese a constituir un avance y una oportunidad, las limitaciones en cuanto a concreción de compromisos y rendición de cuentas pueden continuar situando su cumplimiento en el ámbito de la práctica anecdótica, más que en un tránsito hacia su plena integración.

Otro elemento de avance, con potencial para ser esgrimido por actores de la sociedad civil es la dimensión interseccional. Si bien el nuevo marco normativo y operativo de mujeres, paz y seguridad (Enfoque Estratégico y Plan de Acción) es débil en interseccionalidad –las resistencias de Estados miembro a la inclusión de referencias a la población LGTBI llevó a haber de sortearlas mediante referencias a la no discriminación–, la reciente aprobación por la Comisión Europea de la primera Estrategia para la Igualdad LGTBIQ 2020-2025 abre potencialmente la puerta a un enfoque interseccional en la agenda de mujeres, paz y seguridad. Aunque esta no sea el foco de la Estrategia, esta combina la identificación de una serie de acciones prioritarias con la atención y transversalización de las necesidades y preocupaciones específicas LGTBIQ en todas las políticas, legislación y financiación de la UE.

No obstante, junto a los avances formales que se han dado en los últimos años, acompañados en algunos casos de experiencias prácticas en que la UE ha dado apoyo a la promoción de la participación de mujeres en procesos de paz e iniciativas de diálogo, al intercambio de experiencias entre mujeres involucradas en construcción de paz y al fortalecimiento de marcos nacionales (ej. Georgia, diálogo nacional de Yemen previo al reinicio de la guerra, Siria, entre otros), en la práctica son muchos los obstáculos y retos que limitan la potencialidad de la agenda de mujeres, paz y seguridad de la UE. Como en el caso de otros actores internacionales, los avances son aún de mínimos, con prácticas anecdóticas más que integración sistemática de la dimensión de género en todas las políticas, y escasa rendición de cuentas. Numerosas organizaciones de mujeres de la sociedad civil en países en el sur global continúan percibiendo a la UE como una organización alejada de sus necesidades y prioridades, poco accesible y con procesos burocratizados en exceso y tendente en la práctica a priorizar grandes organizaciones. Además, el rumbo de diversas políticas de la UE y de sus Estados miembro (ej. creciente militarización, política migratoria, impulso a vastos tratados de libre comercio, entre otras) entran en directa colisión con los derechos humanos de las mujeres en numerosos territorios, así como con la sostenibilidad de sus ecosistemas, perpetuando procesos de desigualdad de género, exclusión y violencia.

Ante todo ello, la agenda de mujeres, paz y seguridad de la UE constituye una oportunidad, aunque limitada, en tanto que marco que establece compromisos y obligaciones para la UE y vías posibles de apoyo que pueden ser esgrimidas por organizaciones de mujeres en contextos de conflicto y tensión para la defensa de sus derechos en sus interacciones con la UE. Las numerosas limitaciones y obstáculos, incluyendo incoherencia de fondo de políticas, limitan su potencial, aunque no lo anulan. Como sucede con la agenda internacional de mujeres, paz y seguridad en su conjunto, la agenda de la UE constituye una herramienta más, con luces y sombras, y potencialmente estratégica, al mismo tiempo que toda interacción con la UE en el ámbito de mujeres, paz y seguridad requerirá consciencia y precaución ante sus limitaciones.

4.4 Lucha contra la impunidad y persecución a crímenes de violencia sexual en Siria

Hace diez años Siria se convirtió en un escenario más de las revueltas populares que sacudieron a toda la región Norte de África y Oriente Medio. Una década más tarde, la brutal represión del régimen de Bashar al-Assad y la deriva del conflicto armado han diezmando las demandas de cambio pacífico, convirtiendo al país en sinónimo de violencia, devastación y gravísimos padecimientos de la población civil. Más de medio millón de personas han muerto a causa del conflicto, la mitad de la población del país se ha visto obligada a huir de sus hogares a causa de la violencia y millones de sirios y sirias sobreviven en medio de una severa crisis humanitaria y un acusado incremento de la pobreza. Y no solo eso. En los últimos años Siria también se ha convertido en un caso emblemático a nivel mundial por las sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el país. Un sinnúmero de informes de Naciones Unidas y ONG internacionales vienen señalando la responsabilidad de los actores armados involucrados en el conflicto en un amplísimo abanico de abusos. Vulneraciones que han continuado –y persisten– en un contexto de impunidad, sentando un peligroso precedente. En este contexto, y ante el bloqueo de otras opciones para exigir responsabilidades a los perpetradores, iniciativas recientes – algunas de las cuales apelan al principio de jurisdicción universal– alientan una incipiente esperanza de justicia y reparación para víctimas del conflicto, incluyendo supervivientes de violencia sexual.

La necesidad de una rendición de cuentas por los crímenes perpetrados en Siria ha estado sobre la mesa desde el principio del conflicto armado. Las referencias a este asunto ya se mencionan en el Comunicado de Ginebra (2012), documento de referencia para las negociaciones de paz sobre Siria que delineó principios que debían guiar una eventual transición en el país. Paralelamente ha habido diversos llamamientos e iniciativas para que el caso sea analizado por la Corte Penal Internacional, aunque esta última vía ha quedado bloqueada por el veto de Rusia y China. Moscú, férreo aliado de Damasco, ha advertido que no permitirá la creación de un tribunal especial al estilo de los que se establecieron para Ruanda o la ex Yugoslavia. Pese a ello, hay otros mecanismos internacionales que se han puesto en marcha con miras a combatir la impunidad y señalar responsabilidades. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU viene documentando periódicamente los abusos cometidos en el marco del conflicto. En 2016 la Asamblea General

de la ONU creó el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente con la misión de recolectar, preservar y analizar las evidencias de violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y otros abusos en Siria con el fin de facilitar y agilizar procedimientos judiciales. Adicionalmente, en 2017 el Consejo de Seguridad de la ONU estableció un Equipo Investigador para Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes Cometidos por ISIS. Si bien tiene como prioridad apoyar los esfuerzos de justicia en este ámbito por parte de las autoridades de Iraq, el trabajo de este equipo también es relevante para vulneraciones que han tenido lugar en Siria, dado el carácter transnacional de las acciones llevadas a cabo por el grupo armado. Más recientemente, en 2020, Holanda ha intentado abrir otra vía al notificar al Gobierno sirio que pretende perseguir responsabilidades por las masivas denuncias de tortura en centros de detención del régimen a través de un procedimiento de “disputa” ante la Corte Internacional de Justicia. Aunque la iniciativa aún está pendiente de una serie de procedimientos, organizaciones de derechos humanos han destacado que esta vía abre otra brecha en el bloqueo concertado para impedir la rendición de cuentas en Siria.⁶

En los últimos años, los esfuerzos conjuntos de organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, entidades sirias y supervivientes del conflicto armado también han favorecido la apertura de una serie de procesos judiciales en terceros países, en su mayoría europeos, apelando al principio de jurisdicción universal. Según él, una corte nacional puede juzgar a individuos por su papel en

casos de tortura, genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad asumiendo que estas vulneraciones afectan y erosionan a la comunidad internacional en su conjunto. Es decir, permite la investigación y persecución de crímenes sin importar dónde se hayan cometido ni la nacionalidad de las víctimas y ofrece la posibilidad de buscar justicia, disuadir de nuevos abusos y evitar que ciertos países se conviertan en sitios seguros para quienes vulneran derechos humanos.⁷ Así, se han iniciado procedimientos relacionados con el conflicto armado sirio en Austria, Francia, Alemania, Suecia, Noruega y Holanda. La mayor parte de los casos pretenden perseguir a perpetradores que se encuentran en los respectivos Estados. Así, por ejemplo, en enero de 2020 se detuvo y presentaron cargos en Francia contra Islam Alloush, un alto cargo del grupo armado Jaysh al-Islam, considerado responsable, entre otros crímenes, del secuestro y desaparición en 2013 de destacadas figuras defensoras de los derechos humanos y activistas

La decisión de más de dos mil organizaciones de la Coalición para la RECOM de aspirar a completar un listado de víctimas constituye una oportunidad para la construcción de la memoria regional

6. Balkees Jarrah, “The Netherlands’ Action Against Syria: A New Path to Justice”, *Just Security*, 22 de septiembre de 2020.

7. Human Rights Watch, *Germany: Syria Torture Trial Opens. Universal Jurisdiction Provides Opening for Justice*, HRW, 23 de abril de 2020.

en Siria, entre ellas Razan Zaitouneh y Samira Khalil. Alloush fue arrestado en Marsella tras la presentación de una denuncia por parte del Syrian Center for Media and Freedom of Expression y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). Francia también ha emitido órdenes de arresto contra tres altos cargos militares sirios en relación con la desaparición de dos ciudadanos franco-sirios.

Muchos de los casos tienen como objetivo altos funcionarios del aparato de seguridad y de inteligencia del régimen de Bashar al-Assad. En este ámbito, destaca la querrela presentada en junio de 2020 ante la fiscalía alemana por siete supervivientes de violencia sexual contra altos cargos del régimen, en la primera demanda por este tipo de abusos. La querrela fue presentada por cuatro mujeres y tres hombres que estuvieron detenidos en cuatro prisiones de la Fuerza Aérea de Inteligencia siria entre abril de 2011 y octubre de 2013, período en el cual padecieron o fueron testigos de diversas formas de violencia sexual, entre ellas violación, amenazas de violación, acoso sexual, descargas eléctricas en los genitales y aborto forzado. La denuncia fue interpuesta por Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR) junto a la Syrian Women's Network y Urnammu, y contó con el apoyo de otras cuarenta entidades sirias y organizaciones internacionales feministas que instaron a la justicia alemana a investigar los crímenes contra la humanidad en Siria dando prioridad a los de índole sexual y de género. Esta querrela complementa otra denuncia contra nueve altos cargos del régimen en 2017 que ya contribuyó a la emisión de una orden de arresto en 2018 contra Jamil Hassan, entonces jefe de la Fuerza Aérea de Inteligencia. Según testigos, Hassan estaba al tanto de los episodios de violencia sexual perpetrados en las instalaciones bajo su mando y no actuó para detenerlos. La querrela de supervivientes de violencia sexual también coincide con la puesta en marcha, en abril de 2020, de un juicio emblemático en Alemania contra dos ex altos cargos de inteligencia sirios, en el primer proceso en el mundo contra agentes del Estado sirio en una década de conflicto armado. El conocido como caso Koblenz ha sentado en el banquillo a Eyad A. y Anwar R., este último el oficial sirio de mayor rango procesado en Europa, acusado de supervisar las torturas de más de 4.000 personas en el centro de detención de Khatib (Damasco), además de cargos por asesinatos, violación y abusos sexuales.

Organizaciones sirias e internacionales que están promoviendo las denuncias para enjuiciar crímenes de violencia sexual han subrayado la necesidad de abordarlos no como casos aislados, sino tener en cuenta la magnitud del fenómeno en Siria y enjuiciarlos como

crímenes de guerra y/o contra la humanidad.⁸ Tal y como han alertado numerosas investigaciones, los delitos de violencia sexual y de género han sido un componente extendido y sistemático de las prácticas contra la población civil en el marco del conflicto. Diversos actores armados han sido denunciados por su responsabilidad en este tipo de abusos, pero las fuerzas del régimen y sus milicias afines han sido especialmente señaladas, acusadas de utilizar la violencia sexual y de género como tortura y parte de una estrategia deliberada para castigar a civiles y debilitar a la oposición política. En 2018, un informe específico de la Comisión Internacional Independiente sobre Siria constató que las violaciones y otras formas de abuso sexual en el país en el marco de conflicto constituían un elemento persistente desde 2011, que mujeres y niñas se habían visto afectadas desproporcionadamente por estas vulneraciones –aunque también se han documentado abusos contra hombres y menores– y que los hechos identificados constituían crímenes de guerra y contra la humanidad.⁹ La violencia sexual ha sido utilizada para humillar, atemorizar, extraer confesiones, amedrentar. Pese a ello, la violencia sexual perpetrada por las fuerzas del régimen no ha motivado debates sustantivos en espacios como el Consejo de Seguridad de la ONU, que ha tendido a concentrar su atención en otros actores, como ISIS y sus graves abusos contra la población yazidí.¹⁰

Pese a su prevalencia, la violencia sexual y de género es uno de los crímenes menos denunciados. Se trata de un tema sensible en una sociedad patriarcal donde este tipo de abusos suponen una afrenta para la víctima, pero también para el honor de su familia y comunidad. En esta línea se ha insistido en la necesidad de juzgar estos crímenes con celeridad para minimizar el sufrimiento de las personas supervivientes, que además de padecer las consecuencias directas de los abusos se ven afectadas por el estigma social, discriminaciones e incluso la marginación y rechazo en su entorno más próximo. Organizaciones sirias e internacionales han enfatizado la necesidad de una justicia sensible al género, no limitada a los mecanismos legales y que atienda a los efectos estructurales y menos visibles de la violencia sexual, incluyendo sus dimensiones económicas, sociales y políticas y sus efectos en la perpetuación de un estatus inferior para la mujer. Asimismo, han advertido que la proliferación de armas y la ausencia de mecanismos de protección en Siria siguen siendo un obstáculo para la denuncia y el acceso a la justicia por parte de las víctimas de abusos. En esta línea, se han planteado una serie de recomendaciones. Entre ellas, que los esfuerzos para la rendición de cuentas apunten no solo a individuos, sino a la responsabilidad de régimen en el uso de la violencia sexual, y que se juzgue a todos los

8. ECCHR, *Survivors: Sexual Violence by Syrian Intelligence Services Are Crimes Against Humanity*, 2021; Hannah el-Hitami, "Syrian And Yazidi Trials: Why Victims' Lawyers Want Sexual Violence Considered", *JusticeInfo.net*, 5 de febrero de 2021; Dawlaty – WILPF, *Sexual violence by force of arms against women in Syria. A tool of political repression, social dismantling and impoverishment of women and communities*, Policy paper, 2020.

9. Human Rights Council, *'I lost my dignity': Sexual and Gender-Based Violence in the Syrian Arab Republic*, A/HRC/37/CRP.3, 8 de marzo de 2018.

10. Marie Forestier, *"You want freedom? This is your freedom": Rape as a Tactic of the Assad Regime*, LSE, 1 de febrero de 2017.

actores responsables, excluyendo a los perpetradores de cualquier tipo de amnistía.¹¹ En cumplimiento con los marcos normativos vigentes –entre ellos la resolución 1820 del Consejo de Seguridad de la ONU (2008)–, también se ha subrayado la importancia del que el tema de la violencia sexual se integre en cualquier eventual negociación o acuerdo sobre el futuro de Siria.¹² El acuerdo de paz de Colombia ha sentado un precedente y puede constituir un ejemplo en este ámbito.

Los incipientes y aún tímidos pasos en busca de una rendición de cuentas por los crímenes perpetrados

en Siria constituyen de momento la única esperanza para las víctimas, incluyendo supervivientes de violencia sexual. Los esfuerzos en este ámbito deberían intensificarse, con más iniciativas que exploren vías alternativas para evitar que los perpetradores de abusos y el régimen sirio continúen sintiéndose intocables. Los procesos judiciales en terceros países que apelan a los principios de jurisdicción universal representan una de estas vías, con un importante peso simbólico en el combate a la impunidad. Justicia y reparación deben ser elementos clave en cualquier esfuerzo futuro de paz y reconciliación para Siria.

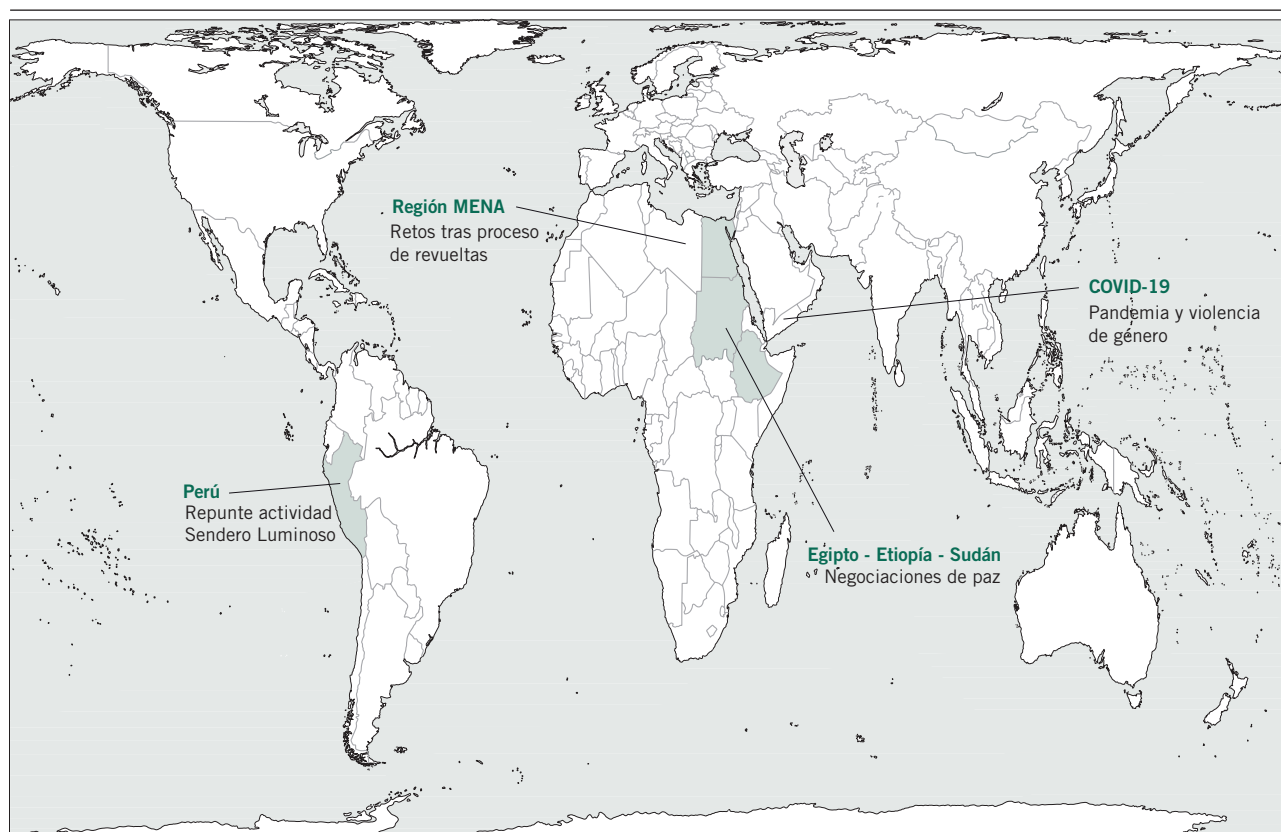
11. Dawlaty – WILPF, op.cit.

12. Marie Forestier, *The Way Forward for Syrian Survivors of Sexual Violence*, LSE, 8 de diciembre de 2020.

5. Escenarios de riesgo para 2021

A partir del análisis del año 2020 de los escenarios de conflicto armado y tensión a nivel mundial, la Escuela de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo cuatro contextos que por sus condiciones y dinámicas pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante 2021. Los escenarios de alerta de cara al año 2021 hacen referencia al agravamiento en la violencia contra las mujeres en el contexto de pandemia; al repunte en la actividad de Sendero Luminoso en Perú; a los retos que persisten en países del norte de África y Oriente Medio a una década de las revueltas que sacudieron la región; y a la controversia entre Egipto, Sudán y Etiopía en torno a la construcción de una presa por parte de Etiopía.

Mapa 5.1. Escenarios de riesgo para 2021



5.1 La pandemia de la COVID-19 y el agravamiento de la violencia contra las mujeres

La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado múltiples desigualdades, incluyendo las de género. De manera específica la pandemia ha agravado la problemática global preexistente de la violencia de género y ha ampliado el riesgo de aumento de violencia de género en el futuro a corto y medio plazo. Mientras, persiste el reto de su invisibilización y desatención por parte de actores políticos y sociales, en el contexto de normalización de la violencia y arraigo del patriarcado, reorientación de prioridades y fondos, y desbordamiento de servicios y actores involucrados en la respuesta. En el caso de contextos con crisis añadidas, como conflictos armados, los riesgos que genera la pandemia de la COVID-19 se acrecientan, al entrecruzarse con los impactos y dinámicas de la violencia armada.

Los datos disponibles sobre violencia de género desde la declaración de la pandemia de la COVID-19 muestran un incremento grave de la violencia contra mujeres y contra niñas en todo tipo de contextos. Un informe de la ONU de abril de 2020 como ya alertaba sobre un aumento del 30% en las llamadas a líneas telefónicas de apoyo en Chipre, de otro 33% en Singapur, del 25% de llamadas de emergencia por violencia doméstica en Argentina, y de una subida del 30% de denuncias de violencia doméstica en Francia. Para esas fechas aún tempranas en el desarrollo de la pandemia, la ONU advertía que, aunque era pronto para datos globales, ya había muchas informaciones preocupantes de intensificación de la violencia, con muchos casos de incrementos de un 25% en países con sistemas de denuncia.¹ Como ha señalado la ONU, factores y medidas asociados a la pandemia pueden actuar como agravantes de la violencia, como son las medidas de aislamiento, que han forzado a muchas mujeres a convivir incesantemente con los perpetradores, las restricciones de movimiento, las condiciones de hacinamiento de vivienda, las preocupaciones en torno a la salud, la seguridad y los medios de vida y las dificultades de acceso a servicios y redes de apoyo.² La pandemia intensifica una situación que ya era gravísima, con balances previos a la crisis del coronavirus de un panorama global en que en los 12 meses anteriores a la pandemia, 243 millones de mujeres y niñas de entre 15 y 49 años habían afrontado en algún momento violencia física y/o sexual por parte de la pareja íntima.³

Las dinámicas entrecruzadas de la violencia armada y de la pandemia aumentan el riesgo de exposición a violencia de género de múltiples maneras

El Plan de Respuesta Global Humanitaria a la COVID-19, en forma de llamamiento coordinado de Naciones Unidas, para el periodo de abril a diciembre de 2020, destacaba que las desigualdades de género se agravarían con la pandemia, y recordaba que en las emergencias de salud pública las mujeres y niñas suelen tener menos acceso a redes de protección y servicios, incluyendo de salud sexual y reproductiva, y que pueden afrontar más riesgos de violencia en el marco de las cuarentenas.⁴ También alertaba de que la población LGTBI podría afrontar mayor impacto negativo, en tanto que grupo de población que habitualmente afronta discriminación, prejuicio y barreras de acceso a asistencia. Otro estudio encargado por ONU Mujeres ha señalado que con la pandemia se está incrementando la tasa de pobreza de las mujeres. El informe predice y alerta de que en 2021 habrá en el mundo 435 millones de mujeres y niñas viviendo con menos de 1,9 dólares al día, incluyendo 47 millones de ellas a causa de la COVID-19. Asimismo, se estima que la pandemia podría llevar a 2,5 millones de niñas a una situación forzosa de matrimonio infantil en 2025. Cifras adicionales que se sumarían a los cálculos de 58,4 millones sin pandemia, según Save the Children. La ONG alertaba de que es en los contextos de crisis humanitarias asociadas a conflictos armados, inundaciones, sequías y brotes de enfermedades, donde el riesgo es mayor.⁵

En situaciones de conflictos armados, la intersección de guerra y pandemia puede ensanchar aún más la brecha económica de género y agravar la violencia de género y sus manifestaciones. Como señalan analistas del CICR, la pandemia ha tenido impacto en dos direcciones opuestas. Por una lado, de incremento de violencia sexual en contextos ya afectados por conflictos y violencia –incremento tanto de violencia en el ámbito doméstico como de violencia sexual, contraria al derecho internacional humanitario (DIH), incluyendo violencia sexual por actores armados, prostitución forzada y esclavitud sexual.⁶ Esos mismos análisis citan cifras de agencias humanitarias de 31 millones de casos adicionales de violencia de género en los primeros seis meses de confinamiento, que incluyen tanto violencia en el ámbito doméstico como violencia sexual contraria al DIH. Otros alertan del riesgo de incremento de violencia sexual en los contextos de crisis humanitaria –aunque señalando las dificultades de obtención de datos.⁷ Por

1. United Nations, *Policy Brief. The Impact of COVID-19 on Women*, 9 de abril de 2020.

2. UN WOMEN, *COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls*, EAW COVID-19 briefs, 2020.

3. Ibid.

4. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, *Global Humanitarian Response Plan COVID-19*, marzo de 2020.

5. Save the Children, *Global Girlhood 2020: COVID-19 and progress in peril*, 2020.

6. May Maloney, *Sexual violence in armed conflicts: can we prevent a COVID-19 backslide?* Humanitarian Law & Policy Blog, 25 de noviembre de 2020.

otro lado, la pandemia ha conllevado una reducción de los recursos y servicios de apoyo, en un contexto de cambio de prioridades y reorientación de recursos en respuesta a la COVID-19, restricciones de movimiento, sobrecarga de los actores y servicios de provisión de apoyo e impactos acumulados en las infraestructuras de salud, entre otros.⁸

Asimismo, las dinámicas entrecruzadas de la violencia armada y de la pandemia aumentan el riesgo de exposición a violencia de género de múltiples maneras. En Yemen, por ejemplo, se ha identificado cómo los obstáculos de acceso al agua –derivados de los ataques a las infraestructuras civiles por el conflicto armado, la emergencia climática, la mala gestión de los recursos hídricos– se han incrementado con la pandemia, al tiempo que se ha incrementado el precio del agua.⁹ En su conjunto, ha llevado a que muchas mujeres yemeníes tengan que realizar desplazamientos más largos para acceder a agua, especialmente en áreas rurales, con mayor riesgo de violencia sexual. En Libia durante 2020 se acrecentaron las dinámicas de violencia, incluyendo acciones contrarias al derecho internacional y que tenían

impactos directos sobre la respuesta a la pandemia, con ataques a hospitales y cortes deliberados del suministro de agua en la capital, con graves consecuencias sobre los derechos de las mujeres y la población civil. En contextos como Burkina Faso, el nordeste de Nigeria, Sudán del Sur, los conflictos y la pandemia agravaron situaciones de inseguridad alimentaria, incrementando el riesgo de ahondar en las desigualdades y violencia de género.

En conjunto, la pandemia de la COVID-19 ha deteriorado la situación de desigualdad y violencia de género que enfrentan mujeres y también niñas, incluyendo específicamente en contextos de violencia armada y otras situaciones de crisis. Aun si progresivamente se han ido levantando las medidas de confinamiento y de restricción de movimientos, diversos impactos y factores asociados a la pandemia previsiblemente continuarán agravando en años venideros la brecha de desigualdad y los riesgos de exposición a la violencia de género, lo que refuerza la necesidad urgente de situar los derechos de las mujeres y de las niñas en el centro de las acciones y políticas.

7. Sophie Sutrich, *COVID-19, conflict and sexual violence: reversing the burden of proof*, Humanitarian Law & Policy Blog, 19 de junio de 2020.

8. May Maloney, *op. cit.*

9. Margaret Habib, *COVID-19 exacerbates the effects of water shortages on women in Yemen*, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 20 de agosto de 2020.

5.2 El repunte de Sendero Luminoso en Perú

En 2020 Perú vivió una de las mayores crisis políticas de los últimos tiempos, con tres presidentes en el cargo en un periodo de pocos días, movilizaciones multitudinarias en varias partes del país y acusaciones por un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía vertidas por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o por organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. En paralelo al desarrollo de tales acontecimientos, que centraron la atención política y mediática del país, algunos análisis advirtieron sobre el incremento de la tensión vinculada a Sendero Luminoso, una organización armada de corte maoísta que participó activamente en el conflicto armado interno en Perú entre 1980 y 2000 que provocó la muerte de más de 69.000 personas, según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Aunque la captura en 1992 y posterior sentencia a cadena perpetua de su líder y fundador, Abimael Guzmán, debilitó enormemente al grupo, hasta el punto de que en el año 2000 el Gobierno dio al grupo por derrotado militarmente y al conflicto por finalizado, hubo algunas facciones remanentes del grupo que siguieron operando en varias regiones del país, especialmente en el Valle del Alto Huallaga y en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). En la última década, sin embargo, el Estado ha centrado su estrategia de contrainsurgencia en el VRAEM, especialmente después de que la captura en 2012 del líder senderista en el Alto Huallaga –Florindo Eleuterio Flores Hala, alias Camarada Artemio, leal a la línea ideológica y estratégica de Guzmán, y último miembro del comité central de Sendero Luminoso en activo–, provocara la práctica desarticulación del grupo en el Alto Huallaga.

La declaración del estado de emergencia en 1999 en el VRAEM y la creciente militarización de la región (donde el Estado actualmente dispone de 52 bases militares y tiene desplegados a entre 8.000 y 10.000 soldados) han comportado la detención de importantes líderes del grupo y han debilitado sus estructuras, pero a finales de 2020 el presidente del país reconoció que el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), denominación utilizada por el propio grupo en los últimos años, seguía suponiendo una importante amenaza para la seguridad nacional del país. También a finales de 2020 la ministra de Defensa expresó su preocupación por la creciente capacidad bélica del MPCP y por el repunte de sus acciones armadas. Según algunos análisis, la preocupación por parte del Estado no solamente tiene que ver con el incremento de las ofensivas del MPCP, sino por la resiliencia que ha mostrado el grupo en sus bastiones en las últimas décadas, por sus presuntas sólidas alianzas con organizaciones de narcotráfico, y por los intentos del movimiento comunista de crear y fortalecer estructuras de

apoyo. En este sentido, en diciembre el Gobierno anunció la detención de 77 personas por la creación de estructuras de apoyo al movimiento maoísta en Perú. Varias de las personas detenidas estaban vinculadas al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADDEF, que el Estado considera el brazo político y legal de Sendero Luminoso), entre ellas uno de los líderes de MOVADDEF y abogado de Abimael Guzmán.

Respecto de la capacidad armada del MPCP, en 2020 se produjo un cierto repunte de las acciones armadas en el VRAEM. Como mínimo 16 personas murieron y otras varias resultaron heridas en diversos episodios de violencia, la mayoría acciones ofensivas del MPCP. Cabe destacar principalmente la emboscada a un convoy militar a finales de octubre, en el que tres miliares murieron y otros cuatro resultaron heridos; el enfrentamiento a finales de agosto en que cuatro combatientes y dos militares fallecieron en la región de Ayacucho; el combate a finales de julio en la misma región en la que un militar y tres miembros del MPCP murieron; o el ataque contra varias embarcaciones militares del Ejército en la localidad de Puerto Palmeras en diciembre en el que un soldado perdió la vida y otros tres resultaron heridos. Si bien estas cifras de mortalidad son claramente inferiores a las de épocas anteriores, también es cierto que recientemente ha habido un incremento de las acciones dirigidas contra objetivos e instalaciones militares. Según un informe de la ONG Waynakuna elaborado supuestamente a partir de datos de la propia insurgencia, entre 1999 y 2017 habían muerto 446 personas (entre ellas 323 militares y 85 policías) en 276 episodios de violencia en el VRAEM. Sin embargo, otras informaciones de prensa a partir de datos policiales revelaban que entre 1999 y 2019 habían muerto 165 efectivos militares y policiales en la misma región. Según informes del Departamento de Estado de EEUU, que considera a Sendero Luminoso como una organización terrorista (la única en América Latina junto con las FARC y el ELN en Colombia), hubo una media de alrededor de 100 acciones armadas por año en el VRAEM entre 2006 y 2013¹⁰, pero estas descendieron significativamente tras ser abatidos en combate en 2013 dos de los cuatro líderes de la cúpula del MPCP, los conocidos como Camarada Alipio y Camarada Gabriel. A modo de ejemplo, en los años 2014 y 2015 el número de ataques por parte del MPCP se habían reducido a 20 y 13 respectivamente.

Según el Gobierno y varios analistas, en las últimas décadas Sendero Luminoso (y posteriormente el MPCP) ha aprovechado el carácter agreste, remoto, selvático y aislado de algunas zonas del VRAEM para tejer una sólida alianza con organizaciones vinculadas al narcotráfico, a las que proveen seguridad y protección tanto en la producción como en el tránsito de narcóticos. Según algunas voces, el grupo, que estaría conformado por alrededor de 450

10. Patricia Santillán, *Sendero Luminoso: evolución histórica y relevancia actual*, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento de Opinión, 30 de marzo de 2017.

personas (las cifras sobre la membresía atribuida al grupo varían sensiblemente según las fuentes), también obtendría recursos por la protección brindada a campesinos que cultivan hoja de coca. Según datos de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el VRAEM concentra el 70% de los cultivos de hoja de coca del Perú, el segundo productor mundial de cocaína. Según datos recientes, el 30% de la población del VRAEM (casi 450.000 personas) padecen pobreza, y otro 58% está por debajo del umbral de la pobreza extrema.¹¹ En agosto de 2020, la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de EEUU afirmó que en 2019 la superficie destinada al cultivo de la hoja de coca y la producción de cocaína habían aumentado en un 38 % y un 40% respectivamente respecto al año anterior.

La consolidación del VRAEM como feudo del MPCP y como epicentro de la producción de droga en Perú a su vez ha agudizado determinadas dinámicas que podrían incrementar la tensión y la violencia en la región. Por una parte, se observa una creciente presión por parte de campesinos cocaleros sobre las tierras de pueblos indígenas de la región, como las comunidades asháninka. Algunas de las estrategias utilizadas por tales colectivos serían el hostigamiento contra tales comunidades o la creación de poblados para legalizar su ocupación y tenencia de la tierra, que normalmente es deforestada para cultivar hoja de coca o instalar laboratorios clandestinos para procesar la pasta básica de cocaína. Por otra parte, ante la presión de colectivos campesinos y grupos de narcotraficantes para incrementar la superficie destinada al cultivo de hoja de coca, en los últimos años el Gobierno ha declarado incrementar las llamadas “rondas campesinas” que tuvieron un rol activo en la estrategia contrainsurgente del Gobierno en su lucha contra Sendero Luminoso y contra el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. El Gobierno afirma que su labor consiste principalmente en proveer formación en el uso responsable de armamentos a las personas que conforman dichos comités y en registrar y controlar tales armas, pero otras organizaciones señalan que la delegación de competencias de seguridad a comités comunitarios puede conllevar la comisión de abusos y violaciones de derechos humanos.

Ante esta compleja situación, el Gobierno peruano ha manifestado en varias ocasiones su compromiso de derrotar militarmente a Sendero Luminoso y ha reiterado su apoyo a los esfuerzos de las Fuerzas Armadas en el VRAEM, pero a la vez ha reconocido que la estrategia de contrainsurgencia en la región no puede ser solamente de tipo militar. En este sentido, cabe destacar que el presidente Martín Vizcarra, destituido a finales de 2020, manifestó públicamente tras llegar al poder su intención de hacer mayor hincapié en la política de erradicación forzosa de la hoja de coca y en el ofrecimiento de cultivos alternativos al campesinado del VRAEM para mejorar las condiciones de vida en la región, reducir la producción de coca en el VRAEM y erosionar la base de apoyo y los mecanismos de financiación del MPCP. Así, desde que en los años ochenta se implementara la política de erradicación de cultivos

ilícitos, en 2019 por primera vez se llevaron a cabo tales medidas en el VRAEM. Cabe señalar, sin embargo, que solamente 750 de las más de 25.500 hectáreas erradicadas forzosamente estaban situadas en el VRAEM, pero el Gobierno insistió en que tal hecho supone un punto de inflexión en la estrategia hacia la región. Del mismo modo, en octubre de 2020 el propio presidente reiteró su intención de implementar una nueva política de combate al tráfico de drogas y a la insurgencia senderista basada en una aproximación integral al desarrollo del VRAEM, poniendo el acento no solamente en la sustitución de cultivos, sino también en la promoción de infraestructuras, la agricultura, el saneamiento y la salud. Además, a mediados de 2020 el Gobierno, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, declaró que a raíz de la pandemia de la COVID-19 el precio de la cocaína en el VRAEM había disminuido en un 58%, lo que a su vez podría erosionar las fuentes de financiación del MPCP.

Todavía existen incógnitas sobre si el nuevo Gobierno que se instauró en Perú tras la destitución de Vizcarra en 2020 decidirá continuar con un enfoque más holístico y que trascienda la aproximación estrictamente militarista al conflicto con el MPCP y a la presencia del narcotráfico en el VRAEM. En cualquier caso, no parece que el MPCP, liderado por hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino tras la detención en 1999 del conocido como Camarada Feliciano, esté abierto a iniciar ninguna negociación ni aproximación con el Estado. Cabe recordar que, en contraposición, el líder de Sendero Luminoso en Alto Huallaga, el Camarada Artemio, sí abogó por esta senda y llegó a solicitar públicamente un diálogo político con el Gobierno en 2011, poco antes de ser detenido. Aún si el MPCP públicamente ha hecho reivindicaciones de tipo político y social, el Gobierno y buena parte de la opinión pública no considera al grupo como un heredero directo de Sendero Luminoso, sino más bien una organización a la que en ocasiones se tilda de narcoterrorista. De hecho, Abimael Guzmán no reconoce al grupo, y el MPCP calificó de traidor al propio Guzmán, distanciándose de la estrategia que este siguió tras su encarcelamiento en 1992 (de hecho, tras la detención de Guzmán el movimiento senderista se dividió entre aquellos grupos más partidarios del acuerdo con el Estado, denominados comúnmente “acuerdistas”, y aquellos que optaron por continuar con la lucha armada, denominados “Proseguir” o “Sendero Rojo”). En definitiva, existen varios factores que arrojan incertidumbre sobre la situación política y social en el VRAEM y sobre la tensión vinculada a las acciones políticas y armadas del movimiento senderista, como la crisis política que vivió el país a finales de año –que podría comportar un cambio en la orientación estratégica en la gestión del conflicto; el repunte de las acciones armadas por parte del MPCP en 2020; el incremento de la presión política y judicial del Estado sobre organizaciones consideradas afines al movimiento senderista; o la fuerte presencia de organizaciones de narcotráfico en el VRAEM, una región de difícil acceso, ausencia de instituciones del Estado y altas tasas de pobreza.

11. Mariella Villasante, *La guerra en el VRAEM: los problemas del Estado para restablecer la paz y los vacíos legales aplazados*, Revista Ideele, num. 284

5.3 ¿Una primavera por venir? Retos y riesgos a una década de las revueltas en el norte de África y Oriente Medio

El 17 de diciembre de 2020 se cumplieron diez años desde que el joven vendedor ambulante Mohamed Bouazizi se inmolara en Sidi Bouzid, una de las zonas económicamente más deprimidas del interior de Túnez. Una década desde que esta acción de protesta se convirtiera en símbolo de hartazgo y en detonante de movilizaciones populares masivas para denunciar la injusticia social, corrupción, desigualdades, restricción de libertades y falta de oportunidades en numerosos países del norte de África y Oriente Medio. El fenómeno se expandió a gran velocidad, poniendo en entredicho a buena parte de los regímenes autoritarios de la región. Pese a las singularidades de cada contexto, las revueltas de la denominada “Primavera Árabe” evidenciaron que los agravios se asentaban en un caldo de cultivo común: crisis de legitimidad y ausencia de instituciones representativas, poblaciones jóvenes frustradas y carentes de expectativas, concentración del poder, nepotismo, impunidad... Los aparentemente intocables gobiernos de la región intentaron sortear las revueltas con una combinación de incentivos y represión –la ya clásica estrategia del palo y la zanahoria–, aunque con resultados desiguales. Algunos gobernantes cayeron en menos de un año, después de décadas en el poder –Ben Alí en Túnez, Mubarak en Egipto, Gaddafi en Libia, Saleh en Yemen–; se iniciaron transiciones accidentadas y de evolución dispar –la experiencia yemení descarriló en menos de tres años, la de Túnez sigue siendo la que despierta más expectativas en la región– y algunos contextos desembocaron en conflictos armados de una creciente complejidad, debido a la proliferación de grupos armados, la proyección de intereses foráneos y la implicación abierta o velada de numerosos actores regionales e internacionales –como ilustran los casos de Yemen, Siria o Libia.

El tiempo transcurrido aún es breve para valorar el impacto histórico de un fenómeno de la magnitud de las revueltas. A corto plazo, sin embargo, una década ofrece perspectiva suficiente para identificar una serie de retos y riesgos con potencial desestabilizador para la región. Aunque podrían considerarse un sinnúmero de factores, más o menos relevantes según los diferentes contextos, este análisis se centra en tres aspectos clave. En primer lugar, cabe constatar la persistencia de los agravios que motivaron las revueltas o, incluso, un deterioro de la situación en algunos aspectos. Diez años después, las tasas de desempleo juvenil de la región siguen siendo las más altas del mundo, un asunto preocupante considerando que dos tercios de la población de la región tiene menos de 30 años. Según

la OIT, en 2020 los países árabes y del norte de África presentaban la menor tasa de participación de jóvenes en el mercado laboral, con tan solo un 27%.¹² Los estándares de vida no han mejorado, sino que se han mantenido igual o han empeorado en muchos contextos, en especial en países como Siria o Yemen donde los indicadores socioeconómicos se han precipitado tras años de conflicto y violencia.¹³ Además, la región norte de África y Oriente Medio sigue siendo percibida como altamente corrupta según índices internacionales como los de Transparency International y los escasos avances promovidos por la sociedad civil se han visto bloqueados ante la aplicación de medidas de emergencia en el contexto de la COVID-19.¹⁴ Encuestas en varios países de la región señalan que amplios sectores de la población consideran que su situación es peor que antes de las revueltas y que la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado en la última década.¹⁵

Esta continuidad en los agravios explica en parte la nueva oleada de revueltas que sacudió a la región en 2019, con masivas movilizaciones en Argelia, Iraq, Líbano, y también en Sudán, países que no habían vivido protestas intensas a principios de la década y en los que, en esta ocasión, los gobernantes de turno también se vieron obligados a dejar el poder. Sin embargo, como apunta Georges Fahmi, las personas movilizadas en 2019 ya habían aprendido varias lecciones de la primera oleada revolucionaria, entre ellas que la caída de la cabeza del régimen no equivale a un cambio de sistema.¹⁶ Por eso, persistieron en sus protestas hasta que la pandemia obligó a frenar las demostraciones públicas de rechazo a las élites y al poder. Estas nuevas movilizaciones desafiaron a quienes daban por extinto el proceso de revueltas y reforzaron los análisis que apuntan a que la contestación en la zona continuará o cobrará nuevos bríos ante la persistente erosión del contrato social y el profundo sentimiento de injusticia que pervive en la región, a los que ahora se añaden las severas consecuencias económicas de la pandemia.

A la persistencia de los agravios se suma un segundo factor, vinculado al refuerzo y/o retorno/reconfiguración del autoritarismo en la región. Diversos análisis coinciden en que, ante el cuestionamiento de su poder, los regímenes de la región han reforzado sus estructuras represivas, en parte gracias al apoyo de actores como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos (EAU), adalides de las fuerzas contrarrevolucionarias. Egipto se ha convertido en un caso ilustrativo de esta tendencia, ya que tras el golpe de

12. Organización Internacional del Trabajo (OIT), *Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs*, International Labour Office, Ginebra, 2020.

13. Kali Robinson, *The Arab Spring at Ten Years: What's the Legacy of the Uprisings?*, Council on Foreign Relations, 3 de diciembre de 2020.

14. Transparency International, *Middle East & North Africa: Corruption continues as institutions and political rights weaken*, 29 de enero de 2019; *CPI 2020: Middle East and North Africa*, 28 de enero de 2021.

15. The Guardian-YouGov poll, “Life has got worse since Arab Spring, say people across Middle East”, *The Guardian*, 17 de diciembre de 2020.

16. Georges Fahmi, *Five Lessons From the New Arab Uprisings*, 12 de noviembre de 2019.

Estado contra el Gobierno de los Hermanos Musulmanes –punto de inflexión para el islamismo en la región–, el régimen militar ha intensificado la persecución de la disidencia de todo el arco político y ha blindado su poder, mientras que el panorama de restricciones de libertades y vulneraciones a los derechos humanos es considerado peor al que existía en la época de Mubarak. La brutal represión a la disidencia también ha sido clave en la estrategia de supervivencia del régimen sirio. A nivel regional, y a excepción de Túnez, los indicadores sobre derechos políticos y libertades civiles se han deteriorado, al igual que la situación de la libertad de prensa, con un mayor número de periodistas encarcelados por cuestiones relativas al desempeño de su profesión.¹⁷ Sondeos de Arab Barometer confirman que la mayor parte de la población en la región sigue prefiriendo la democracia. No obstante, algunos análisis alertan sobre cierta “nostalgia” de gobernantes de mano dura en algunos contextos. En 2020 un estudio de opinión en varios países de la zona –Argelia, Líbano, Libia, Marruecos y Túnez– identificaba un alto apoyo (más del 50% en los cinco países) a la figura de un líder fuerte y eficiente, aún a costa de no cumplir plenamente reglas o procedimientos o, incluso, obviando a los respectivos parlamentos (más de 50% en Libia, Túnez y Líbano).¹⁸ Incluso en Túnez analistas han identificado nostalgia por el antiguo régimen en algunos sectores de la población y han alertado también sobre el incremento de discursos populistas.¹⁹

Un tercer factor de riesgo tiene que ver con complejidades derivadas de la evolución de los conflictos armados en la región, que han impuesto graves consecuencias de largo plazo y serios obstáculos para negociaciones e iniciativas para la transformación no violenta de las disputas. En este ámbito hay varios elementos a considerar. Por un lado, el gravísimo impacto de los conflictos armados en generaciones enteras de la región teniendo en cuenta los elevados niveles de letalidad, los impactos en términos de desplazamiento forzado y el efecto devastador de las crisis humanitarias. Libia, Siria y Yemen se sitúan entre las guerras de mayor intensidad a nivel mundial. Solo en Siria han muerto más de medio millón de personas en una década. Otras 250.000 habrían muerto en Yemen desde 2015 –más de la mitad por consecuencias indirectas del conflicto, como la falta de acceso a la salud o alimentos– y el país afronta la peor crisis humanitaria a nivel global. La mitad de la población de Siria se ha visto obligada a huir de sus hogares por la violencia, situando al país a la cabeza de los rankings de población refugiada y

desplazada interna a nivel mundial. La población civil ha sido objeto de ataques indiscriminados y deliberados por parte de diversos actores armados en un clima de impunidad, que sienta un peligroso precedente de sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

A esto se suman las consecuencias derivadas de la proliferación de actores armados en la región y de la creciente implicación de actores regionales e internacionales en los conflictos, fenómenos que acrecientan su complejidad y dificultan su abordaje. En países como Siria, Yemen o Libia esta deriva ha agravado la debilidad institucional y ha acentuado la fragmentación del poder, convirtiendo a estos países en territorios divididos en diferentes zonas de influencia y control.²⁰ En los tres casos, además, la evolución de las hostilidades se ve directamente influida por la implicación, competencia y proyección de intereses de actores foráneos, incluyendo Rusia, EEUU, Irán, Turquía, Arabia Saudita, EAU, Qatar, Egipto, entre otros. En este contexto, algunos análisis han subrayado que la región norte de África y Oriente Medio afronta un nivel de conflictos interrelacionados sin precedentes, con nuevas dinámicas de conflicto que se superponen y entrecruzan con conflictos preexistentes y que, en ocasiones, ocultan los catalizadores de conflicto originales.²¹ Esta tendencia se ha visto acentuada por la ausencia de mecanismos regionales e internacionales efectivos para la resolución y transformación de conflictos y constituye todo un reto para los actores e instituciones que buscan promover salidas pacíficas.

Pese al amargo balance de esta década tras las revueltas, diferentes voces dentro y fuera de la región insisten en reivindicar el proceso y su valor como punto de inflexión. En esta línea, destacan su valor simbólico al desafiar la idea de “excepcionalidad árabe” y la percepción de una región condenada al autoritarismo. A pesar de lo acontecido en los últimos años, sondeos indican que en muchos países de la región una mayoría asegura no arrepentirse de las protestas de la Primavera Árabe.²² Las revueltas aún resuenan como una señal de inconformismo, no resignación y superación de las barreras del miedo. Como un reflejo de las profundas aspiraciones de los pueblos de la región a una vida digna. De hecho, diversos análisis subrayan que la dura respuesta represiva de los regímenes está anclada en el temor, la percepción de amenaza y la constatación de que las revueltas pueden volver a repetirse. Porque una vez ya sucedieron y pueden volver a ocurrir.²³

A una década de las revueltas en la región, la persistencia de los agravios y el deterioro de la situación socioeconómica, el refuerzo del autoritarismo y las consecuencias de largo plazo de los graves conflictos armados en la región constituyen serios factores de riesgo

17. Kali Robinson, op.cit.

18. Konrad Adenauer Stiftung, *10 years after the Arab Springs: Where does public opinion in the region stand today?*, KAS/POLDIMED, 2020.

19. International Crisis Group, *Avoiding a Populist Surge in Tunisia*, Crisis Group Middle East and North Africa Briefing N°73, 4 de marzo de 2020.

20. Virginie Collombier et.al. “Armed conflicts and the erosion of the state: The cases of Iraq, Libya, Yemen and Syria” en Jordi Quero y Cristina Sala (eds.), *MENARA Booklet for Humanitarian Actors*, CIDOB, febrero de 2019.

21. Joost Hiltermann y María Rodríguez, “De las profundidades a la superficie: catalizadores de conflicto en Oriente Medio y el Magreb”, *ARI* 70/2019, Real Instituto Elcano, 18 de junio de 2019.

22. The Guardian-YouGov poll, op.cit.

23. Nesrine Malik, “The Arab Spring wasn’t in vain. Next time will be different”, *The Guardian*, 21 de diciembre de 2020.

5.4. La cuenca del Nilo: ¿cooperación o conflicto?

El Nilo, el río más largo de África y el segundo de mayor longitud del mundo –tras recientes estudios que le dan el liderazgo mundial al Amazonas–, ha sido epicentro de disputas en el Cuerno de África y África del Este durante décadas. En el centro del conflicto han estado Egipto y Etiopía, los dos principales actores regionales. La construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD, por sus siglas en inglés) en el cauce del Nilo Azul, afluente del Nilo en territorio etíope, proyecto emprendido por Etiopía desde 2011 ha exacerbado la situación y el clima de tensión entre Etiopía y Egipto, y en menor medida, Sudán.

Egipto depende del Nilo para prácticamente todo su suministro de agua. El río representa casi toda su agua potable y de riego, ya que el país recibe pocas precipitaciones y casi todas sus tierras de cultivo están irrigadas. El Nilo también es una ruta de transporte clave para el país. Su principal afluente, el Nilo Azul, transcurre desde el lago Tana de Etiopía y se une al Nilo Blanco en Sudán, donde aporta alrededor del 85% del agua que constituye el Nilo principal. También es fundamental para casi todos los aspectos de la vida en Etiopía; alrededor del 32% del país se encuentra en la cuenca del Nilo, donde se concentra cerca del 40% de la población del país. En el caso de Sudán, el Nilo atraviesa todo el país de sur a norte y proporciona alrededor del 77% del agua dulce del país.²⁴

Históricamente, Egipto ha adoptado un enfoque en el que el Nilo es un asunto de seguridad nacional y su posicionamiento ha incluido amenazas de acciones militares contra los Estados ribereños en caso de interferir en el volumen de agua del río. El primer acuerdo concerniente a la gestión de las aguas del Nilo fue alcanzado entre Gran Bretaña, como potencia colonial en África del Este, y Egipto en 1929. El Cairo fue favorecido sobre otros países ribereños dado su potencial agrícola, así como por ser el garante de la gestión del Canal de Suez, vital para las ambiciones imperiales británicas. Las otras colonias ribereñas británicas (Sudán, Uganda, Kenia y Tanganica (ahora Tanzania), así como Etiopía, no tuvieron voz en estos acuerdos. Según los términos dispuestos, Egipto no necesitaría el consentimiento de los Estados ubicados río arriba para emprender proyectos de agua en su propio territorio, pero podría vetar proyectos en cualquier afluente del Nilo en los países por los cuales transcurre su cauce, incluido el lago Victoria. El lago Victoria, segundo lago de agua dulce más grande del mundo, se alimenta de precipitaciones directas y de miles de arroyos de Tanzania, Burundi, Uganda y Kenia, todos ubicados en el centro este de África. Egipto sostiene que el Tratado anglo-egipcio de 1929 y su versión modificada, el Acuerdo de 1959, siguen siendo válidos.

Estos acuerdos bilaterales ignoraron por completo las necesidades de otros países ribereños, incluida Etiopía. En consecuencia, ninguno de los demás países de la cuenca del Nilo ha aprobado los acuerdos.

Los intentos de construir un marco multilateral de gestión cooperativa y sostenible de las aguas del Nilo han sido constantes. En 1999 los países de la cuenca crearon la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI, por sus siglas en inglés), que tenía como objetivo el establecimiento de un foro para promover el desarrollo y la gestión colaborativa de las aguas del Nilo, incluyendo la redacción de un tratado multilateral. En 2010 cuatro países (Ruanda, Uganda, Tanzania y Etiopía) firmaron y ratificaron el Acuerdo Marco Cooperativo (CFA, por sus siglas en inglés)²⁵ tras un proceso de negociación entre todos los países ribereños, incluyendo Egipto y Sudán, que finalmente rechazaron el acuerdo porque no respondía a sus intereses. Burundi y Kenia posteriormente también firmaron el acuerdo, pero no lo ratificaron. Es necesario que seis países ratifiquen o accedan al acuerdo para que entre en vigor. Dicho Tratado tenía la intención de establecer principios, derechos y obligaciones para garantizar la gestión y el desarrollo sostenible y a largo plazo de las aguas compartidas del Nilo. Según sus disposiciones, los Estados de la Cuenca del Nilo asumirían la obligación de cooperar en la conservación, gestión y desarrollo de la cuenca y sus aguas. El Tratado no tiene efectos legales en los Estados de la cuenca del Nilo que no firmen ni ratifiquen el CFA, ya que no están vinculados por él. El CFA prevé el establecimiento de un mecanismo institucional permanente, la Comisión de la Cuenca del Río Nilo (NRBC). La NRBC sería la sucesora los derechos, obligaciones y activos de la NBI.

En 2011 Etiopía anunció la construcción de la GERD en el cauce del Nilo Azul tras la firma de un contrato con la multinacional italiana Salini Costruttori por entre 4.500 y 4.800 millones de dólares, según diversas fuentes. Con una potencia de creación de energía de 6.45 GW, la presa será la principal central hidroeléctrica de África y la séptima a escala mundial y permitirá a Etiopía controlar las aguas del río Nilo. Una vez la construcción de la presa haya culminado, el llenado del embalse puede prolongarse entre cinco y 15 años para completarse, en función de las condiciones climáticas durante el periodo y los acuerdos alcanzados entre Etiopía, Sudán y Egipto. El Cairo expresó su preocupación por el anuncio y las dimensiones de la presa, y amenazó con utilizar todos los medios a su alcance para proteger sus intereses, ya que en periodos de sequía prolongada la gestión del Nilo es determinante para la supervivencia del país. En el caso de Sudán, el país apoya la GERD (por los beneficios derivados del proyecto en términos de producción de

24. Nile Basin Initiative [en línea]. Consultado el 10 de diciembre de 2020.

25. Cooperative Framework Agreement [en línea]. Consultado el 10 de diciembre de 2020.

energía barata, potencial de irrigación y control del flujo de aguas para evitar riadas), pero su preocupación se centra en los impactos derivados de su construcción, ya que la presa se encuentra a 20km de la frontera y una mala coordinación podría significar la inundación de la presa sudanesa de Roseires, por lo que exige completar los estudios de impacto, así como garantías en los procedimientos de gestión del embalse y de seguridad.

En la última década diferentes procesos de negociación entre Egipto, Sudán y Etiopía se han puesto en marcha para intentar establecer un marco de cooperación en torno a la cuestión, e incluso en 2015 los líderes de los tres países firmaron la Declaración de Principios de la GERD, que destacaba su compromiso en cooperar y en resolver pacíficamente sus diferencias, pero sin resultados hasta la fecha. A finales de 2019, los tres países reanudaron las conversaciones con la observación de EEUU y el Banco Mundial (BM). En febrero de 2020, Etiopía rechazó un borrador de acuerdo iniciado por Egipto y argumentó que EEUU y el BM estaban superando el marco de imparcialidad en la observación proponiendo medidas de mitigación de acumulación de agua en periodo de sequía que favorecían a El Cairo. Tras esto, el 10 de abril Addis Abeba propuso un acuerdo que afectará los dos primeros años de llenado del embalse, que fue rechazado por El Cairo y por Jartum (que exigían un acuerdo global y no parcial). Esta propuesta de Etiopía pretendía reducir las tensiones en el corto plazo, facilitar la creación de confianza que condujera a un acuerdo global y el inicio del llenado del embalse. Aunque Sudán reconoció que las partes estaban muy cerca del acuerdo,²⁶ los principales escollos siguen irresueltos: el mecanismo de coordinación y resolución de disputas y los protocolos en periodos de sequía, entre otros. Durante 2020 se unieron a la observación del diferendo la UE y Sudáfrica (como presidenta de la UA). Sin embargo, aunque las conversaciones se reanudaron el 21 de mayo, estas volvieron a paralizarse a mediados de junio debido a la falta de acuerdo sobre el mecanismo de resolución de las disputas, el cauce mínimo del río en tiempos de sequía y el estatus legal del acuerdo final.

Diversas cuestiones han contribuido a exacerbar la situación en la segunda parte del año. En primer lugar, la decisión unilateral de Etiopía de iniciar el llenado del embalse. El 19 de junio Etiopía reiteró que empezaría a rellenar el embalse en julio con o sin acuerdo, lo que llevó a Egipto y a Sudán a solicitar la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU. El 20 de junio el presidente egipcio reiteró su compromiso a utilizar todos los medios diplomáticos para resolver la crisis, y aunque las conversaciones continuaron abiertas con el objetivo de alcanzar un acuerdo tras una reunión de la UA el 26 de junio con el compromiso de Etiopía de frenar el

inminente llenado del embalse hasta que se consiguiera un acuerdo, al día siguiente Addis Abeba anunció el llenado del embalse coincidiendo con la temporada de lluvias. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el 29 de junio, El Cairo anunció que la GERD suponía una amenaza a su seguridad y alertó que podría desencadenarse un conflicto si la ONU no intervenía para evitarlo. El 3 de julio se reanudaron las conversaciones tripartitas bajo los auspicios de la UA, y el 27 de julio El Cairo anunció que los tres países habían acordado priorizar el desarrollo de un acuerdo legal vinculante para llenar y operar la GERD. El mismo día, el primer ministro etíope dijo que Etiopía había logrado su objetivo del primer año para llenar el embalse gracias a la fuerte temporada de lluvias, lo que llevó a Egipto y Sudán a condenar de inmediato el movimiento unilateral. Las posiciones siguieron enfrentadas en torno a la postura de Etiopía, que pretende negociar un acuerdo solo sobre el llenado de la presa, en lugar de, tal y como pretenden negociar Egipto y Sudán, un acuerdo integral sobre el llenado y la operación, y luego negociar un tratado separado sobre la asignación de agua del Nilo Azul. A pesar de los esfuerzos de la UA, la situación siguió sin avances el resto del año.

En segundo lugar, cabe destacar la posición de EEUU, como aliado tradicional de Egipto y Etiopía. De ser observador de las negociaciones hasta febrero de 2020, fue acusado por Etiopía de favorecer a los intereses de Egipto al proponer medidas que supuestamente reforzaban tesis defendidas por El Cairo. A esto se sumó a principios de septiembre el anuncio de recorte de 130 millones de dólares de la ayuda estadounidense a Etiopía ante la falta de progresos en las conversaciones tripartitas, con la intención de forzar las negociaciones. Además, las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump en octubre contribuyeron a agravar la situación, al afirmar que Egipto no podría vivir con la presa y podría “volar” la construcción. El primer ministro etíope no respondió a estas incendiarias declaraciones, pero poco después el ministro de Exteriores etíope llamó a consultas al embajador de EEUU para aclarar la posición de Washington en torno a la cuestión.

Otra cuestión a tener en cuenta son las presiones internas para mantener posiciones maximalistas tanto en Etiopía como en Egipto, ya que ambos países consideran la cuestión como de interés nacional vital. La frágil situación política interna en Etiopía, a la que se añade la guerra en la región de Tigray, han provocado un clima de polarización que reduce el margen de maniobra y no contribuye a facilitar un proceso de negociación que puede ser interpretado por sectores nacionalistas como concesiones al adversario en la mesa de negociación. En esta línea se interpretan los anuncios de Etiopía

26. UN Security Council, *Letter dated 2 June 2020 from the Permanent Representative of the Sudan to the United Nations addressed to the President of the Security Council, S/2020/480*, 2 de junio de 2020.

realizados en octubre y noviembre relativos al cierre del espacio aéreo sobre la GERD para garantizar la seguridad de la presa, y al anuncio de que se espera que la GERD empiece a generar electricidad en junio de 2021, respectivamente. Adicionalmente, la ofensiva diplomática de Egipto es percibida en Etiopía como un intento por detener el proyecto GERD y mantener un estatus desigual.

El embalse de la GERD ya ha empezado a llenarse, por lo que se empieza a agotar el tiempo de negociación para alcanzar un compromiso, lo que incrementa la presión sobre Sudán y sobre todo sobre Egipto. El hecho de que Etiopía haya iniciado el llenado de forma unilateral ha dejado en una posición de debilidad a Egipto, ya que el país se había opuesto a esta medida. Etiopía ha tomado una decisión que ha contribuido a deteriorar el frágil clima de confianza entre los tres países. El Nilo Azul es fundamental para el desarrollo de la población egipcia, etíope y sudanesa, por lo que

los tres países tienen importantes incentivos para alcanzar un acuerdo. Este acuerdo redundaría en un compromiso global en todos los Estados de la cuenca del Nilo. Cabe tener en cuenta que los cambios al frente de la administración estadounidense podrían contribuir a un nuevo rumbo en este contencioso. La cooperación en aguas transfronterizas es un elemento clave en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este sentido, el cambio climático, combinado con el crecimiento demográfico proyectado y los cambios socioeconómicos, aumenta los desafíos de la gestión del agua en todo el mundo. Un grave ejemplo lo tenemos en el contencioso derivado de la construcción de la GERD, que ahonda sus raíces en disputas históricas exacerbadas por el colonialismo que persisten hoy en día y en el que el cambio climático y la progresiva escasez y competencia por el agua puede jugar un papel determinante en agravar la situación e incrementar la tensión entre los países de la región, con potencial para derivar en un escenario de conflicto de graves consecuencias.

Glosario

- AA:** Arakan Army (Ejército de Arakan)
- ABSDF:** All Burma Students' Democratic Front (Frente Democrático Estudiantil de Toda Birmania)
- ABM:** Ansar Beit al-Maqdis
- ACLED:** Armed Conflict Location and Event Data Project
- ACNUDH:** Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ACNUR:** Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
- ADF:** Allied Democratic Forces (Fuerzas Democráticas Aliadas)
- AIEA:** Agencia Internacional de la Energía Atómica
- AKP:** Adalet ve Kalkinma Partisi (Partido de la Justicia y el Desarrollo)
- ALBA:** Alianza Bolivariana para las Américas
- ALP:** Arakan Liberation Party (Partido de Liberación Arakan)
- AMISOM:** Misión de la Unión Africana en Somalia
- AP:** Autoridad Palestina
- APCLS:** Alliance de Patriots pour un Congo Libre et Souverain (Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano)
- AQMI:** Al-Qaeda en el Magreb Islámico
- AQPA:** Al-Qaeda en la Península Arábiga
- ARS:** Alianza para la Reliberación de Somalia
- ASEAN:** Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Naciones del Sureste Asiático)
- ASWJ:** Ahlu Sunna Wal Jama'a
- ARSA:** Arakan Rohingya Salvation Army (Ejército de Salvación Arakan Rohingya)
- AUBP:** Programa de Fronteras de la Unión Africana
- BDB:** Brigadas de Defensa de Bengasi
- BH:** Boko Haram
- BIFF:** Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (Luchadores por la libertad islámica de Bangsamoro)
- BLA:** Baluch Liberation Army (Ejército de Liberación Baluchi)
- BLF:** Baluch Liberation Front (Frente de Liberación Baluchi)
- BLT:** Baloch Liberation Tigers (Tigres de Liberación Baluchi)
- BM:** Banco Mundial
- BRA:** Balochistan Republican Army (Ejército Republicano de Baluchistán)
- BRP:** Baloch Republican Party (Partido Republicano Baluchi)
- CENCO:** Conferencia Episcopal Congoleña
- CHD:** Centre for Humanitarian Dialogue (Centro para el Diálogo Humanitario)
- CICR:** Comité Internacional de la Cruz Roja
- CMA:** Coordinadora de Movimientos de Azawad
- CMPFPR:** Coordinadora de Movimientos Patrióticos de Resistencia
- CNDD-FDD:** Congrès National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la Défense de la Démocratie (Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia – Fuerzas para la Defensa de la Democracia)
- CNDP:** Congrès National pour la Défense du Peuple (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo)
- CNF:** Chin National Front (Frente Nacional Chin)
- CPA:** Comprehensive Peace Agreement (Acuerdo de Paz Global)
- CPI:** Corte Penal Internacional
- CPI-M:** Communist Party of India-Maoist (Partido Comunista de la India-Maoísta)
- CNL:** Congrès National pour la Liberté (Congreso Nacional por la Libertad)
- DDR:** Desarme, Desmovilización y Reintegración
- DIH:** Derecho Internacional Humanitario
- DKBA:** Democratic Karen Buddhist Army (Ejército Democrático Budista Karen)
- DMLEK:** Democratic Movement for the Liberation of the Eritrean Kunama (Movimiento Democrático para la Liberación del Pueblo Kunama de Eritrea)
- DPA:** Darfur Peace Agreement (Acuerdo de Paz de Darfur)
- EAC:** East African Community (Comunidad de Estados de África del Este)
- EAU:** Emiratos Árabes Unidos
- ECOWAS:** Economic Community of West African States (Comunidad Económica de Estados de África Occidental -CEDEAO)
- EDA:** Eritrean Democratic Alliance (Alianza Democrática Eritrea)
- EEUU:** Estados Unidos de América
- EFDM:** Eritrean Federal Democratic Movement (Movimiento Democrático Federal Eritreo)
- EIC:** Eritrean Islamic Congress (Congreso Islámico Eritreo)
- EIPJD:** Eritrean Islamic Party for Justice and Development (Partido Islámico Eritreo para la Justicia y el Desarrollo)
- ELF:** Eritrean Liberation Front (Frente de Liberación Eritreo)
- ELK:** Ejército de Liberación de Kosovo
- ELN:** Ejército de Liberación Nacional
- ENSF:** Eritrean National Salvation Front (Frente de Salvación Nacional Eritreo)
- EPC:** Eritrean People's Congress (Congreso del Pueblo Eritreo)
- EPL:** Ejército Popular de Liberación
- EPDF:** Eritrean People's Democratic Front (Frente Democrático del Pueblo Eritreo)
- EPRDF:** Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Eritreo)
- ESL:** Ejército Sirio Libre
- ETA:** Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad)
- ETIM:** East Turkestan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turquestán Oriental)
- ETLO:** East Turkestan Liberation Organization (Organización para la Liberación del Turquestán Oriental)
- EUCAP NESTOR:** Misión de la Unión Europea de Desarrollo de las Capacidades Marítimas Regionales en el Cuerno de África

EUCAP SAHEL Mali: Misión de Creación de Capacidad de la Unión Europea en Malí (Sahel)

EUCAP SAHEL Níger: Misión de Creación de Capacidad de la Unión Europea en Níger (Sahel)

EUFOR: European Union Force (Fuerza de la Unión Europea)

EUNAVFOR Somalia: Fuerza Naval de la Unión Europea – Somalia, Operación Atalanta

EUTM Mali: Misión de la Unión Europea para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Malí.

EUTM Somalia: Misión Militar de la Unión Europea para contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad de Somalia

EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FAR-LP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación del Pueblo

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo

FATA: Áreas Tribales bajo Administración Federal

FDLP: Frente Democrático de Liberación de Palestina

FDLR: Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda)

FIS: Frente Islámico de Salvación

FLEC-FAC: Frente de Liberação do Enclave de Cabinda (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda)

FNL: Forces Nationales de Libération (Fuerzas Nacionales de Liberación)

FPB: Forces Populaires du Burundi (Fuerzas Populares de Burundi)

FPLP: Frente Popular de Liberación de Palestina

FPR: Front Populaire pour le Redressement (Frente Popular por la Liberación)

FPRC: Front Patriotique pour la Renaissance de la Centrafrique (Frente Patriótico por el Renacimiento de la República Centroafricana)

Frente POLISARIO: Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro

FML: Macina Liberation Front (Frente de Liberación de Macina)

GATIA: Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados

GFT: Gobierno Federal de Transición

GSPC: Grupo Salafista para la Predicación y el Combate

GNA: Gobierno de Acuerdo Nacional

GSIM: Group to Support Islam and Muslims (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes)

HCUA: Alto Consejo para la Unidad de Azawad

HM: Hermanos Musulmanes

HRW: Human Rights Watch

HTS: Hay'at Tahrir al-Sham

IBC: Iraq Body Count

ICG: International Crisis Group

IDG: Índice de Desigualdad de Género

IDMC: Internal Displacement Monitoring Centre

IFLO: Islamic Front for the Liberation of Oromia (Frente Islámico para la Liberación de Oromiya)

IGAD: Intergovernmental Authority on Development (Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo)

IISS: International Institute for Strategic Studies

ISGS: Estado Islámico en el Gran Sáhara

ISIS: Estado Islámico

ISWAP: Estado Islámico en la Provincia de África Occidental

IWF: Iduwini Volunteers Force (Fuerzas Voluntarias de Iduwini)

JEM: Justice and Equality Movement (Movimiento para la Justicia y la Igualdad)

JKLF: Jammu and Kashmir Liberation Front (Frente de Liberación de Jammu y Cachemira)

JMB: Jamaat-ul-Mujahideen (Asamblea de Muyahidines)

JNIM: Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes

KANU: Kenya African National Union (Unión Nacional Africana de Kenya)

KCP: Kangleipak Communist Party (Partido Comunista Kangleipak)

KDP: Partido Democrático de Kurdistán

KFOR: Misión de la OTAN en Kosovo

KIA: Kachin Independence Army (Ejército para la Independencia de Kachin)

KNA: Kuki Liberation Army (Ejército de Liberación Kuki)

KNF: Kuki National Front (Frente Nacional Kuki)

KNPP: Karenni National Progressive Party (Partido Progresista Nacional Karen)

KNU: Kayin National Union (Unión Nacional Kayin)

KNU/KNLA: Karen National Union/Karen National Liberation Army (Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen)

KPLT: Karbi People's Liberation Tigers (Tigres de Liberación del Pueblo Karbi)

KRG: Gobierno Regional del Kurdistán

KYKL: Kanglei Yawol Kanna Lup (Organización para la Salvación del Movimiento Revolucionario en Manipur)

LeJ: Lashkar-e-Jhangvi (Ejército de Jhangvi)

LeT: Lashkar-e-Toiba

LGTBI: Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersex

LRA: Lord's Resistance Army (Ejército de Resistencia del Señor)

LNA: Ejército Nacional de Libia

LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam (Tigres de Liberación de la Tierra Tamil)

M23: Movimiento 23 de Marzo

MAA: Movimiento Árabe de Azawad

MASSOB: Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra)

MEND: Movement for the Emancipation of the Niger Delta (Movimiento para la Emancipación para el Delta del Níger)

MFDC: Mouvement de las Forces Démocratiques de Casamance (Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance)

MILF: Moro Islamic Liberation Front (Frente Moro de Liberación Islámico)

MINUSCA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en República Centroafricana

MINUSMA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí

MINUSTAH: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití

MLC: Mouvement pour la Libération du Congo (Movimiento para la Liberación del Congo)

MLCJ: Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (Movimiento de Libertadores Centrafricanos para la Justicia)

MLF: Macina Liberation Front (Frente de Liberación de Macina)

MNDAA: Myanmar National Democratic Alliance Army (Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar)

MNJTF: Multinational Joint Task Force (Fuerza Regional de Tarea Conjunta)

MNLA: Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad

MNLF: Moro National Liberation Front (Frente Moro de Liberación Nacional)

MONUSCO: Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de RD Congo

MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People (Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni)

MPC: Mouvement Patriotique por la Centrafrique (Movimiento Patriótico por la República Centrafricana)

MRC: Mombasa Republican Council (Consejo Republicano de Mombasa)

MUYAO: Movimiento Unido por la Yihad en África Occidental

NCP: National Congress Party (Partido del Congreso Nacional)

NDA: Niger Delta Avengers (Vengadores del Delta del Níger)

NDAA: National Democratic Alliance Army (Ejército de la Alianza Nacional Democrática)

NDF: National Democratic Front (Frente Democrático Nacional)

NDFB: National Democratic Front of Bodoland (Frente Democrático Nacional de Bodoland)

NDGJM: Niger Delta Greenland Justice Mandate (Mandato de Justicia de Greenland del Delta del Níger)

NDPVF: Niger Delta People's Volunteer Force (Fuerza Voluntaria del Pueblo del Delta del Níger)

NDV: Niger Delta Vigilante (Patrulla del Delta del Níger)

NMSP: New Mon State Party (Partido del Nuevo Estado Mon)

NNC: Naga National Council (Consejo Nacional Naga)

NPA: New People's Army (Nuevo Ejército Popular)

NSCN (K-K): National Socialist Council of Nagaland (Kole-Kitovi) (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia (Kole-Kitovi))

NSCN-R: National Socialist Council of Nagaland-Reformation (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Reforma)

NSLA: National Santhal Liberation Army) Ejército Nacional Santhal

NSCN-IM: National Socialist Council of Nagaland-Isaac Muivah (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Isaac Muivah)

NSCN-K: National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Khaplang)

OCHA: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas

OCI: Organización para la Cooperación Islámica

OEA: Organización de los Estados Americanos

OFDM: Oromo Federalist Democratic Movement (Movimiento Democrático Federalista Oromo)

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

OLF: Oromo Liberation Front (Frente de Liberación Oromo)

OMC: Organización Mundial del Comercio

ONG: Organización No Gubernamental

ONLF: Ogaden National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional de Ogadén)

ONU: Organización de las Naciones Unidas

ONUCI: Operación de Naciones Unidas en Côte d'Ivoire

OPC: Etiopía Oromiya

OPM: Organisasi Papua Merdeka (Organización de la Papua Libre)

OSCE: Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa

OTAN: Organización para el Tratado del Atlántico Norte

OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief

PDKI: Partido Democrático Kurdo

PJAK: Partido por la Vida Libre en Kurdistán

PKK: Partido de los Trabajadores del Kurdistán

PMA: Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PREPAK: People's Revolutionary Party of Kangleipak (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak)

PREPAK (Pro): People's Revolutionary Party of Kangleipak / Progressive (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak / Progresista)

PS: Provincia de Sinaí

PYD: Democratic Union Party (Partido Unión Democrática de kurdos en Siria)

RASD: República Árabe Saharaui Democrática

RCA: República Centrafricana

RDC: República Democrática del Congo

RED-Tabara: Résistance pour un État de Droit au Burundi (Resistencia por un Estado de Derecho en Burundi)

RENAMO: Resistencia Nacional Mozambiqueña

REWL: Red Egbesu Water Lions

RPF: Rwandan Patriotic Front (Frente Patriótico Rwandés)

RPF: Revolutionary People's Front (Frente Popular Revolucionario)

RSADO: Red Sea Afar Democratic Organization (Organización Democrática Afar del Mar Rojo)

RSF: Rapid Support Forces (Fuerzas de Apoyo Rápido)

SADC: Southern Africa Development Community (Comunidad de Desarrollo del África Austral)

SCACUF: Southern Cameroons Ambazonia Consortium United Front (Frente Unido del Consorcio de Ambazonia del Sur de Camerún)

SCDF: Southern Cameroons Restoration Forces (Fuerzas de Restauración del Sur de Camerún)

SIGI: Índice de Instituciones Sociales y Género

SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo)

SLA: Sudan Liberation Army (Ejército de Liberación de Sudán)

SLA-AW: Sudan Liberation Army-Abdul Wahid (Ejército de Liberación de Sudán – Abdul Wahid)

SLA-MM: Sudan Liberation Army- Minni Minnawi (Ejército de Liberación de Sudán – Minni Minnawi)

SLDF: Sabaot Land Defence Forces (Fuerzas de Defensa de la Tierra Sabaot)

SNNRPS: Southern Nations, Nationalities and People's State, SNNPS (Naciones, Nacionalidades y Estado Popular del Sur, SNNPS)

SOCADEF: Southern Cameroons Defence Forces (Fuerzas de Defensa del sur de Camerún)

SPLA: Sudan People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, Fuerzas Armadas de Sudán del Sur)

SPLA-IO: Sudan People's Liberation Army in Opposition (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, Fuerzas Armadas de Sudán del Sur en Oposición)

SPLM: Sudan People's Liberation Movement (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés)

SPLM-N: Sudan People's Liberation Army-North (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte)

SRF: Sudan Revolutionary Forces (Fuerzas revolucionarias de Sudán)

SSA-N: Shan State Army – North (Ejército del Estado de Shan - Norte)

SSA: Shan State Army (Ejército del Estado de Shan)

SSC: Sool, Saanag y Cayn

SSDM/A: South Sudan Democratic Movement/Army (Movimiento/ Ejército Democrático de Sudán del Sur)

SSLA: South Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán del Sur)

SSOA: South Sudan Opposition Alliance (Alianza de Oposición de Sudán del Sur)

SSPP: Shan State Progress Party (Partido del Progreso del Estado Shan)

SSUF: South Sudan United Front (Frente Unido de Sudán del Sur)

TAK: Los Halcones de la Libertad del Kurdistán

TNLA: Ta-ang National Liberation Army (Ejército Nacional de Liberación Ta-ang)

TPIY: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

TPLF: Tigrayan People's Liberation Front (Frente Popular de Liberación de Tigrayan)

TTP: Tehrik-e-Taliban Pakistan

UA: Unión Africana

UE: Unión Europea

UFDD: Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (Unión de las Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo)

ULFA: United Liberation Front of Assam (Frente Unido de Liberación de Assam)

ULFA-I: United Liberation Front of Assam-Independent (Frente Unido de Liberación de Assam-Independiente)

UNAMA: Misión de asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán

UNAMI: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq

UNAMID: Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

UNIFIL: Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (o FPNUL)

UNISFA: Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei

UNLF: United National Liberation Front (Frente Unido de Liberación Nacional)

UNMIK: Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo

UNMIL: Misión de las Naciones Unidas en Liberia

UNMISS: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur

UNOWAS: Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel

UNRWA: Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo

UNSMIL: Misión de Apoyo a Naciones Unidas en Libia

UPC: Union pour la Paix en Centrafrique (Unión por la Paz en la República Centroafricana)

UPLA: United People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Unido)

URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

UTI: Unión de Tribunales Islámicos

UWSA: United Wa State Army (Ejército del Estado Wa Unido)

VRAE: Valle entre los Ríos Apurímac y Ene

WILPF: Women's International League for Peace and Freedom (Liga Internacional de las Mujeres para la Paz y la Libertad)

YPG: People's Protection Unit (Unidad de Protección del Pueblo)

YPJ: Women's Protection Units (Unidades de Protección de Mujeres)

ZUF: Zeliangrong United Front (Frente Unido Zeliangrong)

Escola de Cultura de Pau

La Escola de Cultura de Pau (ECP) es una institución académica de investigación para la paz ubicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue creada en 1999 con el objetivo de promover la cultura de paz a través de actividades de investigación, diplomacia paralela, formación y sensibilización.

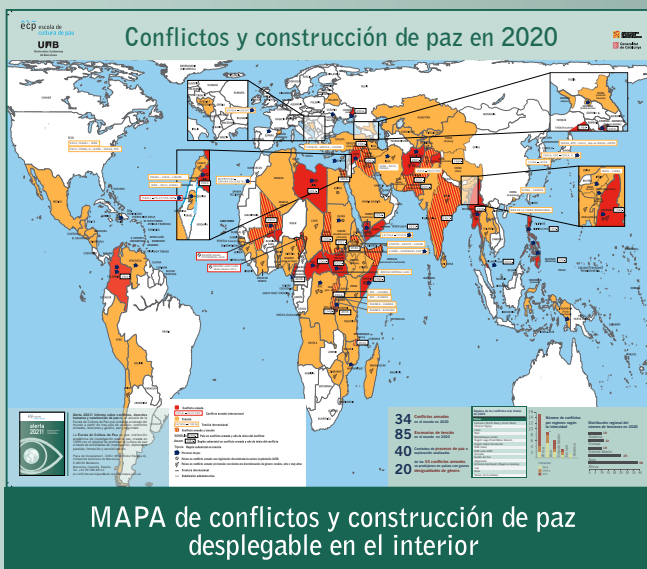
Los principales ámbitos de acción de la Escola de Cultura de Pau son:

- **Investigación.** Las áreas de investigación de la ECP incluyen los conflictos armados y las crisis sociopolíticas, los procesos de paz, los derechos humanos y la justicia transicional, la dimensión de género y la educación para la paz.
- **Educación y formación.** El personal investigador de la ECP imparte clases en cursos de grado y postgrado en universidades catalanas, incluyendo la Diplomatura en Cultura de Paz, el título de postgrado que la propia ECP ofrece en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, se ofrecen clases y talleres en temas específicos, entre ellos la educación en y para el conflicto y la sensibilidad al conflicto.
- **Diplomacia paralela.** La ECP promueve el diálogo y la transformación de conflictos a través de iniciativas de diplomacia paralela, con diferentes actores y en diversos ámbitos de acción.
- **Servicios de consultoría.** La ECP lleva a cabo servicios de consultoría para instituciones locales e internacionales.
- **Sensibilización.** Las iniciativas de la ECP en materia de sensibilización incluyen actividades dirigidas a la sociedad catalana y española, entre ellas colaboraciones con medios de comunicación.

Escola de Cultura de Pau

Parc de Recerca, Edifici MRA, Plaça del Coneixement, Universitat Autònoma de Barcelona,
08193 Bellaterra (España) Tel: +34 93 586 88 48
Email: pr.conflict.escolapau@uab.cat / Web: <http://escolapau.uab.cat>

Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2020 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios del conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.



Con la colaboración de:

La paz siempre será un escenario de oportunidad para construir, para el diálogo entre contrarios, para la búsqueda de consensos y nuevas miradas desde perspectivas diferentes. Es una evolución constante que permite la implementación de acciones en diferentes niveles para la superación de los enfrentamientos y la consolidación de escenarios más justos y equitativos para todos. Por lo tanto, los informes Alerta! son una herramienta de consulta, para Colombia y el mundo, que posibilita entender las dinámicas del conflicto en distintos contextos; desde un análisis juicioso, metodológico y profundo nos da luces sobre lo que está pasando en distintos países. Sus cifras nos permiten identificar el drama humano que miles de hombres y mujeres padecen por causa de la guerra, así como los escenarios en los que es necesario enfocar las acciones y esfuerzos para prevenir el surgimiento de nuevos conflictos o contribuir a la terminación de otros.

Paula Gaviria Betancur,
Directora General de la Fundación Compaz y ex Alta Consejera Presidencial de Derechos Humanos del Gobierno de Colombia

Con su gran cantidad de información factual y conocimientos analíticos bien organizados, la serie de informes Alerta! se ha convertido en una parte valiosa de la literatura internacional sobre conflictos y perspectivas para resolverlos. Particularmente útil, más allá del material factual, es el análisis de los factores de fondo, el énfasis en el género y el foco en las oportunidades para la resolución pacífica.

Dan Smith,
Director del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

A inicios del 2020 visité Yemen, Saná, Adén, bases y campos de desplazados. Quedé devastado por el impacto del conflicto en la población civil e impresionado de la lucha y el liderazgo de las mujeres de organizaciones locales y compañeras del equipo Oxfam. Su grito clamando por la paz debe ser escuchado. Naciones Unidas ha alertado de que en 2021, 235 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria, tras el impacto de la COVID-19 también en los conflictos, agravando las restricciones al acceso humanitario. Un desafío de esta magnitud justifica y requiere de análisis profundos, que aporten la mejor información y apunten las exigencias para la paz. Y que lo hagan desde la justicia de género. Para cualquier persona interesada o afectada por los conflictos, de una base en Yemen a una universidad en Europa, un ejercicio como el "Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de la paz" es sencillamente esencial.

Chema Vera,
Ex Director ejecutivo de Oxfam y Oxfam Intermón